

■ En defensa del
marxismo 

Agosto 2020

En Defensa del Marxismo

po.endensadelmarxismo@gmail.com

**Comisión de educación y propaganda del Comité
Nacional del Partido Obrero:** Juan García, Guillermo Kane,
Guido Lapa, Eduardo Salas

Ediciones Rumbos

www.po.org.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ISSN 2314-0479

Índice

Un nuevo escenario internacional Pablo Heller	5
América Latina en el centro de la tormenta Pablo Giachello	35
Deuda y poscuarentena: el próximo episodio de la crisis Eduardo Salas	51
La virtualización en la educación superior Ileana Celotto	71
La pandemia evidenció la crisis mortal de la salud: hay que rescatarla del peso del capital Alejandro Lipcovich	91
Nuestra política en los sindicatos argentinos Néstor Pitrola	105
Sobre los partidos amplios y el NPA Rafael Santos	129
El lugar del primer peronismo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado nacional Juan García	147
El carácter universal del trotskismo Gabriel Solano	167
Marxismo y Liberación Negra: una historia de las raíces sociales y los programas en juego en la rebelión norteamericana Guillermo Kane	177
Trata de personas, el eufemismo de la esclavitud capitalista Vanina Biasi	213
Doble opresión en el capitalismo, debates sobre la noción de patriarcado Luciana Dentati	233

Un nuevo escenario internacional

De la crisis y el coronavirus a la rebelión en el imperio

Pablo Heller

Estados Unidos no sólo es el epicentro de la pandemia y de la crisis mundial sino que se ha transformado en uno de los grandes centros de la rebelión. El hecho de que el ojo de la tormenta se concentre, ni más ni menos, que en el corazón del capitalismo marca la situación mundial y condiciona todo el proceso económico y político a nivel global.

Hay que rastrear 50 años para atrás, para encontrar una rebelión con alguna semejanza en Estados Unidos, como lo fue en los fines de los '60, la gran lucha por los derechos de la población negra, pero ni siquiera la nombrada tiene las dimensiones de la actual. El país está estremecido: se habla que entre 15 y 26 millones de estadounidenses han ganado la calle y el dato es que, esta vez, la protesta se caracterizó por un protagonismo de la población blanca, fusionada con la negra, y no simplemente con un acompañamiento, como ocurrió medio siglo atrás.

Un levantamiento así es la expresión de una crisis de fondo. El repudio a la opresión racial y la violencia policial, que viene provocando reacciones recurrentes en la historia norteamericana, empalma ahora con la situación que han creado la pandemia y la crisis capitalista. La conjunción de ambos elementos viene haciendo estragos en la vida norteamericana y es un elemento crucial para entender el estallido actual.

Depresión mundial

La economía mundial ha ingresado en una depresión, lo cual supone un proceso de contracción prolongada, que va unido a cierres y quiebras, una deflación de precios y desempleo masivo. La situación actual tiene todos estos ingredientes. Es sólo comparable con la crisis de 1929, e incluso supera a esta última en la velocidad en que se viene desarrollando. La desocupación se acerca en la actualidad al 25%, una cifra semejante a lo ocurrido en el crack del '29, pero ese pico recién se alcanzó en el '33, cuatro años más tarde, mientras que, esta vez, fue en un par de meses.

En la crisis financiera de 2008, con todo lo severa que fue, el PBI mundial retrocedió alrededor del 3% en 2009 y se recuperó al año siguiente, aunque con un crecimiento famélico desde entonces hasta el día de hoy. La crisis se concentró en las metrópolis, en tanto China siguió creciendo, actuando como factor contrarrestante.

El dato distintivo del colapso actual es que vamos a una retracción de otras dimensiones, que puede llegar al 20% del PBI. Esta vez, además, se plantea un escenario de quiebras masivas, que es lo que se logró evitar en 2008 con los rescates estatales. Dicho mecanismo impidió que la crisis hiciera su trabajo clásico de depuración del capital sobrante, que le está reservado en el marco de un régimen donde reina la anarquía. Pero esta postergación de ningún modo fue inocua, sino que fue creando las condiciones de un colapso más amplio y profundo, cuyo estallido ya estaba madurando previo a la pandemia, del cual había numerosas señales. El derrumbe actual, con la evaporación y desvalorización masiva de capitales en pocas semanas (casi 30 billones de dólares) nos vuelve a recordar la vigencia de la ley del valor y cómo es imposible escapar a ella.

El escenario actual es diferente al de doce años atrás: 1) los sucesivos rescates y estímulos no han logrado revitalizar la economía que se ha ido desinflando hasta llegar al umbral de una recesión; 2) los Estados no tienen los medios que tenían en 2008; 3) asistimos a un endeudamiento público y privado que no tiene antecedentes, lo que coloca al borde de la quiebra a los propios Estados; por primera vez las deudas soberanas han alcanzado al 100% del PBI mundial, lo cual retrata un régimen social y económico entero hipotecado; 4) se intensifica la guerra comercial, que no solo impide una acción concertada entre los Estados sino que agudiza las dificultades para enfrentar la pandemia y la crisis capitalista; 5) China, esta vez, no está en condiciones de jugar el papel de locomotora que desempeñó en la crisis de 2008 -la crisis ha arrastrado al

gigante asiático, que ha pasado a ser uno de los países más endeudados del planeta; 6) la crisis se extiende a los países emergentes, que es uno de los eslabones más débiles y explosivos de la cadena capitalista mundial.

No nos debe sorprender que, frente a este panorama, cada vez más economistas, como por ejemplo ni más ni menos que Martin Wolf, columnista estrella del *Financial Times*, el principal diario financiero del mundo, advierten que vamos a una depresión de características inéditas, que puede extenderse por un tiempo prolongado.

El coronavirus no ha creado la crisis, sino que ha oficiado como un detonante y acelerador de una crisis previa, que ya estaba en pleno desarrollo. La economía mundial avanzaba a una recesión, con niveles nulos de crecimiento en Europa y Japón, una pronunciada desaceleración en China y un desinfe en la economía yanqui. El boom bursátil previo al actual estallido no se compadecía con esta pendiente negativa de la economía real.

La economía mundial se venía sosteniendo con un endeudamiento sin precedentes. El FMI estima que la deuda global, tanto pública como privada, es de 235% del PBI, aunque hay estimaciones muy superiores.

Las tendencias a la recesión previas al estallido de la pandemia tenían como telón de fondo a la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales, que se venía extendiendo a todas las esferas de la actividad económica, empezando por la industria. Las tendencias deflacionarias reinantes expresaban la declinación en los niveles de rentabilidad. La tendencia a la caída de la tasa de ganancia estaba en la base de la huelga de inversiones, que se encontraba en un punto muy bajo, que ni siquiera es suficiente para compensar la depreciación de las maquinarias y la infraestructura. El capital no encontraba una explotación redituable en el ámbito de la producción, lo cual ponía un freno al proceso de acumulación capitalista.

Esta tendencia se ha potenciado a partir de la pandemia. Una parte importante de la inyección de fondos y emisión en el curso de 2020 ha ido a abultar los mercados financieros y no a sostener la producción y la inversión que se han derrumbado literalmente. A la capacidad ociosa, producto de la recesión, se suma ahora la quema de fuerzas productivas por racionalizaciones y achiques, además de las quiebras.

El Estado no es un ente al margen de la organización social capitalista, está condicionado por ella y, por lo tanto, no se sustrae a su crisis. En el lapso transcurrido en estos doce años, desde Lehman Brothers hasta ahora, hemos pasado de la crisis del capital a la crisis soberana. De

ser una de las cartas para atenuar la crisis, la injerencia de los Estados ha terminado siendo un factor de su agravamiento. De modo tal que el rescate actual está lejos de poder revertir el gigantesco impasse capitalista, sus tendencias de fondo y el ingreso de la economía mundial a una depresión. Con más razón, si tenemos presente el cuadro de guerra comercial. A diferencia de 2008, prevalece una total ausencia de coordinación frente al colapso actual. La sintonía que exhibía el G20 ha sido reemplazada por las decisiones unilaterales que adoptan las potencias.

¿Crisis pasajera?

Si nos atenemos a lo expuesto, quienes plantean una crisis “pasajera” vinculada con el coronavirus equivocan el diagnóstico. El FMI acaba de corregir sus pronósticos respecto de la evolución de la economía mundial para abajo. Dicho organismo contempla caídas en Estados Unidos cercanas al 10%. En Italia y España se calcula un 12%. Esto se extiende a los países emergentes, donde Argentina encabeza dicho pelotón. En pocos meses, la retracción de la economía mundial superó el retroceso del PBI de doce años atrás. Ni siquiera se salva China, que, por primera vez, tendría un crecimiento que se acerca a cero.

Es cierto que los niveles de desempleo en Estados Unidos se revirtieron. Se recuperaron unos 7 millones de empleos, pero esta cifra está lejos de dar vuelta el cuadro que llegó al pico de 40 millones. No olvidemos, por otra parte, que esos índices son engañosos, pues no incorporan trabajadores informales indocumentados o trabajadores suspendidos, cuya situación podría ser la antesala de despidos. Tampoco tiene en cuenta a los trabajadores que han cesado de buscar trabajo.

Por lo pronto, marchamos a un escenario convulsivo si tenemos presente que el gobierno federal avanza para poner fin al subsidio semanal de 600 dólares por desempleo a fines de julio, con el argumento de que eso oficia como un escollo para la que los trabajadores vuelvan al trabajo. Esta medida reduciría los beneficios para 31 millones de trabajadores en un 61 por ciento. Un reciente informe, realizado por el Economic Policy Institute (EPI), desmiente las aseveraciones oficiales y señala que: “De los 32,5 millones de trabajadores que están oficialmente desempleados o sin trabajo debido al virus, 11,9 millones de trabajadores, o 7,2 por ciento de la fuerza laboral, está sin trabajo, sin esperanza de ser llamado nuevamente a un trabajo anterior”. Los demócratas plantean una continuidad, aunque en forma tramposa, pues la condicionan a un proceso de reinserción laboral, lo cual es una extorsión a volver a trabajar y poner en riesgo

su salud y su vida en momentos en que en Estados Unidos está llegando a un nuevo récord de infectados, que superan los 50.000 diarios.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha sido enfático en subrayar que cualquier proyecto de ley nuevo que incluya el beneficio “nunca pasará al Senado”, lo cual viene de ser respaldado por el presidente Donald Trump. Esta amenaza va unida a una crisis de vivienda, pues la suspensión de desalojos, que se dispuso por 120 días, también expirará a fines de julio.

Este dato señala que estamos lejos de una recuperación, ni siquiera de que la economía retorne al estallido anterior a la pandemia. Pero, además, importa señalar que incluso los puestos de trabajo que se recuperen, van ir de la mano de menores salarios y una mayor precariedad laboral. El diario *Washington Post* señaló que el doble de trabajadores estadounidenses ha recibido más recortes salariales durante la pandemia que en la crisis de 2008. El promedio de reducción salarial es del 10%, aunque hay casos donde llega al 50%. Recordemos que, tiempo atrás, la burguesía agitaba las aguas contra la presión alcista de los salarios, que asociaba al aumento del empleo. Aunque la realidad es que apenas representó un magro 3%. Ahora, el panorama de desempleo masivo, es utilizado como un ariete para provocar un retroceso del salario, que no volverá a sus niveles anteriores.

Lo que ocurre en Estados Unidos es una tendencia general. La Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de 400 millones de puestos de trabajo. Por otra parte, aproximadamente 2 mil millones de trabajadores informales en todo el mundo -que representa el 60% de la fuerza laboral mundial- “cerca del 80 por ciento han sido afectados”. Esto habla de los alcances de la depresión, que desmiente la tesis de que enfrentamos una crisis pasajera, cuando se supere el brote.

Todo este panorama amenaza amplificarse por los nuevos casos de coronavirus, lo que algunos comentaristas han empezado a denominar como “una segunda ola” de la pandemia. Lo concreto es que estamos en presencia de una curva ascendente de contagios en países que venían de haber salido de la fase más crítica de la pandemia y habían empezado a normalizar sus actividades. Habrá que ver los alcances, pero lo innegable es que va a afectar la actividad económica y plantea cierres, sean parciales o totales, de la economía. En Estados Unidos se han sobrepasado los picos más altos a los que había llegado en estos meses. Esto empalma con el crecimiento explosivo en otros rincones del planeta, entre los que sobresale América Latina.

Rescate

Si se examinan los gigantescos planes de estímulos, superiores a 2008, parecerían contradecir el estrechamiento de los márgenes de manobra de los Estados que señalamos más arriba. Pero atención, que esto está activando una bomba de tiempo. Con la capacidad de endeudamiento saturada, la tendencia general es a echar mano a una emisión gigantesca. El hecho de que no se traslade a los precios (como consecuencia de la recesión reinante), no impide que esto produzca una desvalorización pronunciada del dólar y del euro, y el riesgo de un abandono de ambas monedas y una huida hacia el oro, que es una señal característica e inconfundible de las grandes crisis bajo el capitalismo. Ambas monedas dejarían de funcionar como medios de pagos internacionales y reservas de valor. Una emisión del calibre que se insinúa terminaría por acelerar un descalabro del sistema monetario y de las relaciones económicas internacionales.

Sugestivamente, llegaría a su fin un ciclo que debutó con la inconvertibilidad del dólar dispuesta por Nixon en 1971. Esta medida, que determinó que el dólar perdiera toda relación con el oro, fue la señal de largada para un empapelamiento a mayor escala, que ha perdurado hasta el día de hoy. El hecho de que se haya prolongado en el tiempo, ha creado la fantasía de que se puede apelar indefinidamente a este recurso y sortear la crisis, aunque sus apologistas se olvidan de señalar los temblores que ha provocado en esta etapa y, por sobre todo, las consecuencias gravosas que tuvo en estas décadas para las masas, a través de la desvalorización de los salarios, como consecuencia de la inflación. El colapso actual amenaza romper con este encanto de que se puede crear riqueza al margen del trabajo y vuelve a colocar en el sitio que le corresponde a la ley del valor.

Diversos analistas han empezado a encender las alarmas sobre los límites del rescate y también sobre sus riesgos. “No se quiere ver que todo tiene un límite y que esas inyecciones de liquidez de la FED de una u otra forma las vamos a pagar y muy caro” (*Estrategia de Inversión*, 21/6). La emisión no puede ser ilimitada y la FED está intentando cerrar el grifo. Pero abre el flanco de un nuevo crack bursátil. Pero el remedio de dejar que la canilla siga abierta puede ser peor que la enfermedad. Preventivamente, frente a una perspectiva de depreciación de la divisa norteamericana, ya hay bancos centrales en el mundo que están desprendiéndose de sus reservas en dólares y comprando oro, lo que explica, en parte, la suba de su precio en este último período. Por

otra parte, una desvalorización del dólar traería aparejado un rebrote de la inflación y el aumento de las tasas de interés, lo que podría ser letal para una economía que está sometida a un endeudamiento que supera el 100%, tanto en el ámbito público como privado.

Como resultado de las masivas medidas de rescate corporativo, que ascienden a más de 3 billones de dólares, el nivel de la deuda del gobierno de Estados Unidos está aumentando rápidamente. Y treparía al 130%, el nivel más alto desde la Segunda Guerra.

El aumento de la deuda significa una mayor oferta de bonos del Tesoro. En lo inmediato, los bonos de Tesoro vienen valorizándose como refugio de valor frente a inversiones más volátiles, pero, de persistir esta oferta gigantesca, la tenencia será que bajen su precio y que aumenten sus rendimientos (los dos tienen una relación inversa). Esto, a su turno, ejercerá una presión al alza de los tipos de interés en los mercados financieros en general. La desvalorización de los bonos ya se constata en la órbita corporativa y también en los títulos públicos, no solo de las naciones emergentes sino ya en algunas de las metrópolis, como en Italia, a la que la consultora internacional Moddy's viene de bajarle la calificación.

Esta operatoria correría en la misma dirección que la política monetaria expansiva de flexibilización cuantitativa (QE) que ya se vienen aplicando. En los últimos meses, las tenencias de activos financieros de la FED se han expandido de 4 billones de dólares a más de 7 billones, lo cual es jugar con fuego.

Una de las preocupaciones que comienzan a asomar es la de una crisis bancaria. Esto corrige las primeras lecturas sobre el colapso actual y sus alcances, porque se hablaba sobre la supuesta solidez de los bancos, en contraste con lo ocurrido en 2008. Como se recordará, en esas circunstancias, uno de los eslabones más endeble de la cadena fueron las instituciones financieras y por eso la crisis debutó en ese sector y se llevó puesto al banco de inversión Lehman Brothers. Ahora, según diversos analistas, no ocurría eso, pero la FED acaba de informar, luego de la realización de las pruebas anuales de "estrés" (solventía) a las instituciones financieras, que "los bancos más grandes de la nación están sanos, pero... que "podrían sufrir pérdidas al estilo de 2008 si la economía languidece". Y agrega el comentario: "una recesión económica prolongada podría afectar a los bancos más grandes del país, con pérdidas de hasta 700 mil millones dólares en préstamos deteriorados".

Consecuentemente con ello, la FED ha decidido limitar los pagos de dividendos de los grandes bancos y prohibirá las recompras de accio-

nes en forma preventiva. La Reserva Federal descubrió que los prestamistas más grandes del país tuvieron dificultades para pilotear los efectos de la recesión sin precedentes.

No solo viene la tormenta desde Estados Unidos, en Europa también se están cuestionando las reaperturas por la incidencia del coronavirus y se están discutiendo limitaciones a la libre circulación en la zona euro. Pero más allá de ello, está también en la lupa el sistema financiero, cuya sustentabilidad está seriamente comprometida. Es conocido el caso de la banca italiana, una de las más endeblas, con una cartera de créditos en las que un cuarto de ella es morosa o incobrable, en una economía que hace quince años que está estancada y, ahora, sufre el flagelo de la depresión.

Pero tampoco escapa la poderosa economía alemana, cuya banca está en una situación financiera extremadamente delicada. Como, por ejemplo, el emblemático Deutsche Bank, recordemos que estuvo a punto del default y fue apuntalado por el Estado alemán. Un nuevo manto de incertidumbre se cierne, ahora, a partir de las dudas sobre la confiabilidad de los informes contables y financieros de las firmas alemanas a causa de los terribles casos de falsedad y corrupción.

Un blanco principal de sospechas son las propias instituciones financieras que han estallado con el escándalo de Wirecard. Dicha compañía es una de las principales empresas financieras de Alemania. Se dedica a procesar los pagos con tarjeta de créditos (Visa, Mastercard) y los pagos en línea de cadenas de supermercados (Aldi, Lidi). Es propietaria de un banco y pasó a ser una empresa integral de servicios de cobro para sus clientes. Se trata de una empresa líder en tecnología financiera, que pasó a rivalizar con las grandes corporaciones de las finanzas mundiales. Su valuación de mercado llegó a los 28 mil millones de dólares, que se vino a pique en estos días.

Wirecard se ha sumado a potenciar la desconfianza en el marco regulatorio alemán, tras las dudas generadas por otros escándalos, como los de Volkswagen, Bayer y Deutsche Bank, todos ellos considerados “buque insignia” de la solvencia y potencia de las industrias alemanas. La adulteración de los números debe ser tomado como un termómetro de que la economía mundial se encuentra en un gran concurso de acreedores, lo que pretende ser disimulado mediante el fraude y el maquillaje contable.

Hay quienes pretenden aferrarse al boom bursátil como un síntoma de una pronta salida de la crisis, una vez superado el brote. Este optimismo incluye al propio Trump, quien ha salido a proclamar el comienzo de la recuperación yanqui.

Pero no se puede soslayar la evidencia de una íntima conexión entre la inyección de dinero, que viene promoviendo la Reserva Federal estadounidense, y el movimiento que se viene registrando en las bolsas. Ese vínculo se verifica en el auge pero también en los primeros tropezones, pues bastó que la Reserva Federal contrajese las compras de activos financieros para que se produjera un nuevo cimbronazo y cayera un 3%.

Aunque la bolsa retomó su curva ascendente, salta a la vista que los mercados están pendientes de la inyección de liquidez por parte del Banco Central norteamericano y, de un modo general, de los bancos centrales de las principales economías del mundo. Lo cual habla de la endeblez del boom accionario, cuya apreciación esta directamente asociada al plan de estímulo dispuesto por las potencias capitalistas. En ese marco, no hay que descartar un nuevo derrumbe. Lo cierto es que la valorización accionaria de las empresas que cotizan en Bolsa no se compeadece con su desempeño en la economía real, donde lo que impera es una retracción histórica en los niveles de venta, producción y consumo.

Guerra

La guerra comercial, derivada del impasse capitalista, viene oficiando como estímulo para que se aviven todas las tensiones interimperialistas, por un lado, y la tentativa del imperialismo, empezando por el norteamericano, por colonizar China y el ex espacio soviético, avanzando en el proceso de restauración capitalista.

Nouriel Roubini, el economista que se hizo famoso por pronosticar la crisis financiera de 2008, plantea el riesgo de “renovados conflictos entre Estados Unidos y sus principales antagonistas (China, Rusia, Irán y Corea del Norte) en la forma de guerras asimétricas”. El acuerdo logrado entre Estados Unidos y China (a principios de año) -según Roubini- no pasa de una tregua precaria y destaca que “la guerra fría bilateral (entre ambas naciones) sobre tecnología, datos, inversión, moneda y finanzas ya está aumentando vertiginosamente”. La “guerra fría” que viene abriéndose paso entre Estados Unidos y China podría transformarse en “guerra caliente”, un eufemismo para hablar de un conflicto bélico (ver “La economía mundial que se viene”, *PON*° 1.597, 11 de junio).

No olvidemos que el capitalismo americano viene atravesando una decadencia histórica como potencia, como se observa en el retroceso en el lugar que ocupa en la industria y el comercio mundial. Esto se ha agudizado aún más con la bancarrota capitalista. La guerra comercial no solo busca revertir un desequilibrio en el intercambio comercial sino

cortar de cuajo la producción y competencia china en la industria de punta.

La pandemia potencia todas las tensiones, pues el derrumbe actual, tan rápido y vertiginoso, aviva los choques entre las propias potencias capitalistas, que pugnan por sobrevivir a expensas de sus competidores, trasladándoles el costo de la crisis. La intensificación de la guerra del Medio Oriente y su reapertura en el norte de Africa, con la guerra en Libia; el conflicto de Ucrania, que sigue latente; la prolongada guerra en Afganistán, que continúa desangrando el país; el conflicto con Corea del Norte, que sigue sin una resolución, no son una sumatoria de conflictos regionales, sino que tienen un alcance internacional. En dichos focos se van ventilando las profundas y violentas contradicciones interimperialistas y la batalla estratégica por el sometimiento de Rusia y China. Lo mismo ocurre con la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. La injerencia y presencia militar imperialista, en primer lugar de Estados Unidos, en dichas regiones es un tiro por elevación contra Rusia y China. Los planes del Pentágono apuntan a reforzar un cerco contra ambos. La carrera armamentista se viene acelerando.

Lo cierto es que la tensión entre Estados Unidos y China crece. Durante los últimos meses, Trump no ha ahorrado acusaciones contra el régimen chino, a quien responsabiliza por el ocultamiento del brote y de su posterior propagación por el planeta. La presencia de tres portaciones de Estados Unidos en el Pacífico ha provocado alarma en China. Se trata del mayor despliegue militar estadounidense en la región desde 2017, cuando el entonces recién asumido presidente Donald Trump encabezó el enfrentamiento de su país con Corea del Norte por el programa de armas nucleares, diseñado por el régimen de Pyongyang.

Esto coincide con la reactivación de otro foco de tensiones entre China e India en la frontera en los altos del Himalaya. El enfrentamiento, que tuvo como saldo veinte militares indios muertos, sería el primer incidente fronterizo con muertos entre las dos potencias en más de cuatro décadas. La cantidad de víctimas se estima muy superior, incluidos del lado chino. Esto viene de la mano de un reforzamiento del despliegue militar de ambos bandos. El enfrentamiento surge en el marco de una antigua disputa por el territorio fronterizo en Cachemira, una zona conflictiva que, a su turno, ya viene siendo blanco de conflictos y guerras entre India y Paquistán, el tercero en discordia. Como telón de fondo está la escalada de tensiones entre Pekín y Washington, pues el régimen indio viene oficiando como uno de los principales alia-

dos de Estados Unidos en el continente asiático. Como contrapartida, Paquistán, su rival histórico en la región, se ha recostado sobre China y ha permitido que se abra paso por su territorio, la “ruta de la seda”, el mega-emprendimiento por el cual China pretende tener una vía de circulación de sus productos hacia Asia y Europa.

La presencia de la flota norteamericana está relacionada también con el control del mar de China Meridional, donde hay zonas cuya soberanía Pekín se disputa con otros países. El gobierno chino reclama como propio casi la totalidad del Mar de China Meridional y ha construido en la disputada zona, desde ciudades a pistas aéreas o instalaciones turísticas o de potencial uso militar.

Consecuentemente con ello, la Casa Blanca viene agitando las aguas contra el expansionismo chino. En la misma onda, Washington ha empezado a insinuar la posibilidad de reconocer a Taiwán como nación independiente -considerado por Pekín como una provocación-, dando marcha atrás con los acuerdos establecidos que reconocían a la isla como parte de China continental.

Esta nueva escalada bélica tiene mucho que ver con su frente interno, donde Trump se encuentra cada vez más acorralado, en medio de la rebelión desatada como consecuencia del asesinato de George Floyd. No es la primera vez que el magnate saca de la galera alguna iniciativa en el plano internacional, con la esperanza de exhibir un logro y liderazgo en la política exterior que compense el aislamiento progresivo que viene sufriendo. De todos modos, hasta ahora el balance en la materia no le ha sido muy favorable, como se ve en el empantanamiento en Medio Oriente, Afganistán y su fallido acercamiento con el régimen norcoreano.

No se nos puede escapar que la demagogia nacionalista y la ofensiva militar son funcionales a la tentativa por avanzar en un orden represivo y policial, y de mayor regimentación política interna que hoy viene siendo desafiada en las protestas que se replican en todo el país. Todo indicaría que hoy esta tentativa no pasa de una expresión de deseos condenada al fracaso.

Si es válido el pronóstico de una depresión, la perspectiva es una acentuación de las tendencias bélicas. No olvidemos que las depresiones preparan el terreno para las grandes conflagraciones mundiales. El crack del '29 desembocó en la Segunda Guerra. Entramos, en el marco de este nuevo colapso, en un escenario atravesado por crisis políticas, guerras y levantamientos populares.

China

China está lejos de estar inmune a este escenario. Las crecientes represalias de la Casa Blanca están haciendo sentir su impacto. Uno de los principales blancos es la empresa china Huawei, una de las tecnológicas líderes. Las medidas que el gobierno de Donald Trump impuso el año pasado a dicha compañía fueron reforzadas en mayo con una nueva limitación que, según algunos analistas, puede poner en peligro el futuro de la empresa. El departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que exigirá que los fabricantes extranjeros de chips y semiconductores que usen software o tecnología estadounidense, para fabricar productos que venden luego a Huawei, deberán solicitar antes una licencia para hacerlo. Para sortear las medidas anteriores, aprobadas por Washington, la empresa china estaba recurriendo a compañías no estadounidenses para obtener los componentes que Washington le negaba. Esto pone de relieve, a su vez, la distancia que aún separa a China de las principales potencias. El atraso en materia de chips y semiconductores, según algunos analistas, sería de diez años, lo cual da cuenta de su dependencia tecnológica del gigante asiático.

China no está en condiciones de oficiar de locomotora de la economía mundial, como ocurrió cuando estalló la crisis financiera de 2008. Esta vez, el gobierno no tiene la capacidad de apelar al enorme paquete de estímulo que puso en práctica en 2009, que comprendía un gasto público de alrededor de medio billón de dólares y una expansión del crédito, por un total equivalente al 16% del PBI. En términos porcentuales superó los rescates dispuestos por las principales potencias capitalistas, incluido Estados Unidos. En ese entonces, China ofició de locomotora de la economía mundial y su demanda fue la que estuvo en la base del aumento de los precios internacionales de los commodities y el período de bonanza experimentada por una serie de países de emergentes y latinoamericanos. Pero esto concluyó hace varios años y China ha sido arrastrada al torbellino de la crisis mundial, como lo prueba la brusca desaceleración que su economía viene experimentando. El régimen ha tratado de mantener en pie y evitar la quiebra de empresas, en especial de la órbita estatal, cuya continuidad está seriamente comprometida como consecuencia de la crisis de sobreproducción y sobreacumulación capitalista que afecta a todo el planeta, a través de un endeudamiento creciente, que se ha vuelto una bomba de tiempo. La relación entre la deuda total y el PBI se expandió del 173% en 2008 en alrededor del 300% en 2019. Este financiamiento no ha servido para

sacar del pantano al sector productivo y una parte creciente del mismo ha terminado siendo desviado a la especulación inmobiliaria -hasta el extremo de la creación de ciudades fantasmas-, burbujas bursátiles y de activos financieros.

En consecuencia, el gobierno y el Banco Popular de China (PBoC) han dispuesto planes más modestos en comparación con los rescates anunciados en las grandes metrópolis. El gobierno ha dado algunas exenciones fiscales para las empresas y ha proporcionado fondos adicionales para que los bancos presten a las empresas en dificultades. La política monetaria se ha vuelto algo más flexible al reducir las tasas de interés de los préstamos.

Pero dado el estado de la economía mundial y el condicionante en la que entra China en esta coyuntura es altamente dudoso que tales medidas sean capaces de revertir la declinación ya en desarrollo. A lo sumo, se estima que el ritmo de crecimiento podría alcanzar un 1,5%, que, hablando de China, representaría un verdadero colapso.

Esto ya está teniendo una traducción en el número de desocupados. Los empleos precisos y los datos de desempleo para China son algo vidrioso por la manipulación de las estadísticas y engañoso, ya que su fuerza laboral comprende trabajadores migrantes del país, que no son registrados fielmente en los cómputos gubernamentales.

La tasa oficial de desempleo urbano se situó en un máximo histórico del 6,2% a finales de febrero, y cabe esperar que aumente aún más en los próximos meses, incluso si la economía vuelve a un crecimiento positivo. Por lo pronto, en los dos primeros meses de 2020, el país vio destruidos unos 5 millones de puestos de trabajo, en el marco de una fuerza laboral total de 900 millones de personas en edad de trabajar. El gobierno se enfrenta a un problema importante para el número récord de graduados universitarios en la búsqueda de empleo, que ahora llegan al mercado laboral. El régimen chino se fija el objetivo de proporcionar al menos 10 millones de empleos urbanos más cada año. Pero, según Wang Tao, economista de UBS (sociedad suiza de servicios financieros), incluso cuando el mercado laboral se recupere, el empleo no agrícola caerá en 14 millones este año.

Antes de estallar el coronavirus, China ya venía sufriendo una brusca desaceleración y un desempleo creciente en medio de una amenaza de quiebras, que el régimen chino no estaba en condiciones de evitar. Este panorama amenaza echar leña al fuego al descontento que ya viene abriéndose paso a través de un crecimiento de la conflictividad laboral.

Esto ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre medidas favorables a una mayor apertura económica, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro.

El conflicto desatado en Hong Kong es un indicador de este proceso, pues pone al rojo vivo que cada vez se hace más incompatible el principio de “un país, dos sistemas”. La Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo máximo del régimen chino, viene de aprobar una ley de seguridad que refuerza las atribuciones represivas del Estado en ese territorio semi-autónomo. La medida está dirigida, en primer lugar, contra los movimientos de protesta que vienen desafiando la autoridad a Pekín y ha dado lugar a movilizaciones multitudinarias, que rechazan la ofensiva represiva y reclaman mayor autonomía política, y en rechazo del gobierno local de Carrie Lam, jefa del gobierno de Hong, considerada como una simple extensión del gobierno chino.

La preocupación de Pekín no son sólo las protestas en Hong Kong, sino su impacto en el continente, en momentos en que la pandemia y sus consecuencias económicas agudizan el disconformismo popular. Estados Unidos ha aprovechado para meter su cola y no se ha privado de utilizar, como una arma más en la guerra comercial en curso, la resolución de quitarle a Hong Kong el estatus de “nación más favorecida” (que, entre otros ítems, otorga beneficios arancelarios), apostando a golpear a la burocracia y los capitalistas chinos, que usan a la isla como intermediaria de negocios. Es un arma de doble filo, que podría lesionar intereses norteamericanos que operan en el lugar (ver nota “Hong Kong en la mira”, *prensaobrero.com*, 31 de mayo).

La pandemia ha agudizado todas las contradicciones económicas y sociales ya preexistentes. La economía china se contrajo un 6,8% en el primer trimestre, una caída mayor de la que estimaban diferentes consultoras internacionales. Se trata del primer retroceso del PBI desde que Beijing comenzó a informar datos trimestrales en 1992 -o sea, en casi treinta años.

La expectativa de una recuperación choca con la contracción severa de la economía mundial. Las exportaciones cayeron en marzo un 6,6%, después de desplomarse un 17,2% en enero y febrero. En el período reciente, el gobierno chino ha tratado de hacer que la economía esté más basada en el consumo interno. Sin embargo, las ventas minoristas cayeron un 16% en marzo.

Esto puede poner en tela de juicio la “estabilidad social”, que siempre ha sido materia de preocupación del Partido Comunista chino (PCCh) y, en especial ahora, pues el régimen de Xi es consciente que la continuidad en el tiempo de su mandato depende de ello, con más razón cuando el crecimiento, lejos de atenuar las desigualdades sociales, las ha potenciado. Y, a caballo de ellas, ha ido en aumento el clima de descontento y de hostilidad en las filas de los trabajadores.

Va a ser difícil que China pueda sustraerse a la liquidación de una franja de empresas, cuya viabilidad ha pasado a estar cuestionada por la bancarrota capitalista. “La contracción del PBI entre enero y marzo se traducirá en pérdidas permanentes de ingresos, que se reflejarán en quiebras de pequeñas empresas y pérdidas de empleos”, analizó Yue Su, de la Economist Intelligence Unit (*La Vanguardia*, 16/4).

En medio de un endeudamiento explosivo, ya antes que surgiera la pandemia, el régimen chino fue cerrando el grifo, lo cual ha empezado a provocar quiebras, un escenario por cierto novedoso en la economía del país. Durante años, antes de que una compañía china cayera en bancarrota, su deuda era comprada por bancos estatales u otro tipo de acreedores, o se articulaban sistemas para inyectar capital y rescatarlas. Esto dio lugar a la multiplicación de las empresas “zombis”, que perdieron miles de millones de yuanes al año, pero seguían operando gracias a estas ayudas.

La elite dirigente china se empeñó en mantener los empleos y la actividad económica. El temor fundado de la dirigencia estaba asociado a la reacción popular, que podía desatar la pérdida masiva de puestos de trabajo. Lo cierto es que el descontento ha ido en aumento entre las filas de los trabajadores. La creciente conflictividad laboral tiene que ver con este escenario, donde se empieza a constatar una proliferación de cierres de empresas. Según un artículo del diario *The Wall Street Journal*, los tribunales de todo el país aceptaron cerca de 19.000 solicitudes de bancarrota corporativa en 2018, más del triple que dos años antes. Una cifra que marcó un pico y que, en 2019, se ha suavizado pero igualmente sigue siendo relevante.

Esto comprende compañías del sector público, pero también del sector privado. Este último ha sido afectado más que nadie por la guerra comercial con Estados Unidos, que ha provocado una oleada de quiebras y en la que el Estado ha decidido mantenerse al margen. Los analistas creen que la desaceleración económica del gigante asiático también ha tenido que ver en esto.

La decisión de poner un freno a la ayuda está vinculada también con las crecientes presiones internacionales, que venían denunciando que los subsidios otorgados a las empresas hacían que China vendiera a precios de dumping (por debajo de sus costos reales) y abriera paso a una competencia desleal. Pero más allá de estas tensiones, dicha presión internacional apunta a poner fin al proteccionismo industrial y financiero aún reinante y abrir la economía china a la penetración del capital extranjero. Los jefes chinos vienen dando pasos en esa dirección, pero no de acuerdo con los ritmos ni a las aspiraciones del capital internacional, cuyos intereses, por otra parte, entran en choque con los apetitos de la propia burguesía china en formación. La apertura, asimismo, se ha visto condicionada por la presencia de la clase obrera, que es una amenaza latente, cuya irrupción podría poner en jaque los planes del gobierno. El gobierno de Xi Jinping tiene que pilotear la transición en medio de este escenario convulsivo, condicionado por la lucha de clases. De ser uno de los factores contrarrestantes de la crisis mundial, ha pasado a transformarse en una de las palancas de su agravamiento. Esto crea las condiciones para una intervención de mayor amplitud de la clase obrera china. Aunque con sus marchas y contramarchas, esta enorme fuerza laboral ya viene despabilándose estos últimos años, como lo prueban la multiplicación de huelgas y conflictos laborales. Su despertar definitivo augura un giro determinante en la lucha de clases mundial.

Las contradicciones aquí descritas ayudan a clarificar el debate sobre si China es un país imperialista y, de un modo más general, en torno de la naturaleza del Estado chino. Metodológicamente, es necesario volver sobre la noción acerca del imperialismo, desde el punto de vista marxista. El imperialismo, parafraseando el célebre libro de Lenin, es la fase superior del capitalismo -es decir, no constituye un nuevo modo de producción sino una etapa dentro del mismo régimen social capitalista; es decir, sigue teniendo como fundamento la misma estructura social y un mismo sujeto, la burguesía.

En este plano, la burguesía china no se ha terminado de consolidar como clase dirigente. Ocupa todavía un lugar subordinado respecto de la burocracia estatal, encarnada en el PCCh (Partido Comunista) y, en el último período, en el liderazgo de signo bonapartista de Xi Jinping, quien controla los resortes fundamentales políticos y económicos del país. El desarrollo económico de China se apoya fuertemente en la gran capacidad de arbitraje estatal, una herencia del período revolucionario.

La burocracia china consiguió, con mucho más éxito que la soviética, preservar el aparato estatal frente a las tendencias a la disgregación que surgieron de la etapa de la restauración capitalista. El Estado ha hecho pesar históricamente su autoridad para imponerle a la enorme clase obrera china condiciones de explotación muy duras, que fueron la base del desarrollo industrial exportador. Aunque una ola muy importante de huelgas en el período precedente achicó distancias salariales.

A la hora de hacer una caracterización, la cuestión del sujeto no es un rasgo más, ocupa una centralidad irremplazable. Constituye un error perderse en algunas características (la presencia china en África, las inversiones chinas en terceros países, en particular de la periferia) que, tomadas aisladamente, divorciadas del cuerpo principal, nos llevan a una apreciación errónea. Mal se puede hablar, entonces, de imperialismo, cuando la burguesía no ha logrado catapultarse como el actor y la fuerza principal.

Lo que corresponde decir es que la restauración capitalista en China aún está inconclusa. La burguesía fue creciendo a la sombra del Estado chino pero, en la actualidad, dicha tutela se ha convertido en un obstáculo para su desarrollo. La burguesía busca desembarazarse del proteccionismo y regulación estatal (muy marcada en la industria y las finanzas), así como de la interferencia que ejerce el Estado, incluso en el ámbito de las empresas privadas, lo cual es un freno y, en última instancia, resulta incompatible con el proceso de acumulación capitalista. La restauración capitalista está aún más rezagada en el campo chino, en el cual, la concentración de la tierra en manos del capital plantearía una expulsión masiva de centenares de millones de campesinos y, por lo tanto, el riesgo de una conmoción social de enormes dimensiones, que las autoridades chinas, por ahora, han optado por evitar. La falta de desarrollo capitalista en el campo es otra asignatura pendiente no menor en el desarrollo de una burguesía china.

La burguesía china es una clase aún en formación, que debe lidiar con la presión cruzada de dos gigantes, el imperialismo mundial y la clase obrera china. La burguesía mundial está pugnando por una apertura de la economía china, pero en su propio provecho, lo que supone confinar a China a la condición de una semicolonias. Derrotar esta pretensión, excede la capacidad de la burguesía china, que debería apoyarse y poner en movimiento a la clase obrera, lo cual abriría el terreno para la recreación de tendencias revolucionarias (o sea, las bases para una revolución social y política), retomando el rico legado que poseen

los explotados chinos en su historia. El destino de China está inscripto, como nunca, en la dinámica revolución-contrarrevolución, en un escenario de creciente polarización, no solo a escala de China sino a nivel mundial.

Europa: de la crisis a las nacionalizaciones

La burguesía europea está explotando la depresión para implementar una reestructuración histórica de las relaciones de clase.

Entre los sectores más afectados se encuentran las líneas aéreas y las industrias manufactureras asociadas. Un informe del 17 de junio de la firma de asesoría financiera Allianz plantea que nueve millones de personas en las “cinco grandes” economías europeas -Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España- corren un mayor riesgo de perder sus empleos en el próximo año, cuando cesen los planes gubernamentales que han proporcionado a las empresas una parte de salarios para empleados durante toda la pandemia.

El informe establece que cerca de un tercio de la fuerza laboral de estos cinco países, 45 millones de personas, depende actualmente de esquemas temporales de pago de salarios del gobierno, que terminarán. Se predice que, incluso con estos esquemas implementados, 4,3 millones de personas adicionales perderán sus empleos el próximo año.

Los sindicatos han procurado detener la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas a cambio de rebajas salariales y flexibilización de las condiciones de trabajo. Pero esto no ha detenido la sangría. Los sindicatos que, de un modo general, vienen llevando una política de colaboración con las patronales y el Estado, han dejado pasar esta ofensiva, desactivando y desorganizando la resistencia de los trabajadores.

Pero, pese a este desangre al que se expone a los trabajadores, la crisis se agrava. El colapso ha terminado por superar holgadamente los primeros pronósticos. Estamos frente a una insolvencia de las empresas que se viene extendiendo con una velocidad sin precedentes y plantea la amenaza de una quiebra en cadena. En este contexto, la Unión Europea está abriendo las puertas a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros, grandes y pequeñas, coticen o no en la Bolsa. El Estado pasaría a tener una participación en el capital de las empresas.

Estamos frente a un giro respecto de la política que la Comisión Europea venía sosteniendo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos), conceder sub-

sidios salariales, suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.

Una de las cosas que no puede pasar desapercibida es que quienes vienen motorizando este nuevo esquema son las naciones líderes, empezando por Alemania y Francia. Esto nos da una medida del alcance del derrumbe de la economía europea y -agregamos mundial- que están ingresando en una depresión, sólo comparable con el crack del '29. La crisis financiera de 2008 fue severa, pero no llegó tan lejos, y afectó especialmente al eslabón más débil de la economía europea. Ahora ha estremecido a las principales economías del continente y está en juego la sobrevivencia de corporaciones estratégicas.

Este proceso de salvataje ya ha comenzado sin esperar la aprobación de la nueva normativa. Italia, junto a España, uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia. El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, anunció, a su turno, un plan de rescate: 200.000 millones de euros en garantías del Estado que el banco público KfW (*Kreditanstalt für Wiederaufbau* -Instituto de Crédito para la Reconstrucción) ha puesto a disposición de las empresas en crisis por culpa del coronavirus, más otros 400.000 millones en avales. Adiós al *schwarze null* (rigor fiscal). Alemania ha dispuesto un programa de liquidez garantizada de hasta 1.000 millones de euros para cualquier empresa que terminara 2019 sin números rojos, pero que haya resultado perjudicada por el coronavirus. El gobierno de Angela Merkel prevé que soliciten las ayudas unas 100.000 empresas. En cualquier caso, las patronales ya han pedido al Ejecutivo de Berlín que la garantía ascienda al 100% del préstamo e incluso que se les exima de devolverlo. También ha acudido al rescate de dos de las principales marcas de ropa deportiva del planeta, Adidas y Puma.

Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y AA, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas. La expansión de la epidemia no solo hundió en la tormenta a las pequeñas empresas sino también a los grandes grupos. Los gigantes de la industria automóvil, Renault y PSA (Peugeot), enfrentan serias dificultades, mientras Air France-KLM suspendió la casi totalidad de sus actividades. Las capitalizaciones bursáti-

les sufrieron un serio repliegue y las caídas en las ventas de automóviles registraron niveles de hasta el 80% el mes pasado.

Aquí mete la cola la guerra comercial, pues se abre el terreno para absorciones hostiles de las empresas europeas por parte de la competencia foránea. Esto incluye la amenaza que viene de las corporaciones norteamericanas, pero también de China. Por lo pronto, los países europeos han comenzado a dar marcha atrás con los compromisos para la instalación del sistema 5G en el continente por parte del gigante asiático. Las nacionalizaciones representan una acción preventiva para neutralizar ese riesgo.

La nueva normativa prevé que las naciones compren las acciones de las empresas en aprietos a precios de mercado, lo cual es engañoso, pues la decisión del Estado implica automáticamente una revaluación del capital corporativo que, sin ese socorro, se hubieran desplomado hasta llegar a precios de remate. El Estado apuntala una valorización ficticia de empresas con una inyección de fondos públicos sideral, que es el que se sustrae y se niega a la hora de hacer frente en todos los planos a las crisis sanitaria, económica y social. Si se examinan las ayudas que se han puesto en marcha, se advierte que los recursos destinados a la población más afectada (asalariados, precarizados, autónomos y cuentapropistas, que están privados de ingresos a partir de la extensión de la pandemia) son residuales o marginales en relación con los que se aplicaron al salvataje empresarial.

Viene al caso señalar que la emergencia del Estado no es inocua respecto de las condiciones laborales, pues va de la mano con avances en la flexibilización de las condiciones de trabajo e incluso de rebajas salariales. Ni siquiera se garantizan los puestos de trabajo. Las primeras víctimas son los trabajadores contratados y tercerizados, que se extiende, luego, a la planta principal, muchas veces en forma encubierta con retiros voluntarios. No se nos puede escapar que la crisis en curso es utilizada por las patronales europeas para avanzar en una reforma laboral en regla, que empieza, en muchos casos, aplicándose a través de convenios por empresa o gremio.

Esta nacionalización es el punto de partida para luego proceder a una reprivatización de las empresas, una vez hecho el saneamiento a medida de las exigencias de los capitalistas. La Comisión Europea ha sido clara en que la intervención del Estado sólo va a concretarse a pedido de los accionistas y que dicha participación tiene un alcance transitorio hasta que la situación se normalice y se recupere la empresa. “La Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de ‘último

recurso', dado su carácter 'altamente distorsionador de la competencia entre empresas'. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista".

La Unión Europea acaba de anunciar un rescate, que ha sido catalogado por la prensa como "histórico". Después de muchos tironeos, los países miembros han aceptado la mutualización de la deuda -o sea, que sea la propia Unión Europea la que asuma el endeudamiento con la cual se va a financiar este paquete. A diferencia de auxilios anteriores, esta vez no estaría condicionado a planes de ajustes y un monitoreo directo por parte de la Comisión Europea. No obstante, habrá que conocer la letra chica del acuerdo. Ha trascendido por algunos medios que se instauraría un llamado "freno de emergencia", que permitiría que cualquier gobierno de la comunidad pueda objetar los planes de gastos de algunos de los otros socios. De todos modos, esto fue saludado por el líder español de Podemos, Pablo Iglesias, como un cambio de actitud de la UE, omitiendo que las pautas y marco general de la misma, que consagra condicionamientos severos a sus integrantes, se mantiene incólume y no deja de ser un órgano sometido a la tutela del capital financiero y el peso determinante de las principales potencias del continente, en primer lugar de Alemania.

Los nuevos anuncios no disipan las violentas tensiones que se viven en el seno de la Unión Europea. El capital germano no se priva de utilizar la emergencia actual para avanzar en una penetración y colonización mayor de las naciones del sur del continente. Ni qué hablar que estos enfrentamientos echan leña al fuego a las tendencias cada vez más agudas a la desintegración de la Unión Europea.

La envergadura de la crisis en curso excede la capacidad de los Estados para hacerle frente, con lo cual no se está en condiciones de impedir un escenario de quiebras, aunque se lo está intentando neutralizar. Probablemente, asistamos en breve plazo -y ya está ocurriendo- a un encarecimiento del costo del endeudamiento de los eslabones más débiles de la cadena. El anuncio de Moody's, de bajarle la calificación a la deuda italiana, es un anticipo de lo que se viene. La emisión del Banco Central Europeo no puede ser ilimitada y la ayuda de la Unión Europea, como acabamos de describir, ya dista de ser una canilla libre.

Giro político

La rebelión popular de Estados Unidos tiene enormes consecuencias, tanto en el plano interno como en el internacional. Estamos en pre-

sencia de un movimiento que pone en cuestión al conjunto del régimen político y social. El odio e indignación que provocan la opresión racial y la violencia policial se enlaza con el creciente descontento que provocan las crisis económica, social y sanitaria. La misma ha afectado más que a nadie a la población negra y las minorías, que vienen siendo blancos de una discriminación en todos los planos y que reúnen a los sectores más postergados y carenciados en dicho país.

El alcance de la lucha en curso se destaca por su empalme con la creciente conflictividad obrera. Las huelgas y protestas obreras se han multiplicado, sin antecedente cercano por las condiciones de trabajo, con el agravamiento de la pandemia. Habría que remontarse al año '30 para registrar un ascenso parecido. El verdadero salto cualitativo ha sido la existencia de huelgas y protestas obreras, como parte de la rebelión contra los asesinatos policiales. Esto marca una tendencia de la clase obrera organizada a confluir en esta lucha.

La rebelión ha logrado poner entre las cuerdas a Trump, lo que jamás pudo hacer el Partido Demócrata, quien fracasó en esa empresa. El magnate logró sortear las acusaciones comprometedoras contra él, incluido el juicio político. Más que un mérito, eso proviene de la pusilanimidad de sus contrincantes, que siempre se cuidaron bien por evitar que se ponga en juego la gobernabilidad y en mantener bajo control las protestas y la movilización popular.

Estamos en presencia de un creciente aislamiento político de Trump. Su control del Partido Republicano está fuertemente cuestionado. A la declaración del ex presidente George W. Bush, de que no apoyaría la campaña de Trump, siguieron derrotas internas de los candidatos favorecidos por Trump en las internas de Virginia, Carolina del Norte y Kentucky.

Todas las encuestas difundidas marcan un crecimiento de la ventaja de Joe Biden y todo indicaría que existen grandes probabilidades de que pierda estados que fueron clave para su victoria en 2016, como Florida, Michigan o Wisconsin. Biden está subiendo en los sondeos, no por méritos propios sino porque canaliza el declive de su adversario. Cada vez más sectores de la clase dominante han decidido soltarle la mano a Trump. La permanencia del magnate en el poder es un factor revulsivo. Este escenario ha terminado por barrer el ensayo bonapartista, intentando armar un régimen de poder personal, con el que arrancó su mandato.

Estados Unidos ingresa, por lo tanto, a una transición convulsiva. Hay un esfuerzo por encausar el descontento hacia las elecciones, pero

el relevo demócrata tiene patas cortas, pues está lejos de dar una respuesta a los problemas de fondo que han llevado a este levantamiento. La envergadura de la crisis excede holgadamente el manejo de un hombre del establishment, como Biden, que no se caracteriza por su estatura política como estadista. El “América first” de Trump no ha logrado detener, en estos cuatro años, un declive en la capacidad de dominación hegemónica de la burguesía norteamericana a nivel global en términos económicos, una pérdida de posiciones militares y un descenso de la pérdida de la autoridad política de su Estado sobre las masas de su país.

La crisis política que atraviesa Estados Unidos es patrimonio común de las democracias de Occidente. No hay país en Europa cuyo régimen no esté en aprietos (Gran Bretaña, Francia, Italia España).

En el caso de Francia, la crisis se ha unido a también la reacción popular. El país galo ha pasado de la protesta de los “chalecos amarillos” a la huelga del transporte, secundado por otros gremios contra la reforma jubilatoria. El sello distintivo en relación con la rebelión estadounidense es que, inconfundiblemente, el protagonismo estuvo en manos de la clase obrera que arrastró detrás suyo a estudiantes y otras capas populares. Si bien el movimiento no logró culminar en una victoria, el gobierno de Macron acusó el golpe de la cual no ha logrado reponerse; en las recientes elecciones, el oficialismo viene de sufrir una fuerte derrota política.

Esto no implica un proceso rectilíneo, pero las oscilaciones y giros en el tablero político a escala internacional tienen como hilo conductor la crisis del sistema de dominación política tradicional de la burguesía.

Progresismo al rescate del capitalismo

En este contexto, el desarrollo de la izquierda demócrata en Estados Unidos, nucleada mayoritariamente en los demócratas socialistas, merece un balance. La izquierda demócrata ha tenido un desarrollo estos últimos años. La victoria de Alexandra Ocasio-Cortez en las primarias de Nueva York, que se extendió a la victoria de otros candidatos izquierdistas para diputados, es un termómetro de radicalización política. Pero la orientación de los mismos es a enchalecar al movimiento de lucha atrás del Partido Demócrata, uno de los pilares del sistema político norteamericano. Los demócratas socialistas ya sufrieron un baldazo de agua fría con la decisión de Sanders de bajarse de la candidatura y pasar a apoyar a Biden, ex vicepresidente de Obama, que, como se sabe, es un hombre de confianza del establishment. En lugar

de colocar las energías en desarrollar una perspectiva independiente, el acento de esta izquierda está puesto en acompañar la campaña electoral del ex vicepresidente, lo cual conduce a un callejón sin salida, a una frustración de las aspiraciones populares. Esto pone al rojo vivo la cuestión crucial de la independencia política. Sólo rompiendo con el régimen político de la burguesía yanqui, y sus partidos Demócrata y Republicano, los trabajadores pueden desenvolver una lucha común contra el Estado capitalista y abrir un nuevo rumbo. Los intereses sociales de los explotados plantea la conformación de un partido independiente.

Esta misma reflexión puede extenderse para el progresismo a escala general, quien acaba de alumbrar la llamada 'Internacional Progresista', liderada por Yanis Varoufakis y el senador demócrata Bernie Sanders, avalada por más de 40 intelectuales de todo el mundo, entre los que destacan Noam Chomsky y Naomi Klein, así como dirigentes políticos, como Katrín Jakobsdóttir, del Movimiento de Izquierda-Verde y actual primera ministra de Islandia.

El Grupo Puebla, en su reciente encuentro virtual, que congregó a lo más graneado del progresismo latinoamericano, saludó y decidió sumarse a la iniciativa. En el convite fueron de la partida Lula, Dilma Rousseff, el exvicepresidente boliviano García Linera, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y el ex candidato presidencial por el PT brasileño, Fernando Haddad, que es uno de los cuarenta firmantes que dieron nacimiento a la Internacional Progresista.

La nueva organización advierte que “hay una guerra global en marcha contra los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la democracia, contra la decencia”, plantea unir las fuerzas progresistas ante “el avance del autoritarismo”. Y llama a defender y sostener “un Estado de bienestar, los derechos laborales y la cooperación entre países, además de consolidar un mundo más democrático, igualitario, ecologista, pacífico post-capitalista, próspero y pluralista, y en el que prime la economía colaborativa”.

Si hay un común denominador en lo que se refiere a este arco tan variado del progresismo mundial, es que están lejos de haber logrado promover un rumbo superador respecto de la política neoliberal en la experiencia política que les tocó protagonizar en sus respectivos países. Tampoco lo están haciendo ahora. Más bien han terminado adaptándose al orden social establecido. En la actualidad, tenemos a Bernie Sanders, luego de su frustrada carrera presidencial, llamando a cerrar

filas en el Partido Demócrata y promoviendo la candidatura de Joe Biden. Se trata de un callejón sin salida para los millares de trabajadores y jóvenes que abrazaron la postulación del senador socialdemócrata. La política de Sanders es llamar a colaborar con los grupos de trabajo de Biden, en la elaboración del plan de gobierno, como si fuera posible insuflarle un contenido progresista a la gestión del candidato demócrata, un hombre de confianza del establishment, y transformar por dentro un partido que es uno de los pilares del imperialismo yanqui. Mientras se habla del estado de bienestar, el dirigente político norteamericano acaba de votar el paquete de medidas de estímulo propuestas por Trump, que implican un gigantesco rescate del capital, mientras se dispone una ayuda residual para los trabajadores.

Lejos de representar una transformación del régimen político y social, el progresismo no saca los pies del plato. Un ejemplo muy elocuente es el de Islandia, donde el Partido Verde de la primera ministra cogobierna el país en coalición con el partido conservador de centroderecha, que se ha reservado para sí ministerios estratégicos. La centroderecha estuvo en el poder hasta 2017, cuyo gobierno estalló en medio de una gigantesca crisis política, cuando se revelaron actos de corrupción que comprometían al entonces primer ministro. El progresismo ha terminado salvando el sistema político y reconstruyendo la gobernabilidad a través de un pacto con los representantes tradicionales del neoliberalismo.

No se puede perder de vista la conducta de Varoufakis, de la coalición Syriza, cuyo gobierno capituló ante los dictados de la Unión Europea y su memorándum de ajuste, violentando el mandato popular que rechazó las imposiciones que planteaba la Troika. La tentativa de conciliar las aspiraciones del pueblo griego con la permanencia en la Unión Europea se reveló completamente infundada. El dirigente griego hoy se arrepiente de esta postura y señala que lo correcto hubiera sido abandonar la UE. Pero, ¿cuál sería la salida superadora? Recordemos que Varoufakis, en el apogeo de Syriza, señaló que la crisis capitalista “no era el mejor ambiente para políticas socialistas radicales”. Apuntó que “no estamos preparados para superar el colapso del capitalismo europeo con un sistema socialista que funcione”.

El exministro de Syriza no ha abandonado esta premisa. El cambio que propone consiste en suplantarlo su antiguo europeísmo por una variante nacionalista con mayor intervención del Estado, pero siempre en el marco del orden social vigente. Pero el estatismo burgués no es más que una tentativa extrema de rescate del capital, que ha ido siempre

acompañado de un ataque en regla contra los trabajadores. Por lo pronto, un retorno al dracma traería aparejado un severo golpe a los salarios, que quedarían nominados en la moneda local depreciada frente al euro, en tanto que las deudas seguirían fijadas en la divisa europea, haciendo todavía más gravosa la hipoteca que pesa sobre el país. En el actual contexto, Grecia perdería la libertad de acceso al mercado europeo, sin poder usufructuar las ventajas de una moneda devaluada en momentos en que marchamos a una depresión sin antecedentes y se potencia la guerra comercial y las políticas proteccionistas.

El impasse capitalista ha acelerado las tendencias a la desintegración de la Unión Europea. No se trata de volver a las fronteras nacionales sobre las antiguas bases, lo cual resulta cada vez más inviable, cuando las cadenas de valor están como nunca integradas, y la dependencia e interconexión entre las naciones se han hecho mucho más estrechas que en el pasado, sino en reconstruir integralmente Europa sobre nuevas bases sociales a partir de la unidad socialista del continente.

La Internacional Progresista habla de “postcapitalismo”, de modo de escabullir el bulto. Desterrada la perspectiva del socialismo, que excluyen, la salida que se ofrece, aunque se lo pretenda disimular, no es otra que el viejo plato recalentado de la sociedad capitalista, la cual podría regenerarse, según su punto de vista, adaptando formas de mayor equidad social y de democracia política. Se trata de un capitalismo imaginario, pues el capitalismo real, no el que surge de sus cabezas, viene descargando el peso de sus crisis y bancarrota sobre las masas. Tiende a barrer con los derechos laborales y conquistas de los trabajadores, obtenidos en la etapa precedente. Las reformas laborales y jubilatoria son patrimonio común, tanto de los gobiernos neoliberales como “nacionales y populares”. La pandemia ha puesto de relieve como nunca el antagonismo entre la defensa de la vida y la salud de la población, y una organización que se basa en el lucro capitalista.

El Estado de bienestar, cuya defensa pregona esta Internacional, es incompatible con el orden social capitalista vigente. Esto va de la mano de las tendencias a reemplazar la democracia por regímenes bonapartistas, de poder personal, que gobiernan por encima de las instituciones republicanas, como un recurso excepcional para pilotear la crisis y la polarización social que se viene abriendo paso.

En oposición al neoliberalismo, la receta que proclaman los promotores de esta iniciativa sería una mayor intervención del Estado. Pero hacen la prevención de que “el tema es si el Estado se utiliza para rescatar

al neoliberalismo o para llevar adelante una reforma”. Se presenta como si el Estado fuera una entidad en disputa, por encima de la organización social, cuando es un engranaje e instrumento central del régimen capitalista, que actúa bajo la tutela de la clase dirigente y constituye una maquinaria que oficia de correa de transmisión y vehículo de sus intereses. El uso de los fondos públicos para las necesidades sociales -y no para el rescate del capital, como ocurre ahora- plantea la cuestión del poder y, por lo tanto, que la clase obrera sea la que asuma la conducción política de la nación.

Lo mismo vale cuando se habla de “cooperación entre los países”, como si se pudiera abstraer el hecho de que la guerra comercial se origina como resultado de la crisis mundial capitalista en desarrollo. Las tensiones y rivalidades entre las corporaciones y las naciones se vienen agigantando en forma proporcional al impasse capitalista. La integración capitalista, como lo testimonian la Unión Europea o el Mercosur, está haciendo aguas. La cooperación de los pueblos, la superación de las divisiones nacionales sólo puede ser obra de la clase obrera, como parte de una transformación social bajo su liderazgo.

Los desafíos de la izquierda

La Internacional Progresista ha recibido el apoyo del Grupo Puebla, que reúne a los representantes más prominentes del progresismo latinoamericano. Pero no se puede soslayar el hecho de que estas fuerzas políticas han pasado por ser gobierno y conducido el destino de sus países durante décadas.

El progresismo latinoamericano ha sido incapaz de enfrentar al neoliberalismo. Ha tratado de salvar su pellejo, adaptándose a las exigencias del capital internacional, y aplicando él mismo los ajustes, pero eso no ha sido suficiente para evitar su caída.

El Grupo Puebla, en su corta existencia, ha demostrado sus límites para transformarse en una alternativa. Alberto Fernández, uno de los dos presidentes en ejercicio que integra dicho nucleamiento, permanece en el Grupo Lima, junto a sus pares derechistas de América Latina, que vienen conspirando activamente para tirar abajo a Nicolás Maduro. El gobierno argentino ha reconocido y dado las placas correspondientes al cuerpo diplomático nombrado por el gobierno golpista de Jeanine Añez. La política exterior de nuestro país ha estado subordinada al rescate de la deuda que se viene desarrollando en el marco de las negociaciones con los bonistas y el FMI, y que estaría en los umbrales de un arreglo.

Un dato distintivo del gobierno del mejicano López Obrador son las llamativas buenas migas con el autoritario Donald Trump. El presidente mejicano ha renovado el tratado de libre comercio a la medida de las exigencias de Estados Unidos y convirtió a su país en un Estado tapón contra las caravanas migratorias que buscan un escape al hambre y a la pobreza que asolan el continente. El combate contra el narcotráfico ha sido utilizado como pantalla, una vez más, para reforzar el corrompido aparato militar y policial.

La tendencia al compromiso con el imperialismo por parte de los exponentes latinoamericanos de la Internacional Progresista debe ser tomado como un alerta por todos los luchadores. No estamos frente a un espacio político que se desenvuelve dentro del campo de apoyo a las recientes rebeliones populares, sino de uno que nace con la función política de contenerlas. Mientras que, en 2019, el movimiento de lucha avanzó contra todos los gobiernos, con independencia de su filiación “neoliberal” o “progresista”, los miembros de este nuevo nucleamiento internacional -en especial en América Latina- actuaron para salvar la gobernabilidad.

La búsqueda de un punto de equilibrio entre al necesidades populares y el orden social capitalista se ha revelado infundada. Si hay algo que ha demostrado carecer de “realismo” es la pretensión de revertir las tendencias a la polarización social, que se han acentuado como nunca. La pandemia, a su turno, lejos de atenuar los antagonismos sociales, los ha exacerbado. No existe una estación intermedia entre el neoliberalismo y la revolución social.

La política de colaboración de clases se ha revelado como un escollo central para conducir la lucha de los trabajadores y las masas a una victoria. La izquierda mayoritariamente ha terminado siendo arrastrada como furgón de cola de esta política. Ha hecho un seguidismo al PT brasileño, como es el caso del Psol, al nacionalismo bolivariano o terminado haciendo causa común con la derecha en nombre de la democracia. Esto vale para la izquierda radical europea, integrada a Podemos de España o en el Bloco portugués que, en la actualidad, son parte de la coalición gobernante de sus respectivos países. Lo mismo se puede hacer extensivo respecto de la experiencia del NPA francés, donde está lejos de jugar como un motor de la lucha de clases y no ha superado las características de un sello, encima, devaluado, pues se ha venido abajo en votos y en militantes. Los “partidos amplios” no son más que acuerdos superestructurales de diferentes tendencias, a las cuales lo único que

las mantiene unidas es la expectativa de obtener algún cargo o posición parlamentaria. El “entrismo” o que se trate de una “cuestión táctica”, con la cual las corrientes de izquierda justifican la permanencia en su seno, es simplemente una excusa para disimular su deriva electoralista y su renuncia a la construcción de partidos obreros revolucionarios. Se ha venido dando aliento al movimientismo, promoviendo alianzas y nucleamientos con fronteras de clase amorfas y difusas, en lugar de una estructuración política independiente de los trabajadores. Tenemos, así, la experiencia de frentes comunes con la centroizquierda, defensores del orden capitalista imperante, liderados por representantes inconfundibles de la burguesía, como Pino Solanas o Luis Juez, en el caso de Argentina, o la experiencia en curso en el Frente Amplio de Perú.

La nueva situación que atravesamos en el mundo vuelve, más actual que nunca, la cuestión de la estrategia de la izquierda. Y en ese marco, la batalla por partidos revolucionarios que abracen una estrategia del poder obrero, que es la base granítica y la única vía posible para reconstruir una internacional revolucionaria, la IV Internacional.

Programa y salida

El levantamiento popular norteamericano introduce un salto cualitativo en la situación internacional, pues la rebelión tiene lugar en las propias entrañas del imperio, lo que condiciona todo el escenario internacional. Ni qué hablar de la irradiación política que ejerce por la centralidad que ocupa en todos los movimientos de lucha del mundo.

No se nos puede escapar que el derrumbe de Trump, bajo el impacto directo de la iniciativa popular, golpea toda la derecha latinoamericana. Representa un golpe a todos los regímenes más reaccionarios, que se han recostado en el magnate para gobernar. En primer lugar, el fascista Jair Bolsonaro quien, como ningún otro mandatario, está asociado en el imaginario popular a la figura de Trump, y se extiende a todos los presidentes que integran el Grupo de Lima, empezando por Sebastián Piñera y siguiendo por la boliviana Añez.

Es un golpe también a todos los compromisos y planes de ajuste y ataque a los trabajadores que los gobiernos derechistas, como los nacionales y populares, vienen pactando con el FMI, amoldándose a las presiones y los condicionamientos que ejerce el imperialismo sobre su “partido trasero”. La rebelión en Estados Unidos tiene un punto de contacto y recoge el hilo de las rebeliones que estremecieron a Latinoamérica y que tuvieron su réplica en otras geografías del planeta y, como tal, es una

bocanada de aire fresco y un aliento para la rebelión latinoamericana, cuyo ciclo está lejos de estar cerrado.

La rebelión norteamericana ha vuelto a colocar sobre el tapete quién paga la crisis y pone en el orden del día una batalla global de la clase obrera por un programa de defensa de sus condiciones de vida: prohibición de despidos y suspensiones, subsidio al desocupado y licencias pagas, reparto de las horas de trabajo sin afectar al salario. Los antagonismos de clase se ven todavía más nítidamente con la pandemia. Mundialmente, la burguesía viene planteando subsidios y la defensa de sus beneficios, mientras pretende descargar el peso del actual flagelo sobre las masas. Es necesario invertir la fórmula, colocando en primer lugar las necesidades sociales y el interés popular. Más que nunca, los trabajadores deben intervenir y no dejar en manos de las patronales y del Estado capitalista el manejo del tema. Y, por lo tanto, el control obrero en todos los lugares de trabajo y producción, para asegurar las normas de higiene y el cumplimiento de los protocolos de prevención contra la pandemia.

El cuadro de recesión que se potenció con el coronavirus acelera la amenaza de cierres de empresas y despidos masivos. Frente este escenario, es necesaria una respuesta común de los trabajadores, exigiendo la nacionalización de toda empresa que cierre o despidas, y su puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores.

La nacionalización de algunas empresas, sectores de la economía y la banca, que promueve el Estado, es una medida extrema de salvataje del capital. El “estatismo” capitalista apunta a rescatar al capital quebrado a expensas de las masas. Pero, al mismo tiempo, esto va a hacer más visible que la resolución de la crisis es de carácter político y está concentrada en el Estado. La crisis capitalista pone agudamente al rojo vivo la necesidad de una planificación de conjunto de los recursos, y el uso y el destino que se da a los mismos -o sea, la cuestión del poder, la lucha por gobiernos de trabajadores.

El punto de partida para desenvolver esta perspectiva, insistimos, es la independencia política. Y abrir paso, sobre esta base, a una nueva dirección del movimiento obrero, de modo de poner a los sindicatos y las organizaciones populares como herramientas de lucha de clases al servicio de una salida política de los trabajadores.

América Latina en el centro de la tormenta

Caracterización de la etapa,
programa y estrategia revolucionaria

Pablo Giachello

Es evidente que el desembarco de la pandemia en América Latina ha planteado un cambio considerable del escenario político latinoamericano. Sin embargo, no es menos cierto que esta nueva situación está condicionada por las grandes rebeliones de 2019, que han abierto una etapa de recrudecimiento de la lucha de clases y de ascenso y protagonismo de las masas latinoamericanas. La llegada del Covid-19 se produjo en el momento mismo en el que tomaba un nuevo impulso la rebelión popular en Chile, con las gigantescas y combativas movilizaciones de marzo, y pocos meses después de que tuvieran lugar las grandes rebeliones populares de Ecuador, Puerto Rico, la resistencia del pueblo boliviano contra el golpe, las huelgas generales en Colombia, las grandes huelgas educativas en Costa Rica y, más atrás, la rebelión en Nicaragua. La pandemia del coronavirus le ha impuesto a estos procesos un compás de espera, aunque de ningún modo los ha cancelado. Con la llegada del Covid-19 el subcontinente se ha inmerso en una verdadera tormenta sanitaria y se ha sumergido aún más en una crisis económica, social y política. Todas las contradicciones sociales que oportunamente motivaron las rebeliones populares latinoamericanas se han intensificado. Asimismo, la emergencia de una rebelión popular en Estados Unidos, en momentos donde se

propaga profusamente el coronavirus, representa un golpe al gobierno de Donald Trump y a todos los gobiernos latinoamericanos agentes o tributarios del imperialismo norteamericano. Por ese mismo motivo, representa también un acicate a las luchas obreras, populares y anti-imperialistas de los pueblos del subcontinente y una convocatoria a retomar el hilo de las rebeliones populares de 2019.

Esta perspectiva abierta -la de renovados choques entre las clases dirigentes y sus gobiernos, de un lado, y las masas trabajadoras y oprimidas, del otro- le plantea a la izquierda revolucionaria el abordaje a fondo de la gran problemática que dejaron planteados los procesos de rebeliones populares de 2019: superar la crisis de dirección del movimiento obrero y de las masas oprimidas de América Latina. El abordaje de esa crisis de dirección plantea, en primer lugar, ajustar una caracterización de la etapa y, en segundo lugar, la formulación del programa y la estrategia que debe levantar la izquierda revolucionaria.

El epicentro de la pandemia

Tempranamente, los analistas habían alertado sobre la fragilidad de los países latinoamericanos para enfrentar la crisis pandémica. El 19 de marzo, el director del Instituto de Estudios de Políticas de Salud del Brasil, Miguel Lago, en un artículo publicado en *The New York Times*, anticipaba que América Latina podía convertirse en la mayor víctima del coronavirus en el mundo. Aunque deberemos esperar para terminar de constatar el pronóstico de Lago, lo cierto es que, hacia mediados de junio, el epicentro de la crisis pandémica pasó a instalarse en América Latina. Brasil, el gran gigante latinoamericano, se ubicó como el principal foco infeccioso del subcontinente y el segundo país más golpeado por la pandemia a escala mundial, solo detrás de Estados Unidos.

No caben dudas que la catástrofe sanitaria que azota a América Latina es responsabilidad de la clase social dirigente del subcontinente y de los distintos gobiernos que, de una u otra manera, la representan. La política negacionista de la pandemia, que caracterizó especialmente al gobierno del fascista Jair Bolsonaro y en un comienzo también al ‘neoliberal’ Sebastián Piñera y a los ‘nacionales y populares’ Manuel López Obrador y Daniel Ortega, no es más que la expresión del descomunal lobby ejercido por las burguesías de sus respectivos países. Estas, desde el comienzo mismo de la crisis pandémica presionaron por la continuidad de toda actividad productiva y económica, y atentaron sistemática-

mente contra la instauración de cuarentenas en regla. El negacionismo, que en el caso de Brasil se mantiene hasta el día de hoy como la línea rectora del gobierno, ha hecho estragos, habilitando una arrolladora propagación del virus y contagiando al mismísimo fascista Bolsonaro.

En aquellos países donde se han impuesto cuarentenas más o menos estrictas, con el correr de las semanas terminó por imponerse el lobby patronal. Se habilitó el retorno a las actividades, especialmente las industriales, y se establecieron 'nuevas normalidades' de tipo preventivas. Naturalmente, estas no alcanzaron para evitar la multiplicación de los contagios y con ello se produjo un repentino colapso de los sistemas sanitarios. De esta manera, se puso por completo al descubierto un largo proceso de vaciamiento de los sistemas públicos de salud, devastados por décadas de vaciamientos y privatizaciones de por parte de todos los gobiernos de todos los colores.

A principios de abril, el colapso se expresó en Ecuador, con cadáveres apilados en contenedores y en las calles de Guayaquil. Por esa misma fecha, una decena de sindicatos combativos de Perú denunciaban, en una declaración conjunta, que el país marchaba hacia el mismo destino. Efectivamente, Perú pasó a ser, hacia junio, uno de los países latinoamericanos más afectados por la propagación de la pandemia, junto con Brasil, México y Chile. En estos países, dada la plena ocupación de las camas de cuidados intensivos, en los hospitales se elige quién vive y quién muere; los fallecidos por Covid-19 se entierran en fosas comunes y empiezan a normalizarse los cajones de cartón. Hacia fines de junio, América Latina superaba los 100 mil muertos por coronavirus, más de la mitad de ellos provenientes de Brasil.

La lucha por la centralización de los sistemas sanitarios de cada país, bajo la dirección de los propios trabajadores y profesionales de la salud, se plantea como un programa de características universales para toda América Latina. Se trata de una pelea en la que se pone en juego nada menos que la vida de las masas trabajadoras. De igual modo, la lucha por la duplicación de los presupuestos sanitarios y por comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, empresa y lugar de trabajo, son planteos y reivindicaciones que ocupan hoy un lugar de primer orden.

Derrumbe económico

De la mano de la catástrofe sanitaria se desarrolla también un histórico derrumbe económico. Naturalmente, el derrumbe latinoamericano tiene como telón de fondo la bancarrota capitalista internacional,

que se ha acelerado y profundizado de la mano de la crisis pandémica, inaugurando un período de depresión económica que solo puede ser comparable con la Gran Depresión de los años '30. En la economía mundial, las tendencias recesivas ya estaban claramente presentes mucho antes que se desatara la crisis sanitaria, y así lo corroboraba la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana durante todo 2019, que redujo en reiteradas ocasiones la tasa de interés, con el objetivo de apuntalar la tasa de beneficio empresarial e impulsar un plan de inversiones productivas. Asimismo, el cuadro de sobreproducción dio lugar a un marcado retroceso de las inversiones, de tal magnitud que no llegaba siquiera a compensar el proceso de desgaste del capital fijo. Con la transformación del Covid-19 en pandemia, los consecuentes cierres de fronteras y la declaración de cuarentenas en numerosos países, se terminó por instalar un profundo parate económico y un derrumbe capitalista sin precedentes. El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eric Parrado, confirma esta caracterización en una entrevista que le concedió al diario *El País*, el pasado 23 de junio, donde declaró que “en 2019 ya volábamos con un motor dañado y este 2020 se ha dañado el otro motor”.

En América Latina, como en todo el mundo, los inversionistas se deshicieron de sus paquetes accionarios y huyeron en masa a comprar bonos del Tesoro norteamericano. Este proceso derivó en un desplome inédito de la cotización de las principales empresas de los países latinoamericanos y en el derrumbe de sus respectivos índices bursátiles. En marzo, la Bolsa de Comercio de São Paulo debió paralizar sus actividades en cinco oportunidades, para contener el derrumbe del Bovespa, el índice bursátil que mide la cotización de las principales empresas de Brasil. Este cuadro se conjugó con el virtual congelamiento del comercio mundial y el hundimiento de los precios de los commodities, que ya venían de un fuerte retroceso en todo el período previo al estallido de la pandemia. La caída de los precios y de las ventas de materias primas, principal rubro exportador de los países del subcontinente, socavó los ingresos de divisas de los países de sudamericanos. El derrumbe de características inéditas del precio del petróleo, acumulando una caída del 40% en lo que va de 2020, golpeó particularmente las economías de Brasil, Venezuela, México y Ecuador, y frustró la tentativa del gobierno de Alberto Fernández de transformar a la Argentina en un país exportador de crudo, de la mano del gigantesco reservorio hidrocarbúrico Vaca Muerta. La caída del precio de la soja, fruto particularmente de

la caída de la demanda china, recortó las proyecciones de ingresos de divisas en Argentina, Brasil y Uruguay. El retroceso del precio del cobre golpeó particularmente a las economías de Chile y de Perú, principales exportadores mundiales del metal rojo.

Este fenómeno de escases de divisas terminó por acicatear un descomunal proceso de fuga de capitales. Entre enero y abril de 2020 se fugaron desde los países latinoamericanos la friolera de 150 mil millones de dólares, lo que a su vez redundó en la devaluación de la mayoría de las monedas latinoamericanas. El real brasileño, por ejemplo, se encuentra en su mínimo histórico, acumulando una devaluación del 40% en lo que va del año. Esto, a pesar de la política intervencionista del Banco Central de Brasil, que despilfarró reservas en el mercado de cambios para tratar de contener la cotización del real. Como consecuencia de todo este descalabro, a fines de junio, el FMI ajustaba sus proyecciones económicas de abril y pronosticaba un derrumbe del PBI de América Latina y el Caribe en un 9,4% para 2020. Para las dos grandes economías latinoamericanas, Brasil y México, se proyectó un derrumbe del 9,1 y el 10,05%, respectivamente. Para Perú, el derrumbe previsto es del 12%. Y para Argentina, la tercera economía del subcontinente, se considera un desplome del 9,9%. Sin embargo, a los pocos días del anuncio del FMI, Argentina oficializaba el mayor derrumbe de toda la historia del país en un solo mes. En abril, cuando más intensa fue la cuarentena argentina, la economía se hundió un 26,4% en referencia a abril de 2019.

Naturalmente, de la mano del derrumbe de los PBI crecieron los pesos relativos de las deudas soberanas y se incrementaron sensiblemente los desequilibrios fiscales. El FMI calcula que el déficit fiscal promedio de Latinoamérica rondará el 8,9%. Sin embargo, a pesar de esto, se ha reiniciado un nuevo ciclo de endeudamiento de los países del subcontinente, que se explica por la descomunal emisión monetaria y las tasas de interés negativas impuestas por la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central europeo. Lo que ha sucedido es que se ha puesto en marcha un nuevo *carry trade*, el mecanismo por el cual los inversionistas se endeudan a un bajo o nulo costo e invierten ese capital en las deudas públicas de los países ‘emergentes’ o subdesarrollados. Esta nueva bicicleta financiera, que se realiza a costa de una mayor y renovada explotación de los países latinoamericanos, tiene características más riesgosas aún que en el pasado. Sucede que, tal cual lo señalamos más arriba, la situación de la economía latinoamericana se encuentra condicionada por

una recesión de características históricas, un gigantesco crecimiento de las deudas corporativas, un derrumbe de los precios internacionales de las materias primas, el crecimiento de los déficits fiscales, el crecimiento relativo y absoluto de las deudas públicas, las devaluaciones de las monedas locales y el despilfarro de las reservas fiscales. Es así que Argentina -que se encuentran inmersa en un virtual default, tiene una deuda pública superior al 100% de su PBI y no tiene acceso al mercado de créditos internacional- se empieza a transformar en el horizonte de todos los países latinoamericanos. De hecho, Chile y Perú han tenido que acudir, durante los primeros meses de la pandemia, a un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional.

La crisis ha vuelto a mostrar que el derrumbe mundial capitalista solo puede ser enfrentado con medidas anticapitalistas. La pelea por el no pago de las deudas externas, por la ruptura con el FMI y el imperialismo, por impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, por la nacionalización sin indemnización de los sistemas bancarios, del comercio exterior y de los recursos naturales, así como el control obrero general, tiene un alcance continental. En toda América Latina, la agitación y la lucha por este programa obrero de salida a la crisis es una tarea fundamental de la izquierda revolucionaria.

Los trabajadores pagan la crisis

Pero América Latina no es solo el epicentro de la crisis pandémica y uno de los eslabones débiles de la bancarrota capitalista internacional, es también el continente más golpeado por la crisis social. Es evidente cómo la clase capitalista y los distintos gobiernos están descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado a principios de julio¹, señala que mientras a nivel mundial las horas laborales se redujeron en un 14%, en América Latina ese porcentaje asciende al 20,5%, por encima de Norteamérica, de Europa, de Asia y de África. De los 400 millones de puestos laborales perdidos a escala mundial, 47 millones se concentran solo en Latinoamérica. El informe de la OIT destaca también que las mujeres trabajadoras son las más golpeadas, dada la preponderancia de mano de obra femenina en los sectores económicos más afectados por la pandemia, como la hostelería, la

1. Panorama Laboral en los tiempos de Covid- 19. Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_749659.pdf

restauración, el comercio y la industria manufacturera.

Esta gigantesca destrucción de puestos de trabajo fue allanada por un extendido cuadro de informalidad laboral, que viene de larga data. Pues en otro informe de la OIT, de principios de mayo², se señalaba que de los 298 millones de trabajadores ocupados, el 54% de ellos -es decir, 158 millones de trabajadores- se encuentra en la informalidad. En países como Bolivia y Nicaragua, que cuentan con cuantiosos años de gobiernos ‘nacionales y populares’, las tasas de informalidad laboral se acercan al 80%, y un índice similar tiene Guatemala. Pero también son altas las tasas en Argentina (47,2%), en Brasil (46%) y en Chile (40,5%). De este universo de trabajadores precarizados, según el propio informe, el 90% de ellos sufrió una reducción de sus ingresos. Pero, mientras a nivel mundial las reducciones de ingresos de los trabajadores informales significaron en promedio una pérdida del 60%, en América Latina y el Caribe esa pérdida llega al 80%. Según un informe conjunto presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del 16 de junio, toda la crisis social derivada de la pandemia capitalista y la pandemia del Covid-19 amenaza con dejar a otras 16 millones de personas en la pobreza extrema en toda América Latina.

El crecimiento de la desocupación y el extendido cuadro de informalidad laboral son el terreno sobre el cual se desarrolla también una extraordinaria ofensiva contra la fuerza de trabajo. Es la forma mediante la cual la clase capitalista pretende apuntalar su decaída tasa de beneficio. Esto se expresa en un aumento de las tasas de explotación de los trabajadores y una reducción de sus ingresos, sea por la vía del congelamiento de los salarios, en economías con importantes índices inflacionarios, o sea por la implementación directa de reducciones salariales nominales.

Este cuadro de fenomenal ataque contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras pone más aún en evidencia la parálisis y el colaboracionismo de parte de las centrales obreras de todos los países. Las burocracias sindicales fueron determinantes para contener la intervención abierta y decidida del movimiento obrero en el curso de las rebeliones populares de 2019. De ese modo, lograron evitar la caída de los gobiernos jaqueados por la lucha de las masas. Ahora, esas mismas

2. Masiva pérdida de ingresos impacta a 90% de los trabajadores informales en América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_744298/lang-es/index.htm.

burocracias juegan un rol estratégico para las burguesías latinoamericanas, convalidando las ofensivas antiobreras. Esto vale para la oficialista CGT de Argentina, como también para las ‘opositoras’ CUT de Brasil y la de Chile.

A esta masacre social es imperioso responderle con un programa de reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y un plan de acción. Enfrentar la desocupación masiva plantea levantar el reclamo de un seguro al parado, equivalente a la canasta básica familiar de cada país, y luchar por el reparto general de las horas de trabajo sin reducir los salarios. Poner un coto a las cesantías plantea impulsar las ocupaciones de toda fábrica o empresa que cierre o despida. Y enfrentar la carestía plantea organizar la lucha por salarios y jubilaciones mínimas equivalentes al costo de la canasta familiar de cada país latinoamericano. Pero el impulso de estas reivindicaciones mínimas, junto a la lucha por poner fin a la precarización e informalidad laboral, por derogar las reformas laborales y previsionales, y por terminar con los sistemas jubilatorios privados, reclama sacarse de encima a las burocracias sindicales entreguistas, impulsando congresos de delegados electos por las asambleas de base de base de todos los gremios en cada país latinoamericano, así como planes de lucha hasta la huelga general para imponerlos.

La mano imperialista, sus agentes y el golpismo

El gobierno de Donald Trump -a pesar de que Estados Unidos es el país con más infectados y con mayor cantidad de muertos por Covid-19, de que es el epicentro de la bancarrota capitalista y el escenario en el que se desarrolla una histórica rebelión popular- no escatima esfuerzos para lograr una mayor injerencia en América Latina. Es lo que explica el reclamo de Trump para que sea un norteamericano, Claver Carone, quien presida el BID durante los próximos cinco años, contradiciendo una ‘ley no escrita’ del organismo que establece que la presidencia del mismo corresponde a un país latinoamericano. Es que en setiembre de este año, el BID deberá elegir autoridades, y aunque es claro que el BID siempre fue y será un instrumento del capital financiero, Trump quiere asegurarse un control total del organismo para reforzar una política de bloqueo de las empresas contratistas y financieras chinas en el subcontinente. Cuando *The New York Times* dedicó, en 2018, la portada de su diario a condenar la base espacial militar China instalada en la provincia de Neuquén, ya era evidente que América Latina se había convertido en un campo de disputa en

la guerra económica entre Estados Unidos y China. Existe un hilo conductor entre la jugada de Trump para hacerse del control directo del BID, la movilización, en junio de este año, de tres portaviones norteamericanos en el océano Pacífico, amenazando la salida oriental China, y el sangriento combate entre India (socia de Estados Unidos) y China en Cachemira, por el control de la “ruta de la seda”.

Pero la designación de Claver Carone apunta también a otro objetivo estratégico para el imperialismo yanqui. Carone es un gusano del partido republicano, abiertamente identificado como un enemigo acérrimo de los regímenes de Venezuela y de Cuba. La designación de Carone ya cuenta con el apoyo de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Haití y Uruguay. Recordemos que el imperialismo yanqui se anotó un punto importante con la consumación del golpe de Estado en Bolivia. Esta fue la respuesta consciente del imperialismo, la burguesía y la derecha continental a la zaga de rebeliones populares latinoamericanas de 2019. Los golpistas se valieron del propio desprestigio del gobierno indigenista de Evo Morales, quien durante los años precedentes venía padeciendo un retroceso electoral como consecuencia de su política de ajuste contra el pueblo. El imperialismo contó para el operativo golpista con la colaboración estrecha del gobierno de Bolsonaro y del expresidente argentino Mauricio Macri, que actuaron mancomunadamente con la oligarquía fascista de Santa Cruz de la Sierra. La confianza de Morales en la OEA y su negativa a desenvolver a fondo la movilización obrera y popular terminó por allanarle el camino al golpismo. Ahora, la ‘estabilización’ del golpe se encuentra cuestionada. Existe un rechazo generalizado a un nuevo aplazamiento de las elecciones bolivianas previstas para setiembre. La COB, que debutó apoyando el golpe, amenaza ahora con impulsar un levantamiento popular, en tanto y en cuanto la golpista Jeanine Añez intente prorrogar nuevamente las elecciones.

Hace ya mucho tiempo que el imperialismo norteamericano tiene en la mira al gobierno de Nicolás Maduro. El imperialismo desea poner fin al régimen bolivariano y que ello sea el punto de apoyo para asestarle un golpe de gracia final al régimen cubano. Justamente, el Grupo de Lima, que reagrupa a los principales mandatarios latinoamericanos y nació bajo el auspicio del imperialismo yanqui, surge con el objetivo explícito de condenar al gobierno venezolano. Luego de los sucesivos fracasos de Juan Guaidó, el títere de los yanquis en Venezuela, de hacerse del poder político, el imperialismo ha instrumentado diversas vías con el objetivo de

quebrar al régimen de Maduro. Como parte de esa ofensiva golpista hay que anotar el acuerdo del gobierno yanqui con el presidente Iván Duque, a principios de junio, para habilitar el despliegue de 800 soldados norteamericanos en Colombia, donde ya hay siete bases militares yanquis instaladas, con el objetivo de cercar a Venezuela. Ese despliegue militar fue precedido por dos desembarcos frustrados de mercenarios golpistas a principios de mayo, denominados “Operación Gedeón”, y por la navegación de buques norteamericanos en las costas venezolanas a principios de abril. Del paquete reaccionario y golpista también es parte el bloqueo económico criminal, que en el marco de la pandemia realizan Estados Unidos y la Unión Europea sobre Venezuela, y la confiscación de 30 toneladas de oro venezolano por parte de los piratas de la banca británica.

Por su parte, Maduro pretende terminar con la mayoría que detenta la derecha golpista en la Asamblea Nacional, convocando a nuevas elecciones parlamentarias para diciembre de este año. La tentativa del gobierno de Maduro de barrer a la derecha del Parlamento y reestablecer un pleno predominio del régimen que lidera, lo hace en el momento en que, amparado en las sanciones económicas del imperialismo, se encuentra ejecutando un fuerte ajuste contra los trabajadores y el pueblo venezolano, iniciando un proceso de dolarización de los precios de los combustibles. El ajuste del gobierno de Maduro es lo que ha empezado a despertar reacciones de la clase obrera en defensa de los salarios y los convenios colectivos de trabajo.

La izquierda revolucionaria debe colocarse en la primera línea de combate contra el golpismo reaccionario y pro-imperialista. Solo desde ese campo, el de la batalla decidida contra la reacción, la izquierda podrá hacerse de la autoridad política necesaria para arrancar a la vanguardia obrera y a las masas trabajadoras de la influencia del nacionalismo burgués, y postularse para liderar un movimiento obrero y popular bajo las banderas del socialismo. La lucha contra el golpe es una cuestión de principios, porque significa defender las posiciones conquistadas por la clase obrera frente a la ofensiva capitalista -de ningún modo apoyar al gobierno capitalista destituido. Cualquier vacilación o ‘confusión’ de la izquierda frente a una ofensiva golpista, como sucedió con las organizaciones que acompañaron las ‘revueltas’ que precedieron al golpe reaccionario en Bolivia en 2019 o con las que se sumaron a agitar el ‘Fuera Maduro’ en el momento mismo en el que Guaidó se autoproclamaba presidente de la República Bolivariana, representa el pasaporte directo de esa ‘izquierda’ al basurero de la historia.

De San Pablo a Puebla

La respuesta del 'progresismo' latinoamericano al alineamiento de la derecha continental en el Grupo de Lima fue la creación del Grupo Puebla en julio de 2019. El Grupo Puebla aparece como la versión devaluada de lo que fuera en su momento el Foro de San Pablo, que surgió como un reagrupamiento de las fuerzas nacionalistas e izquierdistas latinoamericanas contra los regímenes 'neoliberales'. En gran medida, las fuerzas integrantes del Foro se transformaron en gobierno en toda América Latina, sobre la base de constituirse en los custodios por izquierda del régimen capitalista. Los fracasos de la Unasur y el Mercosur fueron la expresión concreta de la imposibilidad de una integración latinoamericana (la llamada Patria Grande) sobre bases capitalistas. Con la crisis mundial, a partir de 2008, se puso en evidencia la endeblez del esquema de supervivencia meramente rentista de los gobiernos 'nacionales y populares' de América Latina, y sus políticas ajustadoras dieron lugar a un largo proceso de declinación política, que terminó por pavimentar el ascenso electoral de nuevos gobiernos derechistas, de ofensiva directa contra las masas, a nivel continental.

Si la experiencia del Foro de San Pablo concluyó en una tragedia -con las victorias electorales de los Bolsonaro, Piñera, Macri, Lacalle Pou, etc. - el Grupo Puebla no promete más que ser una farsa. Su carácter farsesco está dado, en primer lugar, por el liderazgo que ejerce en él Alberto Fernández, que ha mantenido a la Argentina como integrante del Grupo Lima -es decir, en el órgano mismo de la reacción latinoamericana. En plena crisis sanitaria y social en la Argentina, Fernández se encuentra liderando un proceso de reestructuración de la deuda externa que representa una capitulación lisa y llana ante las exigencias del capital financiero y el Fondo Monetario Internacional. De Grupo Puebla participan también los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Fernando Lugo (Paraguay). También Daniel Martínez (excandidato a presidente por el Frente Amplio de Uruguay), Verónica Mendoza (ex candidata presidencial del Frente Amplio de Perú) y distintos referentes del PRD mexicano y el Partido Comunista de Chile. Para borrar cualquier vestigio de confrontación con el imperialismo, los 'progresistas' han marginado del agrupamiento a Venezuela y a Cuba, bajo el pretexto de ser respetuosos de 'la democracia y las instituciones'.

Pero el Grupo Puebla le otorgó al establishment un gesto más importante aún que la marginación de Venezuela y Cuba: una definición ca-

teórica contra las rebeliones populares y la acción directa de las masas para derrotar al golpismo pro-imperialista. Fue lo que se expresó en noviembre pasado en la cumbre de Puebla en Buenos Aires, en momentos donde la rebelión chilena estaba en pleno desarrollo ascendente y crecía una extraordinaria respuesta popular contra el golpe en Bolivia. La participación del PC chileno en el Grupo Puebla no es un dato menor, pues este ha sido el sostén último del acorralado gobierno de Sebastián Piñera.

Fuera del armado del Grupo Puebla se encuentra otro referente del campo 'progresista' o 'nacional y popular': el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desde que tomara posesión de la presidencia mexicana, el 1° de diciembre de 2018, AMLO no realizó ningún viaje al extranjero hasta julio de 2020. Su primera gira internacional fue para visitar a Donald Trump, con el pretexto de celebrar la firma del Tratado de Libre Comercio firmado por México, con Estados Unidos y Canadá hace un año atrás. AMLO se movilizó apuntalando, objetivamente, la candidatura de Trump, en momentos donde la imagen del magnate se derrumba como consecuencia de su nefasta gestión de la crisis sanitaria y la agudización de la crisis social, fruto del impacto de la bancarrota capitalista. Pero por sobre todo, AMLO fue a Estados Unidos en momentos donde se desarrolla una extraordinaria rebelión popular, protagonizada especialmente por la comunidad afroamericana y que despierta enormes simpatías entre la comunidad latina que reside allí. En síntesis, AMLO protagonizó un acto de cipayaje pocas veces visto.

Como se ve, la llamada "lucha contra la derecha" que proclama el 'progresismo' latinoamericano no es más que un mero relato. La izquierda revolucionaria debe distinguir las ofensivas golpistas realmente existentes del cacareo nacionalista, que solo busca amordazar a las organizaciones obreras y a la izquierda, y de esa forma privarlas de su acción y de su crítica con el objetivo de subordinarlas al gobierno nacionalista o frente-populista. Al nacionalismo es necesario oponerle el impulso de la acción directa de la clase obrera por sus reivindicaciones inmediatas y un programa económico y político de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. La unidad latinoamericana solo puede ser realizada por gobiernos de trabajadores a escala del subcontinente -es decir, sobre bases socialistas.

Estrategia revolucionaria

El cóctel de crisis sanitaria, derrumbe económico y catástrofe social, ha desatado verdaderas crisis políticas y de gobierno. Brasil es, proba-

blemente, el país donde la crisis política es más aguda, con la salida de dos ministros de Salud, el ministro de Educación y, en abril, del superministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro. Sin embargo, en el marco de la crisis, también ha habido renunciadas de funcionarios de alto rango en Chile, Perú y Ecuador. Es en este cuadro de crisis donde empieza a emerger la intervención de los trabajadores y los sectores populares. Así lo confirman las jornadas nacionales de protesta en Chile contra las AFP y el paro nacional de los portuarios, las movilizaciones en Bolivia impulsadas por la COB contra el gobierno de Añez, las marchas en Ecuador contra las medidas fondomonetaristas de Lenin Moreno, las manifestaciones antifascistas en Brasil, las movilizaciones sindicales en contra de la reforma previsional en Paraguay, y los paros y movilizaciones coordinados a nivel internacional de los trabajadores de reparto. Estas luchas, que se desarrollan en plena crisis pandémica, indican que el ciclo de las rebeliones populares en América Latina de ningún modo se ha cerrado. Por el contrario, el ciclo se mantiene abierto y la rebelión norteamericana representa un estímulo formidable para su potenciación y desarrollo.

Esta perspectiva abierta plantea balancear el rol de las organizaciones de masas en los grandes procesos del año pasado. Como se vio en Chile, con la Unidad Social, bajo la dirección política del PC, o en Ecuador con la Conaie, ambas organizaciones rechazaron liderar la lucha por la caída de los gobiernos de sus respectivos países. Esto, a pesar del cuadro insurreccional de las masas y del extendidísimo clamor popular por la salida de Piñera y Lenin Moreno. De esta forma, las organizaciones se transformaron, objetivamente, en un freno a la evolución de las masas en lucha y en sostenes últimos de los gobiernos capitalistas asediados por las rebeliones populares. Este representa el principal aspecto político que debe abordar la vanguardia de la clase obrera y los explotados de América Latina. La iniciativa propuesta por el Partido Obrero de Argentina y recogida por los partidos integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores/Unidad, de impulsar una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero, apunta a abordar este problema político de primer orden.

El Frente de Izquierda, con sus contradicciones y límites, mantuvo en alto en la Argentina, a lo largo de nueve años, la bandera de la independencia de clase y la lucha por el gobierno de trabajadores. Sin embargo, es claro que esta independencia se ha sostenido contra tendencias disolventes que emanan, en muchas ocasiones, de los propios

partidos del Frente. Estas tendencias han tenido un escenario privilegiado en Brasil, donde las organizaciones hermanas de Izquierda Socialista y el MST -la CST y AS, respectivamente- se encuentran integradas al Psol, un ‘partido amplio’ de características centroizquierdistas y de colaboración de clases. El MRT (organización hermana del PTS), a su turno, pidió su ingreso al Psol. Aunque le fue denegado ese ingreso, eso no fue un impedimento para integrar en 2018 sus listas, cuando el Psol proclamaba como su orientación fundamental impulsar “un frente parlamentario comprometido con la reconstrucción y el desarrollo de Brasil” junto al PT, el PCdoB, PDT y PSB. El Psol no ha pasado de un sello electoral, basado en un acuerdo superestructural de tendencias; no se ha constituido ni se ha empeñado en ser motor de la lucha de clases y viene actuando como furgón de cola del lulismo. En la actualidad, el Psol integra un frente “antibolsonarista” junto a partidos de la burguesía, muchos de los cuales tuvieron un rol protagónico en el golpe parlamentario contra Dilma. Además, la organización hermana de IS en Perú, Uníos, integra el Frente Amplio, un frente democratizante opuesto a la estrategia del gobierno de trabajadores. La campaña política electoral desenvuelta por Uníos en el Frente Amplio en 2019 tuvo como sus dos principales ejes “la lucha contra la corrupción” y “la inseguridad”, reclamando incluso que “la policía cumpla con su trabajo”³. Estos hechos ponen de manifiesto las tendencias al electoralismo que anidan en la izquierda. La expectativa parlamentaria y apetitos de obtener algún cargo es el señuelo para sacrificar la lucha por la independencia política de los trabajadores. Antes y después, las tendencias electoralistas se habían expresado fuertemente, como lo evidencia la utilización, por parte del PTS, de todas las tribunas de lucha de los trabajadores para la mera proyección de sus figuras electorales.

La disolución de la izquierda en frentes o partidos ‘amplios’ de tinte centroizquierdista -que reagrupan bajo un mismo sello a organizaciones con políticas contradictorias y son liderados por camarillas con meros apetitos electorales que abogan por la colaboración de clase- socaba la lucha por la estructuración política independiente de los trabajadores. En oposición a la disolución política, la preparación de la nueva ronda de rebeliones populares que se incuban reclama desenvolver a fondo la lucha por poner en pie partidos obreros revolucionarios en toda América Latina. No se trata de la construcción de aparatos electorales para

3. “Los candidatos Enrique Fernández Chacón, Alexandra Ames y Miguel Soria presentan sus propuestas” ver <https://www.youtube.com/watch?v=JNC1mBZumu0>.

medrar por escaños parlamentarios bajo la sombra de partidos o frentes ‘amplios’, sino de luchar por la puesta en pie de partidos de combate de la clase obrera para luchar por gobiernos de trabajadores. No se trata de destacar meros referentes o figuras electorales, sino de formar los cuadros políticos de la clase obrera, los organizadores y tribunos socialistas de los trabajadores. No se trata de editar ‘informativos de izquierda’, sino de poner en pie órganos políticos de partido, periódicos que sean el instrumento para desenvolver centralizadamente la agitación y la propaganda revolucionaria, la organización de la clase y el partido revolucionario. La próxima etapa reclama una lucha política de partido. Es decir, una lucha que debe ser desenvuelta por medio de la agitación, la propaganda y la organización de la vanguardia obrera y juvenil, bajo un claro planteo estratégico, que se resume en las siguientes consignas: “Fuera Trump y sus agentes de América Latina”; “Fuera los Bolsonaro, los Piñera, las Añez y los Lenin Moreno”; “Abajo los gobiernos de la entrega nacional, del ajuste contra el pueblo y la represión contra los trabajadores, basta de gobiernos capitalistas”; “que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores”; “por gobiernos de trabajadores, por la Unidad Socialista de América Latina incluida Puerto Rico”.

El Partido Obrero impulsa la Conferencia Latinoamericana con el objetivo de impulsar un plan de acción común y de delimitar las estrategias políticas en danza al interior de la izquierda, sobre la base de propagandizar la política, el programa y los métodos revolucionarios. Será el mayor aporte que se puede hacer al desafío histórico de superar la crisis de dirección del proletariado.

Deuda y poscuarentena: el próximo episodio de la crisis

Eduardo Salas

Hay una coincidencia más que generalizada de que Argentina atraviesa una profunda crisis. Esta consideración no es ajena a ninguna de las clases sociales, ni a sus agrupaciones y representaciones políticas y/o gremiales.

El gobierno de Alberto Fernández se planteó como principal propósito resolver la llamada crisis de la deuda, para lograr una renegociación de una parte de la misma ante la evidencia de que no podría hacer frente a los vencimientos que se avecinaban y Argentina podría entrar en default. El rechazo al default es compartido por el gobierno, los partidos de la oposición, las cámaras empresariales de todo tipo y también por acreedores y el FMI. Lo que debía resolverse “a más tardar” el 31 de marzo; a la hora de escribir estas páginas no ha sido resuelto y ha consumido estos primeros meses del gobierno “nacional y popular”, que ganó las elecciones ante el fracaso de la gestión “neoliberal” de Macri.

Para la burguesía, de conjunto, la resolución del tema de la deuda era (y es) clave para poder iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento que le permita, en primer lugar, resolver la situación con su propia cartera de acreedores. Solo la consideración de que el endeudamiento privado supera los 80.000 mil millones de dólares explica el interés de los grupos capitalistas para que se llegue a un acuerdo que facilite una renego-

ciación de su propia deuda, proceder a recuperar la tasa de beneficio y proyectar un proceso de reestructuración de sus negocios.

La otra fuerte presión para llegar a un acuerdo en relación con el tema de la deuda proviene de los gobernadores, independientemente de su color político y su ubicación entre las diversas fracciones que dividen a los propios partidos patronales. La mayor parte de las provincias debe enfrentar vencimientos de sus propias deudas (en su mayoría para sostener una red de asistencia a los grupos capitalistas que operan en sus territorios), las cuales fueron contraídas en dólares cuando los ingresos provinciales son exclusivamente en moneda nacional -o sea, que están subordinadas a las propias negociaciones del gobierno nacional.

El frente común de los distintos sectores de la burguesía para que se resuelva el tema de la deuda deja de existir a la hora de plantear su propio programa para resolver la crisis en el marco de la depresión internacional. La pelea por apropiarse de recursos cada vez más escasos y comprometidos, a su vez, seguramente por el acuerdo con los bonistas reclamado por todos, abrirá un cuadro convulsivo con fuertes repercusiones políticas y económicas.

Para los trabajadores que votaron a la fórmula Fernández-Fernández, la expectativa en el nuevo gobierno pasaba por la posibilidad de revertir la quiebra de las economías familiares por la caída del salario real, como resultado de la inflación, por la pérdida y precarización del empleo y por el deterioro creciente de aquellos aspectos que son parte del “salario indirecto” (como son la salud, la educación, la infraestructura, los servicios, etc.), en su mayoría privatizados y, por lo tanto, sostenidos por los propios trabajadores, no solo a través de una carga tributaria agobiante (el 48% del salario) sino de sus propios ingresos netos.

Es decir que, en un sentido, la suerte del gobierno de los Fernández reside en la posibilidad de arbitrar entre intereses disímiles y contrapuestos.

La comprensión común de la gravedad de la situación no alcanza a la hora de considerar los alcances y razones de esta crisis, pero sobre todo en cómo se la enfrenta y, fundamentalmente, quién o quiénes pagan los costos de la misma. En esto se centra el desenvolvimiento de la situación política argentina en el próximo período.

La deuda, siempre la deuda

A pesar de que esta *remake* en el gobierno del nacionalismo burgués será recordada, entre sus principales hechos, por haber atravesado la pandemia del coronavirus, la preocupación central del gobierno y el

mandato que se apresta a cumplir es el del resolver el “problema de la deuda”.

Las declaraciones de que la deuda argentina era impagable y el país no podría hacerse cargo no implicaron nunca un planteo de desconocimiento y ni siquiera de investigación de la misma. El gobierno tempranamente dio dos pasos fundamentales para dar garantías de que se aprestaba a una negociación en regla y que incluso el acuerdo que se buscaba era un “tema de Estado”: mandó al Congreso la llamada ley de Sustentabilidad de la Deuda, que implica un cheque en blanco para ejecutar este rescate, y eliminó la ley de movilidad jubilatoria.

A partir de allí, el camino de las “buenas intenciones” estuvo plagado de recules permanentes del gobierno ante las exigencias de los bonistas. No sirvió el apoyo y la comprensión que recogió Fernández cuando empezó su periplo en enero, buscando el apoyo de los líderes mundiales y se abrazó con el sionista asesino Netanyahu, con los derechistas Macron y Merkel. Colocó a la Argentina en el campo de la política exterior de Trump en relación incluso con la propia Venezuela. Tampoco sirvió la relación privilegiada con Kristalina Georgieva que Fernández y Guzmán agitaban como el apoyo para que se “comprendiera que queremos pero no podemos pagar”. Todo ello se transformó en una fuerte presión para el que gobierno fuera cediendo a los reclamos de los fondos, sumándose a las que ya existían a nivel local. Los bonistas aprovecharon la situación y fueron por más.

Entre la primera propuesta y la cuarta (última por ahora) hay una diferencia de 16.000 millones de dólares en favor de los bonistas; de un valor presente de los bonos de 39 dólares en la inicial, se llegó a 53,75 en la última y, según indicios, el gobierno estaría por aceptarlos a más de 55.

Pero no fue lo único en lo que el gobierno retrocedió: también lo hizo en relación con el período de gracia, por el cual el gobierno no debía hacer ningún pago, que en principio era de cuatro años y pasó a uno. A su vez, los bonistas obtuvieron una tasa de interés que duplica la de la oferta inicial y que es ocho veces la que se paga en Estados Unidos. Finalmente, los pagos de capital quedaron prácticamente sin quita.

Tamaño sangría es apenas el comienzo, porque lo que está en negociación es solo una parte de la deuda total, tanto pública como privada, se trata “solo” de 64.800 millones de dólares. Queda aún negociar, entre otras, la deuda en dólares bajo legislación local, para lo cual el gobierno mandó un proyecto al Congreso. Se trata de la deuda cuyo

pago ha sido “reperfilado” hasta el 31 de diciembre de 2021, suma unos 46.000 millones de dólares, de los cuales más de 25.000 millones estarían en manos de privados (el resto se halla en posesión de organismos públicos como la Anses), para lo cual el gobierno ofrece una serie de “endulzantes”, que terminan siendo una nueva hipoteca. La presencia de la deuda con la Anses no debe confundir, ya que seguramente será, como los otros organismos del Estado, el bonista “bobo” que cargará con lo que los particulares desechen y la variable de ajuste. Sigue en la lista la deuda en pesos, que viene siendo pagada o refinanciada, en ambos casos con costo creciente para las arcas públicas. Finalmente, la deuda con el FMI, que se sabe no admite quitas, y los pagos a organismos multilaterales, como el del Club de París, resultante del acuerdo con Kicillof cuando este era ministro de Economía de CFK.

A la suma hay que agregar las deudas de las provincias, muchas de las cuales ya entraron en cesación de pagos, como el caso de Río Negro y Chubut, y en el borde de la cornisa están dos grandes: Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Y, lógicamente, la deuda privada que, como dijimos, llega a los 80 mil millones de dólares.

La importancia de la negociación en curso es que marca el camino para lo que viene y ha puesto de manifiesto que el gobierno ha cedido en forma constante a las presiones de los capitalistas para aceptar las exigencias de los bonistas.

La negociación está plagada de exigencias que condicionan el desarrollo de la crisis argentina. Y que, por otro lado, tampoco garantizan la sustentabilidad de los acuerdos, con lo cual podríamos sostener que están siendo establecidas las condiciones para el décimo default.

¿Qué garantías puede ofrecer entonces Argentina de que será capaz de afrontar los compromisos que acuerde con los bonistas?

Alberto Fernández toma como ejemplo lo que hizo junto a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna para acordar con los acreedores finalmente en 2005. Pero el cuadro internacional es completamente diferente al de 2005. No está planteada una reactivación económica sino, por el contrario, un agudización de las tendencias a la depresión. En 2005, la economía mundial crecía producto del acople chino-norteamericano, que empujaba al alza los precios de la soja. Hoy, la situación está en los niveles del crack bursátil de 1929, que abarcó una década y que buscó una resolución con la Segunda Guerra Mundial. La economía mundial nunca se terminó de reponer de la crisis de 2008 y, cuando se incubaba una nueva recesión, el coronavirus empujó a una depresión mundial de alcance histórico.

Fernández apuesta a las exportaciones cuando el precio de las materias primas cae y el proyecto Vaca Muerta mostró todos sus límites tempranamente ante el derrumbe de los precios del petróleo. Las posibilidades a las que apuesta Fernández están determinadas por la crisis mundial.

En caso de que se logre el acuerdo, en los términos que ya se viene consensuando, este subordina aún más la situación nacional a los intereses del imperialismo. La exigencia de los bonistas de un “plan económico” y del control directo por parte del FMI de la marcha de la economía es la explicitación de que la política nacional, lejos de liberarse por haber “zafado” del default, quedará aún más sometida a la tutela de los organismos financieros.

Quienes ven a través del gobierno de los Fernández la posibilidad de establecer una línea de resistencia a la políticas proimperialistas o neoliberales debieran reflexionar que toda la negociación se da en el marco de una crisis mundial, que tiene su epicentro en la patria de los buitres, Estados Unidos, con un presidente acorralado por un levantamiento popular en su propio país, con repercusiones mundiales. Un levantamiento que concentra todas las reivindicaciones que la situación les plantea a los trabajadores. Fernández en lugar de aprovechar la debilidad de los acreedores y sus aliados para sacarse de encima las presiones, mandó al canciller Solá a reunirse con el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y no emitió una sola palabra de apoyo a la rebelión norteamericana.

Bailando en el Titanic

El acuerdo que se logre como resultado de ceder ante los requerimientos de los bonistas encuentra a la economía nacional en un acelerado derrumbe y esto no es solo atribuible a la pandemia. La crisis y el derrumbe de la economía son previos a la declaración de la cuarentena (18 de marzo). En el primer trimestre del año, el Producto Bruto Interno tuvo una caída del 4,8% respecto del último trimestre de 2019 (y un -5,3% en la variación interanual). Desde 2012 y en adelante, el PBI tuvo cinco años de caída intercalados con tres de alza (2013,15 y 17), que no compensaron las pérdidas previas. Los pronósticos sobre la evolución del PBI argentino durante este año no bajan de una caída por encima del 11%, que sería superior a la de 2002, un hito para medir el derrumbe económico. Con la declaración de la cuarentena, estos índices se aceleraron (-26,3% y -20,6 respecto de abril y mayo del año anterior).

La quiebra de Vicentin debe ser mirada con mucha atención, porque no es una excepción sino la regla, ya que el sobreendeudamiento, la evasión impositiva y maniobras dolosas son moneda común entre las empresas capitalistas. El endeudamiento en más de 80 mil millones de dólares del sector privado revela por sí solo que estamos ante varios Vicentin a corto plazo. Habría que agregar, además, que la operatoria que llevó a Vicentin a la quiebra es común a todas las empresas ligadas a la comercialización de granos, que tienen una ligazón a negocios espurios e ilícitos, acrecentados por la posición privilegiada de controlar la principal hidrovía (Paraná) y sus puertos, por donde sale la mayor parte del comercio exterior de la Argentina. Se trata del sector más importante de la actividad económica nacional, donde el gobierno apuesta a obtener los recursos que garanticen el pago de la deuda. Por lo cual, lo de Vicentin es más que una alerta.

El análisis del endeudamiento privado pone de manifiesto varios problemas. Por un lado, la mayor parte del endeudamiento es por créditos y anticipos comerciales que totalizan 50,4 mil millones de dólares. Es decir, una parte de las empresas está en una situación económica seriamente comprometida, porque lo que en condiciones “normales” se renueva, ahora tiene dificultades para hacerlo y lo hace a un costo más elevado y en plazos cada vez más cortos -es decir, apostando a una reactivación en un breve plazo. O, dicho de otro modo, con poca capacidad para soportar una recesión prolongada.

Pero, a su vez, la deuda comercial está acompañada por un crecimiento de la deuda financiera, de la cual unos 27.600 millones de dólares corresponden a los títulos y préstamos en el exterior, de los cuales 6.440 millones de dólares vencen en los próximos 18 meses. Por otro lado, 7.600 millones de dólares son deuda con los bancos locales para financiar exportaciones, lo cual pone al sistema bancario a un tiro de la suerte de estas empresas.

Gran parte de esta deuda privada ha servido para financiar la fuga de capitales a través de diversos mecanismos. Uno que fue puesto de relieve por Vicentin es la manipulación de la deuda comercial, pues en lugar de invertir directamente las casas matrices optan por hacerlo en forma de crédito, lo que viene siendo utilizado para enmascarar giro de utilidades y sortear las limitaciones vigentes. Es la vía para obtener dólares al tipo de cambio oficial “baratos”, desplumar las reservas del Banco Central y provocar una hemorragia de divisas al exterior. Y, al mismo tiempo, para inflar gastos en concepto de intereses y reducir sus

utilidades o fabricar pérdidas, y de esa forma evadir impuestos.

El gobierno retrocedió rápidamente en la propuesta de la expropiación de Vicentin. A pesar de la declaración de que el propósito era rescatar a la empresa, pagando activos, haciéndose cargo de deudas y que solo se intervenía porque estaba en la quiebra, la burguesía rechazó el planteo porque entendió que Vicentin era solo la punta del iceberg: en la lista ya están anotadas Molinos Cañuelas, Latam, lo que queda de Sancor. Especialmente, rechazó la injerencia estatal en el comercio internacional de granos y levantó la bandera del rescate sin expropiación -o sea, con los dueños manteniendo el control y el Estado aportando los recursos.

El gobierno no tiene un planteo propio frente a la gravedad de la situación, sino que sigue el libreto que le dictan los propios grupos capitalistas que tienen sus representantes en la oposición, pero también en la coalición gobernante, que son los que presionaron para desistir de la idea de la expropiación. Lo que correspondía era dar a conocer la lista de las empresas que deben a los bancos oficiales y abrir sus libros para desenmascarar el proceso mafioso con el cual se burló al fisco, se fugó capital, se dibujaron pérdidas y escondieron ganancias y se desarrollaron maniobras de especulación contra la moneda nacional.

Por el contrario, el gobierno planteó una moratoria y un blanqueo en beneficio de los grandes evasores, con el argumento de acelerar la recuperación de la economía, quitando parte de la presión impositiva. Eso sí, esta se mantiene intacta sobre los trabajadores: la eliminación de los impuestos al consumo o el de las ganancias sobre los salarios no forma parte de ningún “paquete de estímulos” para incentivar el consumo. Es decir, la política de Fernández frente a la quiebra de Vicentin apalanca la propia crisis capitalista.

Acuerdo, ¿y después?

El acto del 9 de Julio en Olivos, en ocasión de un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, mostró unidos al gobierno, los principales actores del establishment (G6), de la burocracia sindical e incluso de la oposición (Larreta). Esta unidad estuvo signada por el propósito de rodear al Presidente de toda la presión para que llegue a un acuerdo con los bonistas y que incluso ceda a lo que estos reclaman. Sin embargo, también mostró qué plantea cada uno para el “día después”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, debió atajar las críticas venidas de su propio palo, fundamentalmen-

te de sus socios de la Mesa de Enlace. El extitular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, consideró que la presencia de Pelegrina “ha terminado de destruir esa unidad (por la Mesa de Enlace) basada en ideales de país, en la defensa de los productores, por la producción, por la división de poderes, por el federalismo y en definitiva para respetar la República”. Pelegrina se defendió sosteniendo que fue a presentar el pliego de reclamos del sector para la pospandemia (o mejor dicho, para la poscuarentena).

Los reclamos de la Sociedad Rural se concentraron en que el gobierno asegure el acuerdo por la deuda, con todas las garantías (“incluso jurídicas”) para poder recurrir al financiamiento, la asistencia del gobierno para acceder a los insumos, que en su mayoría son importados (agroquímicos, semillas, etc.) y, por lo tanto, un planteo de levantamiento del cepo para obtener dólares al cambio oficial. El reclamo del sector que concentra fundamentalmente el negocio de la exportación de granos y carne es bajar la presión impositiva -o sea, la eliminación de las retenciones. A estos reclamos se sumó la necesidad de que el gobierno establezca una suerte de compensación ante las pérdidas por las variaciones climáticas que reduzcan las cosechas. La SRA y la CRA ya se habían pronunciado y solicitado reuniones con el gobierno frente a la destrucción de los silobolsas, el almacenamiento provisorio que les ha permitido a los grupos sojeros retener la producción y especular con mejor condiciones para su venta. La CRA hace hincapié en la necesidad de la ley de semillas, favorable a los grupos internacionales, créditos para acceder a ellas y presupuesto para infraestructura, que facilite el abaratamiento en el transporte y comercialización de la producción agropecuaria.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), a su vez, concurrió con su propio pliego. Ya la UIA había dado a conocer un largo documento que se resume en lo siguiente: disminución de impuestos con una ampliación de la moratoria, sostener la ATP y reactivar los Repro, incentivos fiscales, mayores créditos con una línea de financiamiento de futuras inversiones y de exportaciones industriales y, a su vez, una promoción de las mismas. La UIA quiere que el Estado haga inversiones para “reactivar la demanda” y, a su vez, un plan de desarrollo de la obra pública. Y, por supuesto, la UIA reclama “nuevas regulaciones laborales”, un eufemismo para plantear producir una reforma laboral en regla.

La hoja de ruta de las dos entidades patronales pone de manifiesto una contradicción irresoluble entre los reclamos para “reactivar la eco-

nomía” y el acuerdo con los bonistas que, sin embargo, ambas entidades son las primeras en reclamar.

Todo el pliego se basa en una mayor asistencia del Estado. Esto choca con las garantías que exigen los acreedores y que el FMI debe monitorear, que se basan en destinar los fondos públicos al pago de las obligaciones de la deuda renegociada y la que falte renegociar. En un marco de derrumbe de la recaudación y las importaciones, la víctima segura de estos subsidios a costa del presupuesto del Estado será la caja de la Anses. Están en la mira también los salarios de los estatales, que ya están cobrando el aguinaldo en cuotas, y los trabajadores de las empresas estatales (Aerolíneas y Austral). Y, por supuesto, el recurso a la emisión monetaria que, de todas formas, el FMI y los bonistas apuntarían a limitar.

El principal socio industrial de Argentina es Brasil y el derrumbe de la economía brasileña afecta en particular a las automotrices, condicionando la trayectoria de las exportaciones industriales a Brasil, que representan el 28%.

La ilusión de la clase capitalista es que el acuerdo les permita acceder a la liquidez de dólares que, hoy por hoy, buscan colocarse, pero las empresas vienen con un capacidad ociosa de arriba del 50% desde el año pasado y la cuarentena profundizó esta situación. Esa capacidad de producción inactiva no se modificó por la caída del comercio interno y externo, ¿por qué esto habría de cambiar? y, con estas perspectivas, ¿quién pondría dólares para una “inversión productiva” sin beneficio asegurado?

El gobierno ha apelado a la emisión monetaria para hacer frente a los subsidios, la caída de la recaudación (que venía en picada desde hace un año) y el propio cumplimiento de los compromisos de deuda. La situación se ha convertido en insostenible, la necesidad de esterilizar el exceso de pesos (que antes de la cuarentena fluctuaba entre el 75 y el 80% de la base monetaria) llevó las Leliq (que iban a ser desarmadas para pagar a los jubilados en las promesas de campaña de Alberto) a los 2,3 billones de pesos superando a la propia base monetaria.

El gobierno ha armado una bomba de tiempo que está relativamente contenida por el cepo cambiario, que a su vez está en contraposición con las necesidades de dólares que todos reclaman. Alberto Fernández, en la reunión con los capitalistas de Estados Unidos en el Consejo de las Américas, ya se pronunció por un tipo de “cambio competitivo” -es decir, una fuerte devaluación-, que le permitiría licuar las deudas en pesos y bajar el costo laboral. El dólar oficial viene devaluándose en forma

gradual y el “blue” llega a los 130 pesos. Una devaluación permitiría al gobierno licuar la emisión monetaria. Varios economistas han planteado que si se levanta el cepo, la disparada del dólar va ser incontenible y pronostican un Rodrigazo “en regla”, con aumento de tarifas y de precios, sin descartar una hiperinflación. Lo cierto es que todos los elementos de un empeoramiento de la crisis están a la vuelta de la esquina. El programa de la patronal choca con la realidad de la crisis de su propio sistema.

¿Salud o economía?

El acuerdo por la deuda plantea además como garantía de pago un fuerte ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, un ajuste. Los reclamos de la reforma laboral y la previsional son sostenidos por toda la clase capitalista y los fondos de inversión que negocian con el gobierno. Más aún el grupo BlackRock, con fuerte peso entre los acreedores, planteó en un momento una propuesta para que si el gobierno no cumplía con esas pautas, los bonistas pudieran declarar, así hubieran recibido el pago de la cuota del momento, una suerte de default preventivo y acudir a la Justicia para cobrar. Este es el programa de gobierno que exigen como garantía y que depositan en el FMI la capacidad de monitorear su cumplimiento. Alberto Fernández sostuvo que primero había que llegar a un acuerdo para, sobre esa base, establecer un programa. Pero el programa se puso en ejecución. La aparición del coronavirus fue la oportunidad.

La pandemia completó el cuadro de la crisis capitalista a nivel mundial. Empujó aún más las tendencias a la depresión internacional, con la caída generalizada del comercio mundial (exacerbada por el cierre de fronteras) y el derrumbe de ramas enteras de la economía. A su vez, aceleró los enfrentamientos previos expresados en la guerra comercial, sobre todo entre China y Estados Unidos. Es decir, en materia económica y social, el virus atacó un cuerpo (el capitalismo) con profundas e irresolubles “enfermedades de base”.

Por su parte, puso de manifiesto la crisis sanitaria, como resultado de la destrucción de los sistemas públicos de salud, por el creciente proceso de privatizaciones; es decir, el capitalismo apareció claramente como parte del problema de una situación que envuelve al mundo entero en su peor aspecto: la pérdida de vidas.

Argentina, lejos de escapar a este cuadro, aparece como uno de los eslabones más débiles de la cadena. Alberto Fernández apareció con la

rápida declaración de la cuarentena y sosteniendo que privilegiaba la salud sobre la economía, ejerciendo un liderazgo e iniciativa en una situación por demás dramática e inédita para el país. Los altos índices de popularidad y aceptación que el gobierno cosechó en la primera etapa de la pandemia en la Argentina así lo confirmarían. Más de cuatro meses después, la situación no es la misma. Todas las tendencias previas se han acentuado.

Pero, ¿sobre quién repercutió el peso fundamental de esta retracción de la economía?

En relación con el empleo en abril, los datos del Ministerio de Trabajo indican 228.400 trabajadores menos que en marzo, 364.000 menos que en igual mes de 2019. Hay que considerar que estos datos no tienen en cuenta el total del trabajo informal o en negro (que alcanza al 44% de la población económicamente activa), cuya caída debe ser aún mucho mayor.

En mayo, la pérdida de empleos continuó, se retrocedió un 0,4% respecto de abril y un 3,2% respecto de mayo del año anterior. “Con estos números en los primeros cuatro meses de este año, la pérdida de empleos afectó a 390.600 trabajadores independientes y en relación de dependencia. De 12.145.300 en diciembre de 2019, en abril se contabilizaron 11.754.700. Y si la comparación se extiende a diciembre de 2017 -cuando había 12.387.300 registrados-, la pérdida de empleos formales en este largo período de estancamiento, recesión más pandemia y cuarentena, suma la friolera de 632.600 empleos” (*Clarín*, 3/7).

La UCA eleva esa pérdida notablemente, considera que durante la cuarentena llegó a los 900.000 puestos menos, un 60% correspondería a trabajadores informales, mucho de los cuales no están contemplados en las estadísticas oficiales. Aunque la pérdida de puestos en el sector formal sea menor, la cifra es muy elevada si tenemos en cuenta que rige la doble indemnización y la prohibición por decreto de producir despidos sin justa causa. Lo cual revela lo inocuo de las medidas oficiales, porque estas dejaron abierta la puerta para acuerdos sectoriales o particulares, facilitando las presiones patronales para renunciadas arregladas. De todas maneras, esta destrucción del empleo formal aparece contenida por la asistencia a las empresas con la ATP, por la cual el Estado se hace cargo de una parte sustancial del salario de los trabajadores; levantada la asistencia, la cifra se va a disparar.

A su vez, la caída del empleo afectó a todas las ramas de la economía, fundamentalmente la actividad privada, y dentro de ella la construc-

ción (29%) e incluso las trabajadoras del servicio doméstico, donde se perdieron casi 12 mil puestos de trabajo, la excepción fue el rubro “salud y servicios sociales”, que tuvo un crecimiento interanual del ¡0,1%!

En relación con el ingreso de los trabajadores, las cifras oficiales indican que la remuneración promedio de los asalariados cayó, entre abril de 2020 e igual mes del año anterior, un 5,1%.

De acuerdo con un (conservador) informe de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), la pobreza estaría en el 40,2%, la indigencia en el 10,8% y la desigualdad en el 32,5%. El informe destaca cuáles son los sectores más vulnerables y hace hincapié en la situación de los jubilados, considerados un grupo de riesgo ante una posible infección del coronavirus: “los adultos mayores nos preocupan bastante, ya que es un grupo que tiene una reducida cobertura del sistema jubilatorio y necesitan seguir trabajando. Los datos revelan que el 66% sigue como jefe del hogar, y la necesidad es aún más fuerte entre las mujeres mayores”.

Cuando se desagrega el informe aparecen datos más que elocuentes de quiénes serán los principales afectados: “Luisa Brumana, representante de Unicef, mencionó que en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los niños y las niñas en el país, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020”. “El informe realza el enfoque necesario para apoyar a quienes se encuentran en una situación que combina pobreza monetaria y la pobreza estructural”, señaló.

Por su parte, Florence Raes, representante de ONU Mujeres en Argentina, “puso el foco en la forma en que la pandemia, y las medidas de contención aplicadas por el Estado argentino, impactaron en la cotidianeidad de las personas más expuestas a situaciones de vulnerabilidad, como mujeres y niñas, integrantes del colectivo LGBTIQ, poblaciones indígenas, comunidades rurales, trabajadores informales y de casas particulares, y migrantes... la particular situación de vulnerabilidad enfrentada por las mujeres en este contexto: además de enfrentar mayores obstáculos en el acceso a los servicios de salud y de cuidado y prevención del embarazo, las mujeres suelen ser trabajadoras de la salud y trabajadoras informales, y afrontan de manera desproporcionada las tareas de cuidado no remuneradas”.

La pandemia ha sido utilizada por las patronales para avanzar sobre las condiciones de los trabajadores, sobre todo en el terreno de las relaciones laborales y sobre conquistas históricas, como el aguinaldo. Los acuerdos salariales alcanzados en el primer trimestre del año en su

mayoría han sido desconocidos con el argumento de la pandemia. No solo eso, se recortó entre un 25 y un 30% de los salarios de aquellos trabajadores que, por la cuarentena, sufrían algún tipo de suspensión. También se avanzó sobre derechos convencionales, introduciendo de prepo la polifuncionalidad, los pagos diferidos, la modificación de las jornadas laborales, etc. La introducción del teletrabajo, o el *homework*, ha sido tomada como una oportunidad para imponer ritmos de trabajos extenuantes -es decir, para dar una vuelta de rosca y producir una mayor explotación de la mano de obra. A pesar que en mayo hubo una “recuperación” económica respecto de abril, la pérdida de puestos de trabajo aumentó. O sea, menos trabajadores haciendo un poco más de trabajo.

Para los capitalistas, la crisis ha sido una oportunidad y actúan con la carta blanca que les da el propio Estado, ¿podría ser de otra manera si es la misma política que llevan adelante los gobiernos con sus trabajadores? El pacto entre la CGT-UIA-Came y el gobierno habilitó la reducción del 30% para los suspendidos. El papel de la burocracia sindical lo analizaremos más adelante, pero es claro que ha acompañado estos ataques a los trabajadores.

El agravamiento de la situación de la vida de la mayoría de los habitantes de la Argentina ha sido justificado por la necesidad de hacer frente a la pandemia y preservar la salud; sería el costo que tendrían que pagar los trabajadores para preservar sus vidas. Pero la pandemia y la cuarentena han servido por confirmar qué intereses de clase defiende el gobierno de los Fernández. Los datos que más arriba detallamos lo corroboran y la gravedad que en estos días ha adquirido la situación sanitaria lo confirma.

El gobierno se apresuró a declarar la cuarentena con el anunciado objetivo de poder preparar el sistema de salud para hacer frente al pico de contagios, que se fue prolongando en aparecer, es decir, que dio más tiempo para prepararse. Julio ha implicado un crecimiento exponencial en el número de contagios, por lo tanto de las necesidades de camas y personal de terapia intensiva para hacer frente a los casos más graves y, con rapidez, el sistema de salud entró al borde del colapso con hospitales públicos con el 100% de su capacidad ocupada. Aquí también imperó la orientación del gobierno de representar los intereses capitalistas, porque a pesar de que haya ampliado la capacidad de varios hospitales públicos, no metió la mano en la salud privada, que no está dispuesta a hacer inversiones por una epidemia que tendrá un carácter temporal.

Esto es un país donde el 70% de la población de los conglomerados urbanos se atiende en el sistema privado es el camino al colapso seguro. La idea lanzada desde el gobierno de una centralización del sistema de salud para hacer frente a la pandemia murió sin que cobrara forma, reculó ante las primeras protestas de las principales operadoras de la salud privada, dejando a la población librada a su suerte. Las recientes declaraciones del presidente de la cámara que agrupa a las prestadoras privadas, señalando que el subsistema que él dirige va camino al colapso, es la crónica de un final más que anunciado.

Pero, además, la inversión del gobierno es muy limitada para las necesidades que impone la situación. El dato que volcamos más arriba de que el empleo en los servicios de salud y sociales creció el 0,1% entre 2019 y 2020 refleja la carencia de personal, agravado por el hecho de que el personal de salud es el colectivo que más contagios registra, en su inmensa mayoría por la falta de elementos de protección personal, que gobiernos y patronales entregan a cuentagotas en el mejor de los casos, y también por el pluriempleo, una forma de supere explotación frente a los bajos salarios en la salud, que agrava la circulación (y por lo tanto, los contagios) comunitaria del virus y, a su vez, tiene a trabajadores extenuados para hacer frente a la pandemia.

No es el único terreno en el cual se verifica que finalmente la acción frente a la pandemia no la maneja el trío de Alberto, Horacio y Axel (como gustan tratarse Fernández, Larreta y Kicillof), sino las patronales. La cuarentena ha sido flexibilizada de acuerdo con los dictados de estas. Los trabajadores son obligados a volver a sus lugares de trabajo en forma cada vez más masiva, la discriminación entre actividades esenciales y no esenciales fue perdiendo sentido en la medida que fueron justificados prácticamente todos los rubros. Del contagio por casos importados, de aquellos que volvían del exterior de zonas con coronavirus, al contagio casi exclusivo por transmisión comunitaria ha sido la constante durante la cuarentena, porque justamente se han puesto en actividad los principales focos de contagios: las concentraciones en los lugares de trabajo y en el transporte público. El promedio de edad de los contagiados (entre 35 y 40 años) confirma que el foco está en la población económicamente activa. La apertura de los lugares de trabajo no estuvo acompañada por la exigencia de un protocolo que impidiera la propagación de la enfermedad. Por último, los capitalistas no están dispuestos a invertir un peso en sostener la salud de sus trabajadores. Esta política fue seguida por la mayoría de los gobiernos del mundo, lo

que nos permite afirmar que la responsabilidad de la pandemia (o sea la transmisión de la enfermedad y su propagación) es enteramente de la clase capitalista.

A esto se sumó el hacinamiento en las villas y barrios precarios, donde el gobierno tempranamente apostó a una suerte de inmunidad por rebaño, con el eufemismo de “cuarentena comunitaria”, que terminó con el 50% de la población de los barrios donde estallaron los contagios con Covid-19 y decenas de muertos. La decisión de sostener la apertura de la cuarentena a pesar de la estampida de los contagios parece orientarse en el mismo sentido, colocar a toda la Argentina en una cuarentena comunitaria, pero esta vez no estaría justificada por el hacinamiento y la ausencia de condiciones materiales (que nunca pretendieron resolver), sino por las necesidades de los capitalistas.

A la pregunta ¿salud o economía?, Alberto Fernández debió contestar: lo que manden los capitalistas.

El papel de la burocracia sindical y las luchas en curso y por venir

Esta ofensiva sobre el conjunto de los trabajadores contó con la participación de la burocracia sindical por acción u omisión. La asimilación a la política fijada por el gobierno desde su comienzo contó con la colaboración indisimulada de la burocracia en todas sus variantes. La burocracia sacó una solicitada expresando su apoyo a las negociaciones por la deuda que el gobierno estaba encarando, así se sumó a la lista de las presiones por el acuerdo.

Por eso dejó pasar el ataque a los jubilados en los primeros días de gobierno, con la quita de la movilidad jubilatoria, y más tarde, la andanada con los regímenes previsionales provinciales y la necesidad de modificar los regímenes especiales.

La burocracia de conjunto se ha hecho eco de los reclamos patronales en el medio de la pandemia. Presionó junto a las distintas cámaras empresariales para que el gobierno flexibilizara la cuarentena y habilitase la vuelta al trabajo, aunque las condiciones sanitarias no lo permitiesen. También dejó pasar la ausencia de protocolos de protección. Sin llegar al “sincericidio” del eterno burócrata del sindicato de empleados de comercio, que reclamó a Alberto Fernández “sangre, sudor y lágrimas” para sacar el país adelante, la burocracia colocó ante los trabajadores el programa patronal como una salida. Las suspensiones al 70% del salario fueron consideradas casi como una conquista, con el cuento de preservar el empleo, a pesar que los despidos crecieron geométricamente.

Con el mismo empeño la burocracia pretenderá vender a los trabajadores que el festival de subsidios con las exenciones impositivas, rebajas de impuestos nacionales y provinciales, reembolsos y promociones fiscales a la exportación, rebaja y eliminación de retenciones, rebaja de aportes patronales a la seguridad social, dólar competitivo, rebaja de aranceles de importación, zonas francas, entre otros, que las patronales de la industria, el campo y las finanzas plantean para reactivar la economía, debe ser acompañado y sostenido como una salida para preservar el trabajo.

En ese cuadro, la decisión de no presentar una ley de reforma laboral, al estilo Bolsonaro, ofrece una ventaja, porque aventa el peligro de una intervención unificada de la clase obrera, como sucedió con la reforma previsional de Macri en diciembre de 2017 y que obligó a mandar al cajón los proyectos de reforma laboral, al cual la burocracia ya le había puesto la firma.

La modalidad de mesas sectoriales permitirá enganchar con más facilidad a los trabajadores al tren de los planteos y reclamos patronales y, por lo tanto, colocar las reformas de convenios y cambios de modalidades como parte de un paquete común. Para que no queden dudas, los distintos sectores burocráticos fueron dando su ok a la reforma laboral. Cavalieri lo hizo en forma expresa, Facundo Moyano, en nombre de su padre, dijo que acompaña (y aprovechó el debate por la ley de Teletrabajo para despejar cualquier duda).

Las discusiones sectoriales servirán además para que las patronales dejen estables las modificaciones salariales y convencionales contra los trabajadores que ya lograron con el argumento de la cuarentena. Eso, por ejemplo, ya está sucediendo con algunos acuerdos como los que firmó la burocracia del Somu, entregando una profunda lucha de más de dos meses de los marineros. O en el caso de los petroleros, donde las patronales buscarán nuevas concesiones a las ya conseguidas antes de la pandemia.

Entre los aeronáuticos o petroleros, el gobierno está a la cabeza de la imposición de la reforma laboral. El acuerdo de fusión Aerolíneas-Austral entraña una modificación a la baja de las condiciones de trabajo para los trabajadores de Austral. YPF está nuevamente a la cabeza de una modificación del convenio petrolero, después de la “adenda” aplicada para vehicular inversiones en Vaca Muerta.

En contraposición a la burocracia, los ataques patronales encontraron la resistencia de los trabajadores. En el caso de los sindicatos recuperados fue con sus direcciones a la cabeza. Es lo que sucedió con el Sutna, que sostuvo el ingreso de los trabajadores y no aceptó las rebajas, y presen-

tó y defendió un protocolo propio para defender la salud de los trabajadores del Neumático. La misma conducta tuvo el pequeño sindicato de los municipales de Jesús María, que a fuerza de lucha obligó a reconocer íntegramente los acuerdos salariales previos y obtuvo nuevas conquistas, debiendo enfrentar la represión. Solo para citar algunos ejemplos.

Pero las luchas abarcaron a casi todas las ramas y plantearon una resistencia que en muchos de los casos obtuvo sus reclamos. Los trabajadores apelaron a la autoconvocatoria para vencer la política de la burocracia y defenderse de los ataques, tanto de las patronales privadas como las del propio Estado.

No es el propósito de este artículo un recuento, que se encuentra ampliamente documentado en nuestra prensa y sistematizado en los informes semanales del Observatorio de los trabajadores que puso en marcha *Prensa Obrera*. Lo que debe quedar en claro como un elemento clave para la caracterización de la evolución de la situación política es que la clase obrera ha hecho sentir su presencia y que da pelea en un cuadro de dispersión, que por el desenvolvimiento de la crisis tenderá a pasar a una lucha generalizada.

Los acuerdos con los bonistas traerán aparejada una menor asistencia estatal, abriendo nuevos frentes de lucha. La decisión de eliminar el IFE en las provincias que pasaron a una fase más abierta de la cuarentena fue dejada de lado ante la evidencia que abría una crisis en todo el interior, pero la eliminación de esa asistencia está en la hoja de ruta del gobierno, con lo cual agitará más la necesidad de una intervención popular frente al agravamiento de la miseria social.

La poscuarentena

Es claro que el conjunto de los sectores capitalistas, con el acompañamiento de la burocracia y sus partidos, se prepara para intervenir en la poscuarentena con sus propios planteos y programa.

La profundidad de la crisis abre un período en el cual la constante va a ser la destrucción de fuerza productiva, con sectores enteros que sucumbirán frente a la depresión. La quiebra de pymes, el cierre de negocios, la caída de la construcción privada son la cara visible de un proceso mucho más vasto, cuyos alcances los vimos al analizar el caso Vicentin.

La incompatibilidad entre los requerimientos de los grupos capitalistas y el acuerdo con los bonistas (y la necesidad de seguir negociando) planteará nuevos y renovados episodios de la crisis que, más temprano que tarde, se transferirán en forma abierta al propio régimen político.

Esto pondrá en juego el papel de árbitro del gobierno de los Fernández; este bonapartismo de vacas flacas no tiene aún las condiciones políticas que le aseguren ese papel. Para empezar, debe resolver el carácter bicéfalo de la coalición gobernante, que mostró un principio de crisis manifiesta en ocasión del acto del 9 de Julio, cuando CFK salió a cuestionar las alianzas que Alberto viene tejiendo y lo hizo en defensa de un sector de la burguesía que, a su entender, fue dejado de lado en función del G6. Aunque la sangre no llegó al río, es claro que el conflicto está presente.

El terreno en que se mueve el gobierno está minado por los intereses que enfrentan a las distintas fracciones de la burguesía. La estabilidad política no es una característica que se corresponda con una etapa de depresión.

Las distintas fracciones burguesas apelarán a todos sus recursos para embloquear detrás de su programa el más amplio espectro político y social; para ello, la colaboración de la burocracia es clave, sobre todo para sacar a los trabajadores del escenario político. A pesar de ello, la orientación del gobierno nacional (y también a escala de las provincias) es prepararse para una etapa de conflictividad mucho más aguda y en este marco aparece el fortalecimiento del aparato represivo. A la represión directa de las luchas y conflictos, como acaba de suceder en Córdoba o La Rioja con los choferes, se suma la política de empoderamientos de las policías y el blanqueo del Ejército como salvaguardas de la cuarentena (que no existe para los capitalistas). El aumento salarial a las Fuerzas Armadas anunciado por el Presidente es otras de las facetas de la vuelta de página y del Ejército repartiendo comida en algunos barrios.

El crecimiento del gatillo fácil, los abusos policiales, las desapariciones forzadas de Facundo Castro y Luis Espinoza no son expresiones de excesos, sino las consecuencias de un plan de reforzamiento del cuadro represivo al que el gobierno apuesta para hacer frente a la irrupción de la protesta popular. Es el hijo putativo del acuerdo con los bonistas. De allí la importancia de la lucha por la aparición de Facundo y contra el accionar del aparato represivo en todas sus formas, y la necesidad de una centralidad a través de un plenario de los organismos de derecho humanos, las organizaciones obreras y populares para establecer un plan de lucha. La consigna de “Fuera Berni” golpea en el centro de la política represiva y en la propia crisis al seno de la coalición de gobierno.

En Argentina se abre un período de convulsiones con final incierto, donde todas las clases sociales y las distintas fracciones de ella pondrán de manifiesto cómo se prepararon para intervenir.

Nuestras tareas

El Partido Obrero está interviniendo centralmente con dos planteos que se ajustan a la situación.

Uno es que la crisis la deben pagar los capitalistas. Lo cual, además de ser una declaración de principios, constituye un punto de partida para organizar y centralizar la lucha contra los ataques que está recibiendo el movimiento obrero, con el argumento de la crisis que “nos afecta todos” y que “todos juntos vamos a vencer”, con el cual el gobierno busca convencer a los trabajadores de la necesidad de que resignen no solo sus aspiraciones sino sus propias conquistas.

Esto plantea, en primer lugar, intervenir abiertamente en el apoyo y la organización de todas las luchas que los trabajadores dan en defensa de sus condiciones de vida; intervenir como un factor activo en el impulso de las luchas obreras y populares por todas las reivindicaciones, aún las más pequeñas, esforzarnos por su triunfo y acompañar y procesar los fracasos.

La lucha por defender la salud ocupa un lugar central, porque plantea la necesidad de que sean los trabajadores los que asuman el control de la cuarentena y los protocolos de protección en los lugares de trabajo.

El otro planteo central de la etapa es la lucha por la independencia política de las organizaciones obreras y populares. La importancia de esta consigna reside en que actúa en oposición a la integración de las organizaciones de los trabajadores al gobierno, transformando a estas en la correa de transmisión de los intereses oficiales y, a través de ellos, de la clase capitalista, en el seno de aquellos que se ven necesitados de salir a la lucha de la defensa de sus reivindicaciones.

El gobierno de Alberto Fernández no se priva (como tampoco lo han hecho sus antecesores) de integrar, vía la cooptación, a la dirigencia tanto de los sindicatos como de la lucha de las mujeres, del movimiento piquetero, de los estudiantes, de los derechos humanos o del movimiento de defensa del ambiente. Esta integración es justificada (por el centroizquierda y la izquierda que se sumó) en nombre de una “mejor posición” para obtener los reclamos, pero termina fortaleciendo una burocracia que no solo se apodera de la representatividad sino que entrega cada una de la reivindicaciones.

Las crisis provocan convulsiones y, por último, ponen en cuestión la capacidad de la burguesía de organizar el desarrollo social y económico, por lo tanto, es la oportunidad de plantear una salida que responda a los intereses generales. Que la crisis la paguen los capitalistas y la in-

dependencia política de las organizaciones obreras y populares están ligadas a un planteo de transformación política y social que responda a los intereses generales, como son el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y la industria hidrocarburífera, así como el control obrero general en toda la economía. Y este carácter, solo puede dárselo la clase obrera a través de su propio gobierno.

Nos valemos del frente único para impulsar estos planteos y en eso consiste el Plenario del Sindicalismo Combativo, que aparece claramente en oposición a la entrega de la burocracia de los sindicatos y, por lo tanto, un punto de referencia para enfrentar la política de las patronales y de los gobiernos, y en la lucha por recuperar las organizaciones obreras.

A través del Frente de Izquierda establecimos un polo de independencia política para reagrupar al activismo. La convocatoria del FIT-Unidad a la Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos de la izquierda es una respuesta de organización y reagrupamiento independiente en el marco de las rebeliones que han sacudido a América Latina y ahora a los propios Estados Unidos.

La virtualización en la educación superior*

Ileana Celotto**

Introducción

La llegada de la pandemia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, entre muchas medidas excepcionales que debieron aplicarse, llevó a la interrupción de las clases presenciales en todos los circuitos educativos y en todos los niveles. Una medida extraordinaria, única, necesaria y lógica frente a la situación de contagio que demostró el Covid-19. Si bien no hay datos actualizados, ya en marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicaba que 1.370 millones de alumnos y 60,2 millones de docentes interrumpieron sus clases. Cifra que seguro se amplió a lo largo de estos meses con la explosión del virus en América Latina, donde también la Unesco calculó más de 156 millones de estudiantes afectados. A estas números hay que sumar a todo el personal administrativo y de soporte en la educación.

El cierre de todo tipo de establecimiento educacional no sólo protegió del contagio a los millones y millones de participantes de las co-

* Estos temas han sido también desarrollados en *Prensa Obrera* a través de artículos escritos por Federico Casas, Ileana Celotto, Fabiola Ferro, Santiago Gándara, Amanda Martín, Santiago Núñez, Javier Palma, Antonio Roselló y Daniel Sierra.

** Ileana Celotto es secretaria general de AGD UBA y dirigente CSC-PO.

munidades educativas sino que. Además, colaboró en una disminución drástica de circulación de todas esos millones de personas. Estos cinco meses de pandemia en el mundo, que han generado la mayor crisis social, económica y sanitaria que la humanidad haya conocido, no deja lugar a dudas de lo necesario e imprescindible de la medida. Una situación inédita y excepcional, que demandó de una (y otras) medidas de este tipo.

También, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, a partir de la suspensión de todo tipo de proceso educativo presencial, comenzó el debate acerca de la utilización de herramientas virtuales, en función de sostener algún tipo de contacto entre los actores de la educación. A la vez, en todo punto del planeta atacado por la pandemia y abarcando todos los niveles educativos, las posibilidades que hoy brinda el avance tecnológico e informático comenzaron también a ser vistas por el mercado y de apetitos capitalistas, como un avance en un negocio de alcance global, cuyo rendimiento nada tiene que ver con la solidaria inquietud acerca de cómo favorecer algún tipo de contacto educativo entre los millones de docentes y los millones y millones de estudiantes, cada uno necesariamente aislado.

Previa a la pandemia, la crisis capitalista mundial -resultado de la tendencia decreciente a la tasa de beneficio del capital internacional, y marcada por la recesión, la fuga de capitales de países emergentes, la guerra comercial entre las potencias, la guerra de monedas mediante devaluaciones y el incremento brutal de las deudas soberanas- reforzó la tendencia a invadir nuevos rubros en función de intentar sostener esa tasa de beneficio. La educación fue uno de los blancos.

La idea de que se podía continuar “normalmente” con la educación, aunque en modo virtual, es desmentida por todos los índices. A nivel mundial, la pandemia puso de manifiesto la devastación que los regímenes capitalistas provocaron en los sistemas de salud, educación y condiciones de vida. Los ajustes de las últimas décadas son los responsables de la devastación que han mostrado tanto los sistemas de salud como los de educación en la pandemia. En distintos países, en las grandes urbes, el desfinanciamiento de la educación pública -con el consiguiente avance de la privada, como bien se vio en nuestro país con neoliberales o antineoliberales en el gobierno-, la exclusión de sectores enteros de la población y las brutales desigualdades sociales y económicas han dado como resultado que millones de estudiantes no puedan ahora acceder a algún tipo de herramienta virtual. Según datos de la

Unesco, aproximadamente la mitad de los estudiantes que han dejado de concurrir a establecimientos educativos no tienen acceso a internet o a una computadora, una situación que se repite entre los educadores. La virtualización de la educación en la pandemia profundizó la desigualdad, el aumento de la deserción y el fracaso escolar, ya existente en el capitalismo, también en el ámbito de educación.

Apoyados en la defensa de la presencialidad en la educación, tanto desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, de la interacción que dentro de él se produce como desde su lugar socializador, rechazamos cualquier intento de sustitución, más allá de los positivos o negativos resultados de estos meses.

En cuanto a su materialidad, la educación a distancia que, con los avances tecnológicos e informáticos ha pasado a ser virtual, brinda complemento en ciertas circunstancias puntuales, bajo las cuales puede ser un recurso válido en la medida que se garanticen en primer lugar el acceso universal a las herramientas como a las redes que se utilizan, tanto para estudiantes como docentes, algo incompatible con el ajuste en un cuadro de crisis capitalista. Pero, además y en cuanto proceso educativo, la educación virtual demanda de una formación específica y capacitación de los docentes en la misma, en cualquiera de sus niveles, lo que no ha ocurrido con la emergencia de la pandemia. Por el contrario, el apetito capitalista ha visto la oportunidad de desarrollar un negocio a gran escala, a la vez que sus gobiernos ven detrás de esto la gran posibilidad de reducción de presupuestos educativos, mientras avanzan con el teletrabajo y la modificación de derechos laborales dentro del cuerpo docente.

En el ámbito de la educación superior y en Argentina, esta situación creada por la pandemia intenta ser aprovechada por el gobierno nacional, las autoridades universitarias -donde confluyen representantes de todo el arco político patronal-, tanto de instituciones privadas como públicas, para avanzar en la aplicación de la reforma laboral en la docencia, en ampliar el negocio capitalista de tecnologías y herramientas virtuales y en la mercantilización y privatización de la educación superior estatal y pública.

El cuatrimestre o año lectivo impuesto por las autoridades universitarias “a como dé lugar” implica un mayor ajuste en la docencia y deja fuera del sistema educativo a miles de estudiantes. Lo hacen imponiendo una “virtualización forzosa”, que flexibiliza a la docencia, precariza nuestro trabajo y descarga los costos de la mismas en los bolsillos docentes.

Una virtualización que no contempla a la inmensa cantidad de alumnos imposibilitados de cualquier contacto virtual. Desde todas las posiciones combativas y especialmente desde el clasismo hemos desarrollado, a lo largo de estos meses, un profundo debate y acciones, no sólo en defensa de los derechos docentes sino desnudando los objetivos de la burguesía, que apuntan a cambios estratégicos en la educación superior.

Lo que parece no haberle inquietado a ningún gobierno, rector o ministro, y mucho menos a organismos internacionales, es el nivel de la calidad educativa, puesto que, en absoluto, salvo de boca de los trabajadores docentes y de estudiantes, ha aparecido esta cuestión. Ni los contenidos, cuando no materias enteras, que demandan de presencialidad, ni el deterioro en la formación que implica la conversión a la virtualidad, fueron temas de debate o preocupación. Tampoco la situación de los miles de estudiantes que, por un motivo u otro, no pudieron “virtualizarse”. Todas demostraciones que la importancia de la virtualidad pasa por otro lado.

La educación superior como negocio, un objetivo que viene de lejos

En 1994, la Organización Mundial de Comercio (OMC), organismo internacional que resuelve normas que rigen el comercio entre los países, aprobó el “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios”, regulando intercambios entre oferta y demanda en servicios incluyendo el acceso de proveedores extranjeros a los mercados de cada nación. En 1998 y luego de distintas adecuaciones, la educación superior pasó a integrar el listado de los “servicios” -o sea, ni más ni menos que una “mercancía”.

En nuestro país y bajo la presidencia de Menem se votó la Ley 24.521, ley de Educación Superior, que mantuvieron vigente todos los gobiernos (radicales, kirchneristas, pejetistas) hasta el momento, y que abarca tanto a universidades privadas como públicas. Si bien su análisis escapa al objetivo de este artículo, la LES se inscribe en los lineamientos establecidos por la OMC, puesto que incorpora la denominación de “servicio” para la educación superior y, aunque plantea la responsabilidad del Estado en su financiamiento, en ninguna parte de su articulado establece la gratuidad. Solo estos dos señalamientos demuestran su carácter mercantilista (la educación superior como servicio) y privatista (no afirmar la gratuidad).

La promulgación de la LES coincide en el año en que entra en vigencia el acuerdo emanado de la “Ronda de Uruguay”¹ (octava ronda en

1. También de estas rondas surge la OMC.

el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que recomienda abarcar entre las normas comerciales a otras áreas de servicios, como salud y educación, entre otras.

Con la LES se inauguraron los posgrados -arancelados-, la venta de servicios, las contrataciones y todo lo que hoy constituye el gran negocio de las universidades, que conforman los denominados fondos propios. En paralelo, fue avanzando el desfinanciamiento público hacia las universidades y la reducción del presupuesto destinado a la educación superior, al punto que hoy el 95% del mismo alcanza sólo para el pago de salarios.

La LES también estableció la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) que, entre otras funciones, debe regular y controlar los contenidos de las distintas carreras, asestando un golpe más a la libertad de cátedra y avanzando en la mercantilización del conocimiento, habilitando la injerencia del capital en los contenidos a través de la financiación de proyectos empresarios.

Coincidentemente también en 1998, el Banco Mundial (BM), en el informe sobre Financiamiento y Administración de la Educación Superior, plantea la necesidad de hacer ajustes a los sistemas educativos de acuerdo con las necesidades actuales, para girar de “lo público” hacia el mercado.

En una clara articulación, la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por los ministros de Educación de distintos países de Europa, se preocupa por buscar nuevas formas de financiamiento de la educación superior y la necesidad de adaptar los procesos de educación y aprendizaje a las nuevas demandas económicas y sociales.

Como se ve, los distintos organismos internacionales se volcaron, a partir de mediados de la década del '80, a la necesidad de extender el negocio capitalista a la educación y salud. Desde ese momento y sistemáticamente, su producción y acción han estado dirigidos en este sentido. La GATT, la OMC y el Banco Mundial son los principales organismos internacionales que mantienen una línea de avance, que no sólo no se ha detenido al momento sino que se ha profundizado. Los acuerdos y procesos que comenzaron en Europa y quedaron sellados con la Declaración de Bolonia, aplicándose en las universidades del viejo mundo, fueron acompañados por otros acuerdos de implementación también en América del Sur. La LES menemista sostenida bajo el kirchnerismo es una demostración de avanzada en ello. Los pilares sobre los que se desarrollaron las universidades argentinas, autonomía -institucional y

académica- y autarquía, fueron reemplazados por privatización y desregulación, supeditadas a las leyes y necesidades del mercado.

Nuevos encuentros, declaraciones y acuerdos siguieron desarrollándose para profundizar este proceso de conversión de la educación superior. Más recientemente vale citar el Proyecto Tuning en América Latina (2004), que constituyó, tanto aquí como en el viejo continente, la profundización de la apertura de nuevos mercados a las universidades privadas. Recientemente, en 2018, el Dr. Hugo Juri, uno de los principales impulsores en la Argentina de estas reformas en la educación superior, siendo presidente del Consejo Nacional de Rectores (CIN), defendió la creación del “Sistema de Reconocimiento Académico”, que justamente apunta a la posibilidad de intercambiar “créditos” (término equivalente a asignaturas en lenguaje del mercado) entre universidades, públicas o privadas, garantizando un nuevo y gran mercado para la educación superior privada. Un avance que fue preparando la Coneau, regularizando carreras y contenidos (de nuevo, imponiéndose sobre la libertad de cátedra) y amalgamando instituciones públicas con privadas.

El agravamiento de la crisis económica mundial capitalista trajo también en el ámbito de la educación la necesidad de explorar nuevos mercados y negocios, abriéndose así a las posibilidades de aplicar el avance tecnológico al negocio educativo. Las nuevas vedettes fueron las tecnologías de información y comunicación (TIC), que rápidamente fueron sumadas para favorecer la oferta de posgrados (maestrías, especializaciones y doctorados), todos arancelados, y que, al servicio del mercado, pasaron a ser indispensables dentro de la academia y el mundo profesional. Para plantearlo más claramente: se crea la nueva mercancía: “título de posgrado” y se genera la necesidad de tenerlo. ¿Cómo? Básicamente por dos caminos, ambos muy simples, dotándolos de contenidos, vaciando la formación de grado, pasando así a ser esenciales para cierta práctica, y haciéndolos indispensables para la oferta de trabajo.

La educación virtual pasó a ser una nueva vía de desarrollo para el mercado capitalista, un mercado que algunos estiman en mil millones de dólares al año en el mundo y donde sobresalen países como Estados Unidos, Japón y Australia, entre los principales exportadores de educación por Internet. Auspiciados por la Unesco y sostenidos por todo el resto de los organismos imperialistas, los intereses de los grandes operadores en telecomunicaciones (AT&T, Huawei, Orange, Vodafone, Siemens, Telefónica, etc.) y las multinacionales que ofrecen sus plataformas virtuales (Amazon, Canva, Google, Microsoft, Moodle, Zoom,

etc., todas nucleadas en la Unión Internacional de Telecomunicaciones), tienen garantizado su negocio. Por supuesto, cuentan con el sostenimiento y apoyo de la banca, que no podía quedar por fuera de este negocio. Un claro ejemplo lo brinda el acompañamiento al proceso de “virtualización” que ofrece el Banco Santander, con promociones de préstamos y becas para la formación y equipamiento. Una profundización del negocio de la banca con las universidades dado que, de nuevo como ejemplo, el propio Santander, uno de los principales bancos privados que opera en el país, ya mantiene cerca de 100 convenios de colaboración con universidades públicas y privadas argentinas, además de tener el paquete de sueldos de la más grande, la UBA.

El ahogo presupuestario en educación

En la universidad argentina, gracias a la lucha del movimiento docente y estudiantil, se ha logrado mantener la gratuidad en la formación de grado, más allá de los intentos que en distintas épocas y bajo distintos gobiernos sostuvo la burguesía para terminar con la gratuidad de la educación superior.

Sin embargo, en los hechos, con una disminución sistemática de los presupuestos a través de los distintos gobiernos, el sistema universitario está completamente desfinanciado. Hoy, el presupuesto nacional asignado a las universidades estatales, en un 95%, corresponde al inciso 1, el pago de salarios. Además del deterioro de la infraestructura, esto afecta al conjunto de la producción científica, escasez de becas estudiantiles, trabajo gratuito de docentes, deterioro de actividades de extensión y, por supuesto, salarios devaluados.

En 2020 continúa aplicándose el Presupuesto de 2019, votado en 2018 durante el gobierno de Macri, que ya era de ajuste y ahora está totalmente devaluado. Con el ahogo presupuestario se fueron incrementando los “recursos propios” y, por lo tanto, el proceso de mercantilización. Festival de pasantías con empresas que pagan canon por cada estudiante, venta de servicios y todo un menú que entrega la producción de conocimiento al servicio del capital y no de las necesidades sociales de la mayoría trabajadora. La UBA acaba de aprobar un convenio de investigación de Exactas para la multinacional Shell, que dejará sus buenos dólares.

El gobierno de Alberto Fernández acaba de firmar un Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023 en 47 universidades nacionales. El Programa, que será implementado por las carteras

de Obras Públicas y Educación, es con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Un nuevo episodio de canje de deuda por educación contra el aumento genuino del presupuesto universitario.

Otro aspecto del proceso de virtualización de la educación superior es el ahorro presupuestario. El “aula virtual” tiene capacidad para cientos de estudiantes, solucionando una de las consecuencias del desfinanciamiento público, los problemas edilicios (capacidad de aulas y el resto de la infraestructura), que son denunciados por el movimiento docente y estudiantil. A pesar de que la falta de infraestructura, plataformas y soporte para cualquier tipo de acompañamiento virtual, fue otro de los resultados de la asfixia presupuestaria que afloró frente a la exigencia de la virtualidad.

Pero, además, la consecuencia inmediata es el achique del personal docente y no docente. Menos aulas reales con más alumnos en aulas virtuales demandan menos docentes. Menos concurrencia en edificios requiere de menos personal no docente. La experiencia de UBA XXI, programa de educación a distancia creado en 1986 para el CBC, es una prueba práctica de esto. Claro, que con un muy mayor índice de deserción que el CBC presencial.

Los gobiernos capitalistas siempre aprovechan las grandes crisis para sacar provecho y avanzar en sus objetivos. El ahorro en gastos de manutención y funcionamiento, el avance contra la universidad estatal pública y gratuita, y contra derechos de los trabajadores de las universidades nacionales no constituyen excepciones. La propia Unesco se mete en el tema, considerando esta etapa como una “prueba” que permitirá evaluar la adaptación de docentes al trabajo remoto. Un interés puesto en el ahorro que puede implicar a futuro en salarios e infraestructura por el menor número de trabajadores necesarios en la educación virtual para igual cantidad de alumnos.

La virtualidad, oportunidad para aplicar la reforma laboral en la docencia universitaria

Luego de años de pelea, en 2015, la docencia universitaria conquistó su primer convenio colectivo de trabajo a nivel nacional. Salvo en la UBA y en Río Negro, cuyas autoridades desde ese momento se han negado a aceptarlo, es de aplicación en todas las universidades nacionales. Fueron años de una dura pelea por tener un marco legal que ponga coto a la precarización del trabajo docente universitario, al

punto que, al momento de la firma, sólo los trabajadores civiles de las fuerzas armadas y los docentes universitarios éramos los únicos sin estatuto o convenio que establezca los derechos y deberes del trabajador.

En el caso de la UBA, Rubén Hallú, rector en ese momento, firmó con el sindicato Aduba -una burocracia sindical identificada con quien dirija la UBA, sin que importe quién ocupe el sillón del rector- un acuerdo a la baja, de implementación sólo local y sin homologación, con el que se excusan en la mayor universidad del país, para mantener todo el personal docente por fuera del CCT nacional. Una traición a la docencia que causa la persistencia de los interinatos, los contratos basura, la inestabilidad laboral y el trabajo gratuito (*ad honorem*).

Al igual que las patronales privadas, nuestra patronal, el gobierno nacional y los rectores, ven en la pandemia la excusa para aplicar aspectos de la reforma laboral entre los trabajadores de la educación superior y así dar vuelta derechos conveniados, donde el CCT se aplica, o para avanzar en la precarización laboral en el caso de la UBA. También, al igual que las patronales, cuentan con el acuerdo solícito de las burocracias sindicales y, por supuesto, del propio gobierno, que en este caso es también patrón y parte interesada. Son tres los ejes del ataque: el salario, las condiciones de trabajo y los costos laborales. A ello hay sumar la tentativa, expresada en el texto inicial de la ley de emergencia económica, de terminar con nuestro régimen especial jubilatorio y el 82% móvil, una enorme conquista de la gran huelga de 2005.

Respecto al salario, y luego de sernos negado el bono de fin de año que otorgó el gobierno, en marzo 2020, el ministerio de Trotta desconoció la segunda cláusula gatillo que debía adecuar nuestro salario en función de los índices de la inflación de octubre a febrero. Un golpe que ya venía siendo anunciado por dirigentes sindicales K, como el propio Yasky, quien arremetía contra las cláusulas gatillos por ser “inflacionarios”. Al anular la paritaria arrancada en 2019 al ministro Finocchiaro (gobierno de Macri), fuimos el primer sector al que el gobierno de los Fernández, desconoció acuerdos paritarios previos. Salvo la Conadu Histórica, federación nacional integrada por 23 asociaciones de base, entre las cuales está AGD-UBA, el resto de las federaciones, todas hoy partícipes del gobierno, nada dijeron.

En cuanto a las condiciones y costos laborales, ambos aspectos permiten demostrar el avance en la precarización de nuestra tarea a partir de la virtualización. A diferencia del aula y el sistema presencial, cualquier tipo de contacto virtual, en nuestros domicilios, demanda de

herramientas y espacio físico a tal efecto. Disponer de un ambiente, o parte de él, acorde a tomar contacto con estudiantes, la conexión y capacidad de la misma, los elementos informáticos que se requieren, etc., pasan a ser indispensables como en lo presencial son las aulas, las sillas, bancos o mesas, pizarrones o pizarras, tiza o marcadores, televisión o proyectores. Sin embargo, cualquier insumo utilizado por la docencia en esta etapa no presencial debe ser garantizado por los propios docentes. Desde los gastos que demande la conexión de Internet hasta la herramienta informática que se use o el espacio físico para desarrollarla... todo lo que se utilice para cualquier contacto virtual, todo está a cargo del trabajador. Las autoridades universitarias y, por supuesto también la Secretaría de Políticas Universitarias (Ministerio de Educación), demandaron, cuando no exigieron, el trabajo virtual, pero ninguna se atuvo a garantizarlo a pesar de estar establecido en el CCT. Un ahorro importante para el presupuesto, un requerimiento y consiguiente gasto brutal para la docencia.

En una nueva avanzada, el ministro de Educación Trotta ya anunció una línea de créditos del Banco Nación, con tasa subsidiada para que los docentes podamos adquirir computadoras. En lugar de entregarnos las herramientas de trabajo, nos otorgan créditos ¡para que las paguemos!

El otro, y fundamental aspecto, que sostiene el interés de rectores y gobierno por virtualizar la educación superior se inscribe en la reforma laboral, fundamentalmente en cuanto a su objetivo de flexibilización del trabajador. Se supone que el docente “online” está todo el tiempo conectado, es un “siempre listo” para responder, y como ya está demostrado en estos meses de cuarentena, los sistemas no presenciales agudizan las presiones patronales de gestiones universitarias y encargados de cátedras. Incluso en varios cronogramas de unidades académicas no se respetan los recesos correspondientes a las vacaciones.

Distintas encuestas realizadas por sindicatos docentes enrolados en la Conadu Histórica dan cuenta que la mayoría de la docencia considera que su trabajo se ha precarizado y flexibilizado durante la cuarentena. En el caso de la realizada por la AGD-UBA, cerca del 65%, sobre 1.900 casos, da cuenta que trabaja más horas de las que corresponden a su designación y sin que se respeten sus horarios laborales. Tampoco se otorgan las suplencias para hacer efectivas las licencias y dispensas de quienes, tal como indican los DNU presidenciales o las ampliaciones del Ministerio de Trabajo, están en sus hogares a cargo de niños o de adultos mayores, o pertenecen a grupos de riesgo. No hace falta aclarar

el impacto que esto tiene sobre los contenidos educativos brindados a los estudiantes, víctimas últimas de esta virtualización forzosa a como dé lugar, haciendo “como si” las condiciones fueran las adecuadas. Consecuencias que han sido denunciadas por la UJS en el seno del movimiento estudiantil.

La virtualización que tratan de imponer rectores y gobierno forma parte del vuelco al teletrabajo, tras el cual en la Argentina, por ramas y con distintos formatos, avanza la reforma laboral. Por lo tanto, y al igual que el resto de la clase obrera, que ha visto convertido de la noche a la mañana su trabajo en virtual, la vigencia de los derechos docentes y estudiantiles deben ser exigidos en la virtualidad. Como se establece en el proyecto de teletrabajo, presentado por el Frente de Izquierda al Congreso Nacional, también en nuestro caso vale la exigencia de optatividad, de resguardo de la estabilidad laboral de quien no acepte porque no pueda o no quiera. La jornada laboral debe ser acotada, con derecho a la desconexión y con descansos. El empleador debe proveer los elementos, la conectividad, sus costos y mantenimiento, los costos del espacio físico. Las ART deben asumir sus responsabilidades en horario de trabajo. En el caso de la educación, esos derechos elementales a garantizar por el Estado se deben extender a los educandos, además de los educadores.

Sin embargo, en el acta paritaria firmada el 19 de junio de 2020, que establece las condiciones de trabajo en esta excepcional etapa, varias de estas cuestiones no aparecen. No se fija la optatividad y, por lo tanto, no se garantiza la estabilidad laboral para el docente que no quiera, no pueda o no acepte. Tampoco nada se dice respecto de los costos ni el espacio físico. Ni se contemplan en la misma el derecho al goce de las licencias y dispensas que estableció el Poder Ejecutivo y amplió el Ministerio de Trabajo.

Ninguna de estas omisiones es casual. Que no se respete la optatividad es un aspecto clave, que reafirma la denuncia que ha venido sosteniendo la Agrupación Nacional Naranja de docentes e investigadores universitarios respecto a la implementación de una virtualización forzosa, que no ha tenido en cuenta ni la situación de cada uno de los docentes (ni de estudiantes, que abordaremos en un capítulo aparte) en plena pandemia, ni la consideración de las posibilidades materiales, concretas para llevarla adelante y para la cual nunca fuimos capacitados. Implica la obligatoriedad de volcarnos a un tipo de trabajo sin elementos ni preparación y marca el camino de intentar imponer en las

universidades nacionales esta modalidad de enseñanza. Buscan así dejar asentadas condiciones futuras de trabajo.

En el mismo sentido se explica el no reconocimiento de las dispensas y licencias, otorgados por el mismo gobierno, que a la docencia universitaria se les niega. Más flexibilidad laboral, más precarización.

Al igual que sucedió con la anulación de la cláusula gatillo conquistada, este acuerdo, también a la baja, diseñado por Trotta y el CIN (consejo de rectores), contó con el aval de todas las federaciones integradas al gobierno (Conadu y Ctera, pertenecientes a la CTA-T, Fedun y Fagdut -también aliadas del gobierno- y UDA, CGT). Solo la Conadu Histórica rechazó la firma, una prueba más de la importancia de la independencia de organizaciones obreras.

En defensa de los derechos estudiantiles

Los datos recogidos en todos los organismos oficiales de aquí y del resto del mundo sobre el estado de la educación en todos sus niveles a partir de la anulación de la presencialidad demuestran que, más allá de los distintos formatos virtuales ensayados, “surgen alarmantes brechas digitales en el aprendizaje a distancia” (documento de la Unesco, abril de 2020), dado que la mitad de los estudiantes que deberían estar conectados “virtualmente” no lo pueden hacer por no tener una computadora o no poder acceder a Internet. Un problema común también a los docentes.

En la Argentina, el propio CIN, conformado por el conjunto de rectores de las universidades nacionales, a través de su Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (Rueda), reconoció que no todos los contenidos y prácticas pueden virtualizarse, y que muchos estudiantes se caerán del sistema por no tener conexión o herramienta virtual alguna que les permita hacerlo. No podría ser distinto siendo que, en nuestro país, cuatro sobre diez hogares no tienen acceso fijo a Internet. Ya en 2019, el Ministerio de Modernización publicaba que en el 70% del territorio argentino no hay accesibilidad directa a la red, afectando esto a un tercio de la población. El tema de la conectividad -que presenta extremos con porcentajes altos en la Ciudad de Buenos Aires y muy bajos en algunas provincias -se une a la falta de equipos o de equipamiento adecuado a la exigencia de una cursada virtual.

Los meses transcurridos lo fueron demostrando. Si bien no tenemos al momento estadísticas, con grandes diferencias entre universidades y facultades, en todos los casos se verifica una importante cantidad de es-

tudiantes que han debido abandonar su “cursada” o que han tenido, a lo largo de la misma, serios problemas para poder mantener un contacto regular.

La liberación de los datos móviles (dominios de Internet liberados por parte de empresas de telefonía en beneficio de universidades nacionales), presentado como la gran medida contra la deserción por el gobierno, el CIN y agrupaciones estudiantiles afines, no solucionaron el problema. Sólo la beneficia si se trata de campus/plataformas oficiales de las universidades que han firmado el convenio con las empresas. Pero como los campus universitarios no dan abasto por la falta de inversión en su preparación o la falta de adecuación a la demanda, muchos de los contactos virtuales entre docentes y estudiantes se hacen a través de las plataformas de mercado (google, zoom, jitsi, youtube, etc.), que no están comprendidos en la resolución de Enacom (cuyo rol es asegurar servicios de calidad para los usuarios).

Se trata de una medida sumamente restringida que, en absoluto, soluciona el problema de acceso a la conectividad. Y el festejo de las autoridades, las mismas que sostienen una política de ahogo presupuestario sobre la educación, intenta ocultar la falta total de una política de fondo en función de solucionar, o por lo menos atenuar, los problemas que llevan a los estudiantes a dejar sus estudios. Las autoridades no se preocuparon por solicitar al gobierno nacional el aumento de la cantidad y monto de las becas que, en general, se mantienen iguales a los de 2019, a pesar de la fuerte inflación en nuestra economía. La beca Progresar, por ejemplo -de 2.250 a 3.250 pesos, dependiendo el año de estudio-, representa montos que no permiten ningún tipo de adecuación tecnológica a las exigencias de esta virtualización forzosa. Pero, además, muchas universidades suspendieron o restringieron el otorgamiento de becas propias, es el caso de las Sarmiento, en la UBA, o la de “emergencia” en la Universidad de La Plata. Completando el cuadro de abandono de las autoridades universitarias hacia el estudiantado, en una situación económica que ha golpeado como nunca a amplias capas de la población, se cerraron comedores (Universidad de La Plata) o se han dejado de distribuir las viandas de almuerzo (Universidad del Nordeste/Chaco).

Los estudiantes y/o sus familias, al igual que el conjunto de la población, están atravesados por el aumento de la desocupación, las rebajas salariales impuestas por las patronales directamente o con la excusa de la suspensión de tareas, la precariedad laboral y los brutales aumentos

del costo de vida. Todas situaciones que se agravan en la pandemia, y con un gobierno nacional o gobiernos provinciales que descargan la crisis sobre los trabajadores. Un escenario de conjunto que atenta con la posibilidad de una “cursada normal “. Si a esto se suman las dificultades de conexión o de insumos tecnológicos para la “virtualidad”, es obvio el aumento del abandono o del fracaso estudiantil. Por eso, además del reclamo de atención de las necesidades alimentarias de los estudiantes y, por lo tanto, de un urgente relevamiento y satisfacción de las mismas, es imperiosa la entrega de equipamientos tecnológicos a quienes lo demanden. Pero, además, y considerando que estamos atravesando una situación excepcional, la exigencia de regularización de todos los inscriptos, la prórroga de los vencimientos de cursadas, son medidas indispensables para que no aumente la exclusión de amplias capas de estudiantes. Todos reclamos que forman parte del pliego que levantan, tanto la UJS como la Naranja Docente Universitaria en todo el país.

Y ahora, la evaluación

La circulación del virus en varias zonas del país y, por lo tanto, la necesaria prórroga de la suspensión de la apertura de las aulas ha volado por los aires los cronogramas planteados por distintos consejos superiores que convocaban una vuelta a la presencialidad en junio o julio. Hoy, ya está claro que el segundo cuatrimestre será con las aulas cerradas, lo que también pone en el orden del día el debate inmediato respecto de la evaluación de lo recorrido en estos meses, tema fundamental para la docencia y alumnos.

Considerando el conjunto de la problemática, alrededor de estos meses de virtualidad, que afecta tanto a docentes como a estudiantes, la falta de buena conexión o de insumos para la misma, la problemática individual que puede atravesarnos en tanto sujetos en una pandemia y la falta de capacitación y aumento de trabajo (horas que insume) que demanda la educación virtual, sostenemos que la evaluación, al igual que el aula virtual, no debe ser obligatoria. Cada cátedra o equipo docente debe tener la posibilidad de decidir al respecto. No se puede imponer desde “arriba”, desde las gestiones universitarias ni ministerios, puesto que dependerá del recorrido y situación de cada docente, la particularidad de la asignatura y de cada equipo de trabajo.

Por lo tanto, frente al debate respecto de la evaluación, reafirmamos la exigencia de su carácter opcional, a la vez que, en donde se implemente, se considere la toma de exámenes finales virtuales como absolu-

tamente excepcional. La implementación de cualquier tipo de evaluación virtual debe respetar el conjunto de los derechos de estudiantes y docentes: no aumento de carga horaria ni sanción al docente que no la realice, y garantías para estudiantes, tanto para los que hayan podido seguir la cursada virtual como para aquellos que no, y por eso la exigencia de regularidad para todos los alumnos inscriptos a principio de año.

Al igual que sucedió en el comienzo de la virtualidad, con la llegada del momento de evaluación apareció nuevamente la oportunidad de nuevos negocios para quienes lucran con la educación. Esta vez, a través de la venta de software para evaluar, que incluyen sistemas de monitoreo para el control en línea del comportamiento de los evaluados. Con distintos grados de sofisticación y diferentes costos, estos sistemas están basados en micrófonos abiertos, cámaras que registran el movimiento de la cara y las manos, además de la zona donde se realiza el examen y hasta del cuarto donde se encuentra el alumno. También están los que incluyen la comparación en la escritura de una centena de palabras, para evaluar si es la misma velocidad y ritmo de pulsación de teclas.

Microsoft Teams, Examity, ProctorU, Honorlock, ProctorTrack y otras, todos distintos supervisores online que comenzaron a utilizarse en Estados Unidos, ya vienen registrando un importantísimo crecimiento, al punto que algunas ampliaron casi en un 100% su personal especializado. Ahora, pandemia mediante, se extiende el negocio del examen.

En el país, la Universidad de Córdoba (UNC) adquirió uno de estos sistemas de software para la evaluación: “Respondus”. Filma al estudiante (desde su propia cámara) enviando los datos a la nube de Amazon, hace reconocimiento facial y detecta cualquier movimiento, le inhibe la posibilidad de entrar a otros sitios de Internet y le bloquea otra acción, salvo la de responder a la evaluación. Los derechos al uso de la licencia costaron 17.545 dólares a la universidad. Todo un sistema que “espía” a estudiantes y sus datos, y que vulnera la privacidad. Ya estos software han sido cuestionados en otros países donde se pretendió aplicarlos por motivos éticos y legales (España, por ejemplo), puesto que permitirían acceder a datos personales, a archivos y contraseñas de las computadoras.

Pero, además, para poder realizar las evaluaciones con estos software es indispensable que el alumno posea una computadora con cámara web que funcione correctamente, una conexión a Internet que “no se caiga” y un ambiente en soledad donde realizarlo. Algo que no todos poseen.

La pionera iniciativa de la UNC se extendió. Acaba de firmarse entre el CIN, el Ministerio de Educación y Renaper (Registro de las personas físicas), un convenio para la implementación de un software, SIU-Quechua, para la evaluación virtual en universidades nacionales. Como el Respondus de Córdoba, el sistema permite la identificación digital de estudiantes, que verifica rostros con personas registradas en el Renaper, etc. Rechazamos el cyberpatrullaje en todo el sistema universitario.

Además, tal cómo están denunciando distintos centros de estudiantes y la UJS, cualquier tipo de evaluación virtual conlleva en sí misma la exclusión de quienes tengan cualquier tipo de problema de conexión o carezcan del equipamiento adecuado. Es sabido que una gran parte del alumnado de nuestras universidades se conecta a través de sus celulares, lo que imposibilita este tipo de evaluación.

Por eso, el derecho a la regularidad incondicional para todos los estudiantes y la anulación de cualquier tipo de penalidad para los que no hayan podido adecuarse a la modalidad virtual debe estar integrando al programa de defensa de los derechos estudiantiles en esta etapa excepcional, a la que arribamos estudiantes y docentes sin equipamiento ni preparación y atravesados por los riesgos y problemas de todo tipo que acontecen con la pandemia. Las prórrogas de vencimiento de cursadas y la eliminación de correlatividades deben también ser tenidas en cuenta.

Sobre la base de la no obligatoriedad para docentes y estudiantes, la modalidad de evaluación, ya sea virtual o presencial en el momento que sea posible, debe estar basada en la comprensión del actual contexto y no avasallando derechos de trabajadores docentes ni de estudiantes. Trabajamos por la unidad docente-estudiantil-no docente. Es decir, la unidad del movimiento estudiantil con los movimientos de lucha docentes y no docentes, como parte de nuestra estrategia política socialista de unidad obrero-estudiantil.

Nuestra intervención

“En definitiva, el ‘mal’ no se encuentra en el soporte, ahora incluso ‘virtual’, de las nuevas tendencias a la monopolización capitalista de prácticas pedagógicas sino en el uso social de las nuevas tecnologías, en su explotación por el capital financiero” (Pablo Rieznik, “Algunos escritos sobre educación”).

El avance tecnológico que nos permite considerar la posibilidad de mantener contacto a través de la virtualidad durante la pandemia está siendo utilizado contra los derechos de la docencia universitaria y de la propia universidad estatal pública y gratuita.

Por el lado de los docentes, avanzando en la precarización y flexibilidad laboral, incumpliendo con derechos adquiridos. Al igual que está sucediendo de conjunto en la clase obrera, las patronales -en nuestro caso el gobierno nacional y los rectores aprovechando el esfuerzo y solidaridad de los docentes- tratan de imponer aspectos claves de la reforma laboral, que viene siendo exigida por el FMI y el conjunto de la burguesía, como uno de los ajustes básicos en función de mejorar sus ganancias. Como también sucede en el resto de la clase obrera, pueden avanzar gracias a la política entregadora y colaboracionista de las burocracias sindicales. Las mismas que, en plena huelga masiva en 2018, reventaron el movimiento firmando una paritaria a la baja, o cuando en 2018 y 2019 -tanto con Macri como con Fernández presidentes- nada hicieron contra la exclusión del bono que se entregó a otros sectores. Las mismas burocracias que este año le avalaron a Fernández la anulación de la cláusula gatillo conquistada en 2019, y que acaban de firmar una serie de pautas para la educación superior durante la virtualidad, que ni siquiera respeta el CCT nacional.

Por otro lado, la virtualización forzosa se está aprovechando como prueba de ensayo en función de un objetivo estratégico. Lo han planteado desde la Unesco, que analiza la “buena disposición” de los docentes frente a esta novedosa modalidad, hasta el CIN, que ven la posibilidad de mantener la educación a distancia también luego de la cuarentena. Completan el negocio abriendo nuevos mercados a multinacionales de las telecomunicaciones e instrumentan, a través de la virtualización, un achique de la planta de los trabajadores y de los gastos para el funcionamiento. Con el incremento de la deserción, disminuye también la matrícula estudiantil, un objetivo que la burguesía intentó imponer con exámenes de ingreso y cupos, y que la unidad del movimiento estudiantil y docente ha venido enfrentando.

El debate acerca del sistema educativo post pandemia se está dando en todo el mundo y va más allá de la educación superior, abarcando a todos los niveles. Contando con estos meses de prueba y aprovechando lo que llaman la “vocación docente” y la gran adaptación de los profesores, ya se están conjeturando posibles modelos mixtos o híbridos. Son los temas que hoy se discuten en organismos del sistema como la Unesco o entre expertos educativos de los distintos gobiernos. Con un título más que elocuente: “Nuevas búsquedas educativas: aulas y vínculos en el escenario post pandemia”, la Universidad Siglo 21, la más grande de gestión privada de la Argentina, organizó un debate sobre el tema. A

pesar de coincidir la mayoría de sus participantes, y las estadísticas de países y organismos, sobre un alto grado de desconexión de alumnos y en dificultades por parte de docentes, se propusieron modelos como el “presencial discontinuo intermitente” o “modelos reversibles”, aceptando la posibilidad de escenarios combinados (presencial, discontinuo y online) post pandemia.

La media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación a la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional se inscribe en este camino. La resolución aprobada por todos los bloques -los auto-denominados ‘oposición’, el oficialismo y allegados, incluidos los diputados provenientes del gremialismo docente-, salvo el Frente de Izquierda-Unidad, aprueba la modalidad de educación a distancia para todos los niveles de la educación para menores de 18 años frente a epidemias, pandemias, catástrofes o “razones de fuerza mayor”. Enfrentando a esta unidad patronal, la diputada Romina Del Plá, acompañada por el diputado Del Caño, no sólo votó en contra sino que presentó un proyecto alternativo, planteando el acompañamiento pedagógico de los docentes sólo cuando haya situaciones de extrema excepcionalidad y por un tiempo prolongado, como una pandemia, casos en que debe darse a la docencia capacitación en servicio para adecuar esa labor a la modalidad a distancia, proveerse conectividad y recursos, y respetarse la jornada de trabajo y la desconexión.

La educación a distancia vale como modalidad, que ha permitido el acceso al sistema educativo a quienes por razones puntuales no podían acceder a la misma. Justamente lo opuesto que está sucediendo, donde son miles los estudiantes que, por el contrario, quedan fuera del sistema. Incluso especialistas en el tema plantean que la educación a distancia no es la enseñanza remota que se está aplicando en reemplazo de la presencialidad². Además, todos los expertos coinciden en la imposibilidad de adquirir las habilidades que se requiere para educar a distancia en el poco tiempo en que, por la pandemia, nos hemos visto frente a alumnos virtuales.

En función de los distintos aspectos aquí presentados y de la imposibilidad de adaptar ciertos contenidos e instancias de formación (talleres, laboratorios, prácticas, trabajos de campo, etc.) a la virtuali-

2. Dra. Hebe Roig, docente e investigadora en educación, tecnología y comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y directora de la Especialización en Evaluación Universitaria de la misma institución, dice que debe entenderse que la enseñanza remota en el contexto de la pandemia no es educación a distancia.

dad, reafirmamos la defensa de la presencialidad y de la interacción en el espacio del aula, entre docentes y estudiantes, como un espacio de transformación educativa y de construcción conjunta.

La extensión de la pandemia en nuestro país, que ya plantea un nuevo cuatrimestre sin aulas, será aprovechado para avanzar en el negocio de la educación virtual y en la arremetida contra los derechos de trabajadores docentes y no docentes, y profundizando la brecha entre estudiantes en función de sus posibilidades materiales. Como socialistas intervenimos desde nuestras agrupaciones docente y estudiantil, desde La Naranja y la UJS, denunciando el objetivo estratégico de las patronales universitarias y del gobierno detrás de la virtualización, y adoptando de conjunto un pliego inmediato contra el avance flexibilizador hacia los trabajadores y en favor de los derechos estudiantiles.

Nuestro programa y los planes de lucha para imponerlo, parte de la defensa de la optatividad virtual, recoge los reclamos de regularidad, de anulación de correlatividades, la entrega de becas y de viandas alimenticias y de conectividad para los estudiantes. En cuanto a los docentes, la no obligatoriedad se apoya en la defensa de la libertad de cátedra y decisión de cada equipo docente, en función de sus posibilidades, consideraciones pedagógicas y contenido académico. Y la defensa incondicional de los derechos conveniados, como la provisión de los elementos para desarrollar la tarea docente, las licencias y dispensas planteadas por la pandemia, con nombramiento de los suplentes, los tiempos de descansos y el respeto absoluto del horario y horas de trabajo, incluidas las que demanda la preparación, además de la atención online, de acuerdo con el cargo designado. Lo mismo queda planteado para los trabajadores no docentes frente a una posible virtualización de sus tareas.

Con este programa de conjunto, los trabajadores de la universidad y el movimiento estudiantil estaremos armados para enfrentar, como tantas otras veces hemos hecho, los intentos de privatización y mercantilización de la universidad argentina.

“La cuestión educacional no gira en el aire, no es una cuestión académica sino una cuestión social y política; refracta las tendencias y fuerzas en pugna que se hallan en la base de la sociedad y, como tal, su resolución está en la arena de la lucha de clases y, en esa medida, inscripta en el movimiento de la clase obrera hacia su emancipación” (Pablo Rieznik, ídem). Ese es el compromiso bajo el cual se delinea toda la intervención de estudiantes y docentes del Partido Obrero en la universidad.

La pandemia evidenció la crisis mortal de la salud: hay que rescatarla del peso del capital

Alejandro Lipcovich

Es ampliamente reconocido que la pandemia de Covid-19 puso en claro el gigantesco deterioro de los sistemas de salud a lo largo y ancho del planeta. Las denuncias públicas han sido contundentes, incluso respecto de los ajustes hechos en las principales potencias imperialistas. Frente a esta evidencia, muchas conclusiones en boga apuntan a cuestionar los “errores” en la salida a la crisis de 2008 y sus consiguientes ajustes. O, en forma similar, a rechazar las consecuencias calamitosas de “la ideología neoliberal”, ponderando que “otra salud es posible” dentro del sistema vigente. Este artículo, por su parte, apunta a conclusiones de otro orden. El repaso profundo de las principales cuestiones sanitarias que la pandemia sacó a la luz permite observar la contradicción entre las relaciones sociales vigentes y la posibilidad de la humanidad para aprovechar las fuerzas productivas. Tras un largo proceso de mercantilización de la salud, se llegó a un extremo dramático por el contrapunto en su condición de valor de uso -para provecho de la humanidad en su conjunto- con su valor de cambio -que estrangula al primero cuando no se corresponde con la satisfacción del lucro capitalista. La provisión de servicios de salud, motorizada por la lucha capitalista para revertir la tendencia de decreciente de su tasa de ganancia, habla de la descomposición de un sistema social.

A la vez, la magnitud de esta crisis de la salud mundial se está llevando a los máximos organismos en la materia, empezando por la OMS, que fue una de las creaciones políticas de la segunda posguerra. Al momento de escribir estas líneas, Estados Unidos avanza en su retiro de dicha organización. La salida de la principal potencia imperialista -y mayor aportante entre los países miembros- es elocuente respecto del cisma en curso.

Para desarrollar estos conceptos, repasaremos los hechos más significativos que salieron a la luz en las principales potencias imperialistas, como Estados Unidos y la Unión Europea, el papel de China, la situación de América Latina y un esbozo de programa alternativo.

Estados Unidos, el caso paradigmático

La política de Donald Trump frente a la pandemia fue indudablemente criminal. En forma sistemática, rechazó la importancia de la enfermedad y abogó por el funcionamiento pleno de la economía -es decir, algo contrapuesto a desarrollar restricciones a la circulación de mercancías, una de las medidas necesarias para contener al virus, al menos temporalmente. La “libertad de explotar” a otras personas (¿qué otra cosa es sino la “libertad” que reclama el movimiento anticuarentena?) mostró toda su crudeza en el centro del imperialismo mundial. Al 11 de julio de 2020, Estados Unidos “ya superó los 3,11 millones de casos y está al borde de los 134.000 muertos por coronavirus” (Télam).

La catástrofe norteamericana frente al Covid-19 no debe analizarse únicamente con relación a la coyuntura -las medidas actuales de Trump. Sucede que el sistema de salud yanqui llegó a la pandemia en un grado de privatización y desprotección de las masas sin precedentes en la historia moderna. “La falta de cobertura sanitaria es un problema persistente y en este momento se vuelve más crucial: en 2018, 27,5 millones de personas no tenían seguro en ningún momento del año, según datos de la Oficina del Censo, que reflejaron un aumento sobre el año anterior” (www.bbc.com, 13/4). La autoproclamada “mayor democracia del mundo” es incapaz de brindar servicios de salud a prácticamente el 10% de su población. Luego, millones cuentan con seguros básicos, que cubren apenas fracciones de tratamientos o consultas elementales. Desde ya, la imposibilidad de dar esta cobertura está lejos de ser un fenómeno natural. Se observa, entonces, los resultados de la mercantilización extrema de la sanidad. A la vez, los números arriba citados dan testimonio de la acotada transformación que implicó la “ley

de protección al paciente y cuidado de salud accesible”, más conocida como “Obamacare”. La guerra encabezada por Trump para derribarla no debe ocultar su carácter limitado. En definitiva, el edificio de una salud privatizada hasta la última gasa no fue obra únicamente de republicanos, pues lleva décadas y el Partido Demócrata fue parte desde sus presidencias y gobernaciones.

Es interesante observar las consecuencias “cotidianas” de este estado de cosas. Los organismos internacionales suelen llenarse la boca respecto de la importancia de la “Atención Primaria de la Salud” y de la “Medicina preventiva”. Pues bien, ¿cómo acceden a estas prácticas trabajadores y trabajadoras en suelo norteamericano, que son víctimas de precarización salarial, pésimas condiciones de trabajo y desprotección legal? Las consultas pueden costar cientos de dólares; el resultado es que se postergan durante años, incluso en pediatría -donde el famoso “control del niño sano” debería ser una práctica fundamental. Ni hablar de los millones de indocumentados, que la burguesía yanqui superexplota valiéndose de su condición, al tiempo que les niega el acceso a cualquier seguro de salud. “Al ser indocumentado es difícil obtener atención médica. Existe el hecho de presentarse ante el sistema legal en las instalaciones médicas y eso conlleva el riesgo de deportación” (testimonio en www.bbc.com).

Las características parasitarias del imperialismo, como la extensión asfixiante del capital financiero, también dicen “presente” en este desastre sanitario. Sucede que entre las consecuencias de este sistema privatizado se encuentra el creciente endeudamiento de las familias. “Según una encuesta reciente de Gallup, los estadounidenses tomaron prestados la friolera de 88 mil millones de dólares el año pasado simplemente para pagar los gastos médicos”, denunciaban tres activistas norteamericanos en una columna publicada por *The Guardian* (“Por qué luchamos contra la Asociación Médica Americana”, 6/6/19). Hay negocio por vender salud, hay negocio por vender créditos para pagar la salud, hay 30 de millones de personas sin cobertura. Ese es el resumen del “modelo norteamericano”.

Ahora bien, durante la pandemia tenemos aún más agregados. Por ejemplo, las licencias pagas a las y los trabajadores, que son la base de cualquier política de aislamientos para contener al virus, son inexistentes para masas de la población en el país ejemplo de la reforma laboral. “Además, enfermar significa la ruina laboral. En Estados Unidos hay 30 millones de personas que no tienen baja laboral pagada” (*El País*,

28/3/20). Como se ve, cada obstáculo para enfrentar adecuadamente la pandemia en Estados Unidos está derivado de las relaciones sociales existentes, en general, y de la política concreta que impulsó la burguesía yanqui en ese marco, en particular.

La política de la clase capitalista no se desarrolló sin oposición; por el contrario, fue fermento de numerosas luchas. Respecto de los reclamos puntuales del personal de salud, durante el transcurso de la pandemia, han habido movilizaciones y exigencias de Equipos de Protección Personal (EPP), entre otras cosas. De todos modos, referir solo a las protestas sanitarias sería un error. En realidad, la rebelión popular que aún está en desarrollo tiene como uno de sus motores el hartazgo popular frente a un régimen incapaz de garantizar sus derechos más elementales. Es evidente que la privatización de la salud y sus consecuencias atizan el fuego de la insatisfacción de las masas -en Chile, por caso, ha sido un reclamo destacado.

Con relación a una salida integral para el sistema de salud, existe un movimiento muy extendido que aboga por la implementación de un “Medicare for all”. En la versión de sus impulsores supone una reforma radical del actual sistema de salud, eliminando intermediarios, garantizando una atención universal y concentrando los desembolsos en “un pagador único” (el Estado). El sitio de “Enfermeras de la nación unidas” (www.nationalnursesunited.org) plantea una campaña permanente para unirse al movimiento porque “es tiempo de garantizar salud a todo el mundo”. Términos similares pueden encontrarse en el sitio de PNHP (“Physicians for a national health program”, Médicos/as por un programa nacional de salud). Este agrupamiento, que declara contar con 20.000 integrantes a lo largo y ancho del país, plantea abiertamente los límites de la normativa vigente, afirmando que la ley por la que luchan permitiría superar al “Obamacare” en numerosos puntos (cobertura universal versus 30 millones sin seguro; centralización de los controles versus continuidad de un sistema fragmentado; pagar menos para el 95% de la población versus mantener “costos desproporcionados”). Como se ve, es un planteo por izquierda al establishment demócrata, que ha logrado interesar y organizar a un sector importante de trabajadores; no es casual, por tanto, que uno de sus voceros políticos sea Bernie Sanders. Es, a la vez, el reflejo de sus límites, que sus promotores reivindicaban abiertamente: “El seguro nacional de salud de pagador único, también conocido como ‘Medicare para todos’, es un sistema en el que una sola agencia pública o cuasi pública organiza el financiamiento

de la atención médica, pero la prestación de la atención médica sigue en gran parte en manos privadas” (en pnhp.org). El planteo de reforma es radical, y por tanto choca con las alternativas que prefiere la burguesía. Sin embargo, al sostener las prestaciones en manos privadas, manifiesta su límite insalvable. Carente de un planteamiento integral de separación del capital respecto de la provisión de servicios de salud, la lucha por la ampliación universal de este derecho queda en encerrada en un callejón muy estrecho. Sería oportuno discutir un programa de centralización anticapitalista en el seno del movimiento “Medicare for all”.

Europa: el fracaso de la “salida a la crisis de 2008”

El “viejo continente” fue severamente golpeado por la pandemia. Las tempranas imágenes del norte de Italia, donde el colapso llegó al extremo de la decisión de muertes en tiempo real por parte del personal de salud a causa de la insuficiencia de respiradores, impactaron profundamente en las masas de todo el mundo. Con las particularidades de cada país, es indiscutible que Europa sufrió notoriamente las muertes por Covid-19; los datos de las carencias de los sistemas de salud salieron a la luz con la pandemia, pero tenían antecedentes que los gobiernos capitalistas fueron incapaces de resolver. Un informe de la Unión Europea del año 2019, por ejemplo, señalaba sobre Italia que “emplea menos enfermeras que casi todos los países de Europa occidental (a excepción de España) y el número es sustancialmente más bajo que el promedio de la Unión Europea (5,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes en comparación con 8,5 en la UE)” (en https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_it_english.pdf). Como se ve, solo había un país peor que Italia en este rubro, que terminó siendo, precisamente, otro de los grandes castigados por la pandemia. ¿Casualidad? El informe reseña también el desmantelamiento de las coberturas a la población; así, menciona un incremento de los gastos “OOP” en salud (por “out of pocket”, fuera de bolsillo) hasta el 23% en 2018, lo cual refiere a costos asumidos por los usuarios más allá de sus seguros o asistencia estatal. Puede observarse, entonces, que el retroceso de la cobertura sanitaria en Italia no fue un fenómeno repentino o inesperado -existían numerosos indicadores que lo atestiguan. Lógicamente, esta situación no responde a “causas naturales”. En Italia, los recortes timoneados por el tecnócrata Monti durante 2012 fueron multimillonarios. La opción de adjudicar esta política a la mera “ideología neoliberal” sucumbe ante la contundencia de la historia concreta. En España, por caso, quien inauguró los recortes

a la sanidad fue el “progresista” Rodríguez Zapatero. En Italia siguió con lo propio el “demócrata” Renzi, mientras el español Rajoy continuó en su magistratura esa obra del PSOE. Buscar un filtro ideológico al ataque a la sanidad europea es un completo equívoco -o un engaño deliberado. En realidad, la “salida” del capital a la bancarrota de 2008 fue la famosa “austeridad”, que es el santo y seña de un ataque a las masas descomunal. Esta política de la UE, el BCE y el FMI unificó a los distintos gobiernos de los partidos del sistema. En este punto es interesante reseñar la forma concreta en que se procesó este ajuste sanitario. “Según el sindicato Metges de Catalunya (MC), Catalunya perdió, en los últimos años, unos 900 médicos de atención primaria (...) y mil camas de agudos” (www.elperiodico.com, 20/3). Es un ejemplo elocuente de cómo se procesó el retroceso en la porción de PBI, que pasó a representar el gasto en salud entre 2009 y 2020 (del 6,77 al 5,9%, siempre por debajo de la media europea del 7,5%). Este mismo artículo periodístico reseña el aumento progresivo de “copagos” para muchos medicamentos; el incremento privatista también se registró en la capacidad instalada. “En la Comunidad de Madrid se hicieron recortes y reformas sin ningún tipo de planificación. Se construyeron siete hospitales de concesión privada, pero en total disminuyó el número de camas [se cerraron en los públicos]”, denuncia Miguel Angel Sánchez Chillón, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid” (ídem). El informe de la Comisión Europea sobre España en 2019 -análogo al citado arriba sobre Italia- también advertía sobre la escasez de enfermería (5,7 cada 1.000 personas), e incluso respecto de las consecuencias de la creciente precarización laboral para profesionales de la salud (“los contratos temporales (...) aumenta[n] la rotación de personal”). Durante la propia pandemia de Covid-19 se han hecho públicas denuncias sobre contratos de tan solo 15 días en clínicas privadas del Estado español. Nuevamente, se aprecia que el virus es un fenómeno “natural” que progresa en escala por las características propias de nuestro medio social. La burguesía europea y sus gobiernos desmantelaron sistemas sanitarios para “salir” de una crisis terminal -si éstas son las “salidas”, ¿qué queda para las “entradas” a ella, como la fase en que ingresamos ahora? Esta responsabilidad social de características criminales se vislumbra en forma paradigmática con lo ocurrido en Bérgamo, región industrial por excelencia del norte italiano. Allí, “la patronal industrial presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y perder dinero. Y así, por increíble que parezca, la zona

con más muertos por coronavirus por habitante de Italia -y de Europa- nunca ha sido declarada zona roja“ (“Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar”, en *ctxt.es*, 10/4). El artículo citado cuenta con lujo de detalles la presión incansable -y exitosa- de la poderosa Confindustria para evitar las medidas de parálisis industrial que habrían salvado miles de vidas. No solo eso: en una trama que involucra a Tenaris (de los Rocca, también líder de la burguesía nacional argentina), podemos saber que las principales clínicas de Bérgamo están en manos privadas, pertenecen a un grupo de esta familia (que no quería cerrar sus plantas en la zona) y activaron tardíamente los protocolos de emergencia en sus instituciones sanitarias. La responsabilidad de la clase capitalista en los contagios y las muertes no es un ardid teórico; tiene manifestaciones bien concretas, que ejemplifican la contradicción insalvable entre salud y lucro.

El papel de la OMS, la “coordinación” internacional y la supuesta “alternativa” de China

Si la OMS podía reclamar algún prestigio como “referencia internacional” de cierta envergadura, es evidente que lo ha liquidado en el transcurso de la pandemia. Los “errores” del organismo podrían explicarse simplemente por la “incompetencia” de su personal dirigente; una interpretación de este tipo, sin embargo, pecaría de superficial. Los vaivenes respecto de la conveniencia con tapabocas, tipos de cuarentena o posibilidades de contagio por parte de asintomáticos, por nombrar solo algunos ejemplos resonantes, no están meramente en el campo de las torpezas. Sucede que la OMS expresa las contradicciones de los intereses sociales que la moldean. Una pandemia, por definición, reclama una coordinación internacional de características extraordinarias, algo que “de palabra” encarnaría la OMS. En la práctica, por el contrario, está conformada por Estados nacionales rivales entre sí, lo cual se exagera cuando hablamos de potencias imperialistas. En vez de una coordinación, hemos asistido a la anarquía capitalista de medidas superpuestas y hasta contrapuestas, según la región. Antes que una planificación de las necesidades de producción de insumos o medicamentos, observamos una guerra de rapiña interimperialista. Al respecto, fue muy gráfica la crisis desatada en Francia, donde el pulpo Sanofi -el “gran laboratorio nacional”- anunció que “Estados Unidos tendría prioridad” en la aplicación de la eventual vacuna que lograsen, debido a los multimillonarios desembolsos al respecto. Las excusas de

ocasión tras el choque con Macron no pueden ocultar que, en definitiva, las declaraciones del ejecutivo fueron un caso de “honestidad brutal”. Estos desmienten, una vez más, el carácter ilusorio de la “globalización que superaría los antagonismos nacionales” -una verdadera burrada academicista. Nuevamente, la Unión Europea reveló que al menos la primera palabra de su sigla es un eufemismo encubridor. Finalmente, ingresamos a la pandemia en pleno desarrollo de una depresión económica mundial, que incluye guerras comerciales -y de las otras. Evidentemente, el capitalismo ofrece exactamente lo contrario a la indiscutible necesidad de una cooperación entre pueblos para actuar sobre la base de un plan racional de combate a un virus novedoso. Esta es la base material sobre la cual actúa la OMS, que se financia por los aportes de los países miembros, pero que también recibe “donaciones” de grandes laboratorios y pulpos capitalistas en general -como Bill Gates. Detrás de una cortina “aséptica” de sanitarismo, se encuentran los choques por abrir más o menos la economía, destinar recursos sanitarios a uno u otro país, adoptar tal o cual medida según las necesidades de cada burguesía. Por supuesto, esto no quita que el conocimiento científico respecto de una pandemia que se desarrolla en simultáneo reviste carácter transitorio, y muchas conclusiones pueden y deben ser a puestas a prueba constantemente, algo que también ocurriría bajo otras relaciones sociales. Sin embargo, el problema consiste en apreciar cuáles son las trabas para el libre desenvolvimiento de la ciencia, hoy rehén de los límites insalvables que le impone el capital. La OMS y su inconsistencia se cocinan en su propia salsa.

Por otro lado, también es digna de mención la situación con relación a los Equipos de Protección Personal (EPP). Los reclamos del personal de salud, por su carencia en cantidad y calidad, han sido constantes y sonantes a lo largo y ancho del globo; la OMS, por su parte, se limitó a recomendaciones de cumplimiento inefectivo. La imposibilidad de satisfacer su dotación necesaria a escala mundial no puede adjudicarse a “la imposibilidad de previsión”. Muy por el contrario, los límites al respecto brotan de la situación social que referimos hasta el momento en el presente artículo. Los recortes mencionados, desde luego, también implicaron la incorrecta dotación de EPP para otras patologías previas, situación relativamente disimulada en el colapso “normal” de la salud sin pandemia. Ahora, esa crisis se multiplica por mil. La producción de EPP representa un negocio formidable, y son pocos pulpos quienes producen, por ejemplo, el barbijo N95, insumo decisivo para la protec-

ción de trabajadores de la salud. La escala de su producción, por tanto, no estaba determinada, ni antes ni ahora mismo, por las necesidades sociales de su uso, sino por la colocación en el mercado. Esta realidad podría haber sido superada en tiempo real con la reconversión forzosa de líneas de producción, para obtener barbijos, camisolines, respiradores, reactivos para test y, en general, todo lo necesario. Nada de esto fue impulsado más que muy parcialmente -alguna producción de respiradores por parte de automotrices, que hicieron un nuevo negocio a su turno. Las “Bérgamo” del mundo siguieron produciendo cosas inesenciales en función del lucro, aumentando directamente la exposición y contagio de sus trabajadores, y por añadidura del personal de salud, que en muchos casos fue a una guerra sin pertrechos.

Parte de estas limitaciones habrían sido eludidas por China a la hora de enfrentar la pandemia. Su Estado, como es sabido, ostenta una característica *sui generis*, propia de una transición peculiar de régimen obrero burocratizado a restauración capitalista. Así, la férrea centralización estatal permitió a China movilizar una cantidad de recursos enorme, como ilustra la construcción de grandes hospitales de aislamiento en pocos días o la intensa búsqueda de contactos para contener brotes y controlar la expansión del virus. La propia crisis de la OMS está vinculada con esta situación, pues actuó en tándem con China, lo cual acentuó su choque con Trump. De todos modos, estas observaciones sobre el “éxito” relativo de China para contener a la pandemia deben ser tomadas con alfileres, por muchos motivos. En primer lugar, la burocracia restauracionista impide la existencia de libertades democráticas para las masas; por este motivo, los datos son cuestionados con razón, pues las voces críticas son rápidamente silenciadas. El caso extremo es Corea del Norte, donde se reportaron llamativos cero casos. Volviendo a China, debe agregarse que los mecanismos para enfrentar la pandemia, en manos de una burocracia, buscan reforzar el control sobre las masas. El extremo control social que, valiéndose de medios digitales, permite al Estado observar cada movimiento de la ciudadanía, es un arma contra la organización de los trabajadores. La denuncia contra la tentativa de montar o reforzar el carácter policial de estos Estados es válida. Debe incluir, en simultáneo, la completa hipocresía de los Estados capitalistas, que se llenan la boca sobre “el totalitarismo” mientras implementan mecanismos de control similares en sus naciones. Un combate socialista a la pandemia en manos de un gobierno de trabajadores y trabajadoras supon-

dría medidas de orden completamente distinto, pues la movilización de recursos partiría de la afectación de las minorías enriquecidas por parte de las mayorías. A la vez, requeriría la gestión democrática de la vida cotidiana sobre la base de una deliberación colectiva, basada en datos científicos que integren las diversas disciplinas.

Latinoamérica, devastada antes y después

Al momento de escribir estas líneas, Latinoamérica es uno de los centros de desarrollo de la pandemia. En muchos países se viven dramáticamente las consecuencias materiales del carácter semicolonial de nuestras formaciones sociales. Si países imperialistas afrontaron la pandemia con semejante nivel de recorte y precarización, ¿qué queda para América Latina? En este punto, es importante apreciar la forma concreta que adoptó el proceso de privatización sanitaria. Sucede que, a diferencia de Estados Unidos o la mayor parte de Europa, es común que muchos países latinoamericanos tengan formalmente un sistema de salud público de carácter “universal”. De hecho, el país con más muertes de la región -Brasil- es el único “en el mundo con más de 100 millones de habitantes que tiene un sistema de asistencia médica gratuito para todos sus ciudadanos” (*La Tercera*, 18/4). ¿La culpa, entonces, solo es de Bolsonaro? Si la política de Trump es criminal, la del fascistoide brasileño la supera. Indudablemente, la presión para mantener abierta la economía a cualquier costo y el negacionismo oscurantista son un cóctel mortífero. Pero esta política infame se combinó con un estado de cosas, en el cual la gratuidad del sistema no puede encubrir su vaciamiento. El artículo recién citado apunta cómo: “a nivel de financiamiento es muy poco ambicioso, si se considera que debe cubrir a una población de más de 200 millones de habitantes. Esto, porque Brasil invierte 3,8% de su PBI en salud pública”. La “austeridad” no fue solo una política europea; igual que allá, los recortes fueron impulsados, con las particularidades de cada caso, por gobierno “progresistas” y derechistas. De hecho, fue Dilma Rousseff (PT), quien encabezó un ajuste multimillonario que afectó, entre otras cosas, el presupuesto de salud. En 2015, “el gobierno de Dilma Rousseff anunció un recorte de gastos por 23.300 millones de dólares, el más drástico plan de ahorro presupuestario realizado por los gobiernos izquierdistas del Partido de los Trabajadores (...) las Carteras que mayores recortes tendrán serán Ciudades, Salud, Educación y Transportes” (*La Nación*, 23/5/15). Lógicamente, los gobiernos sub-

siguientes (el golpista Témer y Bolsonaro) profundizaron con saltos en calidad brutales esta ofensiva. Hoy, “el 56% de la población brasileña vive en territorios donde no hay lo que es considerado un mínimo necesario de camas UCI. No tenemos respiradores suficientes” (*La Tercera*, citado).

El vaciamiento de la salud pública es la otra cara de la moneda privatizadora en América Latina, donde “el valor *per cápita* invertido en salud (si se suman lo público y lo privado) es inferior al de los países de Oriente Medio” (*El País*, 8/4). Por un lado, el Estado aún financia grandes sistemas de salud, como en Argentina. En buena parte, gracias a la lucha tenaz de la clase obrera de cada país, que puso diques de contención a la privatización total. Pero, al mismo tiempo, la política del capital brota por todos los poros -y sus resultados son desastrosos. En Argentina, por caso, conviven entremezclados los diversos “subsistemas”; el propio Estado financia a grandes prestadores privados. Un caso paradigmático es la obra social universal para jubilados/as -Pami- que, con administración estatal, sostiene un conglomerado gigante de empresas parasitarias entre laboratorios y clínicas, con público cautivo y financiamiento asegurado. Las obras sociales, por su parte, degeneraron de su propósito mutual original a prestadoras de servicios lamentables. La burocracia sindical las administra como empresas, e incluso forma sus propias prepagas, siendo cómplice de la creciente privatización sanitaria -y actuando sin mediaciones como patronal en sus clínicas. Este proceso dio saltos agigantados a partir de la desregulación “neoliberal” impuesta por Menem, cobertura legal que mantuvieron todos los gobiernos, incluidos los “nacionales y populares” del kirchnerismo. Las grandes empresas de medicina prepaga facturan sumas exorbitantes. Por dar un ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Salud en 2018 fue de 46.123 millones de pesos, mientras OSDE facturó 82.700 millones de pesos, un 79% más. Los resultados de esta creciente privatización se manifiestan en la infraestructura derruida de instituciones públicas, algo imposible de resolver con un presupuesto insuficiente. Los faltantes de insumos elementales en cualquier hospital provincial son moneda corriente. A la vez, crece la presión por transformar a las propias dependencias públicas en generadoras de ingresos; por eso son generalizadas las oficinas de facturación y “recursos propios”, que buscan reemplazar los ingresos que el Estado no provee, sobrecargando el bolsillo de la clase obrera, que financia al Estado con impuestos y a las obras sociales con descuentos al salario.

Este cuadro general, cuya responsabilidad recae en décadas de gobiernos civiles y militares de todos los colores, es el marco en el que Argentina “recibió” la pandemia. Sus consecuencias han sido gravosas en múltiples aspectos; por nombrar uno, no se cuenta siquiera con información centralizada fiable sobre ocupación de camas y rastreo de contactos. Frente a esto, el gobierno de Fernández dejó correr la versión de una pseudo-centralización para archivarla antes de que se discuta en serio, bajo la presión de los pulpos de la salud. Antes, y en tándem con la gobernación macrista del principal distrito del país (Ciudad de Buenos Aires), sostuvo una política de pretendida “cuarentena estricta” para “fortalecer al sistema de salud”. Pues bien, pasados más de cien días, la situación está literalmente atada con alambres. La disminución de la circulación seguramente dosificó los contagios en el tiempo. Sin embargo, nos encontramos al borde de un pico de desenlace incierto, sin que el sistema de salud se haya “fortalecido” en serio. Al momento de cerrar este artículo, la saturación del sistema de salud del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) es inminente. Las denuncias por faltantes de EPP son moneda corriente; los testeos y la estructura destinada al rastreo de contactos para aislar focos, completamente insuficientes; la restricción de la circulación se reduce a la afectación de la población civil, que es culpabilizada mientras los verdaderos focos -grandes comercios e industrias- operan bajo el despotismo patronal y la falta de protocolos. Al mismo tiempo, es evidente que “la salud” no refiere únicamente a la atención en centros específicos para tal fin, pues también debe incluir las condiciones de vida de la población. En Argentina, la pobreza se aproxima al 50%; las autoridades vociferan sobre “medidas de higiene y distanciamiento”, mientras millones viven en el hacinamiento y la carencia de servicios básicos. Esta realidad estructural se agrava día a día, tras el peso de una bancarrota sin precedentes, cuya factura recae sobre los hombros de las masas.

Conclusiones

En este artículo nos propusimos repasar las principales características de los sistemas de salud, que fueron puestos a prueba por el estallido de la pandemia. Con numerosas diferencias, todos tienen un factor común: están moldeados bajo el peso inexorable de las relaciones sociales vigentes. De este modo, aquello que debería promover el bienestar de las más amplias masas de la población mundial, se desnaturaliza bajo la intromisión de una producción orientada a garantizar el lucro.

Si la medicina y el conjunto de disciplinas y prácticas que sustentan la salud constituyen “valores de uso” imprescindibles, su mercantilización oprime este valor hasta negarlo. Es un rasgo típico de un sistema social en descomposición: los progresos técnicos son privados de un usufructo colectivo, bajo la desviación y contaminación que impone como principio la valorización de un capital que encuentra cada vez más dificultades para hacerlo. Donde aumenta la esperanza de vida, lo es a condición de ampliar los años de explotación -como testimonian las reformas jubilatorias impulsadas a nivel mundial.

La pandemia puso en evidencia, nuevamente, el pluriempleo del personal de salud, que trabaja jornadas extenuantes -lo cual fue un factor entre tantos de propagación de la pandemia. Esta situación lejos está de ser un hecho fatal. En un mundo con desocupación crónica, podrían movilizarse los recursos necesarios para formar más personal y retribuir su labor adecuadamente, repartiendo las horas de trabajo disponibles. Bajo el peso del capital, ocurre lo contrario. De igual modo, cuando más se necesitaban plazas hospitalarias, personal y tecnología, asistimos al absurdo de su cierre por “falta de rentabilidad” (como ocurrió con parte de la Fundación Favalaro en Argentina).

Por otro lado, es posible observar que los gobiernos de los más diversos signos políticos han protagonizado recortes a la sanidad pública. En líneas generales, responde a tres fenómenos que son parte del mismo proceso. Por un lado, la colonización de crecientes recursos del presupuesto público, para rescatar al capital en bancarrota tras la crisis de 2008; por otro, al peso asfixiante de la deuda externa sobre los Estados de países semicoloniales. A la vez, estos ajustes pavimentan la ascendente privatización de la salud, que es un fenómeno históricamente concreto, a partir del cual los capitales buscan desesperadamente nuevos nichos de rentabilidad frente a la inexorable tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La principal víctima de esta situación es la clase obrera, que debió destinar crecientes porciones del valor de su fuerza de trabajo a pagar por una salud otrora garantizada de diversos modos o directamente a no acceder a ella. En cualquier caso, fue forzada a degradar sus condiciones de vida. El personal de salud, que también es parte de la masa trabajadora -incluso sus profesiones más “distinguidas”, por la creciente proletarización de muchas de ellas-, sufre de ambos lados del mostrador. Su situación se entrelaza, además, con otra cuestión nodal de enfrentamiento a la descomposición del capitalismo: el protagonismo de la mujer trabajadora, que es mayoría en muchas de estas labores.

Esta situación brutal reclama una reorganización social de características integrales. La clase obrera debe protagonizar la lucha por ella, levantando un programa que es incompatible con los gobiernos capitalistas, por más “progresistas” que se autoproclamen. Sucede que las medidas más elementales para garantizar el acceso a la salud suponen un choque en regla con poderosos intereses económicos. La centralización de la salud en un comando único, gestionado por sus propios trabajadores y trabajadoras, es una medida de primer orden. Es imperioso terminar con el pluriempleo y la insalubridad, reduciendo jornadas laborales sin afectar el salario. También es decisivo el fin de la precariedad, con el ingreso a plantas permanentes de todo personal, incluido el tercerizado. La producción de insumos en función de las necesidades y no del lucro reclama una intervención anticapitalista en serio. La supresión del interés privado en la provisión de servicios de salud plantea no sólo la apropiación colectiva de las instalaciones de clínicas y laboratorios, sino también la acumulación de un gran fondo para ponerlas en marcha. Por ello, estas medidas no pueden ser tomadas aisladamente; deben formar parte de un plan económico general, dirigido por la clase obrera, que incluya la nacionalización de la banca y el comercio exterior. La pandemia evidenció que la gravedad de la situación actual es de características civilizatorias. Por ello, la discusión de salidas de fondo está en el orden del día. Un gobierno de trabajadores y trabajadoras también es una necesidad para rescatar la salud de su destrucción.

Nuestra política en los sindicatos argentinos

Texto para el debate con los compañeros de L'Étincelle, Francia.

Néstor Pitrola

Nuestros sindicatos

Hace décadas que, para los trabajadores, los sindicatos en la Argentina están asociados al origen y vigencia de las principales conquistas y, al mismo tiempo, atravesados por el repudio a la burocracia sindical.

Como en todo el mundo, los sindicatos fueron la herramienta primera y elemental de la organización de los trabajadores para poner límites a la explotación capitalista. A fines del siglo XIX nacieron asociados al anarquismo y a la fundación del primer partido obrero argentino, el Partido Socialista.

El proceso de legalización se dio paso entre huelgas generales, movilizaciones, masacres obreras (Semana Trágica) y fue poniendo a prueba a distintas corrientes que enfrentaron o se adaptaron a la asimilación legal de la burguesía. La asimilación del socialismo al parlamentarismo de una democracia proscriptiva y represiva, así como el rápido copamiento estalinista del PC, contribuyeron al crecimiento de corrientes sindicalistas que divorciaron a los sindicatos de una perspectiva de poder de los trabajadores.

La bancarrota definitiva de la izquierda estalinista y el PS se produjo en masa ante el surgimiento del peronismo en 1945. La posición de comunistas y socialistas de apoyo a la Unión Democrática, dirigida por

el embajador norteamericano (Braden o Perón), marcó históricamente al proletariado, que se fue alineando al nacionalismo burgués como fenómeno político y dejó la mesa servida para el entronamiento de una burocracia sindical de la que se valió Perón para regimenter a los trabajadores. El peronismo, que vino a instalar en la Argentina el bonapartismo que definió Trotsky en los países atrasados y semicoloniales, se valió de la burocracia sindical, prebendaria y amparada por el Estado desde su inicio, para su accionar “pendular”, hoy apoyado en el imperialismo contra las masas, mañana apoyado en el proletariado contra el imperialismo, para gobernar arbitrando entre las fracciones de la burguesía nacional y el resto de las clases.

El período revolucionario del Cordobazo y los sindicatos

Ese ADN de injerencia del Estado en los sindicatos, de cooptación de las distintas alas de la burocracia sindical peronista, solo se ha acentuado hasta hoy. Pero no sin pasar por etapas de crisis revolucionarias (Cordobazo en 1969, huelga general de 1975), que mostraron los rasgos más reaccionarios de la burocracia (asociación a la Triple A bajo Perón/Isabel Perón en 1973/1976) hasta incluso la colaboración directa de algunas alas en las comisiones normalizadoras de la dictadura genocida de Videla.

El proceso que llevó a la huelga general de 1975, años después del Cordobazo, cuya consigna central fue la lucha por el “gobierno obrero y popular”, estuvo marcado por un inmenso movimiento de cuerpos de delegados fabriles combativos que enfrentaron a la burocracia sindical central. Es la época de las ocupaciones de fábricas, de grandes huelgas contra el pacto social de Perón, la burguesía y la burocracia sindical, de las que nacieron las “coordinadoras”, que fueron las organizadoras de la huelga general de 1975 ante un golpe devaluatorio e inflacionario que se llamó Rodrigazo. Su derrota final es parte de un balance que trasciende el objetivo de este documento, pero está íntimamente ligado a la subordinación de la izquierda peronista a Perón.

De manera que, reconstituir el dominio del Estado sobre los sindicatos, en un sentido, necesitó del genocidio de la dictadura, que aniquiló físicamente a una vanguardia obrera, que instauró disposiciones legales, algunas de las cuales se conservan hasta hoy. El pasaje al régimen constitucional, lejos de dismantelar el Estado de la dictadura, lo prolongó en múltiples aspectos de su ordenamiento jurídico y legal. Entre ellos, fuertes ataduras de los sindicatos al arbitraje del Estado.

Los sindicatos a la salida de la dictadura

En la década del '80, el desprestigiado peronismo, derrotado en las elecciones, libró en los sindicatos una denodada lucha política por recomponer la autoridad de la burocracia sindical, golpeada por el colaboracionismo con la dictadura misma. Un ala, el ubaldinismo, desplegó un programa de tipo nacionalista (moratoria de la deuda externa) y realizó trece paros generales para recomponer esa autoridad política perdida. La izquierda alcanzó posiciones sindicales muy importantes en la Sanidad, la construcción y otros grandes gremios. Pero su política democratizante, dictada por el morenismo (asociado al estalinismo local), se basó en el oportunismo y el coqueteo con el programa nacionalista, llevando a la postre a la frustración y la derrota el proceso de los '80. En esos años, el PO alcanzó un desarrollo importante en el gremio gráfico, justamente, cuestionando la política de adaptación al peronismo y a la centroizquierda del morenismo (MAS).

El pacto social: herramienta para maniatar al movimiento obrero

El pacto social ha vuelto a la escena nacional en un replay del que impusiera Perón en 1973, pero no como farsa sino como tragedia agravada. Fue un planteo estratégico de Cristina Fernández de Kirchner, al consagrar como candidato a Presidente a Alberto Fernández, puntapié inicial de la alianza con el derechista Sergio Massa, que conformó la alianza gobernante.

Es una reedición de 1973 por la función reaccionaria que viene a cumplir: la regimentación del movimiento obrero a un Consejo Económico y Social. La importancia de esa política es lograr la contención del movimiento obrero ante la tarea de ajuste que inevitablemente llevará (y lleva ya mismo) adelante, de una u otra forma, el gobierno “nacional y popular” de los Fernández.

El carácter bonapartista del gobierno se asienta en varias patas, puesto que ha recabado los llamados “superpoderes” en el Congreso que, de entrada, le han servido para asestar un golpe a las jubilaciones de miles de millones para el ajuste fiscal requerido por los bonistas de la deuda, por el FMI y, de un modo general, por toda la clase capitalista.

Pero el pacto social es otra pieza clave y tal vez la más importante de todas. Porque en la agenda de la burguesía y el capital financiero resaltan la profundización de las reformas laboral y previsional que ya han tenido varios capítulos, durante el gobierno de Macri y antes también, mediante crisis y maniobras colaboracionistas de todas las alas

de la burocracia sindical. De hecho, en la cuarentena, el pacto Unión Industrial-CGT-gobierno ha escrito la primera página del pacto social, acordando suspensiones con rebaja salariales y exención de aportes jubilatorios que golpean de lleno al sistema previsional y han abierto una variedad de violaciones de convenios colectivos.

La cuestión de las nacionalizaciones burguesas

La cuestión de las nacionalizaciones en los países atrasados o semi-coloniales no escapa a la caracterización que Trotsky hiciera hace casi un siglo del bonapartismo de Lázaro Cárdenas en México. El kirchernismo agita en la Argentina la nacionalización de las AFJP (fondos de pensión privatizados en los '90); la adquisición de una mayoría estatal en la petrolera YPF, aunque bajo la forma "lulista" de una sociedad anónima de bolsa con mayoría estatal que opera como la principal compañía petrolera en el marco de la explotación privada de los hidrocarburos; la formación de "Trenes Argentinos", una sociedad que maneja el negocio mixto estatal-privado de los ferrocarriles; la estatizada Aerolíneas Argentinas tras su quiebra en manos españolas (y en los finales asociadas a un grupo local del capital amigo del kirchnerismo) o el Correo Argentino, que "cayó" en manos estatales luego de la quiebra de su administración por la familia del ex presidente Macri.

El nacionalismo burgués hace de ellas una bandera "nacional y popular", aunque se trata de aquellas empresas que dieron pérdidas en distintos períodos. Otras, como las telefónicas o las energéticas de la electricidad, han facturado pingües ganancias también bajo la forma de subsidios del Estado y siguen absolutamente privatizadas, al igual que numerosos bancos provinciales.

Esta denuncia, de un modo general, es común a distintas izquierdas en el mundo y en nuestro país. Por caso, Angela Merkel está nacionalizando parcialmente a Lufthansa, con un descomunal aporte de 9.000 millones de euros, en un caso clásico de rescate capitalista de los "neoliberales" que repudian al Estado, del que se valen sistemáticamente para expoliar a las masas y a los países. Pero lo que nos interesa resaltar es cuál es la política de la izquierda revolucionaria frente al tema.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda levantan la nacionalización bajo control obrero y sin indemnización de esas empresas y en general de todos los recursos estratégicos de la economía: la banca, el comercio exterior, la gran propiedad agraria, las energéticas y mineras,

la gran industria, para poner proa a un plan económico y social de salida de los trabajadores a la crisis.

Este planteo se enlaza a la lucha popular contra los tarifazos (apertura de libros y nacionalización de las energéticas), contra la fuga de capitales y las devaluaciones (banca y comercio exterior, control de cambios) y a la lucha contra la pandemia (centralización del sistema de salud y nacionalización de los laboratorios). Por la soberanía nacional en materia petrolera, cuando el chavismo o Evo Morales han evolucionado hacia explotaciones mixtas de sus enormes recursos petroleros.

Integrando ya el Parlamento, hemos hecho una enorme denuncia política de la indemnización kirchnerista a Repsol, la española vaciadora de YPF. Pero opusimos a ella una ley integral de nacionalización de hidrocarburos bajo control obrero.

El fracaso de los nacionalismos petroleros le confiere a nuestros planteos una potencia excepcional, porque plantea a los trabajadores, justamente, la superación de las nacionalizaciones de contenido capitalista. Este es también un tema de debate con la izquierda criolla, algunas de cuyas alas plantean la “reestatización” de las empresas privatizadas, lo que equivale a un planteo estrecho de capitalismo de Estado. Así como hemos sido tenaces opositores a la privatización previsional, cuando se produjo la estatización de las AFJP, marcamos que sería para pagar la deuda externa, lo que está ocurriendo ahora mismo mediante un verdadero saqueo a los fondos jubilatorios de la Anses, el instituto que los administra. La cuestión de las nacionalizaciones bajo control obrero forma parte de nuestra agitación política cotidiana, para elevar la vanguardia de los sindicatos a la cuestión de qué clase paga la crisis y qué clase podría reorganizar la sociedad para que la crisis la paguen los capitalistas.

En ese lugar hay que ubicar, también, la fuerte campaña que estamos realizando ahora mismo en todos los sindicatos y organizaciones populares en apoyo al proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas, fortunas, bancos, etc., que comentamos en el capítulo final de la lucha de hoy contra la pandemia.

La burocracia sindical en la base del régimen político

De un modo general, ningún gobierno ha podido gobernar sin asentarse en la burocracia sindical. Lo que demuestra el potencial de los sindicatos, que conservan el poder de paralizar el país cuando se dispone un paro general, algo que ocurrió en repetidas oportunidades durante

el último gobierno de Macri, pero también en el segundo mandato de Cristina Kirchner, a partir de escisiones en el seno de la burocracia sindical tradicional (moyanismo). Lo propio hicieron los gobiernos radicales, no solo los gobiernos peronistas. Incluso el gobierno de Macri tuvo un aliado fundamental en la burocracia central de la CGT para varios de sus emprendimientos antilaborales (Riesgos del Trabajo, Impuesto a las Ganancias en los salarios, convenios flexibles, paritarias a la baja).

En los '90, la llamada CGT de los "gordos" jugó un papel fundamental en la traición de grandes huelgas (telefónicos, petroleros, ferroviarios) para imponer la flexibilización laboral de Menem y Cavallo. Pero también dio un salto en calidad en su desprestigio histórico, asociada como quedó a la privatización jubilatoria, la desocupación masiva y la liquidación de conquistas históricas que no se volvieron a obtener. En los años finales del gobierno menemista, con el telón de fondo de grandes luchas del movimiento de desocupados, la burocracia se divide y toma relevancia la centroizquierda de la CTA como central alternativa. Un fenómeno del que nos ocuparemos por separado.

Pero todos los gobiernos se enfrentaron a grandes huelgas, que tuvieron en muchos casos a fracciones sindicales como canal de esos grandes movimientos de lucha: las huelgas generales de la universidad, de la docencia, de los petroleros en la Patagonia, en los cordones industriales de Santa Fe, en la gran planta de aluminio de Aluar, en el Neumático, mineros, en los subterráneos, recientemente en la provincia de Chubut, entre otras. En otros muchos casos, las huelgas y ocupaciones de fábrica han sacudido a las burocracias de sus sindicatos a partir de sus seccionales más combativas, a partir de cuerpos de delegados fabriles o de autoconvocatorias que desafían abiertamente a las direcciones formales (docentes de Salta, por ejemplo).

En los últimos años, las grandes ocupaciones de fábrica han sido protagonizadas por el clasismo o sectores antiburocráticos: AGR-Clarín, Interpack, Kimberly, Télam, Inti, BedTime, etc., a partir de sus cuerpos de delegados. Fueron tenazmente aisladas por las burocracias de sus respectivos sindicatos, aunque en algunos casos arrancaron paros generales de todo el sindicato, sacudido por la repercusión pública y política de esos movimientos.

Argentinazo y movimiento piquetero

Llegado este punto importa caracterizar el proceso del Argentinazo que derrocó al gobierno de De la Rúa y Cavallo mediante una re-

belión popular, por su influencia en el movimiento obrero y en la izquierda. Sus raíces hay que buscarlas en las revueltas obreras y populares de la segunda mitad de los '90, que comenzaron a finales del '93 con el Santiagueñazo, una rebelión que acabó con el gobierno de esa provincia a partir de los trabajadores estatales y docentes.

Pero el gran protagonista fue el movimiento piquetero, que resultó de la organización de los desocupados en masa en las localidades petroleras del extremo norte y de la Patagonia, donde fue privatizada y desmantelada la compañía estatal YPF. Los ex delegados obreros de pronto se transformaron en organizadores de uno de los fenómenos más ricos mundialmente en cuanto a movimiento de desocupados se refiere. Su rasgo más notable fue la acción directa (el corte de ruta), la asamblea de despedidos o de barrios que desbordaron por completo las estructuras sindicales, pero también las estructuras políticas de regimentación territorial del peronismo sobre los trabajadores (punteros).

El Partido Obrero sentó una posición teórica muy clara sobre el fenómeno: no estábamos ante un nuevo sujeto histórico distinto a la clase obrera, sino ante una fracción de la clase obrera que ocupaba un lugar de vanguardia en la lucha de clases. A partir de esta concepción organizamos el Polo Obrero, que plantea política y metodológicamente la unidad de clase entre ocupados y desocupados. El movimiento piquetero vino a organizar a los trabajadores abandonados por la burocracia de los sindicatos.

La centroizquierda y la izquierda maoísta vieron el fenómeno y canalizaron a través de organizaciones ligadas al sindicalismo de centroizquierda gran parte de este movimiento de lucha. Luego de la caída del gobierno radical, el centroizquierda sindical y piquetero se asimila a la cooptación del gobierno provisional del peronismo de la mano de la Iglesia, integrando un organismo de contención del tipo que hoy se ha montado en la emergencia de la pandemia por parte del gobierno de los Fernández. Señalemos que las mismas corrientes maoístas y de centroizquierda se han vuelto a asimilar al organismo de colaboración de clases, pero integrando directamente al gobierno a través de sus cuadros políticos, absolutamente golpeados por el ascenso del Frente de Izquierda, que los ha borrado como referencias políticas independientes del peronismo y el resto de los partidos capitalistas.

Centroizquierda y paralelismo sindical

Con la crisis de la centroizquierda se ha procesado el destino del paralelismo sindical. La CTA se planteó la idea de eludir la lucha interior

por la recuperación de los sindicatos a partir de una central alternativa que escindió algunos sindicatos (docentes, estatales y otros menores) de la CGT central. Lo hizo desafiando la legislación vigente de sindicato único con personería gremial (exclusividad en la firma de convenios colectivos) y de central única que sigue vigente hasta hoy. Con esa línea y con una relación también alternativa con el Estado llegaron a inscribir más de mil proyectos de sindicatos paralelos en todo tipo de actividades que se han ido agotando en el tiempo, transformados en carpetas archivadas. Fue (y es) un “modelo” sindical alternativo en los términos de la “libertad sindical” de la OIT, en un intento de réplica del sindicalismo francés.

El núcleo de su fracaso político hay que encontrarlo en varios aspectos centrales. En primer lugar, su desarrollo estuvo ligado a una nueva forma de integración al Estado, no en un sindicalismo contrario a la integración al Estado. Así es que se integraron a la Alianza del centroizquierda con el radicalismo que llevó al poder a De la Rúa y, desde ese lugar, la rebelión popular de 2001 los encontró llamando a boicotear la movilización piquetera “en defensa de la democracia”, aún cuando su relación con ese gobierno estaba en completa crisis. Luego se integraron junto a la Iglesia, a la que están profundamente ligados, al colaboracionismo con el gobierno de Duhalde y quedaron de espaldas al crimen de Kosteki y Santillán, que marcó el período político, poniendo en fuga al gobierno a partir de masivas movilizaciones piqueteras en las que el Polo Obrero fue protagonista en primera fila, junto al proceso de Asambleas Populares en las que también tuvimos fuerte militancia.

Por otro lado, fueron impulsores del frente de colaboración de clases con un planteo “pluriclasista” de unidad con las Pymes (pequeñas y medianas empresas), que los caracteriza. Esta posición presentada al mismo tiempo como redistribucionista, los ha llevado a apoyar los mismos gobiernos que no necesitan de ellos, porque se sirven de la burocracia sindical peronista tradicional. Es así como toda esta concepción ha reproducido sus métodos prebendarios, proscriptivos, burocráticos y hasta patoteros en un símil de la burocracia tradicional.

Justamente, a partir de la confluencia de “piquetes y cacerolas”, nuestro partido fue impulsor con el método del frente único de siete Asambleas de Trabajadores, que agruparon a miles de delegados piqueteros, de asambleas populares y de un incipiente clasismo sindical de la época. Nunca, nunca, este vasto movimiento se planteó desconocer a los sindicatos, sino expulsar de ellos a la burocracia sindical, a la que

sistemáticamente se le exigió intervenir, convocar asambleas, recabar mandatos y llamar a la huelga para acompañar las luchas que se sucedieron con el movimiento de desocupados a la cabeza. A la vez, este movimiento intervino en cada paro aislado o maniobra de movilización de los sindicatos contralados por la burocracia.

Durante el kirchnerismo, la CTA se divide, con una fracción mayoritaria cooptada directamente por ese ala del peronismo. Hoy, ambas CTA, debilitadas las dos, se han integrado al gobierno, con cargos de parlamentarios y funcionarios en la administración, dando un salto en su pérdida de independencia política.

Este derrotero de la centroizquierda sindical ha venido a confirmar el planteamiento de Trotsky: los sindicatos en la época del imperialismo sufren una presión extrema que polariza su condición. O son puestos por la clase obrera al servicio de una construcción y orientación revolucionaria o se integran al Estado en sus distintas variantes. El morenismo tiene corrientes en la Argentina que hasta hace poco estuvieron directamente integradas a las corrientes de la CTA.

Los “nuevos sindicatos” que han protagonizado procesos de ruptura son la excepción y el Partido Obrero acompañó y acompaña esos procesos incondicionalmente: el Sindicato de Subterráneos en su origen, la Asociación Gremial Docente Universitaria, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, entre esos casos.

La evolución de algunas expresiones de estas corrientes centroizquierdistas es esclarecedora, como el caso del sindicato telefónico, de gran tradición de lucha, donde un ala del peronismo y otra de la centroizquierda de la CTA, aliadas en la dirección del sindicato, se han transformado en los perros falderos de las poderosas compañías telefónicas, controladas por monopolios mundiales. Entregan sistemáticamente sus convenios colectivos y aceptan la precarización vía tercerizaciones y todas las variantes de la flexibilidad laboral. Solo aceptaron una minoría formal, que ocupamos a través de un frente del clasismo, formado por las corrientes del FIT, que juega un importante papel al igual que en el sindicato de subterráneos.

Hemos desarrollado fuertes agrupaciones en los sindicatos dirigidos por la centroizquierda a partir de estas caracterizaciones y la lucha política que de ellas deriva. En la provincia de Mendoza llegó el caso que sectores dirigentes de la CTA, del sindicato estatal ATE, muy poderoso en la provincia, se pasaron a las filas del Partido Obrero a partir de un balance político de todo el proceso de adaptación al sistema y abando-

nos y traiciones a las luchas obreras del centroizquierda. Pero, claro, esto es posible porque construimos el partido como una corriente al interior de los sindicatos, no fuera de ellos.

Oportunismo de izquierda: “cavar trincheras con la burocracia”

El oportunismo de la izquierda respecto de la burocracia sindical peronista ha transitado diversos andariveles. Pero no pretendemos aquí realizar una reseña histórica exhaustiva, sino marcar cuestiones vitales de la política revolucionaria. Un debate que marcó el período post Argentinazo fue la creación del Movimiento Intersindical Clasista, constituido en su fundación por activistas independientes, sin partido, provenientes de la crisis del morenismo, que jugaron un papel en las grandes luchas del subterráneo de Buenos Aires. En ese reagrupamiento, que resultó efímero por las contradicciones de las organizaciones participantes, militaron distintas vertientes de la diáspora morenista, algunas de las cuales están hoy en el Frente de Izquierda y los Trabajadores y en el Plenario del Sindicalismo Combativo.

La idea estratégica que los unió -y a la postre los llevó a la explosión como a otros intentos de estos sectores- fue la máxima de “cavar trincheras con la burocracia”. Es decir, reconocer la existencia de la burocracia sindical, pero aliarse a ella desde los agrupamientos de izquierda para progresar a la sombra de las organizaciones que ella domina. Desde ese lugar se pretendió asimilar a la podrida burocracia de la Unión Tranviarios Automotor -sindicato que agrupa a los choferes del transporte urbano e interprovincial colectivo de pasajeros-; al combativo cuerpo de delegados del Subterráneo que, mediante la acción directa de huelga, arrancó la conquista de la seis horas en conexión con una lucha parlamentaria del Partido Obrero (y el apoyo movilizador del Polo Obrero) en 2002/2003. El intento de formar parte de la burocracia peronista fue rechazado por la propia burocracia. De ese fracaso surgió la formación del nuevo sindicato de la actividad (AGTSyP), que hoy agrupa a la mayoría de los combativos trabajadores del sector.

Su máxima está acompañada por el concepto que “no se dan las luchas que se pierden”, una idea que ha llevado sistemáticamente a estos sectores a adaptarse a la flexibilización laboral, a los toques salariales, a la precarización y aún al despido de activistas en distintos sectores. Semejante derrotero inevitablemente conduce al abandono de las prácticas de la democracia sindical, para defender una variante de integración al Estado. La deriva de la dirección que propuso “cavar trincheras con la

burocracia” fue la progresiva integración al centroizquierda de la CTA y al kirchnerismo, del cual hoy son parte. Y por intermedio del kirchnerismo son parte del gobierno fondomonetarista de Alberto Fernández en un verdadero juego de muñecas rusas.

El maoísmo, desde que existe como resultado de las escisiones del PC en los '70, cava trincheras con la burocracia como política central. El ascenso del Argentinazo y el crecimiento de la izquierda en la última década lo obligó a integrar algunos frentes antiburocráticos. Pero la formación del “frente anti-Macri” los inclinó también a la integración al gobierno de Fernández, del que hoy son parte. Los “frentes antineoliberales” conducen invariablemente a transformar a la izquierda en furgón de cola de la burguesía. Porque en un frente de colaboración de clases predomina aquella que tiene el poder y el control de los medios de producción.

El oportunismo ha transitado las más variadas expresiones. En el caso del PTS ha sorprendido recientemente un llamado “a la CGT y la CTA a que se unan”, reproduciendo una política conservadora del morenismo de los '60, que planteaba la unidad de las dos CGT de la época, como si la unidad de las alas de la burocracia fuera a reforzar al movimiento obrero. En realidad, refuerza a la burocracia contra la clase obrera como agente patronal interior de los sindicatos. El Plenario del Sindicalismo Combativo que desarrollamos en otro capítulo, constituye una clara superación de esta política en favor de la independencia política de la clase obrera.

Por la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales

La ley de Asociaciones Sindicales es la columna vertebral en el plano jurídico de la integración de los sindicatos al Estado. Tiene una larga historia asociada a la regimentación del peronismo en los sindicatos desde 1945, año en que se redactó la primera ley de asociaciones abarcativa de todos los sindicatos. Luego fue reformada también por el peronismo en 1973, a la medida del pacto social y reforzando la burocracia golpeada por el proceso del Cordobazo. Y la que rige hoy, data del gobierno radical de Raúl Alfonsín, primer gobierno constitucional después de la dictadura, pero fue redactada por Oraldo Britos, un representante de la burocracia peronista en el Congreso de la época. Resumiendo, el peronismo es el autor político del edificio de regimentación de los sindicatos al Estado, del que se valen los gobiernos de todos los signos.

Nuestra lucha es por la derogación de la ley sindical y la más amplia libertad de organización de los trabajadores, donde el Estado no sea el árbitro de las elecciones sindicales, no maneje el régimen de “personerías gremiales” que aseguran el monopolio por actividad de la burocracia sindical, donde no se consagren con fuerza de ley estatutos sindicales proscriptivos, que llamamos “estatutos cárcel”, donde el control de cuentas no pase por los ministerios del Estado capitalista sino por el control obrero, donde las obras sociales que brindan salud a 11 millones de trabajadores no sean un coto de la corrupción y el poder de la burocracia sindical, sino que estén manejadas por direcciones electas por los trabajadores. Y donde los fueros o estabilidad gremial de los delegados y dirigentes sindicales estén asegurados sin que sea la burocracia sindical quién decida sobre la estabilidad o el despido de los delegados y activistas que organizan el movimiento fabril y en todos los lugares de trabajo. Otro enorme tema es la ausencia de representación proporcional en los sindicatos y centrales que asegure la intervención de las minorías en ellos.

En resumen, la derogación de la ley sindical es un aspecto de la lucha por la independencia política de los sindicatos y, con ella, de la lucha por la independencia política de la clase obrera de la tutela de los gobiernos y partidos capitalistas.

El trabajo en el movimiento obrero argentino por parte del clasismo, como un aspecto de la construcción del partido, está obligado a combinar todos los métodos de intervención, desde los abiertamente legales hasta los métodos clandestinos para eludir la represión patronal y de la burocracia sindical. En función de ese trabajo es que hemos elaborado un “manual del delegado clasista”, que arma a los activistas para ese trabajo y comienza su educación socialista acerca del papel de los sindicatos, de la burocracia sindical y del Estado. Caracterizando claramente que la burocracia sindical, no solo los “dirigentes ricos o millonarios”, como los llama el morenismo, sino todas sus variantes son agentes del régimen capitalista al interior de las organizaciones obreras. La expulsión de la burocracia y la recuperación para direcciones de lucha, combativas, antiburocráticas es fundamental para poner en pie una vanguardia clasista, ligada a la construcción de la izquierda revolucionaria.

Unidad de ocupados y desocupados

La cuestión de la organización de masas de los desocupados ha vuelto al primer plano de la escena nacional. Y con ella la cuestión de la

unidad de ocupados y desocupados. Durante los años del gobierno Macri, el avance de la crisis capitalista produjo un salto en la pobreza y en la desocupación, en particular desde 2018. Ya el XXV Congreso del Partido Obrero caracterizó, entre sus resoluciones, esta cuestión y relanzó al Polo Obrero, contra la opinión de Altamira, que caracterizó que el movimiento de desocupados ya no era un movimiento de lucha sino asistencial, lo cual es un restringido punto de vista sobre las organizaciones sociales ligadas al Estado, pero no al ancho campo de lucha de millones de desocupados.

El Polo Obrero retomó así su senda basada en los principios clasistas desarrollados en la etapa del Argentinazo: unidad de ocupados y desocupados, acción directa, independencia del Estado, organización asamblearia, programa político contra el uso de los desocupados como masa de maniobra para precarizar y rebajar los salarios con mano de obra a precio basura, pasaje a planta del Estado, participación en las medidas de lucha del conjunto de la clase obrera, frente único de organizaciones independientes del gobierno, construcción del partido obrero entre los elementos de vanguardia. Ese trabajo tomó carácter explosivo en 2018/19 y ligó todo su accionar a la lucha política contra el planteo de contención de las organizaciones sindicales y piqueteras con el “hay 2019”, para canalizar en el recambio capitalista todas las tendencias de lucha. En esos años se operó un salto organizativo, que ha continuado en los primeros meses del gobierno Fernández y especialmente desde la pandemia, porque el Polo Obrero es un canal masivo de lucha contra el hambre.

Por delegados paritarios electos por las bases y pliegos votados en asamblea

En la Argentina, las paritarias en las que se discuten salarios y convenciones colectivas de trabajo, pero fundamentalmente salarios, son muy valoradas por los trabajadores a lo largo de toda la historia de lucha del movimiento obrero. Pero, claro está, al calor de la inflación creciente en los últimos diez años adquirieron un papel fundamental. Por medio de paritarias a la baja, la burguesía, en acuerdo con la burocracia sindical, buscó rebajar los salarios y tanto el gobierno kirchnerista del último mandato como Macri, trataron de ir produciendo rebajas históricas en el poder adquisitivo. El objetivo fue bajar los costos laborales para incrementar la tasa de beneficio o atenuar su caída a costa de la superexplotación de los trabajadores.

Las paritarias han sido un terreno de desarrollo de nuestras agrupaciones clasistas y cuerpo de delegados combativos, exigiendo delegados paritarios electos por la asamblea para quitar el monopolio de la negociación a la burocracia, al igual que el debate y votación de los pliegos en asambleas. Por otro lado, la intervención permanente del Estado para condicionar las paritarias a topes de aumentos salariales, las transformaron sistemáticamente en una lucha política. En todos los planos, la lucha antipatronal es rápidamente una lucha contra el Estado. Vale para las paritarias, pero vale en todos los planos de las luchas obreras: despidos, precarización, cierre de plantas, fusiones y flexibilización, como la que ahora mismo intenta el gobierno peronista con Aerolíneas, solo por mencionar un ejemplo.

Dedicamos un párrafo a una cuestión, que fue gravitante en el pasado del nacionalismo burgués en la Argentina, y que analiza pormenorizadamente León Trotsky en sus análisis de las tendencias en los países semicoloniales y atrasados: los directores obreros en empresas nacionalizadas del capitalismo de Estado. Hoy no es un fenómeno dominante, pero recientemente ha sido nombrado un directo “obrero” de la burocracia sindical petrolera en YPF, sociedad anónima de mayoría estatal, que es un agente de la política de conjunto del sindicato, subordinada a la política privatista del gobierno y del conjunto de los monopolios que operan en la actividad. A esta política que solo ata aún más al sindicato al Estado y las patronales, oponemos el control obrero de la producción, la apertura de libros, las paritarias libres, la más completa independencia del sindicato de la administración patronal. Pero su accionar lo criticamos también desde el punto de vista de su función en ese directorio y de la falta de mandato de los trabajadores. En el caso del director obrero del Teatro Colón, su designación y objetivos es motivo de fuertes disputas políticas entre la poderosa burocracia del sindicato municipal de casi cien mil trabajadores y el clasismo en el que nosotros militamos con nuestra agrupación municipal.

Mujer y sindicatos

Las mujeres de la clase obrera, particularmente dentro de su activismo, también han sido, en distintas escalas, protagonistas de la ola verde de lucha por los derechos de la mujer y disidencias, el mayor eje de movilización de masas de 2018. También de enfrentamiento con el Estado, el Parlamento y, como demostró toda la batalla por el aborto legal, con las iglesias católica y evangélica, instituciones de fuerte arraigo dentro de la clase obrera.

La defensa del aborto legal en los sindicatos llevó a la vanguardia a confrontar por este derecho democrático con la posición de las direcciones de las centrales y de sindicatos burocráticos, todas tributarias del PJ y la Iglesia. Desde el pañuelazo en la CGT o en la CTA-A, hasta la virgen en escenarios de actos K, pasando por la negativa en bancarios a dar asueto a las trabajadoras para concurrir el 8M, y sin olvidarnos de la marcha a Luján (basílica icónica de la Iglesia) de todo el espacio del Fresimona (frente sindical moyano- kirchnerista), todas han sido situaciones que hemos podido explotar desde la Coordinadora Sindical Clasista, para confrontar con las burocracias y su posicionamiento estratégico de parálisis o freno a la lucha de la clase trabajadora. Han sido experiencias concretas que aportaron a la batalla desde el clasismo para la delimitación y ruptura del activismo con dirigencias burocráticas y, por lo tanto, para el reclutamiento a nuestras agrupaciones.

Lo propio fue extensivo al debate con el “frente anti-Macri” y con los bloques políticos que lo integran -incluidas las izquierdas y centroizquierda, y comenzando por su cabeza, el kirchnerismo. Ya en las asambleas de mujeres hacia el 8M fue uno de los puntos de choque, donde los sectores K y pro-K sostenían que para lograr aborto legal primero había que ganar las elecciones, intentando borrar de la memoria a los doce años de cajoneo del proyecto durante las presidencias K. Hoy, el feminismo ligado al kirchnerismo se ha pronunciado en favor de la reestructuración de la deuda, lo que lleva al punto muerto de la subordinación al FMI y al ajuste, enemigo jurado de todas las reivindicaciones de la mujer trabajadora. La campaña por el aborto legal como un derecho elemental va de la mano de la separación de la Iglesia del Estado, otro punto determinante de clarificación política y avance político.

Esta política la llevamos adelante mediante la organización clasista y socialista de las propias mujeres revolucionarias, organizadas en el Plenario de Trabajadoras, organización de la mujer fundada y dirigida por el Partido Obrero.

Esta política es llevada en las comisiones de género de todos los sindicatos, pero especialmente a través de nuestras agrupaciones. Y, desde ese lugar, participamos con miles de compañeras en los Encuentros de la Mujer que se realizan anualmente.

El otro gran eje de nuestro trabajo en los sindicatos tiene que ponernos a la cabeza de la denuncia de la situación de la mujer trabajadora y la organización para defender sus reclamos. Como parte de la ofensiva capitalista sobre el movimiento obrero, la mujer trabajadora y sus de-

rechos es uno de los blancos del ajuste. A la desigualdad de salarios, en función de ser las que ocupan los puestos más descalificados o más bajos del escalafón, se suman el incumplimiento y vulneración de obligaciones legales por parte de las patronales, sean privadas o estatales, y la arremetida contra conquistas en los distintos convenios de trabajo. A los bajos salarios, se suma el aumento de la flexibilidad laboral lo que hace, en muchos casos, imposible a las trabajadoras con hijos o con mayores a cargo (situaciones que recaen sobre la mujer dada la doble opresión que sufren) mantener su puesto en la producción, profundizando así la sumisión y dependencia que padecen la mayoría de las ellas.

En este momento de ofensiva patronal, aspectos de la reforma laboral potencian la flexibilidad en perjuicio de las trabajadoras. Al aumento de las horas de trabajo se agregan los turnos rotativos o el banco de horas (sistemas existentes en importantes convenios industriales). La posibilidad de fraccionamiento de vacaciones o su otorgamiento en períodos que no coinciden con el receso escolar, el no respeto a las licencias o la ausencia de ellas (licencias por violencia de género, enfermedad de familiar, día femenino) hacen imposible en muchos casos el cuidado de los niños o la atención de problemas familiares elementales. Al incumplimiento de las patronales de brindar salas o jardines materno-patrenales en los lugares de trabajo se agrega el incumplimiento del Estado en brindar establecimientos educativos públicos y gratuitos, donde los niños puedan permanecer y formarse durante la jornada laboral de sus padres y madres.

Desde la CSC transformamos estos problemas en un centro de nuestra militancia. No es un problema sólo de la mujer trabajadora. Si como socialistas luchamos contra la doble opresión, la batalla por todo el pliego de las obreras, tiene que ser tomado de conjunto. Nuestras agrupaciones son abanderadas de estos reclamos, que son, como otras conquistas de los trabajadores, ninguneadas o entregadas por las burocracias sindicales. Tenemos el magnífico ejemplo de la huelga de Textilana y sus reclamos, como una muestra de la situación de terrible opresión y explotación de las trabajadoras y de la fortaleza de su lucha, donde nuestras compañeras han jugado un gran papel desde el cuerpo de delegados.

En la Argentina se sucedieron cinco paros nacionales, impulsados por las mujeres en torno del 8 de Marzo y en torno de un femicidio que generó un escándalo social, el de Lucía Pérez. Ante cada una de estas instancias batallamos contra la política de la burocracia sindical de todo

pelaje de adjudicar a la jornada un perfil ideologista, materializado en el armado de paros solo de mujeres, intentado separar estas acciones de los reclamos concretos a las propias burocracias sindicales, al Estado y a las patronales.

Los paros en defensa de las mujeres intentaron ser desviados para justamente borrar la huella de los reclamos concretos, como licencias especiales para las mujeres, espacios de cuidados de los niños, acceso a todos los niveles de los escalafones. Muchos de estos derechos fueron perdidos por la propia acción de esas direcciones, que dejaron pasar desde los '90 convenios flexibilizadores y multifuncionales.

Nuestra intervención en el movimiento de mujeres con una posición socialista y de clase nos ha permitido ensanchar el campo de acción del conjunto del movimiento obrero, incrementando los reclamos, visibilizando las demandas particulares de las mujeres trabajadoras, poniendo al desnudo los lazos de las iglesias y los sindicatos como pilares de la contención social en nuestro país; en definitiva, otorgando fuertes elementos de delimitación a la acción clasista en los gremios y desarmando así el intento de utilizar la demanda de las mujeres como una fuente de división al interior de la clase obrera, excusa utilizada por muchos sectores que se reclaman trotskistas para eximirse de participar en un movimiento de masas.

Recuperación de los sindicatos, expulsión de la burocracia y agrupaciones clasistas

Los sindicatos argentinos están dominados en su abrumadora mayoría por las distintas alas de la burocracia sindical. Pero frente a esa circunstancia, nuestra política no es ignorarlos o militar fuera de ellos, sino luchar por su recuperación con el método del frente único anti-burocrático. Esa lucha estratégica por una nueva dirección del movimiento obrero, de clase, independiente del Estado y de las patronales, basada en la democracia sindical empieza por los cuerpos de delegados fabriles y aún de cada sección fabril y así en todos los ámbitos del movimiento sindical, en bancos, escuelas, universidades, etc.

Somos ajenos al basismo, que ha formado parte en distintas etapas de la política del morenismo y de sectores independentistas filo-nacionalistas. No luchamos contra toda dirección del movimiento obrero, sino por una nueva dirección clasista, ligada a la lucha por un gobierno de trabajadores. El basismo llevó al morenismo a la política sintetizada en la consigna “que las bases decidan”. Con ella llegó al extremo de car-

nerear paros de las centrales obreras en los '80, explotando el repudio a la burocracia, mezclado con la presión patronal contra las medidas de acción gremial de los trabajadores, justamente en oportunidad de un paro general, que siempre es político y siempre es una expresión de conjunto, clase contra clase, aunque limitada y destinada a liberar tensiones de la lucha de clases. Cuando criticamos las limitaciones de la burocracia, lo hacemos desde la trinchera de la lucha, nunca contra ella.

La herramienta por excelencia de esta política es la agrupación sindical, que proyecta la política revolucionaria del partido en los sindicatos. Aunque en ocasiones la vanguardia obrera de un gremio puede constituir agrupaciones que reúnen al activismo combativo, corresponde integrarlas para desenvolver una experiencia de frente único, y a través de ellas conquistar a los mejores activistas para la construcción obrera y socialista del partido.

Nuestras agrupaciones a menudo unifican al trabajador bajo convenio con otros tercerizados, que son superexplotados mediante convenios basura. En esa batalla precisamente, la burocracia sindical ferroviaria mató a Mariano Ferreyra en 2010, un militante obrero y estudiantil del partido, que acompañaba junto al Polo Obrero y otras organizaciones de lucha a los tercerizados en el ferrocarril más numeroso del país. La lucha por la cárcel de sus asesinos materiales e intelectuales se transformó en una de las grandes batallas políticas del PO y del activismo de izquierda en la Argentina y fue, en un sentido, antecesora de la formación del Frente de Izquierda y los Trabajadores al año siguiente, encabezado por el PO por la autoridad ganada y por su desarrollo. Recientemente, la agrupación Lista Gris Mariano Ferreyra encabezó una lista antiburocrática que agrupó a toda la izquierda y que obtuvo el 33% de los votos entre los 5.000 trabajadores participantes. Estuvimos a la cabeza de la única experiencia en la que un secretario general de un gran gremio fue a parar a la cárcel por el crimen de un activista y murió preso.

En resumen, somos constructores de los sindicatos a partir de agrupaciones clasistas que intervienen en las luchas, que son constructoras a su vez de los sindicatos, incluso afiliando a sus filas en los lugares desindicalizados, pero haciéndolo bajo el lema de la recuperación del sindicato para los trabajadores.

Por el Congreso de Bases de todo el movimiento obrero

Una consigna que ocupa un lugar de importancia política de conjunto en el movimiento obrero es el Congreso de Delegados de Bases

-o sea, un congreso de todos los sindicatos y centrales, de ocupados y desocupados, basado en delegados electos por los trabajadores. Se trata de una aproximación a un planteo soviético a partir de la realidad del movimiento obrero y cuestionando la usurpación de la dirección de los sindicatos (y organizaciones de desocupados) por parte de la casta de la burocracia sindical, agente de la patronal en ellos.

Es una consigna que, siendo parte permanente de nuestro programa, debe ajustarse al momento político que vive el movimiento obrero. Al momento de sus luchas, de los debates planteados, de la relación de la burocracia con el gobierno de turno. En esta etapa del gobierno del nacionalismo burgués, que la burocracia integra maniatando a los sindicatos al carro directo del Estado, la acompañamos con el planteo “que la CGT rompa con el gobierno”, un planteo que tendrá vigencia mientras la cuestión del pacto social domine el escenario. Se trata en ambos casos de planteos destinados a separar a las masas del nacionalismo a partir de sus demandas, por intereses inmediatos que chocan con la política del gobierno que votaron y en el que tienen expectativas.

Por otro lado, y fundamental, el Congreso de Bases implica un método de intervención por aproximaciones. Sin que hayamos conseguido un congreso nacional de bases, que indudablemente correspondería a una etapa de ascenso prerrevolucionario o revolucionario, hemos logrado grandes plenarios de sindicatos, delegados y activistas, por ejemplo en las provincias de Santa Cruz o Mendoza, que fueron impulsos muy importantes a la lucha en su conjunto y al progreso y expresión en ellas del clasismo.

La idea de un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis se asocia a un congreso de trabajadores que debata esa perspectiva, tendiendo un puente para ayudar a los trabajadores a transitar una experiencia respecto de su posible papel como clase dirigente en la salida a la crisis capitalista. Se trata de un planteo que lleva a tierra la cuestión de poner en pie una oposición obrera y popular al gobierno, que ocupe el lugar que hoy ocupa la derecha ante el gobierno de Alberto Fernández y que ayer ocupaba el peronismo respecto del gobierno de Macri.

Frente Único e independencia de clase

El Plenario del Sindicalismo Combativo nace en 2018, a iniciativa de los sindicatos en cuya dirección participa la Coordinadora Sindical Clasista, que nuclea a todas nuestras agrupaciones. Se trató de una convocatoria de frente único hacia otras direcciones sindicales de

izquierda y combativas, que maduró a través de un proceso preparatorio. Especialmente en la gestación e intervención en un gran plenario de 500 activistas sindicales en la provincia de Neuquén, en la etapa de una gran huelga general de la docencia de aquella provincia, que lograría imponer la indexación de los salarios. Dicho en las palabras del *Programa de Transición*, la escala móvil de salarios, para acompañar el costo de vida mediante aumentos equivalentes de los salarios. La huelga, de gran protagonismo de las seccionales clasistas recuperadas (en la capital provincial y otras) se proponía llevar el salario inicial al costo de una canasta familiar patagónica, puesto que en esa zona austral del país el costo de vida es superior al del resto del país. Ese objetivo no se alcanzó, pero se logró un aumento que se sostendría en el período posterior mediante esa cláusula de actualización por inflación.

Por supuesto, como siempre en esta etapa histórica del imperialismo de ofensiva contra las masas, toda conquista es provisional y estará sujeta a futuros ataques para desandar el terreno conquistado por los trabajadores. Pues así será hasta la reorganización de la sociedad sobre otras bases sociales, un objetivo que sólo puede conseguirse por medio del gobierno de los propios trabajadores.

Luego de aquella experiencia preparatoria en Neuquén y otras provincias, se convocó un plenario nacional en un estadio (Lanús), que reunió casi dos mil dirigentes sindicales, delegados y activistas. Su convocatoria y su existencia de frente único, nada sencilla en el marco de las distintas corrientes que lo integran, se hizo a partir de los sindicatos y seccionales sindicales recuperados.

La convocatoria se realizó desde el Sutna (Neumáticos), Unión Ferroviaria Oeste, AGD (docentes universitarios), Ademys (docentes), Sindicato de Ceramistas de Neuquén, Suteba combativos varios (docentes de la provincia de Buenos Aires), Aten capital de Neuquén (docentes), minoría de Cicop (médicos de la provincia de Buenos Aires), municipales de Coronel Suárez, Amsafe (docentes de Rosario), dirigentes de ATE (estatales) Mendoza, desde minorías clasistas en distintas comisiones directivas de Subte y telefónicos, entre otras, y decenas de cuerpos de delegados de grandes hospitales, fábricas gráficas, de la Alimentación, delegados siderúrgicos, entre otros. En el plenario participaron invitados importantes, delegaciones como de la Comisión Directiva de Adosac de Santa Cruz (sindicato docente de esa provincia).

Debemos consignar en este punto que el PTS no integró el PSC a través de sus activistas sindicales y, al contrario, lo ha boicoteado en su

inicio, votando no constituirlo en las representaciones sindicales que integran, por ejemplo Ceramistas de Neuquén o los Suteba combativos. Se trata de una política sectaria y oportunista al mismo tiempo, de tipo electorera, que retrata una opción de los últimos años en esta organización, que los ha llevado a un sensible retroceso en el movimiento obrero. En cambio, la participación del MST en el PSC dio cuenta de su ruptura práctica con la centroizquierda de la CTA y fue un antecedente de su incorporación al FIT-Unidad. No obstante, esta política del PTS, se vio obligado a participar de numerosas iniciativas de lucha del Plenario, sin suscribir el programa de Lanús.

Los sindicatos y el clasismo en la pandemia

Como todos, y como en todos los lugares del mundo, el Partido Obrero, como parte de la izquierda revolucionaria, está escribiendo ahora mismo la página de la intervención en la pandemia y, desde luego, de la intervención clasista en los sindicatos en oportunidad de la cuarentena y de la pandemia.

Al momento de terminar estas líneas, el Plenario Sindical Combativo ha difundido una declaración al movimiento obrero, criticando el pacto Unión Industrial, CGT y gobierno de Alberto Fernández, mediante el cual habilitan la rebaja de salarios durante la próxima etapa, en unidades de producción en cuarentena, con cuarentenas parciales o aún sin ellas, por la simple caída en la ventas y facturación de las empresas, que es generalizada en el cuadro de recesión y depresión económica abierto.

El Plenario Sindical Combativo venía de denunciar toda la política del gobierno de Alberto Fernández, dictada por el rescate de la deuda externa en virtual default, mediante un canje que significa, como en Grecia o Portugal, un ajuste ahora mismo y por toda la etapa que viene, incluida la intervención del FMI en esos planes, puesto que uno de los grandes acreedores argentinos es el Fondo. También la del Club de París, compuesto directamente por distintos Estados imperialistas de la Unión Europea, que han condicionado cualquier replanteo de la deuda con el Club a un acuerdo con el FMI.

El Partido Obrero ha realizado una gran campaña contra el robo de la movilidad jubilatoria realizado por el gobierno peronista previamente a la pandemia y ahora otra vez. Esa ofensiva no se ha atenuado con la pandemia, todo lo contrario. El capital descarga la crisis capitalista, agravada por la pandemia, sobre las espaldas de los trabajadores

mediante despidos, rebajas salariales, suspensiones, y ejecutando una reforma (anti)laboral de hecho, que se ejecuta explotando la debilidad de los explotados ante la caída económica, en ausencia de direcciones de clase para defender consecuentemente sus derechos.

Llevamos algunas semanas de experiencia. En los primeros tramos hemos defendido la cuarentena que violaban las patronales, ahora, ante la flexibilización de la cuarentena intervenimos defendiendo la integridad del salario, la estabilidad laboral y los protocolos de salud para proteger a los trabajadores del contagio. Se han producido luchas en la carne, entre los mineros, ceramistas, gráficos, metalúrgicos, entre los propios docentes encuarentenados que, en un primer momento fueron convocados a ir a las escuelas en la provincia de Buenos Aires, aún sin clases. También en defensa de los derechos de docentes y estudiantes ante la virtualización educativa forzada.

El movimiento en la salud se ha ido extendiendo entre los trabajadores del sector de todas las profesiones y especialidades en asambleas, movilizaciones y aún paros comunes. Recientemente hemos realizado una reunión on-line de Tribuna de Salud, nuestra agrupación, con casi doscientos participantes, que ha definido un programa y objetivos ante la lucha planteada: provisión de elementos y respeto de protocolos de protección, respeto de turnos, adicionales salariales, carrera profesional de enfermería, etc., a partir de comisiones de control de los propios trabajadores.

Desde luego, estos planteos de los trabajadores se asocian a la exigencia de una inversión masiva de recursos en la ampliación de la capacidad hospitalaria, adquisición de camas y respiradores, y a la centralización del sistema de salud en un sistema único del sector público, privado y de obras sociales. Este planteo ha sido central en la agitación política desde el primer momento por parte del Partido Obrero y del Frente de Izquierda.

En nuestras agrupaciones desarrollamos la agitación reivindicativa ligada al planteo de que la crisis la paguen los capitalistas y por una salida de los trabajadores, expresada en los puntos centrales desarrollados por el Partido Obrero: centralización del sistema de salud, comisiones electas por los trabajadores de control obrero en los establecimientos de salud y en todo el movimiento obrero, reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, prohibición de despidos y suspensiones, actualización salarial por inflación, 30.000 pesos de seguro al desocupado, al trabajador en negro y cuentapropista, efectivización bajo convenio

colectivo de los trabajadores precarizados, defensa de la movilidad jubilatoria y el 82% móvil, administración de los trabajadores y jubilados de la Anses, estatización bajo control obrero de toda empresa que cierre, no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, por un plan económico y social de los trabajadores de salida a la crisis.

Los trabajadores han empezado a intervenir con paros, movilizaciones y reclamos de todo tipo. El movimiento abarca a los más diversos gremios, pero interesa destacar que algunas direcciones clasistas han obtenido compromisos que desnudan a la burocracia sindical, por ejemplo en el Neumático, obteniendo el total del salario durante las suspensiones en las fábricas de la actividad; lo mismo en la gráfica Morvillo, una de las más importantes, luego de un paro de los trabajadores. Estas conquistas no han pasado desapercibidas en el mundo sindical. Otros sectores han impuesto también límites a las patronales, como la fábrica metalúrgica sueca SKF o los ceramistas de Olavarría, en importantes empresas de la zona industrial cementera de esa localidad. De inmediato sobrevino otra gran batalla en la que estamos inmersos ahora: la de los protocolos de protección sanitaria, donde impulsamos su elaboración y control obrero por parte de comisiones electas por los trabajadores o mandatando a los cuerpos de delegados existentes mediante asambleas, algo en los que también resalta el Sutna (neumáticos) y un vasto movimiento en los gremios de la salud. El Polo Obrero ha encabezado importantes movilizaciones que fueron el debut de la acción callejera de los trabajadores con la consigna “Con hambre no hay cuarentena”, levantando todas las reivindicaciones del sector. Sus ollas populares, el 1° de Mayo, en la previa del acto internacionalista del Frente de Izquierda, congregaron a miles y miles de trabajadores sin ingresos.

Esta historia empieza a escribirse. Pero, tal vez como nunca antes, la construcción revolucionaria en los sindicatos se asocia a una agitación política que pone en el tapete qué clase pagará la crisis y qué clase es capaz de ponerse al frente de una salida contra la catástrofe capitalista que ya nos inunda. Nuestro afiche en este momento, dice “La deuda o la vida”. Y nuestra consigna es “que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores”.

Sobre los partidos amplios y el NPA

(Intercambio para el debate con los compañeros de L'Étincelle)

Rafael Santos

Desde el *Manifiesto del Partido Comunista* en adelante, los socialistas revolucionarios han incorporado a su programa y estrategia la necesidad de poner en pie partidos obreros revolucionarios y una Internacional Obrera Revolucionaria, como requisito fundamental para la lucha y el triunfo de la revolución socialista.

Trotsky definió el problema en forma dramática, al plantear en el “Programa de Transición”: “La crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección revolucionaria”.

Partiendo de esta premisa -que compartimos-, el debate se abre en torno de qué características deben tener esos partidos revolucionarios y cuáles son las posibilidades reales para construirlos.

Para responder en forma metodológicamente correcta estos interrogantes, debemos caracterizar en primer lugar el momento histórico-político que vivimos: ¿estamos en una época revolucionaria?

La caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS y el proceso abierto de restauración capitalista ha llevado a que gran parte de la izquierda que se reclamaba revolucionaria haya llegado a la conclusión de que el período histórico que abrió la revolución rusa de 1917 se ha cerrado. Se trató -de parte de estos sectores- de una caracterización impresionista, pequeño burguesa, tributaria del pensamiento ‘crítico’

burgués. Aceleró en estas corrientes un curso de adaptación a la sociedad burguesa, en especial con fórmulas democratizantes. Y aceleró su renuncia, incluso desde el punto de vista formal, a las formulaciones programáticas comunistas. Lo que ha predominado fue el abandono del programa que propugnaba la lucha revolucionaria por la dictadura del proletariado, en favor de una política de revalorización y adaptación a la democracia burguesa.

Si no hay época revolucionaria, si la burguesía ha logrado un dominio histórico del mundo imponiendo el 'fin de la historia', no haría falta, tampoco -sería utópico y perdería su actualidad- la lucha por construir un partido revolucionario.

Esa caracterización era y es incorrecta. Nuestro partido (y la CRCI), en cambio, caracterizó que el proceso de la restauración capitalista en los Estados que habían expropiado al capital, no era lineal, sino caótico. Que, en definitiva, iba a ampliar la magnitud de la crisis de conjunto del sistema capitalista mundial a una escala catastrófica superior, replanteando la emergencia de la creación de situaciones revolucionarias. Lejos de abrirse una etapa de estabilidad y revitalización del capital, ingresábamos a un escenario convulsivo. Hoy, no se puede negar que estamos ya sumergidos en esta situación de bancarrota capitalista, que repercute en choques crecientes entre las clases, planteando agudas crisis y giros políticos y entre los Estados, impulsando crisis internacionales y un firme curso guerrerista. Desde fines de 2018 se han desarrollado rebeliones populares en todo el planeta. Africa, Asia, América Latina, Europa (¡Francia!), incluso en el propio Estados Unidos, han visto un fuerte despertar de la lucha de clases, incluyendo rebeliones y que han volteado regímenes gubernamentales, etc.

En este cuadro de polarización política y social creciente, donde van a tallar la derecha fascistoide, por un lado, y rebeliones populares, por el otro: qué clase de partidos debemos construir los trabajadores y los revolucionarios.

Partidos revolucionarios de combate

La crisis de dirección revolucionaria que planteaba Trotsky se ha profundizado, porque ahora abarca incluso a organizaciones que se propusieron conscientemente superar la traición contrarrevolucionaria del stalinismo y la socialdemocracia, creando partidos y una Internacional revolucionaria. Nos referimos a la gran diáspora trotskista que se reclama(ba) de la IV Internacional. Su involución y en muchos

casos su estallido directo se deben no a problemas meramente organizativos, sino a profundas falencias político-programáticas.

El partido revolucionario de la clase obrera es un partido de acción, que se prepara activamente para intervenir y dirigir una revolución obrera socialista en este caos de bancarrota capitalista y creciente polarización político-social. Es necesario reagrupar todas las fuerzas posibles de los revolucionarios con esta perspectiva: crear partidos de lucha revolucionaria y una Internacional de combate que permita intervenir activamente en la lucha de clases, con el objetivo estratégico del combate por el poder.

Esto *no* se puede improvisar en el curso del estallido mismo de un proceso revolucionario. El partido debe estar organizado *a priori*, dotado de un planteamiento estratégico-programático de lucha por el derrocamiento de los gobiernos capitalistas y la instauración de gobiernos obreros. Sin programa revolucionario no hay movimiento revolucionario. En ese sentido, el partido revolucionario es el programa revolucionario. Este programa, que se va enriqueciendo en el proceso de la lucha de clases, debe estar sometido a una praxis: a la prueba de la capacidad de ese partido para intervenir en la lucha de clases, ligarse a las masas y organizarlas revolucionariamente, en primer lugar a su vanguardia, en su propio seno.

Semejante partido de acción revolucionaria presupone métodos que le permitan jugar ese papel activo en todo el proceso de la lucha política y de clases, y en el proceso insurreccional revolucionario llegado el caso. Es necesario que el partido revolucionario esté organizado bajo los métodos del centralismo democrático. Un debate interno, permanente, sobre las orientaciones y una política votada mayoritariamente, a la que se subordina en la unidad de acción toda la organización. La III Internacional de Lenin y Trotsky ha sacado documentos que insisten reiteradamente en la necesidad de construir estos partidos de combate revolucionarios, bajo los principios del centralismo democrático.

Las tesis sobre los métodos y la organización de los partidos comunistas, votadas por la III Internacional, insisten en que la propaganda y agitación políticas son una característica fundamental de un partido revolucionario. La III Internacional llega a calificar a esta como “nuestra tarea más importante antes del levantamiento revolucionario declarado”. En esto, la III Internacional continúa la experiencia del partido bolchevique, que creció y se desarrolló interviniendo a fondo en la agitación política sobre todos los problemas políticos y sobre todas las

clases. La lucha política es una lucha de partidos. Y el partido revolucionario del proletariado debe mostrar sus credenciales interviniendo en esa lucha política: desarrollando la denuncia y el programa revolucionario, impulsando la organización independiente y la acción directa de las masas.

Escrito en 1902, el libro de Lenin, *Qué Hacer*, mantiene su plena vigencia política-histórica (como en general son todos los programas del movimiento revolucionario). Hoy en día, más que nunca, un partido revolucionario no puede limitarse a ser el más consecuente defensor de las luchas sindicales y reivindicativas: debe trabajar incansablemente por elevarse como dirección política alternativa al Estado y los partidos burgueses. Sin un trabajo permanente, metódico, de agitación política revolucionaria eso es imposible. Y esto no se puede desarrollar sin partidos revolucionarios de combate.

La izquierda que ha abandonado el programa revolucionario de la lucha por el poder, por la dictadura del proletariado y la revolución también entiende que un partido político que se reclame de los trabajadores debe intervenir activamente en el debate político y presentarse como alternativa. Pero cree que esa intervención solo es posible -o es el terreno privilegiado- en el marco de las elecciones y el parlamentarismo burgués.

Los llamados partidos de tendencias son antirrevolucionarios, renuncian a una intervención militante cotidiana en la lucha de clases y a transformarse en un canal de la organización independiente y de la militancia obrera revolucionaria. Los llamados "partidos amplios" son la sumatoria de diversas tendencias -que actúan como minipartidos-, renunciando al centralismo democrático, porque no lo necesitan, porque no tienen planteada una intervención revolucionaria en la lucha de clases con la perspectiva de la lucha por el poder.

El rechazo a los partidos amplios es una marca registrada del marxismo desde sus fuentes, o sea, arranca con Marx y Engels, quienes -recordemos- se opusieron a la unión del partido socialdemócrata alemán, liderado por Bebel con Lassalle. Plantearon establecer, a lo sumo, una alianza de características puntuales, pero se opusieron a poner en pie un partido único entre tendencias con planteos programáticos, perspectivas y estrategias disímiles e incluso contrapuestas. El cuestionamiento de los fundadores del marxismo quedó consagrado en la célebre *Crítica al programa de Gota*, publicado en 1875, y que fue silenciada por los dirigentes del partido socialdemócrata alemán hasta 1895.

Dentro de un partido revolucionario de combate, el debate político puede (y da) lugar a la formación de tendencias enfrentadas en torno de divergencias políticas y programáticas. Pero el partido no está estructurado sobre la base de tendencias permanentes. La existencia del debate democrático y la formación de tendencias en el partido revolucionario, bajo los principios del centralismo en la unidad de acción, impide, metodológicamente, que las diferencias existentes puedan culminar en rupturas. La discusión entre tendencias (congresos, boletines internos, etc.) debe culminar en una acción unitaria común, de intervención en la lucha de clases. Es, lógicamente, natural que existan divergencias políticas y que la militancia discuta activa y apasionadamente esas diferencias. Como diría Napoleón, transportado a nuestra época, cada militante es en sí mismo una tendencia: en su mochila de combate están sus ideas y su capacidad de expresarlas. Porque tienen que ver con el desarrollo de la actividad militante. Pero los congresos, como instancia última, terminan resolviendo mayoritariamente la línea política y de intervención o habilitan para que estas tendencias se expresen por nuevos períodos. No son tendencias orgánicas permanentes, estructuradas ad infinitum. En el partido bolchevique, una lucha que puso al partido al borde de la escisión fue la que desarrolló la llamada fracción de izquierda, liderada por Bujarin, en oportunidad del debate sobre la firma de la paz de Brest-Litovsk con el imperialismo alemán. Lenin llegó a reconocer el 'derecho' a la escisión para la misma, pero rechazó la no aplicación de la posición que votara la mayoría, no la ruptura del centralismo democrático. Esta tendencia -que tenía toda una concepción sobre la necesidad de que el Estado soviético desarrollara una guerra revolucionaria contra el capital- fue muy a fondo, pero terminó durando poquísimos meses y se terminó disolviendo, superada la difícil emergencia. Eran militantes 'educados' en la integración de un partido de combate. Los integrantes de esta tendencia de izquierda terminaron enrolados en futuros reagrupamientos políticos de diverso tipo (Bujarin, en la derecha junto a Stalin, etc.). El no reconocimiento del centralismo democrático lleva al liquidacionismo, muchas veces impulsado por camarillas descompuestas. Es lo que sucedió a nuestro Partido Obrero, que luego de desarrollar un fuerte proceso de debate político (boletines internos, plenarios partidarios, conferencias nacionales y provinciales, etc.), culminó en su 26° Congreso. Impuesta una orientación de intervención completa y concreta por amplísima mayoría, Altamira -después

de haber participado y reconocido en el propio congreso la vigencia mayoritaria de sus resoluciones- terminó rompiendo.

Un partido que se estructura sobre la base de la constitución permanente de tendencias no es un partido de acción. No busca una definición para intervenir en lucha de clases. Es, en ese sentido, impotente. Cada tendencia hace su juego, la mayoría de las veces fuertemente contrapuestos, edita sus propios periódicos y volantes, levanta sus propias consignas.

Generalmente, estos partidos de tendencias están estructurados para intervenir en los procesos electorales, donde las candidaturas centrales son digitadas en luchas de camarillas en el seno de la dirección 'conjunta', donde se negocia un reparto de puestos, eventualmente expectables a ser electos.

No cabe duda que es necesario participar en las elecciones burguesas, porque estas son una instancia de fuerte lucha política. Y si una organización que se reclama revolucionaria no puede porque no logra superar los requisitos proscriptivos que suele colocar la burguesía para excluir a la izquierda, significa que aún es una organización débil. De igual manera, también es importante, como parte de la actividad revolucionaria, participar en los parlamentos burgueses. Porque se puede hacer, desde ellos, un fuerte trabajo de agitación política que complemente y potencie la actividad que desarrolla en su lucha cotidiana el partido revolucionario.

Pero la izquierda democratizante y oportunista coloca a éste como el terreno central -y a veces único- de la lucha política. No es un instrumento, sino un fin. Se adapta al parlamentarismo burgués. Van al Parlamento no como revolucionarios que lo denuncian como una institución al servicio de los capitalistas, como una 'dictadura' que defiende los intereses de las clases dominantes contra el pueblo trabajador, al que hay que superar con la revolución y la dictadura del proletariado. Hay un abandono de la perspectiva revolucionaria y una adaptación al parlamentarismo y al Estado burgués. Esto entraña también un principio de corrupción política, donde el centro de la preocupación de esta izquierda democratizante es avanzar en la conquista de bancas (que -en la sociedad capitalista- habilitan a privilegios y corrupciones).

La necesidad del centralismo en la actividad del partido aparece -para estas corrientes- relativizada, subordinada a las roscas de fracciones y camarillas por candidaturas. Y en el mismo terreno se abre camino a las tendencias a la conciliación de clases, a los frentes con partidos

burgueses y pequeños burgueses, que suelen presentarse como ‘nacionalistas’ (en los países atrasados) y/o ‘progresistas’; en definitiva, a los frentes populares o de conciliación de clases. Su progreso es medido por la conquista de bancas y cargos en el aparato estatal. Una quiebra de la independencia de clase y la entrega de la estrategia de lucha revolucionaria por el poder obrero.

La experiencia del PT y el Psol de Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil nació como parte del proceso de crisis de la dictadura militar en Brasil a fines de la década del '70 del siglo pasado. Un fuerte proceso huelguístico, fundamentalmente en los cordones industriales de San Pablo, chocaba contra la dictadura. Estas luchas se proyectaron al plano político, impulsadas por una nueva burocracia sindical combativa -que estuvo en gran medida al frente de las huelgas obreras- con la participación de núcleos intelectuales de centroizquierda e incluso sectores de “la liberación” de la Iglesia. También participaron en su fundación la casi totalidad de los grupos y partidos de izquierda. El PO, una parte de cuya dirección y militancia estaba exiliada en Brasil, apoyó activamente este proceso. El PO consideró legítimo, dada la irrupción de masas obreras en la lucha política, participar de su creación y luchar por constituir en su seno una fracción revolucionaria.

No se nos escapan las contradicciones de este giro. El PT nació como parte del movimiento de lucha obrera y popular contra la dictadura y el sistema de partidos burgueses existentes. Pero no como un partido revolucionario, ni siquiera obrero, a pesar de que gran parte de su base de afiliados eran obreros industriales de grandes fábricas. El PT se desarrolló, prácticamente desde sus inicios, como un partido de tendencias. La dirección fue crecientemente copada y usurpada por un núcleo de la burocracia sindical lulista y la intelectualidad ‘progre’. La base militante fue crecientemente relegada. Se fue estructurando en torno de las campañas electorales y avanzando en acuerdos con la burguesía, incluso en sus variantes derechistas. Lula llegó a la presidencia en una alianza de frente popular y dando fuertes garantías al establishment internacional. Esta es la evolución del partido de tendencias. La dirección lulista -al calor de su entrelazamiento con la burguesía- fue echando a las corrientes que bregaban por planteos de independencia de clase o críticos y avanzando en la regimentación-domesticación del PT, colocando a la base obrera y la militancia en situación de espectadores en la vida partidaria.

El Psol se constituyó en 2004, luego de que la gran mayoría de los dirigentes de lo que va constituir este nuevo nucleamiento fuera expulsada por Lula por críticas que realizaron a la política derechista en el primer año de su gobierno.

Pero tampoco se constituyó como partido obrero ni revolucionario, ni de combate. Se planteó de entrada su estructuración como partido de tendencias, situación que se mantiene hace 16 años. Su dirección nacional, integrada mayoritariamente por dirigentes centroizquierdistas, repitió los pasos del lulismo. Se constituyó como camarilla, consolidando su 'mayoría' con una regimentación fraudulenta. Su tendencia estratégica es de carácter electoralista, no revolucionaria ni de intervención sistemática en la lucha de clases. Cada 'tendencia' es, en realidad, un pequeño partido separado, eventualmente con su prensa y consignas propias. Su dirección ha colocado al Psol como 'colectora' subsidiaria del PT lulista. Realmente han vuelto a "los orígenes del PT", pero en el momento en que este ha perdido toda progresividad, es un partido del 'orden', integrado plenamente al sistema político burgués. El Psol no tiene un programa de lucha por la independencia de clase. No fue nunca un partido socialista revolucionario ni sustentando en la militancia. Gran parte de sus diputados acompañan votaciones derechistas en el Parlamento y hacen lo que quieren, sin recibir ninguna sanción o expulsión. El Psol se constituyó políticamente como una variante tipo Syriza de Grecia o Podemos de España. A pesar de que ha crecido marginalmente, en la última elección en número de votos y en la conquista de algunos escaños parlamentarios, no hay que perder de vista que lo hizo en su carácter de rueda auxiliar del lulismo.

Sobre el 'entrismo'

¿Fue correcta la participación del PO y otras corrientes de izquierda en la formación del PT en Brasil? ¿Es correcta la formulación de tácticas entristas por los revolucionarios en organizaciones de masas para desarrollar en las mismas alas revolucionarias?

Trotsky planteó tácticas "entristas" en la década del '30 en ciertas circunstancias. Se trataba, en primer lugar, de que se estaban produciendo procesos de radicalización y constitución de tendencias de izquierda -en la mayoría de los casos- en los partidos socialdemócratas. Era una reacción no solo contra el avance de la derecha fascista, sino también contra la traición de la burocracia stalinista. Los partidos comunistas habían sido depurados y 'homogeneizados' por el aparato contrarrevol-

lucionario, subordinado al Kremlin. En los partidos socialdemócratas se constituían alas de izquierda con inclinaciones notorias hacia una militancia revolucionaria. Para tomar un ejemplo, tenemos la política sugerida por Trotsky hacia la radicalización del Partido Socialista Obrero de España. Su dirigente, Largo Caballero, que se había radicalizado estando en prisión, invitó a los trotskistas a incorporarse a las juventudes del PSOE para ayudar a revolucionarlas. Trotsky era partidario de aceptar esta ‘oferta’ entrando como fracción pública a las juventudes del PSOE. Pero Andrés Nin, dirigente de la oposición de izquierda, prefirió hacer un partido común con un minoritaria ala bujarinista que acababa de romper con el PC stalinista en España, constituyendo el POUM. Fue el PC el que aceptó la propuesta de Caballero y se integró en un trabajo de colonización stalinista, usando el prestigio de la revolución de Octubre, pero no su orientación programática. Esto ayudó, notablemente, a que el PC español, raquíto hasta entonces, se transformará en una organización de masas.

El entrismo puede valer como táctica de construcción del partido revolucionario sobre organizaciones que giran hacia la izquierda y/o que están sometidas a fuertes presiones de las masas radicalizadas, que la toman como un canal de organización y lucha. Por eso, participamos activamente en la constitución del PT de Brasil.

Pero la táctica entrista no significa la permanencia indefinida dentro de dicho partido, aún cuando algunas veces sea reconocida como tendencia. Es una táctica, no una estrategia de construcción de partidos revolucionarios.

El entrismo que desarrolló el morenismo en la Argentina, en el período inmediatamente posterior al golpe derechista contra Perón en 1955, podría ser en parte justificado. Porque era en el seno del peronismo donde se manifestaba la inmensa mayoría de los sectores de vanguardia y combativos de la clase obrera, que estaban desarrollando un fuerte campo de resistencia al golpe gorila. Pero el morenismo lo hizo adaptándose al peronismo. Pasándose de revoluciones: se colocó “bajo las órdenes del General Perón”, se prestó a ser usado para la propaganda anticomunista, etc. Y, lo fundamental: no se preparó para una ruptura cuando el peronismo produjo un giro drástico a la derecha, apoyando electoralmente a un candidato gorila (Frondizi, 1958). Su abandono de la ‘táctica’ entrista se produjo recién en 1964 por inanición, cuando el peronismo había sido ‘disciplinado’, encuadrado por Perón y la burocracia sindical, y el movimiento de lucha en reflujo.

La experiencia del NPA

La constitución del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) en 2008 no es parte de una evolución hacia a la izquierda, de una radicalización política de las fuerzas que lo constituyeron. La Liga Comunista Revolucionaria (LCR), la fuerza motriz y mayoritaria de la formación del NPA, resolvió disolverse para ingresar a un “partido amplio”, abandonando el programa marxista revolucionario y el concepto mismo de la formación de un partido revolucionario de combate, basado en el centralismo democrático.

Fue la culminación de un largo proceso. Ya en el Congreso de la LCR de 2003, la dirección logró por mayoría (85% de los delegados) sacar de sus Estatutos el objetivo estratégico de luchar por la dictadura del proletariado (gobierno obrero) (intentos anteriores no habían logrado la mayoría especial para esto). No se trataba del retiro de una ‘formulación’, sino del abandono de todo atisbo de política socialista revolucionaria, de su adaptación total e integración a la democracia burguesa. Esta es una involución que se aceleró a partir de la caída del Muro de Berlín: no habría lugar para la creación de partidos que lucharan por la revolución socialista. Esto se evidenció, incluso, en el congreso de fundación del NPA: puesto a votación el nombre del nuevo partido, la dirección se empeñó en rechazar que se llamara Partido Revolucionario Anticapitalista y logró imponer el más genérico (“y menos ideologizado”), Nuevo Partido Anticapitalista. Se plantó estratégicamente en crear “una nueva perspectiva socialista y democrática para el siglo XXI”: una adaptación al planteo de Chávez (2005) sobre la construcción del ‘socialismo del siglo XXI’.

De entrada nomás, el NPA se organizó sobre la base de tendencias y se anuló para una intervención unitaria en la lucha de clases. La dirección conformada proporcionalmente al porcentaje que sacaba cada tendencia en sus congresos se limitaba a sacar comunicados y declaraciones, pero no podía -ni quería- dirigir el trabajo de organización de los trabajadores y de implantación del nuevo partido en las masas. Esta tarea la encaró -cuando la encaraba- cada tendencia por su cuenta.

El NPA terminó siendo un débil aparato, con planteos oportunistas-frentepopulistas, electoralista. Esto tuvo una expresión acentuada en el último proceso electoral de 2017 en Francia, que encontró al candidato del NPA, Philippe Poutou, y al Secretariado Unificado (SU) dando un apoyo a Macron en el balotaje contra Le Pen, bajo las consignas “todo menos el Frente Nacional” y “ningún voto a Le Pen”. De esta manera,

el NPA se perdió la oportunidad de capitalizar políticamente el enorme rechazo a los candidatos del régimen que expresaban diversos colectivos populares, que agitaban las consignas “contra el banquero y la racista” y “contra la patria y los patrones”, lo que se terminó plasmando en el 10% que recibió el voto en blanco en el balotaje. Incluso, esta tendencia había sido anticipada por una encuesta realizada por la organización de Mélenchon, que ponía de manifiesto que la mayoría de sus seguidores eran partidarios de la abstención.

Su performance electoral ha sido crecientemente negativa, lo que lo ha colocado en una situación de crisis, perdiendo gran cantidad de su militancia y al borde de su implosión. Uno de los objetivos anunciados por el NPA era el de reagrupar a la militancia de izquierda dispersa, pero termina desmoralizando a una parte de la vanguardia, fundiéndola.

El carácter liquidacionista del Secretariado Unificado

Esto nos lleva a la caracterización general de que el SU es una organización liquidacionista de la vanguardia y de oposición activa a la construcción de partidos revolucionarios. En tal aspecto tiene una política contrarrevolucionaria: bloquea esforzadamente el reagrupamiento revolucionario de la vanguardia obrera en un partido revolucionario.

Esta caracterización está abonada por una larga historia. Desde que Michel Pablo planteó el ‘entrismo’ en los PC stalinistas, llevando a la autodisolución de las organizaciones que se reclamaban trotskistas en la época. Pasando por el giro foquista, que llevó a la muerte a toda una generación de jóvenes militantes trotskistas, particularmente, en América Latina. Su adaptación al eurocomunismo y la ‘apertura’ gorbachoviana en la URSS, etc. Hasta hoy, las organizaciones brasileras, enroladas en el SU, forman parte del PT de Lula, cuyo gobierno de frente popular integró con ministros y otros cargos.

No queremos abundar sobre un balance de esta trayectoria liquidacionista del SU. No se trataron de errores con sus -lógicas- consecuencias políticas. Desde su nacimiento, nuestro partido se planteó la necesidad de luchar por la IV Internacional y enfrentó las expresiones liquidacionistas del SU (morenismo, etc.) en la Argentina, buscando ligarnos a las corrientes antiplabistas internacionales que denunciaban ese liquidacionismo. Nos integramos al CORCI con el lambertismo, en calidad a esa trayectoria antipablista. Y rompimos con él cuando se embarcó en maniobras para reunificarse con el morenismo, en el Co-

mité Paritario (al que criticamos fuertemente), terminando prácticamente en una capitulación a la socialdemocracia.

Se nos reprocha que hemos colocado el centro de nuestra crítica en el SU, cuando hay otras ramas del trotskismo que son igualmente oportunistas. Pero no se puede equiparar con el lugar que ocupa el SU como referencia principal del trotskismo y que aparece con la aureola de representar la continuidad histórica de la IV Internacional y del legado del dirigente de la revolución de Octubre. Ese lugar no lo ocupa ninguna de las otras corrientes del trotskismo que, en repetidos casos, han terminado volviendo al “regazo materno”, reincorporándose a sus filas.

El viejo Comité Internacional (integrado por el lamberismo, el inglés *Heally* y el SWP yanqui) se disolvió al volver la organización norteamericana a integrarse al Secretariado Unificado sin haber logrado una revisión y reorientación de la política liquidadora del pablo-mandelismo, sino integrándose al mismo. La deriva posterior del SWP yanqui y de WRP británico está abonada por esta política oportunista.

En resumen, el SU no es una organización más en la diáspora trotskista: es la organización madre de la corriente liquidacionista dentro de la IV Internacional. Gran parte de la crisis que sufrieron las organizaciones que intentaron constituirse en torno de los principios programáticos del trotskismo revolucionario y que se acercaron al SU por el prestigio de Trotsky, del Programa de Transición y de la IV Internacional se debió a su política antirrevolucionaria y a su liquidacionismo. Persistir en ‘rectificar’ el liquidacionismo político-programático-organizativo es un camino que lleva al abismo y la desintegración.

La lucha por el Frente de Izquierda (FIT) en la Argentina

La constitución del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), en 2011, en Argentina, fue un paso adelante en la creación de una alternativa electoral obrera independiente contra los partidos burgueses.

El FIT se constituyó sobre la base de una plataforma de reivindicaciones transitorias (anticapitalistas) que tenía como eje central la independencia política de la clase obrera y se pronunciaba por el gobierno de los trabajadores.

Esto constituye un claro contraste con las experiencias anteriores, presididas por una política de colaboración de clases. Ese fue el caso del Frepu e Izquierda Unida (sobre la base de acuerdos entre el morenismo y el Partido Comunista). El Partido Obrero criticó esos frentes y denunció su orientación y su carácter.

El FIT se constituye, en los términos arriba señalados, con dos corrientes provenientes de la diáspora morenista -Izquierda Socialista (IS) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). El FIT se pudo constituir apoyándose en un proceso de radicalización de sectores de la vanguardia obrera y de la militancia de izquierda. Y, también, por el creciente desarrollo de nuestro Partido Obrero, que se convirtió en la principal fuerza de la izquierda argentina, en una fuerte lucha de delimitación del nacionalismo burgués en el poder. El éxito electoral de haber sobrepasado las trabas proscriptivas del régimen y llegado a las elecciones generales creó entusiasmo en sectores de la vanguardia.

No se nos escapan, sin embargo, las contradicciones del FIT. El FIT se estructuró como frente electoral. El PO viene luchando denodadamente para que se transforme en un frente de intervención política en todos los terrenos de la lucha de clases. Lo hemos conseguido solo parcialmente. Frente a los principales acontecimientos políticos del país hemos logrado -no sin debates internos- posicionamientos políticos comunes en el campo de la independencia de clase. Muchas de las propuestas e iniciativas para impulsar una intervención común en la lucha de clases fueron boicoteadas en forma explícita o implícita.

El PTS, por ejemplo, se opuso y boicoteó la convocatoria a un Congreso de la izquierda y del movimiento obrero combativo, organizado por el FIT, que permitiera un reagrupamiento político-sindical de la vanguardia obrera independiente y lo proyectara políticamente. Lo que prevalece es una tendencia electoralista muy profunda en lo que se privilegia la promoción de los candidatos en lugar de una intervención en la lucha de clases. El PTS no quiso integrar el Plenario Sindical Combativo, que reúne en su seno a la casi totalidad de las direcciones sindicales combativas del país, boicoteó durante casi una década a la conducción del PO de la Federación Universitaria, etc. En diferentes oportunidades, tanto IS como el PTS, han tratado de diluir al FIT en agrupamientos 'más amplios', con hipotéticos sectores de la burocracia sindical o la pequeño-burguesía. Ha sido a través de una lucha política constante, en un marco favorable de una amplia vanguardia que mantiene la necesidad de la unidad del FIT, que hemos logrado que este trascendiera en el tiempo y se afanzara cada vez más como una alternativa política de izquierda, obrera y socialista. En el último período, hemos logrado dar pasos más firmes en una coordinación más permanente del FIT-U en la lucha política: bloque parlamentario común, movilizaciones, etc. Un avance importante es la convocatoria conjunta a la Conferencia La-

tinoamericana de la Izquierda y el Movimiento Obrero, que abre una perspectiva importante para el reagrupamiento de la izquierda latinoamericana en un período de grandes rebeliones obreras y populares.

El carácter contradictorio del FIT se evidencia, asimismo, en que esta política unitaria en el campo de la independencia clasista en Argentina no se repite en el resto de Latinoamérica. Donde nuestros aliados en el FIT tienen políticas divergentes, reñidas con los principios de independencia de clase que coincidimos en defender en Argentina. En Perú, la pequeña organización hermana de IS, integra una coalición centroizquierdista-frentepopulista y, en esa calidad, ha sido elegido uno de sus miembros diputado nacional. En Venezuela, varias de las corrientes del FIT han sido en su momento integrantes del chavismo (el MST se integró al PSUV), para pasar ahora a coquetear con la oposición pseudo-democrática proimperialista. En Brasil integran el Psol como fracciones y han tenido posiciones disímiles frente al golpe contra Dilma Rousseff (IS se declaró neutral).

La Conferencia Latinoamericana en marcha tendrá el desafío de constituir un polo clasista, de frente único, bajo una plataforma de combate, en la perspectiva de la lucha por gobiernos obreros y campesinos y la Unidad Socialista de América Latina.

Un capítulo especial lo constituye el MST que, en forma ‘oportunistá’, planteó su ingreso al FIT, al que había condenado a la crisis y desaparición. En las últimas elecciones lo integró, aceptando el programa de independencia de clase y el objetivo estratégico de la lucha por el gobierno de trabajadores de la plataforma del FIT. Se trata de una ‘evolución’ forzada de la derecha hacia la izquierda. De todas maneras, no debemos ilusionarnos. Esta ‘evolución’ del MST no significa que haya abandonado su política de subordinación al nacionalismo burgués y frentepopulista, su centrismo orgánico. Su giro hacia el FIT le ha sido impuesto por la evolución de la lucha de clases y la fuerte lucha política que hemos desarrollado nosotros (y el FIT de conjunto).

Recordemos que la constitución del FIT encontró férrea oposición del MST, al que se le hundió por segunda vez su frente con el PC, que se fue alineando abiertamente con el kirchnerismo en el poder. Siguiendo el modelo de su hermano mayor (el SU), cambió su nombre agregándole el de “Nueva Izquierda”. Igual que la LCR, planteaba la necesidad de algo ‘nuevo’ para ser presentado al electorado. En oposición al FIT, el MST bregó para que el PO y la izquierda se integrara a un frente (Proyecto Sur) en torno de un peronista de ‘izquierda’, viejo dirigente na-

cionalista pequeño burgués. Consideraba necesario impulsar 'agrupamientos amplios'. Se opuso tenazmente al FIT, considerándolo como 'lo viejo', el 'frente de la izquierda sectaria' y augurando al mismo su crisis y desaparición, mientras que pronosticaba el fortalecimiento del MST como corriente política nacional dentro del frente nacionalista pequeño burgués. La búsqueda de 'lo nuevo' lo llevó a pasos más de-rechistas aún en diversas elecciones provinciales (apoyo a Luis Juez en Córdoba y otros), en tenaz lucha contra el pretendido 'sectarismo' del PO y el FIT. Como en toda la historia de la izquierda argentina, terminaba capitulando, como furgón de cola ante diversas variantes del nacionalismo burgués peronista. El frente nacionalista pequeño burgués en torno de Proyecto Sur, terminó sacando menos votos que el FIT, y el MST entró en una crisis fenomenal que lo hizo retroceder, aunque en el camino intentó otras vías oportunistas. Pino Solanas culminó su trayectoria, pasándose primero a la oposición liberal burguesa, que sería una de las bases de la formación del frente macrista, para, ahora, aceptar un cargo de embajador en Francia por el nuevo gobierno peronista que acaba de asumir.

El FIT es un frente, no un partido en sí mismo. No puede reemplazar la existencia real de partidos. Un partido revolucionario bregará por extender ese frente si sirve a la lucha de la clase obrera y los oprimidos. Si el Frente deja de jugar un papel positivo en ese terreno, ya sea porque abandona los principios de independencia de clase y/o se convierte en una traba a la lucha de las masas -es decir, deja de impulsar la evolución de la movilización independiente-, seguramente será su fin.

Lo que ha permitido su nacimiento y -en gran medida- su desarrollo es el crecimiento de nuestra organización y nuestra influencia, en el marco, lógicamente, de una situación favorable que empujaba también a las demás organizaciones a intervenir en este sentido.

La intervención autónoma del Partido Obrero es notablemente superior a la del FIT. El FIT es un instrumento para potenciar la intervención independiente en el escenario político nacional (y ahora con la Conferencia Latinoamericana también en el internacional). Pero, sin el desarrollo del partido, como entidad política revolucionaria, sería muy dificultoso que se pudiera conformar un real frente de izquierda. Porque no tendrían envergadura sus reclamos en tal sentido. El FIT es un frente, no una organización común que se rige por los principios del centralismo democrático. El FIT no hace un trabajo de acumulación de cuadros en común. Ese trabajo lo hace cada partido, aunque se fijan

campañas que ayudan al desarrollo de cada partido de acuerdo con la corrección de sus planteos, su capacidad y tenacidad.

Reagrupar a los revolucionarios para construir partidos y la Internacional

Los compañeros de L'Etincelle han manifestado su preocupación sobre cómo reagrupar a una inmensa cantidad de grupos y de militantes que se reclaman revolucionarios y trotskistas. Esto está incentivado por el surgimiento de nuevos grupos militantes, al calor de los levantamientos obreros que se vienen desarrollando (Chile, etc.).

La IV Internacional ha sido política-organizativamente destruida por la labor liquidadora del SU y de otras corrientes en gran medida tributarias.

¿Cómo plantear la emergencia de unificar a un sector importante de esta vanguardia en la lucha por construir revolucionarios en cada país y a nivel internacional?

Es evidente que cualquier reagrupamiento en términos partidarios debe darse en torno de una base programática común. Pero se corre el riesgo en entrar en un debate interminable sobre balances críticos y autocríticas de las experiencias recorridas durante décadas. Nadie niega la importancia política fundamental de estos balances. Sin un balance claro, siempre se correrá el riesgo de caer en los mismos errores o desviaciones. Pero sería utópico pensar que la unidad militante en una misma organización solo se podrá cumplir llegando a acuerdos en todos los puntos divergentes, pasados y presentes. En un partido común se discute y se vota, se ejecuta el centralismo democrático. Para ello, este partido está basado en una base programática común.

Ese fue el acierto metodológico de los fundadores de la CRCI. No buscaron un acuerdo integral sobre todos los puntos de la lucha política. Tampoco un mínimo común denominador que permitiera la unidad, postergando diferencias programáticas centrales para el futuro. Esto último sería una expresión de voluntarismo que estallaría ante la primera prueba importante que plantee la lucha política y de clases, sino los ejes centrales de diferenciación para constituir en la actualidad una organización militante revolucionaria. De la misma manera que Lenin planteó la unidad político-organizativa de los revolucionarios del mundo en la fundación de una nueva Internacional, la III Internacional, que tuviera como puntos centrales la lucha por la dictadura del proletariado y contra la política del “derrotismo revolucionario”, esto

es, la lucha, en primer y fundamental lugar, contra su propia burguesía, rompiendo cualquier idea de 'unidad nacional' con ella, y desarrollando revolucionariamente la lucha de clases del proletariado.

Sobre la base de acuerdos estratégicos -que la CRCI actualizó en la lucha por la dictadura del proletariado, la oposición a los frentes de conciliación de clases, la intervención activa en la lucha de clases con el método de las reivindicaciones transitorias, la lucha por la revolución social y política en los ex Estados obreros y por el reconocimiento de que es necesaria refundar la IV Internacional, porque el SU no representa a esta, sino que ha evolucionado como una organización liquidacionista en el trabajo de construcción de partidos revolucionarios -dar los debates y pasos necesarios para crear las condiciones de un Congreso de Refundación de la IV.

Las divergencias, naturalmente existentes en el seno de las organizaciones, serán tratadas y canalizadas por el método del centralismo democrático, necesario para salvaguardar la unidad del partido, fundamental, para intervenir revolucionariamente en la lucha política.

Lógicamente, este es un norte de trabajo. No se trata de dar por reconstituida la IV Internacional entre organizaciones raquílicas y pretender que las diversas secciones subordinen su intervención política nacional a una dirección mundial de la Internacional. No porque metodológicamente no corresponda, sino porque como señaló Lenin en *Izquierdismo enfermedad infantil del comunismo*, la autoridad política de una dirección no se puede imponer administrativa y 'estatutariamente'. Esa autoridad es conseguida a través de una experiencia común, que permite visualizar a una dirección probada, cuyo prestigio proviene de sus aciertos. Por eso será necesario dar una serie de pasos consecutivos y simultáneos: coordinación de campañas y tareas internacionalistas, publicación de manifiestos comunes, debate organizado de diferencias existentes con el propósito de delimitarlas y que no se transformen en fracciones 'nacionales' constituidas, etc. Pero, el objetivo estratégico es el de formar partidos y la Internacional revolucionaria en los principios de la militancia revolucionaria, del centralismo democrático, requisito fundamental para prepararse para los procesos revolucionarios que se avecinan.

Los desafíos por delante

El NPA ha cristalizado como un partido de tendencias-fracciones, que durante más de una década se han consumido en debates y maniobras

subordinadas a los procesos electorales. La existencia de tendencias orgánicas permanentes dentro del NPA ha terminado de paralizarlo, anulándose unas a otras y desarrollando cada una su propia política. El NPA está implosionando y esta implosión se acelera frente al auge de la crisis capitalista y los procesos de lucha de masas (“chalecos amarillos” y grandes huelgas contra la reforma previsional de Macron en Francia). Ha perdido dos tercios de su militancia, yéndose en gran parte desmoralizada. Esta crisis del NPA es una tendencia general en la situación política internacional, no del llamado movimiento trotskista en general, sino del conjunto de la izquierda democratizante. Esta no resiste la presión combinada de la crisis capitalista con sus polarizaciones hacia la derecha, en muchos casos facistoide, y el auge de las revueltas de las masas. AyR (Anticapitalismo y Revolución) abandona Podemos en España porque rechaza la integración al gobierno de Frente Popular con el PSOE. El MST argentino se ve obligado a incorporarse al Frente de Izquierda. No hay lugar para NPAs. Próximamente será el Psol el que estallará o pasará a integrar un frente popular más orgánico para prevenir un estallido social en Brasil.

El entrismo de los revolucionarios en una organización como el NPA no puede ser una política permanente. De serlo, estaría indicando una asimilación a la ilusión de que el NPA puede ser empujado hacia una posición de independencia de clase. El entrismo implica también saber cuándo hay que salir. Lenin, cuando planteó en las “Tesis de Abril” la necesidad de escisionar a la socialdemocracia oportunista y fundar la III Internacional, aceptó que circunstancialmente una representación bolchevique siguiera participando de los encuentros centristas de Zimmerwald con “fines informativos”. Pero trabajó sin pausa, activamente, por la formación de la III Internacional.

El lugar del primer peronismo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado nacional

Aportes a la campaña por la separación de la Iglesia del Estado

Juan García

Este artículo se propone analizar la evolución de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la Argentina hasta el primer peronismo. Esto nos obligará a caracterizar, primero, el llamado “laicismo” de la generación del '80, para luego desarrollar los progresos de la Iglesia católica en la década del '30, que se intensificaron bajo el golpe del '43, de orientación sumamente clerical. Luego desarrollaremos brevemente las principales líneas de convergencia y luego el conflicto creciente entre la Iglesia católica y el gobierno peronista, que culminó con la ruptura en 1954, uno de los prolegómenos del golpe de junio y luego el de septiembre de 1955.

El laicismo en general, y el argentino en particular

El llamado laicismo de la generación del '80 en la Argentina es parte de un fenómeno más general y de alcance internacional, de fines del siglo XIX: el avance del Estado sobre áreas tradicionalmente copadas por la Iglesia, mediante, por ejemplo, el matrimonio civil, la educación laica, el avance de leyes como las de divorcio y, en particular en Francia, la separación de la Iglesia del Estado. Este laicismo se caracterizó por sus métodos institucionalmente “republicanos” y su tendencia a la transacción con la Iglesia, que se pretendió sostener como una

institución enraizada socialmente y, de ninguna manera, erradicar su influencia.

El laicismo se caracteriza por su método de compromiso con la Iglesia. Contrasta con el abordaje revolucionario frente al poder de la Iglesia, propio de la revolución francesa y, luego de la revolución rusa o la revolución española. Estos métodos revolucionarios se explican porque, en sus orígenes, las revoluciones burguesas encontraron a la Iglesia como parte del antiguo régimen, aliada a la nobleza y las monarquías.

La revolución francesa abordó la oposición de la Iglesia con un programa y un método revolucionario. Bajo el peso de la movilización creciente del pueblo de París y luego del campesinado, se anuló el diezmo eclesiástico, se confiscaron las propiedades de la Iglesia, fruto de su rol como terrateniente desde la etapa feudal, y se anularon las cargas que pesaban sobre los campesinos, que favorecían a los terratenientes y a la Iglesia. Con la constitución civil del clero, aunque se terminaban los privilegios de los clérigos, el Estado se hacía cargo de su sostenimiento. Sin embargo, el impulso no se agotó en estas medidas, sino que estuvo vinculado con una lucha contra la ideología oscurantista de la Iglesia, que se manifestó en el retiro de altares y símbolos religiosos. Bajo este impulso, se aprobó el divorcio y el control civil de nacimientos y defunciones. Bajo el jacobinismo, el catolicismo fue reemplazado por un culto a la razón y luego al “ser supremo”. El calendario republicano reemplazó al calendario gregoriano.

Con Napoleón se produjo un retroceso y la Iglesia fue recuperando iniciativa, y fue firmado el concordato de 1801. Con él, se volvieron a tejer lazos entre el Estado francés y la Iglesia católica. La Iglesia renunció a reclamar las tierras confiscadas, el Estado reconoció que la religión católica era la de la “gran mayoría de los franceses” y se comprometió a pagar los salarios de los sacerdotes. Se retomó el calendario gregoriano. Con la restauración monárquica y la caída de Napoleón (1815), la reintroducción del catolicismo tomó nuevo impulso.

Contrastando con los métodos revolucionarios de la revolución francesa, que luego serían retomados, por ejemplo, en la revolución rusa o la guerra civil española, con el declive de la iniciativa revolucionaria de la burguesía, las relaciones con la Iglesia fueron conservadas en buena parte de los países europeos, de la misma manera que lo fueron, en muchos de ellos, las viejas monarquías.

Pero esto dejaba en pie la tarea de construir un Estado que fuera capaz de garantizar la dominación de clase de la burguesía en sus propios

términos. Esto implica que fuera capaz de regular las relaciones al interior de la sociedad civil, la enseñanza, etc. El peso de la Iglesia en todos estos ámbitos fue entonces cuestionado por muchos Estados, como una forma de garantizar plenamente el desarrollo capitalista. La formación de la fuerza de trabajo, los matrimonios, los registros de defunciones, mecanismos que además afectan al control de la herencia, no podían ser gratuitamente dejados en manos de la Iglesia. Por lo tanto, el avance sobre estos terrenos mediante la legislación de los nuevos Estados nacionales representó una agenda que tuvo un alcance internacional, porque respondió al impulso de las necesidades sociales de la burguesía. A diferencia de los avances revolucionarios contra la Iglesia, el laicismo fue un movimiento que encuadró esos avances dentro de los marcos legales de respeto al lugar ganado por la Iglesia como sostén ideológico del orden social -o sea, se caracterizó intrínsecamente por una línea de compromisos con la misma.

El laicismo en la Argentina fue una expresión limitada de este proceso. Mientras Francia estableció la separación de la Iglesia del Estado en 1905, la Argentina conserva, hasta la actualidad, el artículo 2 de la Constitución de 1853, que sostiene: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Inclusive, entre los constituyentes del '53 había tres sacerdotes. El artículo 77 de la Constitución establecía que el presidente y vicepresidente debían profesar la religión católica.

Entre los hitos del “laicismo” argentino se incluye frecuentemente la Ley 1420. Pero la misma no es estrictamente una ley laica, sino que limita la enseñanza religiosa a estar por fuera del horario escolar, teniendo un rango no obligatorio. En efecto, el artículo 8 de la ley sostiene: “La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”. Esto daba prerrogativas para introducir la enseñanza religiosa.

La Iglesia tiene el estatus de persona pública en el Código Civil de Vélez Sarsfield, igualándola al Estado nacional y las provincias. El artículo 33 del Código Civil sostiene:

“Artículo 33. Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

Tienen carácter público:

- 1°. El Estado nacional, las provincias y los municipios.
- 2°. Las entidades autárquicas.
- 3°. La Iglesia católica.

Tienen carácter privado:

1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”.

Como se ve, la ligazón con la Iglesia fue constitutiva para el Estado nacional argentino, a pesar del proclamado “laicismo” de la Ley 1420, del establecimiento de la libertad de cultos o del matrimonio civil.

Dentro de esta relación, el Estado fue desarrollando un control de la Iglesia, mediante la designación de los obispos (luego ratificados por el Papa) o el control de la difusión de las bulas papales. La contrapartida fue un impulso del Estado en la formación de seminarios, seminaristas, nuevas camadas de eclesiásticos, lo que se reflejó en un crecimiento en el número de diócesis, parroquias y, por lo tanto, en un reforzamiento del peso territorial de la Iglesia¹. Este impulso material contribuyó a rescatar a la Iglesia de los golpes que había recibido en el período de las guerras de la independencia y luego las guerras civiles.

Según señala Lila Caimari², en 1864, la diócesis de Buenos Aires tenía solamente 35 sacerdotes. “Alrededor de 1860, el Estado comenzó a colaborar con la fundación de nuevos seminarios con el fin de comenzar la regeneración de cuadros locales de este clero, todavía dependiente del personal enviado de Europa”. Según la autora, la reinscripción de numerosas órdenes religiosas a partir de 1880 contribuyó a la formación mucho más numerosa de sacerdotes. Al mismo tiempo, se fueron creando nuevas diócesis: La Plata, Santa Fe y Tucumán (1897), Santiago del Estero (1907), Corrientes y Catamarca (1910), que se agregaron a las tradicionales de Buenos Aires, Paraná, Salta, Córdoba y San Juan.

El peso de la Iglesia, por otro lado, se mantuvo largamente en la educación superior, sin ser cuestionado por el orden liberal. La influencia clerical en la Universidad de Córdoba, a través de la logia profesoral de la *Corda Frates*, sectores clericales condicionaban toda la vida universitaria. Este régimen fue cuestionado solamente por la movilización estudiantil durante la reforma universitaria, que impulsó el co-gobierno, y la autonomía de las universidades, la actualización académica, las cátedras libres y cuestionó el régimen aristocrático y clerical de enseñanza.

1. Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia Católica*, Buenos Aires, Ariel Historia, 1994.

2. Caimari, Lila: op. cit.

La Iglesia y la “cuestión social”

Esto no quita que, para la Iglesia, el período del laicismo y sus leyes emblema, como el matrimonio civil o la Ley 1420, esta última con todos los límites que hemos detallado, fueran denunciados como una avanzada del Estado sobre los privilegios de la Iglesia y que la misma se propusiera hacer retroceder estos avances.

La Iglesia argentina comenzó a jugar un rol crecientemente más activo con el desarrollo, también creciente, de la llamada “cuestión social” -o sea, la lucha de clases.

Para ello, la Iglesia se apoyaba en un desarrollo a escala internacional. Hasta el papado de Pío IX, la Iglesia sostuvo que de ninguna manera podía reconciliarse con la modernidad. Sus herederos, en cambio, también denunciando el laicismo, trataron de profundizar en encontrar para la Iglesia un rol en el mundo moderno. Esta agenda se plasmó fundamentalmente en las encíclicas del papa León XIII, que abarcaron una multiplicidad de aspectos de la relación entre la Iglesia y la vida moderna. La más significativa, sin duda, fue la encíclica *Rerum novarum* (1891). La misma fue casi contemporánea a la fundación de la II Internacional (1889). Planteaba que la cuestión más importante de la modernidad era la emergencia de la lucha de clases. Comenzaba entonces por un intento de refutar al socialismo como vía de salida a la crisis social. A partir de aquí, desarrollaba ampliamente el rol que debía tener la Iglesia en la conciliación de los conflictos sociales. La encíclica *Rerum novarum* planteaba una agenda de organización de círculos obreros católicos, los acuerdos corporativos, la defensa de un piso salarial, etc. Y colocaba esta agenda como parte de una limitación de los privilegios generados por el orden capitalista. El planteamiento del problema comenzaba así:

“Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante ansiedad en que viven todos los espíritus; esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta

el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres” (León XIII, encíclica *Rerum novarum*).

La encíclica se plasmó en un plan de actividades del catolicismo en todo el occidente. En la Argentina, por ejemplo, a partir de 1892 comenzaron a fundarse los Círculos Obreros Católicos. Los mismos tenían una posición fundamentalmente antihuelgas, y ocuparon, dentro del movimiento obrero argentino, un lugar relativamente secundario frente a las corrientes predominantes (el anarquismo, en un principio, en sindicalismo revolucionario y el socialismo, posteriormente). Sin embargo, fueron una muestra de la intención de la Iglesia de intervenir activamente como factor de contención en la lucha de clases. Esta agenda “social” de la Iglesia contó también con otras iniciativas. Así, se fundaron distintas asociaciones que fueron absorbidas, en 1919, por la Unión Popular Católica Argentina (UPCA).

La personalidad que por esos años fue condensando esta orientación de la Iglesia argentina fue monseñor De Andrea, quien encabezaba la recién citada UPCA. De Andrea, además, jugaba un rol en la dirección de los círculos de obreros católicos y desarrolló, desde un lugar de vínculos muy estrechos con la oligarquía, un discurso de promoción del catolicismo como herramienta de control frente a las tendencias revolucionarias que se expresaron, por ejemplo, en la Semana Trágica. En los sucesos posteriores, en la década del '30 y del '40, De Andrea constituyó el ala liberal, en general minoritaria dentro de la Iglesia.

Los años '30

El recurso de la clase dominante criolla a la Iglesia como método de control social tuvo un primer salto en la década del '30. La crisis mundial de los '30 tuvo un impacto directo en la Argentina. Por un lado, provocó el derrumbe de las exportaciones y los precios de las materias primas exportadas por el país. Por otro, el golpe de Estado contra Yrigoyen y el posterior fracaso de la tentativa corporativista de Uriburu dieron origen a un régimen político basado en el fraude y en la “concordancia”, con el conservadurismo liberal tradicional y la UCR “anti-personalista” a la cabeza, junto al Partido Socialista Independiente. El fraude contribuyó a sostener el régimen bajo la presidencia de Justo, y luego a digitar a su sucesor, Ortiz. Habiendo surgido del golpe de Estado, el régimen de los '30 tenía en el ejército un pilar fundamental.

Los gobiernos de los años '30 intervinieron activamente en la economía, pero al rescate de los intereses tradicionales. Esa fue la función

original de la Junta Nacional de Granos y, por supuesto, del vergonzoso pacto Roca-Runciman, por el cual el país hacía una cantidad de concesiones enormes al imperialismo inglés para garantizar el ingreso de la carne argentina al mercado londinense.

Los '30 fueron también una etapa de desarrollo de la industria por sustitución de importaciones. La caída de los precios y volúmenes de las exportaciones argentinas hizo imposible continuar el flujo de importaciones. A la sombra de esta situación se desarrollaron industrias livianas, que fueron alimentando el crecimiento de la clase obrera en toda el área metropolitana de Buenos Aires y otras grandes ciudades. Esta clase obrera protagonizó grandes combates. El más destacado fue la huelga general de 1936, desatada por la huelga de la construcción. Fue, además, una etapa de desarrollo del Partido Comunista en los sindicatos, frente a las direcciones tradicionales provenientes del socialismo o del sindicalismo.

En este cuadro político, la Iglesia encabezó un impulso central para colocarse en el centro de la vida política y social. Bajo el impulso de la crisis del liberalismo, la Iglesia fue conformando un discurso que colocaba bajo el signo católico la evolución de la nacionalidad y las perspectivas de estabilización del orden político y social. Este discurso se combinaba con el hispanismo, la reivindicación de los orígenes virreinales del país, y la crítica al liberalismo y al (como vimos, limitado) laicismo que lo sucedió.

La Iglesia concentró fuertemente su tarea en los cuarteles. Durante los '30 se fue forjando una relación entre la Iglesia y el ejército, que fue un dato sobresaliente durante décadas en el país. Los capellanes militares adquirieron una importancia fundamental. La cristianización creciente del Ejército se fue transformando en un pilar fundamental del todo el régimen político, dado el peso que tenía el Ejército en el sostén de ese régimen, caracterizado por el fraude "patriótico".

Pero si la Iglesia se concentró en el Ejército, hay que decir que este impulso fue acompañado por grandes y masivas concentraciones católicas. La más importante de ellas fue el Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Dicho congreso contó con la visita del cardenal Pacelli, futuro papa Pío XII. Fue un acontecimiento masivo, con grandes concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires y un enorme impulso de parte del poder político, corporizado en la oración dada por el presidente Justo en el cierre de las celebraciones, o en el feriado establecido

en todo el país para participar y el apoyo en todos los aspectos³. Así, el mismo Estado promovía icónicamente la imagen de la espada y la cruz como emblema de la colaboración entre el Estado y la Iglesia. Para comprender el sentido político del congreso, hay que tomar en cuenta que una de las consignas coreadas fue “Cristo o Lenin”.

Esto, por supuesto, no quiere decir que las diferentes corrientes nacionalistas vinculadas con el catolicismo que se fueron desarrollando fueran oficialistas. Estas corrientes, en muchos casos, rechazaron a los gobiernos de los años '30 por liberales. Hay que recordar que pesaban sobre la sociedad argentina los modelos fascistas que estaban emergiendo en Europa. Mientras entre la clase obrera se desarrollaba una amplia corriente de solidaridad con la República y antifascista en la guerra civil española, el nacionalismo hispanista de cuño católico se inspiraba en el franquismo y en el fascismo italiano. Los nacionalistas fueron críticos del carácter abiertamente pro-imperialista del gobierno de Justo.

Un terreno en donde el peso de la Iglesia se incrementó fuertemente durante los años '30 fue la educación. La educación religiosa en las escuelas avanzó enormemente en las provincias. El emblema fue la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno conservador de Manuel Fresco la implantó en las escuelas, luego de que se incluyera su obligatoriedad en la Constitución provincial, reformada en 1934. El artículo 190 de la Constitución provincial sostenía: “la educación común tendrá, entre sus fines principales, el de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias y en 108 principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia”.

Es interesante reproducir el decreto que introduce la educación religiosa católica en las escuelas del Estado en la provincia de Buenos Aires (1936):

“(...) 2º. Se establece en las escuelas primarias de la provincia la enseñanza de la religión católica, que se impartirá dentro del turno escolar y durante una hora semanal, pudiendo ser dividida en dos clases. 3º. Las personas que tengan a su cargo la enseñanza de la religión católica serán designadas por la Dirección General de Escuelas, debiendo recaer dichos nombramientos en personas autorizadas por la autoridad eclesiástica. 4º. El programa y textos correspondientes a dicha enseñanza serán aprobados por el Consejo General de Educación, previa conformidad de la autoridad eclesiástica. 5º. Los padres de familia que pertenezcan a otra religión que no sea la católica y que no deseen para sus hijos la citada enseñanza, lo manifestarán por escrito a los señores directores de escuela. A esos niños se les

3. Zanatta, Loris: *Del Estado liberal a la nación católica*, Buenos Aires, Editorial UNQ.

dará, durante esa hora, instrucción moral y cívica. 6°. La Dirección General de Escuelas designará el funcionario a cuyo cargo esté la inspección de la enseñanza religiosa. La autoridad eclesiástica nombrará en cada distrito uno o más delegados a los efectos de que se entienda con las autoridades escolares correspondientes, con la facultad de inspeccionar los cursos de enseñanza religiosa”⁴.

O sea, no solamente se implementaba la educación religiosa, sino que, bajo el decreto, la Iglesia católica designaba autoridades de control en el marco del Ministerio de Educación y a los propios docentes de religión, y adquiriría facultades de control en todo el sistema público.

La defensa a ultranza de la educación religiosa en las escuelas públicas, que había avanzado en las provincias, llevó a la Iglesia a un choque con el gobierno de Ortiz, que envió al Congreso un proyecto de ley nacional que no la eliminaba, pero la colocaba en el marco de la enseñanza de religión en igualdad de condiciones con el resto de los cultos. La Iglesia encabezó una reacción virulenta, que se acrecentó con la intervención por parte de Ortiz a la provincia de Buenos Aires, desplazando a Manuel Fresco. Las limitadas ínfulas “liberales” de Ortiz representaban un matiz en un rumbo de avance que la Iglesia no estaba dispuesta a que se cuestionara⁵.

La Iglesia frente al golpe del '43

En un cuadro de un gobierno sumamente desprestigiado, el detonante del golpe de Estado de 1943 fue la candidatura presidencial de Robustiano Patrón Costas, quien, dentro del conservadurismo, era partidario del viraje de la Argentina para abandonar la neutralidad y encolumnarse con Estados Unidos en la guerra.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia mantuvo una neutralidad expectante. Son numerosas las denuncias de la complicidad del papa Pío XII (Pacelli) con el nazismo. La Iglesia vivía un clima de antisemitismo interno y no declaró la solidaridad con los futuros ganadores sino hasta la navidad de 1944, cuando Pío XII alineó a la cristiandad con el discurso liberal y de defensa de la “democracia” frente a la evidencia de la causa del Eje estaba perdida.

La Iglesia argentina, durante los '30, se vinculó especialmente con los grupos nacionalistas que rechazaban el alineamiento con los aliados. Los

4. “La enseñanza religiosa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires” (Edición digital): <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003536.pdf>

5. Zanatta, Loris: op. cit.

nacionalistas consideraban al catolicismo como una parte de la esencia nacional. Pensaban que la ideología nacional católica era una base para rechazar, a su vez, al liberalismo clásico, que estaba encarnado en el país por el laicismo de los '80, como también, fundamentalmente, al comunismo. En muchos casos, esta neutralidad escondía una simpatía por las potencias del Eje, a pesar de los choques entre Mussolini y el Papa. El franquismo fue, en este sentido, muy influyente entre los católicos, por haber rescatado a la Iglesia española de los ataques de la República y la revolución. La guerra civil española tuvo una extensa repercusión en el país.

Todos estos factores explican el apoyo de la Iglesia al golpe del '43. Por un lado, los militares nacionalistas, y especialmente el GOU, tenían una relación privilegiada con los nacionalistas católicos. Pero además, el golpe vino a combatir el alineamiento de la Argentina en el bando aliado, un objetivo también acompañado por la Iglesia⁶.

El gobierno del golpe del '43 vino a satisfacer la agenda de la Iglesia en una multitud de aspectos, desde la colocación de crucifijos y símbolos religiosos en las dependencias públicas hasta la educación religiosa y la intervención de las universidades por interventores ligados al catolicismo.

La más importante de las mismas fue el decreto dictaminando la educación religiosa obligatoria en las escuelas del Estado en todo el país. Vino a satisfacer una vieja reivindicación de la Iglesia, basada en la crítica de la Ley 1420. Fue promulgado por el presidente Ramírez, el 31 de diciembre de 1943. En 1944 estaba en marcha y duró hasta el choque entre Perón y la Iglesia en 1955, siendo convalidado por ley en 1948, por el Congreso, de mayoría peronista.

Complementariamente al dictamen de la educación religiosa en las escuelas estatales, se desarrollaron las intervenciones de las universidades. La más representativa fue la de Jordán Bruno Genta en la Universidad del Litoral, que generó una movilización extendida de estudiantes y docentes en contra. Proveniente del nacionalismo católico, Genta aplicó exoneraciones a docentes y separaciones de estudiantes de la universidad como medidas disciplinarias para garantizar el control ideológico de la misma. La pulseada terminó, finalmente, con el régimen exigiéndole la renuncia a raíz de las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, fue designado inmediatamente al frente del Instituto del Profesorado Secundario⁷. Las intervenciones (y también las movilizaciones estu-

6. Zanatta, Loris: *Perón y el mito de la Nación Católica*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

7. Kleiner, Bernardo: *20 años de movimiento estudiantil reformista*, Buenos Aires, Editorial Platina.

diantiles y docentes denunciándolas) proliferaron en todas las universidades del país, apuntando a garantizar un control de las mismas por parte de elementos provenientes de la derecha católica y nacionalista.

Dentro de esta agenda, la política social del peronismo en esta etapa fue vista por la Iglesia (una interpretación alimentada por el mismo Perón) como una expresión de las orientaciones de la encíclica *Rerum novarum*. Esto incluso aunque la tendencia a estatizar los sindicatos y priorizar el sindicato único por rama industrial llevó al choque con los círculos obreros católicos. Así, durante toda primera etapa, la Iglesia se alineó al gobierno del '43.

A medida que se iba desmoronando el Eje en Europa y el régimen militar iba perdiendo apoyo entre las clases medias y altas en el país, y chocando con el imperialismo norteamericano, la política obrera de Perón, junto con el apoyo de Iglesia y el Ejército, fueron quedando como los únicos recursos del gobierno para superar su aislamiento.

Esto contribuyó al desarrollo de una polarización política en el transcurso de 1944, que fue abonando la formación de un frente muy amplio de oposición al gobierno de Farrell, que culminaría en la formación de la Unión Democrática. El discurso “democrático” del Papa, favorable a los aliados, en la navidad de ese año contribuyó al cuadro de polarización al interior de la propia Iglesia. Los sectores liberales de la Iglesia (monseñor De Andrea, por ejemplo) tendieron a alinearse con la Unión Democrática, pero eran ampliamente minoritarios dentro del universo católico.

Luego del 17 de octubre, estando en marcha el proceso electoral, la Iglesia debió definir una posición en el proceso político. Llamó entonces a votar a los partidos que cumplieran ciertas condiciones, entre las que incluyó la defensa de la educación religiosa en las escuelas católicas. La Unión Democrática, semanas después y contra esta posición, se manifestó en su plataforma en favor de la educación laica, en contraposición con el peronismo. El peso de los sectores movilizados del estudiantado y del PS y el PC terminó definiendo a la UCR en favor de esta opción, que finalizó por inclinar el tablero en favor del peronismo para la Iglesia católica⁸.

El alineamiento de la Iglesia con el peronismo no pudo ser más abierto, porque la alta sociedad porteña, tradicionalmente católica, estaba ampliamente volcada en el campo contrario. El peronismo asumió así de la mano de la Iglesia católica.

8. Zanatta, Loris: *Perón y el mito de la Nación Católica*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.

La Iglesia y el peronismo

El alineamiento del peronismo con la Iglesia se reflejó en toda la primera etapa de su gobierno, aunque no sin contradicciones. La gran prueba de fuerza de esta alianza fue el envío, por parte del gobierno al Congreso Nacional, del decreto de 1943 de educación católica obligatoria en las escuelas del Estado, en 1948. Por el origen de muchos de los diputados peronistas, que provenían de sectores tradicionalmente anticlericales del movimiento obrero, dicha votación fue un momento especialmente delicado. Perón logró imponer la votación de la ley, involucrándose personalmente en aglutinar a los diputados de su partido.

La votación fue un episodio de la ruptura del bloque peronista con los diputados laboristas, agrupados en torno de Cipriano Reyes, quienes defendieron el laicismo y se opusieron a la educación religiosa en las escuelas del Estado. Reyes, dirigente obrero del gremio de la carne y fundador del Partido Laborista, quien había sido el andamiaje partidario de Perón en 1946, finalmente terminó siendo encarcelado y torturado cuando viró a la oposición a su gobierno, bajo la acusación de preparar un atentado en su contra.

El debate es muy significativo sobre la relación entre el peronismo y la Iglesia, uno de cuyos centros fue la necesidad de volcar al catolicismo al movimiento obrero. Perón fue desarrollando una política de cooptación de las organizaciones obreras y estatización de las mismas. Hasta la emergencia del peronismo, el comunismo, el socialismo y el sindicalismo eran las corrientes más significativas del movimiento obrero. Todas provenían de la izquierda, tradicionalmente anticlerical. Para el peronismo, la introducción del catolicismo en las organizaciones obreras era un factor de integración al Estado y de combate contra la izquierda en el movimiento obrero. Reyes, surgido del seno del laborismo, levantó la oposición a la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado en nombre del anticlericalismo tradicional en el movimiento obrero. Para Perón, imponer la defensa del catolicismo en el movimiento obrero organizado era un objetivo enorme, que tenía el sentido estratégico de integración a una perspectiva nacionalista y de colaboración de clases. Así, la derrota política y el posterior encarcelamiento de Reyes, que son un episodio importante de la saga que conduce a la estatización del movimiento obrero para encolumnarlo tras el gobierno de Perón, son también una poderosa señal ideológica en el sentido de que la estatización del movimiento obrero también significaba la conversión, más o menos forzada, al catolicismo, de la burocracia sindical.

Sin embargo, el alineamiento de Perón con la Iglesia no tenía el mismo sentido que bajo los gobiernos del '30 o incluso en el '43. Se colocaba ahora como parte de la estrategia de un movimiento nacionalista, bajo el cual la clase obrera había realizado conquistas importantes y que había derrotado una asonada golpista (del 9 de octubre de 1945) por la movilización, del 17, del movimiento obrero. Luego de eso, Perón organizó su campaña electoral con el lema "Braden o Perón".

En esta confrontación, el Partido Socialista y el Partido Comunista, se alinearon con la oposición "democrática" (gorila), integrando la Unión Democrática. El PS y el PC caracterizaban al gobierno de Farrell como fascista y a Perón como un continuador demagógico de esta política. Imaginaron un frente "antifascista" y terminaron de segundo violín del radicalismo y los conservadores, incluso denunciando conquistas obreras como una expresión de oportunismo del régimen. El stalinismo criollo siguió las huellas de la alianza internacional de los acuerdos de post guerra con los norteamericanos.

Los elementos de la política nacionalista y clerical de Perón se combinaron, por ejemplo, en la política universitaria. La defensa de la injerencia religiosa en las universidades continuó, a través de la intervención de las mismas y la persecución a los docentes opositores. Pero a su lado se dictaminó el ingreso irrestricto a las universidades, el fin de los exámenes de ingreso y la creación de la Universidad Obrera. Estas medidas apuntaban a ampliar la base social del estudiantado universitario. De esta forma, por un lado, Perón respondía a su base en el movimiento obrero, para la cual el ingreso a la universidad era un objetivo de ascenso social. Por otro lado, apuntaba a que la ampliación del estudiantado universitario fuera una forma de lograr quebrar el apoyo, hasta entonces masivo, que la oposición derechista había tenido entre los estudiantes.

La contradicción entre un régimen nacionalista bajo el cual la clase obrera obtuvo innegables conquistas, pero cuya matriz política era una alianza entre el Ejército y la Iglesia, dos instituciones de naturaleza reaccionaria, se pudieron apreciar también en la cuestión del voto femenino. Este indudable avance para las mujeres fue impulsado en la Argentina en forma relativamente tardía. Las corrientes sufragistas dentro del movimiento de mujeres planteaban la reivindicación desde fines del siglo XIX. En comparación, el voto femenino se conquistó en Brasil en 1932 y en Uruguay en 1938. En la Argentina, el Partido Socialista había impulsado el voto femenino, por ejemplo, a través de un proyecto

de Mario Bravo en 1928 y, luego, en la década del '30, una comisión lo había tratado en el Congreso bajo el impulso de Alfredo Palacios⁹.

Ya desde la etapa de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el peronismo naciente comenzó a impulsar el voto femenino, vinculado con la organización de una corriente de mujeres dentro del movimiento obrero. Así, por ejemplo, en 1945 (todavía bajo el gobierno de Farrell) se organiza, el 26 de julio, un acto en el Congreso en favor del voto femenino, con la presencia de Perón, con representantes de enfermeras, docentes, escritoras y operadoras telefónicas. En la otra vereda, el "feminismo" tradicional, agrupado en la Asamblea Nacional de Mujeres, encabezada por Victoria Ocampo, rechaza la posibilidad de que el gobierno de facto otorgara el voto femenino y lo entiende como una maniobra que apuntaría a garantizar la continuidad del gobierno militar, que caracterizaban como fascista.

El voto femenino no llegó a ser otorgado por decreto en 1945, sino que fue tratado en el Congreso en 1947, en una ley que obtuvo amplia mayoría. Evita se puso personalmente a la cabeza de la campaña por la aprobación de la ley, lo que la proyectó enormemente en el escenario político nacional. La campaña por el voto femenino se combinó entonces con una campaña para promover el rol de participación de la mujer en los términos en los que el peronismo lo concebía.

¿Cuáles eran esos términos? Para Eva, el sufragio femenino evocaba "la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha maravillosa de tu propio país" (27/1/47)", "la facultad de elegir y vigilar desde la trinchera hogareña, el desarrollo de esa voluntad" e incluso "aquello que el país tiene de más puro e incorruptible: la conciencia de una madre de familia, la conciencia de una mujer para quien Dios creó el supremo derecho a crear" (12/2/47).¹⁰

Como vemos, la campaña por el voto femenino en el país se desarrolló desde un discurso de cuño católico, según la cual el rol de la mujer en la lucha por la "liberación nacional" era la permanencia en el hogar, las tareas de cuidado, etc. O sea, se colocó el voto femenino en favor de un embellecimiento de la situación social de subordinación de la mujer.

El Partido Peronista Femenino fue muy a fondo en esta orientación, canalizando una tendencia a la movilización política de mujeres muy encuadrada desde el Estado y que servía de sostén a los valores tradicio-

9. Bianchi, Susana: "Peronismo y sufragio femenino, la ley electoral de 1947", en *Anuario IEHS*, 1986.

10. Bianchi, Susana: op. cit.

nales de la “feminidad”, en un discurso que entroncaba claramente con el de inspiración católica. Así, la conquista del voto femenino era puesta al servicio de un discurso que promovía los valores católicos y postulaba a la mujer, desde el hogar, como una guardiana de dichos valores:

“Toda mujer debe votar conforme a su sentido religioso... La mujer que está dando su voto, el matiz de su honradez de conciencia, no podrá equivocarse en su designio político si viene de un hogar sometido a la inflexible ley de Cristo” (Eva Perón, 26/2/47).¹¹

La crisis

La relación entre el peronismo y la Iglesia se quebró en 1954, cuando el peronismo encabezó una ofensiva cuyo elemento más resonante fue la eliminación de la educación religiosa en las escuelas del Estado. Como parte de esta ofensiva, el gobierno sancionó, a fines de 1954, la ley de Divorcio vincular. Paralelamente, con un decreto, el gobierno estableció la autorización de funcionamiento de los locales de prostitución. En este cuadro de crisis, la Iglesia comenzó a alinearse con los sectores golpistas dentro del Ejército. Cuando, en junio de 1955, la Marina bombardeó el centro porteño, asesinando numerosos civiles en un intento frustrado de golpe de Estado, el peronismo respondió movilizándolo a su base a una quema masiva de iglesias. Luego, en septiembre de 1955, la Iglesia apoyó el golpe de Lonardi. ¿Cómo se gestó esta crisis?

A partir de 1950-51 se empieza a desarrollar una tendencia en el peronismo a la estatización del culto, en el sentido de ir desplazando discursivamente el apoyo a la Iglesia católica por un culto propio o de Estado. La comparación de Perón con Cristo, de Evita con la Virgen de Luján, combinada con otros elementos, como la apertura a una libertad de culto que favorecía cultos afines al peronismo pero que no eran católicos (como el espiritismo), fueron generando grietas en la relación entre el régimen y la Iglesia¹².

Es ilustrativa la confrontación entre la Iglesia Católica y el espiritismo para ilustrar la situación. En 1950, Perón y Eva enviaron una carta de adhesión al acto espiritista de la “Escuela Científica Basilio”, cuyo lema era “Jesús no es dios”. La adhesión se habría debido, aparentemente, a un intento de desagravio frente al hecho de que, semanas antes, la Policía Federal había cerrado todos los locales espiritistas. Perón dio la orden de reabrir los locales, afirmando que los espiritistas “eran todos

11. Susana Bianchi, op. cit.

12. Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia Católica*, Buenos Aires, Ariel Historia, 1994.

peronistas”¹³. Como fuera, la misiva de Perón al encuentro espiritista le acarreó un conflicto con la Iglesia, que contragolpeó con una enorme campaña afirmando “Jesús es dios”. El desencuentro se trasladó al V Congreso Eucarístico, inmediato posterior, en el que el gobierno prácticamente no tuvo participación.

Sin embargo, estos roces no pueden explicar por sí solos el quiebre de 1954. Para entenderlo, es preciso analizar la crisis en la que estaba sumido el peronismo desde principios de los años '50 y su dinámica política.

A partir de 1951-52, el país ingresa en una fase de crisis económica. La caída de las exportaciones representaba un golpe a la industria nacional, que dependía de la importación de bienes de equipo. El salario real retrocedió en la medida que comenzaban a ponerse de manifiesto los límites de un desarrollo industrial que había acentuado la dependencia externa del país. La salida de Perón a esta crisis fue un intento de virar su marco de alianzas internacionales, vehiculizando el ingreso del capital extranjero con inversiones e inclusive con un préstamo del Eximbank. Como parte de esta política, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) comenzó a subsidiar al sector agrario, con el objetivo de estimular un aumento de la superficie de siembra. Con respecto al movimiento obrero, el retroceso en el salario real, durante los primeros años '50, tuvo una continuidad en el esfuerzo del régimen por imponer una política de incremento de productividad que chocaba con el peso de la sindicalización y los cuerpos de delegados en los lugares de trabajo.

La crisis económica y estos virajes políticos fueron acentuando un aislamiento político del gobierno. Por más que Perón tomara la agenda de la burguesía, el empresariado no lo creía un gobierno capaz de llevar a fondo esta orientación. Sin embargo, los partidos de oposición al régimen tenían la participación pública prácticamente proscripta. Perón persiguió y fue ahogando a la oposición política durante todo su gobierno.

En estas condiciones, la Iglesia comenzó a ser vista como un canal para desarrollar una oposición al gobierno. La fundación del Partido Demócrata Cristiano en el país, parte de una tendencia internacional en el catolicismo de la época, fue una expresión de este proceso. Sectores de la Iglesia comenzaban a virar políticamente. La crisis económica y la presión de las patronales, junto al choque de Perón con sectores del Ejército (que tuvo su primera manifestación en el intento de golpe de 1951) comenzaron a darle una relevancia política nueva

13. Caimari, op. cit., p. 267.

a los factores de descontento de la Iglesia católica con el gobierno que se venían incubando.

Así, comenzó a denunciarse el rol “inmoral” de la Unión Estudiantes Secundarios, cobró fuerza la denuncia de la Iglesia a Perón por apañar el espiritismo en contra del catolicismo tradicional, se empezó a tomar en cuenta la idea de que el gobierno reemplazaba al catolicismo con una religión “de Estado” y un largo etcétera de motivos para cuestionar al gobierno.

La decisión de Perón de pegar un viraje en su relación tradicional con la Iglesia se encuadra en este marco político. Sin embargo, el peronismo encaró el choque con la Iglesia sin ningún tipo de viraje laicista. Había ido demasiado lejos en integrar al culto a su propia imagen de Estado. La religión era un elemento omnipresente en todo el gobierno peronista, especialmente en la educación. El choque con la Iglesia fue procesado como una lucha entre el cristianismo “originario” del peronismo y el catolicismo, que nunca habría superado su tendencia prooligárquica¹⁴.

De esta forma, el peronismo salvó, en su momento de mayor choque con la curia, su enorme contribución al fortalecimiento de las tendencias religiosas y oscurantistas entre las masas. Para Perón, la religión y el nacionalismo fueron, entre otras cosas, una vía ideológica para contribuir a desplazar al comunismo y el socialismo de las direcciones sindicales. De allí en más, la relación entre la Iglesia o, en un sentido más amplio, la religión, y la burocracia sindical peronista fue un elemento absolutamente perdurable en los sindicatos argentinos.

Conclusión

La caída de Perón fue así también un triunfo de la Iglesia católica. Le permitió retomar una iniciativa bajo la Libertadora y el frondizismo. Sin embargo, la vitalidad del movimiento estudiantil universitario bloqueó una reintroducción de la educación religiosa obligatoria y puso límites a las intervenciones en las universidades. Esto llevó a la Iglesia a basar su estrategia bajo la Libertadora en el avance en la convalidación de la educación universitaria privada. Esta iniciativa se plasmó sobre todo en la educación “libre”, la legalización de títulos superiores privados religiosos. La lucha contra esta orientación (la lucha por la educación laica contra la educación llamada “libre”) fue el centro del debate educativo en los años subsiguientes. El frondizismo terminó imponien-

14. Caimari, Lila, op. cit., cap. 9.

do la educación “libre”, dándole a la Iglesia un arma poderosísima en el terreno educativo. La cuestión educativa mostró así que los progresos de la Iglesia católica habían llegado para quedarse.

Este recorrido histórico apunta a reflexionar sobre la siguiente cuestión: ¿de dónde proviene el peso de la Iglesia católica en nuestro país? Es un problema político de una actualidad enorme, en un momento en el cual la Iglesia católica sigue capitaneando la lucha contra el aborto legal, al mismo tiempo que conserva un peso político entre los partidos patronales, que le permite bloquear reclamos tan básicos como el dictado de Educación Sexual Integral, laica y científica, en todas las escuelas del país.

De un análisis histórico surge que este peso hunde sus raíces en dos fenómenos. Por un lado, la Iglesia es, en sí misma, un factor activo políticamente y tiene una capacidad de acción enorme, dada, en principio, por los privilegios legales y los aportes materiales del Estado nacional desde su constitución. Por otro lado, el peso de la Iglesia se apoyó históricamente en su capacidad de regimentación de las masas en momentos de crisis políticas y agudización de la lucha de clases. La Iglesia ofreció a los gobiernos de los años '30 una referencia “moralizadora” y de control social en un cuadro de crisis política e institucional muy aguda.

Para el peronismo, el catolicismo fue, además, un arma de lucha contra las ideologías de izquierda en el movimiento obrero, que complementó la estatización de las organizaciones sindicales durante su gobierno. El rol clerical de la burocracia sindical es un dato que sigue pesando fuertemente en el movimiento obrero argentino.

Durante los años '30, la Iglesia trabó un vínculo con el Ejército, que siguió siendo un dato de enorme peso en la realidad argentina durante toda la fase de crisis políticas posteriores. La intervención activa del Ejército en la vida política nacional con los golpes de Estado (exitosos o frustrados) y asonadas o pronunciamientos militares hasta los años '90 le dieron a la Iglesia una capacidad de acción suplementaria, vinculada con su peso entre los sectores castrenses.

La Iglesia católica pudo explotar estas oportunidades políticas porque preparó una doctrina y posiciones políticas para intervenir, fundamentalmente, en el terreno de la política social, ofreciéndose como garante de un control de las masas y un dique de contención frente al comunismo y al socialismo. Esta preparación y la intervención política de la Iglesia fue un fenómeno de alcance internacional desde el papado de León XIII.

Al mismo tiempo, la politización de la Iglesia tendió a ir generando quiebres en el bloque clerical, creando alas dentro del clero, en función de los alineamientos políticos en las sucesivas crisis.

Dentro de este balance general es valioso tener en cuenta que el cenit de influencia política de la Iglesia en el período analizado se alcanzó bajo el gobierno peronista, con la aprobación de la educación religiosa obligatoria en todas las escuelas del Estado, entre otras medidas.

La religión católica está muy lejos de ser una tendencia espontánea entre las masas. Es el resultado de una política de Estado de alcance histórico.

El carácter universal del trotskismo

La vigencia del Programa de Transición frente a la actual crisis mundial

Gabriel Solano

El próximo 20 de agosto se cumplirá el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky por el stalinismo. Con seguridad, la conmemoración dará lugar a debates y polémicas, ya que se trata de una de las personalidades más atrayentes e influyentes de la historia reciente. Junto con Lenin, compartió el liderazgo de la primera revolución socialista triunfante, que cambió el curso del siglo XX. Su propia suerte personal estuvo atada directamente al desarrollo de la lucha de clases y la política mundial. Desde su expulsión de la URSS por la burocracia stalinista, en enero de 1929, su confinamiento en la isla turca de Prinkipo, pasando por sus peripecias por distintos países europeos que rechazaban albergarlo, hasta su refugio final en México, donde fue asesinado, la vida personal de Trotsky refleja los ascensos y retrocesos de la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. Cuando el fascismo se extendía por el viejo continente, el stalinismo aplicaba en la URSS una política de terror, que tenía como principal objetivo la eliminación física de los bolcheviques, y cuando la II Guerra Mundial ya era estaba en marcha, el mundo se había convertido para él en “un planeta sin visado”. En estas condiciones personales adversas, que incluyó la muerte de sus cuatro hijos a manos del stalinismo, Trotsky elaboró parte de su gran obra política y mantuvo su

acción revolucionaria. Su mayor legado para las futuras generaciones fue la fundación de la IV Internacional y el “Programa de Transición”. El tiempo transcurrido permite realizar un análisis retrospectivo y resaltar la actualidad de su obra política.

La lucha por el socialismo

El punto fundamental del “Programa de Transición” está en su capítulo final. Al definir los objetivos de la IV Internacional señala: “Su misión consiste en aniquilar la dominación del capital, su objetivo es el socialismo. Su método, la revolución proletaria”. Aunque la definición sea escueta, sintetiza a la perfección al carácter universal de la IV Internacional y de su programa. Desmintiendo a quienes quieren presentar al trotskismo como una capilla más en el amplio abanico de la izquierda, Trotsky define a la IV Internacional como el partido mundial de los explotados para luchar por el socialismo. La delimitación con las otras corrientes de la izquierda, en especial con la socialdemocracia de la II Internacional y el stalinismo, no tiene que ver con reyertas puntuales o controversias tácticas, ni con divergencias sobre cuál es el mejor camino para alcanzar un objetivo final común, sino con una cuestión por completo estratégica: su asimilación al capitalismo, su traición al socialismo y su abandono a la lucha por la revolución proletaria. De no ser así, la formación misma de la IV Internacional no tendría un contenido histórico estratégico, sino que hubiera sido un acto sectario. Fue justamente por eso que Trotsky rechazó, durante la década del '20 y los primeros dos años de la década del '30, formar un nuevo partido, tanto en la URSS como a nivel mundial. Esto, a pesar de la política criminal que la dirección del Comintern había seguido ante el alzamiento del proletariado chino, comenzado en Cantón en 1927, donde fue a la rastra de la burguesía nacional del Koumintang, en nombre de la llamada ‘revolución por etapas’. Para Trotsky, esa política condenaba para siempre a la dirección stalinista, pero no así a los partidos de la III Internacional, que podían ser recuperados mediante una lucha política en su interior. Fue recién cuando el stalinismo entregó sin lucha al proletariado alemán ante Hitler en 1933, que caracterizó que se había producido un salto en calidad. La pasividad de todos los partidos de la Internacional Comunista ante esta tragedia histórica no deja lugar a dudas: ya era la propia Internacional Comunista la que debía ser sepultada. “El proletariado alemán se levantará, el stalinismo nunca”, sentenció. Para continuar la lucha por el socialis-

mo debía fundarse un nuevo partido mundial de la revolución, la IV Internacional. Aunque el planteo fue realizado en 1933, finalmente su fundación se realizará cinco años más tarde, en 1938. Nótese aquí que Trotsky elaboró el “Programa de Transición” como un programa de partido -lo mismo habían realizado Marx y Engels con el *Manifiesto Comunista* en 1848. La creación de un partido de la clase obrera es parte constitutiva e inseparable del propio programa -quizá su punto más importante. El partido es el programa y el programa es el partido, aquí la síntesis del pensamiento de Trotsky. Un partido sin programa no pasa de un aparato, y un programa sin partido es una abstracción literaria. Esta cuestión decisiva debe tenerse en cuenta para quienes, aún reclamándose trotskistas, plantean ‘partidos amplios’, sin un programa revolucionario, o también quienes subestiman la formación del propio partido en nombre de “que tienen el programa”, como si esto además fuese un posible, ya que el programa es un proceso sistemático de elaboración y acción.

En el “Programa de Transición”, Trotsky plantea que la lucha por el socialismo requiere luchar por un “gobierno obrero y campesino”, como ha sido corroborado por la experiencia de la Revolución Rusa de 1917. En el capítulo especial referido al tema, define al gobierno obrero y campesino “como la denominación popular de la dictadura del proletariado” y cuestiona la distorsión staliniana de la consigna, de querer presentarla “con un contenido completamente diferente, puramente democrático -es decir, burgués”. Otra vez, la delimitación de Trotsky es de principios: denuncia que esta política constituye “un apoyo al capital”. A los partidos que se reclaman de la clase obrera los llama a “romper con la burguesía y a tomar el poder”; es decir, a defender una política de clase independiente. La afirmación de Marx de que los comunistas no perseguían objetivos propios sino que representaban los intereses generales de la clase obrera, aplica por completo para el trotskismo.

Llegado a este punto debemos concluir que la fundación de la IV Internacional, provista de su “Programa de Transición”, rescató para la izquierda y para la clase obrera la estrategia política socialista que las viejas organizaciones traicionaban miserablemente. Se trató, por lo tanto, de un acto político de importancia colosal, porque estaba en juego la continuidad de un programa histórico. Si Trotsky y sus compañeros, agrupados primero en la Oposición de Izquierda y luego en la fundación de un nuevo partido, pudieron asumir este papel histórico se debió a que desde el inicio enfrentaron la degeneración de la propia Revolución

Rusa, la teoría reaccionaria del ‘socialismo en un solo país’, la entrega ya citada del proletariado chino al Kuomintang y la capitulación final ante el nazismo. En todos los casos, Trotsky y sus compañeros defendieron el interés general de la clase obrera. A quienes pretenden presentar al trotskismo como una corriente divisionista, hay que recodarles que fue Trotsky quien defendió la unidad de la clase obrera para enfrentar a Hitler, denunciado, una y mil veces, el desvarío stalinista del llamado ‘tercer período’ y su doctrina del ‘socialfascismo’, que afirmaba que la socialdemocracia era lo mismo que el nazismo. Por eso, cuando alguien se interroga “qué quiere y por qué lucha el trotskismo”, la respuesta es simple: por la unidad de la clase obrera, por el gobierno de los trabajadores y por el socialismo internacional.

Esta sentencia fundamental se ha visto corroborada por la historia y mantiene hoy toda su vigencia. ¿O no lo vemos ahora en América Latina, donde las distintas corrientes que provienen del stalinismo, el castrismo y del maoísmo se han pasado con armas y bagajes a la defensa del régimen burgués y se han integrado al funcionariado de los gobiernos capitalistas? ¿O acaso, en nuestro país, estos grupos no apoyan e integran al gobierno de Alberto Fernández, que pacta con los fondos de inversión y el FMI? El odio que destila el nacionalismo burgués en general y el peronismo en particular contra el trotskismo tiene que ver con que son conscientes de que existe una divergencia estratégica irreconciliable.

Agonía del capitalismo y restauración

Si el trotskismo y la IV Internacional representan en la actualidad la continuidad de la lucha por el socialismo, lo hacen en condiciones históricas concretas que lo distingue de las internacionales anteriores. No casualmente el “Programa de Transición” parte de la premisa de la “agonía mortal del capitalismo”, afirmando que están dadas las “premisas objetivas de la revolución socialista”. Estamos ante una tesis de fondo, que delimita campos en la izquierda y en la clase obrera. En su famoso prólogo de la *Crítica a la Economía Política*, Marx afirmó que “ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella”. Dicho de otro modo, esto significa que si el capitalismo aún es capaz de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, la lucha por el socialismo sería una utopía o al menos un objetivo justo, pero apresurado. En una situación así, la estrategia de la clase obrera debería ser la lucha por la

obtención de reformas sociales, para obtener una mayor parte de la riqueza social producida.

Esta tesis basal de Trotsky fue criticada, incluso por muchos trotskistas, claro que como paso previo a abandonar ellos mismos la lucha por la dictadura del proletariado y el socialismo. Bien visto, actuaron a su modo, consecuentemente. Otros, que no llegaron a tanto, vieron esta afirmación como justa, pero limitando su validez histórica al momento en que fuera formulada -1938, en momentos previos a la II Guerra Mundial. Superada esa conflagración, afirmaron que el capitalismo volvió a retomar un camino de crecimiento. Citaron en favor de ello las estadísticas de crecimiento del PBI de varios países, que habrían alumbrado los llamados “treinta gloriosos años de crecimiento” del capitalismo de la posguerra, sin tener en cuenta que dicho crecimiento se asentó sobre las bases de la monumental destrucción de vidas y capitales durante la II Guerra. De ser cierta esta tesis, el “Programa de Transición”, en el mejor de los casos, hubiera tenido validez para que la clase obrera enfrente la II Guerra Mundial, pero habría dejado de tenerla en los años posteriores a su finalización. Muchos de estos extrotskistas se pasaron luego, con armas y bagajes, a la defensa del capital.

¿Pero no estaba planteada entonces la lucha por la revolución obrera y socialista en la posguerra -es decir, la estrategia definida en el “Programa de Transición”? La propia historia se ha encargado de responder esa pregunta. El triunfo de la revolución china y yugoslava en la década del '40, en ambos casos enfrentando los dictados de la burocracia soviética que exigía una sumisión del proletariado a la burguesía nacional y a los pactos sellados con los Estados imperialistas, la guerra de Corea, el triunfo de la revolución cubana a fines de la década del '50, la derrota del imperialismo francés y yanqui en Vietnam, el Mayo Francés, el Cordobazo, las coordinadoras obreras chilenas, la revolución sandinista, etc., mostraron la validez de la estrategia definida por León Trotsky en el “Programa de Transición”. Solo una izquierda que se haya pasado al capitalismo puede darle mayor relieve histórico al crecimiento transitorio del PBI que a la revolución triunfante en países tan decisivos como China o, en el caso cubano, en las mismas barbas del imperialismo yanqui. Contradice también la vitalidad del capitalismo la ocupación de una parte considerable del continente europeo por el Ejército Rojo, quedando los países al este de Berlín bajo el control de la URSS.

La restauración capitalista posterior en estos Estados que expropiaron al capital no desmiente la caracterización histórica de la agonía del

capitalismo. De hecho, es una variante analizada por el propio Trotsky en el “Programa de Transición” y en otros escritos. Anticipándose brillantemente a los hechos señala que “el pronóstico político tiene un carácter alternativo: la burocracia se transforma cada vez más en órgano de la burguesía mundial dentro del Estado Obrero, derriba las nuevas formas de propiedad y vuelve el país al capitalismo, o la clase obrera aplasta a la burocracia y abre el camino al socialismo”. A partir de esta caracterización Trotsky plantea la consigna de “abajo la camarilla bonapartista de Stalin”, propiciando una revolución política en la URSS -“política”, porque debe derribar a la burocracia pero no modificar las relaciones de propiedad. Fue una política que luego se plasmó en las grandes rebeliones antiburocráticas, como las que comenzaron en Berlín y Hungría en la década del '50 y la Primavera de Praga en los '60. La suerte de la revolución se jugaba en la posibilidad de derribar a la burocracia, que buscaría restaurar el capital para transformar sus privilegios de hecho en derechos de propiedad. Llegado a este punto, Trotsky distingue la mecánica de la revolución proletaria de la revolución burguesa y también de la contrarrevolución en ambas. Afirma que las contrarrevoluciones operadas luego de las revoluciones burguesas no tuvieron el propósito de restablecer las relaciones de propiedad feudales, sino de transferir el poder a fracciones más moderadas dentro de la propia burguesía. Así, por ejemplo, la vuelta de la monarquía a Francia en 1815 no restableció el feudalismo. Las relaciones burguesas de propiedad y el capitalismo se desarrollan autónomamente, más allá de las modificaciones del régimen político. En cambio, no ocurre lo mismo con los primeros pasos de la construcción del socialismo, que tiene su apoyatura fundamental en el propio Estado obrero. Un cambio del régimen de éste, pasando a manos de una burocracia restauracionista, abre la puerta a la vuelta del capitalismo. Mientras el capitalismo se edifica automáticamente, el socialismo lo hace conscientemente. Solo puede considerarse irreversible cuando ha llegado a un nivel de desarrollo superior. No era el caso de la URSS y -agregamos nosotros- de los otros Estados donde se produjeron revoluciones proletarias, ya que en todos los casos se trataron de países con niveles de desarrollo inferiores a las potencias capitalistas de la época.

Este análisis brillante de Trotsky, que une la agonía del capitalismo con la posibilidad de una restauración capitalista, fue la base para que el Partido Obrero pueda analizar contradictoriamente la restauración capitalista operada a partir de la disolución de la URSS y del resto de

los Estados obreros, incluido China. Mientras la derecha auguraba el “fin de la historia” –o sea, la victoria final del capitalismo–, y una parte muy considerable de la izquierda se pasaba abiertamente a la defensa del régimen burgués, el PO anticipó que la oportunidad que le abría al capital la restauración en los Estados obreros estaba condicionada por la agonía del propio capital. La incorporación a la órbita de la explotación capitalista de millones de obreros y de zonas geográficas enteras tenía como contraparte la aparición de nuevos competidores en un régimen social signado ya por una sobreproducción de capitales y mercancías. Todas las crisis capitalistas posteriores que hemos vivido desde los '80 hasta la fecha, cada una más aguda que la anterior y separadas entre sí por períodos cada vez más breves de crecimiento, confirman esta caracterización sobre la agonía del capitalismo, que se manifiesta también en las hambrunas que alcanza una parte considerable de la población mundial, los choques entre los monopolios y los Estados asociados a ellos como consecuencia de la sobreproducción mundial, la tendencia a las guerras y la hipertrofia especulativa que es la contracara de la huelga de inversiones que alcanza a todas las economías capitalistas, empezando por la de Estados Unidos.

Método político

El “Programa de Transición” parte de la agonía del capitalismo como la condición objetiva de la política revolucionaria del proletariado. Pero este es el punto de partida y no de llegada. Su propósito va más allá: es superar la contradicción entre las condiciones objetivas de la revolución y el atraso subjetivo para ello. Por eso afirma que “la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de dirección del proletariado”. Al momento de realizar esta afirmación, el proletariado venía de sufrir derrotas políticas significativas, como el triunfo de Hitler en Alemania, el afianzamiento de Mussolini en Italia, la derrota que ya se avizoraba como irreversible de la revolución española, el fracaso de la huelga con ocupación de fábricas de Francia de 1936 y, desde ya, la burocratización de la URSS y el exterminio físico de los bolcheviques mediante los oprobiosos Juicios de Moscú. La crisis de dirección se presentaba de modo palpable, contrastando las batallas dadas por el proletariado con la orientación criminal y traidora de sus organizaciones tradicionales, enroladas en la II y la III Internacional.

La fundación de la IV Internacional, asentada en estas derrotas históricas de los trabajadores, tuvo como misión histórica superar esta

crisis de dirección del proletariado. El método político para ello fue elaborar un programa de reivindicaciones transitorias, que sirve como puente entre la conciencia política del momento de la clase obrera y la toma del poder por ella misma. En oposición al programa mínimo de la socialdemocracia, limitado a reformas dentro del cuadro capitalista, y su programa máximo socialista reservado solo para ‘los días de fiesta’, Trotsky elaboró un programa de transición que supera esa dicotomía y presenta una estrategia unificada, cuyo eje es la lucha por el poder de la clase obrera a partir de la lucha por sus propias aspiraciones y reivindicaciones. La caracterización histórica de la agonía del capitalismo se expresa aquí bajo la comprensión de que la satisfacción integral de las reivindicaciones más sentidas por la población laboriosa es incompatible con la sobrevivencia del régimen capitalista. En un cuadro de catástrofe social, Trotsky elabora un programa que contiene reivindicaciones fundamentales, la escala móvil de salarios, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, la apertura de los libros de las empresas, el control de precios, la abolición del secreto comercial y el control obrero sobre la industria, estableciendo las condiciones para la expropiación de los grandes grupos capitalistas, la expropiación de la banca y la estatización del sistema de créditos, unido a los métodos políticos para ello, empezando por la formación de comités de fábrica, el armamento del proletariado, los soviets y la lucha por el gobierno obrero y campesino. Como ya lo había señalado en la tesis de la “revolución permanente”, se trata de un programa absolutamente válido para los países semicoloniales, cuyas condiciones para la revolución proletaria están dadas por el desarrollo del mercado mundial capitalista y la emergencia del imperialismo, que supera el debate ocioso entre países maduros e inmaduros para la lucha por el gobierno de los trabajadores.

Es claro que la crisis de dirección del proletariado en la actualidad se presenta de modo distinto a lo que sucedía en 1938, cuando Trotsky elaboró el “Programa de Transición”. El proletariado no revista en las filas de las organizaciones de la II y la III Internacional, que aún, a pesar de su traición, tenían su origen y su trayectoria ligada a la causa socialista. El hundimiento de la socialdemocracia y del stalinismo no fue ocupado por las organizaciones que se reclaman de la IV Internacional, sino por variantes diversas, que van desde planteos movimientistas, indigenistas, etc. El propio trotskismo mayormente no pudo mantener las posiciones establecidas en su programa fundacional y se quebró como resultado de la presión política del stalinismo, primero, por la

dificultad para afrontar las condiciones políticas de lucha en el relativo reflujó en la post guerra en Europa occidental, luego, finalmente, bajo la presión del seguidismo a direcciones de la pequeña burguesía o del nacionalismo. El llamado “secretariado unificado” (SU) terminó integrando gobiernos de la burguesía, como el de Lula. Pero, en este caso, no deja de ser revelador que para pasarse abiertamente al campo de la democracia burguesa, el SU convocó un congreso para eliminar de su programa la defensa de la dictadura del proletariado, que es el eje central del “Programa de Transición”.

Incluso en los casos donde los partidos comunistas y socialistas siguen dirigiendo las centrales obreras, ya no puede identificarse con la situación de 1938, pues no actúan como referencia a la URSS y a los dictados del stalinismo, sino que se han reconvertido a partidos democráticos-burgueses de sus propios países. Esto no desmiente la crisis de dirección del proletariado sino que la hace más candente, así como también el método de reivindicaciones transitorias elaborado por Trotsky, para hacer frente a una situación de catástrofe social. La lucha contra la miseria, la desocupación masiva, el saqueo de los monopolios, la opresión imperialista y el militarismo encuentra una respuesta actual en las consignas y reivindicaciones desarrolladas en el “Programa de Transición”. Esta cuestión también delimita campos de modo categórico, tanto con el nacionalismo burgués como con la izquierda asimilada al régimen. ¿O no es claro que la lucha contra la reforma laboral y previsional, por citar solo dos ejemplos vitales muy en boga, hoy patrimonio exclusivo en términos de corrientes políticas de las fuerzas que se reclaman de la IV Internacional? En Argentina, la izquierda stalinista, castrista y maoísta integra un gobierno que ha congelado las jubilaciones y avanza de hecho en la flexibilidad laboral, mientras prepara un nuevo acuerdo colonial con el FMI. Otra vez, ante la pregunta de por qué luchan los trotskistas, podemos responder simplemente: somos la única corriente política que rechaza la reforma laboral y previsional. Lo hacen, desde ya, millones de obreros, pero como corriente política, solo los que se referencian en la IV Internacional.

La lucha por la superación de la crisis de dirección entraña una lucha política de fondo, que reclama intervenir en todas las fases de las crisis y de las luchas que den los trabajadores, partiendo siempre de su propia experiencia. El planteo catastrofista sobre el capitalismo, que considera que los límites del capital están en su propia reproducción, generando crisis cada vez más agudas, no elimina esa lucha política sino que, al

contrario, la hace más candente, porque solo a través de ella se puede superar la brecha que existe entre la madurez de las condiciones objetivas para la revolución y la inmadurez de las condiciones subjetivas. El abordaje unilateral de esta situación puede derivar en un objetivismo, que niega la importancia central de la lucha de clases como motor de la sociedad. Contra ellos, Trotsky advirtió que la caducidad histórica del régimen burgués no debe confundirse con la pérdida de reflejos políticos de la propia burguesía. Al revés, señaló que, contradictoriamente, la burguesía aborda la crisis final de su régimen social habiendo adquirido una experiencia histórica única en su política de dominación.

Este carácter universal del trotskismo, que tiene por finalidad excluyente poner fin a toda forma de opresión y explotación, está presente en la posición de nuestro partido sobre el contenido y el método que debe seguir la refundación de la IV Internacional. En oposición por un lado a las colaterales del `partido madre`, que `exporta` partidos a otros países, a establecer inventarios de divergencias que sean la excusa para reyertas interminables, el PO propuso la refundación inmediata de la IV Internacional sobre una base de principios políticos definidos –la defensa de la dictadura del proletariado, el rechazo al frente popular y a la colaboración de clases, la acción sobre la base de un programa de reivindicaciones transitorias y el carácter contrarrevolucionario del SU por su rechazo a la estrategia del gobierno obrero. Este método político retoma el carácter universal del trotskismo y su lucha por la refundación de una internacional obrera (IV Internacional).

Para la clase obrera, que tiene en su favor la evolución del proceso histórico, también tiene una gran experiencia acumulada, asentada en grandes triunfos y también penosas derrotas. Para aprender de unas y otras, nada mejor que estudiar a fondo la lucha de León Trotsky, uno de los más grandes revolucionarios de la historia.

Marxismo y Liberación Negra: una historia de las raíces sociales y los programas en juego en la rebelión norteamericana

Guillermo Kane

“Ciudadanos, amigos: ¿Qué representa para el esclavo americano el Cuatro de Julio? Respondo, un día que le revela más que ningún otro del año la gran injusticia y la crueldad de que es víctima constante. Para él, vuestra celebración es falsa; vuestra tan cacareada libertad, una licencia inmundada; vuestra grandeza nacional, una vanidad sin igual; vuestros cantos de alegría están vacíos, desprovistos de corazón; vuestra denuncia de los tiranos, una desfachatez impúdica; vuestros gritos de libertad e igualdad, un hueco sarcasmo; para él, vuestros rezos e himnos, vuestros sermones y acciones de gracias, con toda su pompa religiosa y solemnidad, son mera ampulosa, fraude, decepción, impiedad e hipocresía —una delgada cortina para cubrir crímenes que avergonzarían a una nación de salvajes. Actualmente no hay nación en la tierra que peque de prácticas más chocantes y sangrientas que el pueblo de los Estados Unidos”, Frederick Douglass, esclavo liberto y activista abolicionista, 4 de julio, 1852

“Tenemos que estudiar la historia de la esclavitud y su rol e impacto en el desarrollo de nuestro país porque si no, no podemos entender a nuestro país. Como dijeron los Padres Fundadores, fue un mal necesario sobre el que se construyó la unión”, Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, 26 de julio, 2020

“#AbolishAmerica (Abolir Estados Unidos)”

Trending Topic en Twitter de Estados Unidos, 4 de julio, 2020

Luego de dos meses, ni la represión abierta, aplicada generosamente, ni las concesiones parciales y simbólicas, ni un proceso electoral que permitirá votar otro presidente en tres meses han logrado desmontar el proceso de rebelión popular en curso en Estados Unidos.

Esto ya demuestra que es un proceso que tiene raíces profundas. Se han liberado fuerzas contenidas tanto tiempo, que responden a contradicciones tan estructurales, que las clases dominantes no tienen todavía un plan claro para derrotar el proceso de lucha que se despliega con vigor en las calles norteamericanas.

La opresión general que cae sobre los trabajadores bajo el capitalismo se ha agravado por la crisis capitalista. Los choques de clases que se agravan han confluído con una explosión de reclamos contra la opresión de clase. El hecho detonante refiere a la brutalidad policial y, en particular su uso sistemático contra los negros y otras minorías raciales, pero no hace falta escarbar mucho para ver que se ha puesto en marcha un conjunto muy amplio de reclamos políticos, sociales y económicos. En este estallido, los problemas de clase y raciales aparecen profundamente entrelazados. Al mismo tiempo, asistimos al primer verdadero hecho de masas multirracial de la historia de Estados Unidos, a pesar de que la bandera central del proceso de lucha, Black Lives Matter, refiere solo a un conjunto de los explotados.

Esta rebelión nominalmente racial está mostrando su profundidad, expresándose en los lugares de trabajo, acelerando un reanimamiento del movimiento obrero sin antecedentes en casi un siglo. El último conato serio de rebelión interna en el imperio, en 1968, fue, por el contrario, en el curso de un profundo reflujo del movimiento obrero organizado. Al cuestionamiento del control de las patronales se le suma otro desafío indiscutible a la propiedad privada: movimientos masivos de huelgas de inquilinos, cuando el desastre económico y sanitario coloca a millones en condiciones de ser desalojados. Este movimiento racial, si fuera tal cosa, es indudablemente anticapitalista.

Para quienes pretenden analizar las distintas relaciones sociales de explotación que atraviesan una sociedad como categorías estancas, este desarrollo debe aparecer como un verdadero enigma. Pero en la vida histórica de la nación y de sus clases, en su larga lucha, es imposible establecer esa distinción.

Estados Unidos, la potencia mundial que personifica la implantación del capitalismo como forma de dominación global, con una uni-

versalidad que ningún otro imperio de la historia podría reivindicar para sí, tiene una historia que solo puede ser entendida comprendiendo la opresión especial de distintos pueblos y las funciones económicas y sociales que les fueron asignadas en el desarrollo de la nación.

La fragmentación de la fuerza de trabajo norteamericana está lejos de ser un accidente histórico. Es una política activa de su clase dominante, que movilizó recursos humanos y materiales enormes para construirse como potencia mundial. Cualquiera que analice la composición y procedencia de la población de Estados Unidos y de los recursos humanos de los que dispone en cualquier ámbito, en este momento y en cualquier otro de su historia, sabrá que la acumulación de riqueza, de capacidad técnica, cultural o de cualquier otra índole que pueda existir en Estados Unidos son creaciones estrictamente internacionales. La división de la clase obrera norteamericana ha dado un mayor margen de maniobra a su clase dominante, superexplotando a una parte de los trabajadores, mientras una aristocracia obrera, generalmente blanca, pudo gozar de privilegios relativos, fruto de los beneficios de la explotación, no sólo de las minorías domésticas sino de la dominación económica, militar y política establecida sobre el mundo colonial y semicolonial.

La crisis capitalista ha profundizado el sufrimiento de todos los explotados, pero en las proporciones y bajo las formas que la opresión se ha desarrollado históricamente en el país. Por eso, las tensiones que incubaron todas las razas, todos los explotados, reventaron primero por los reclamos de una fracción, cuyas condiciones de vida, ya muy bajas, se volvieron realmente intolerables en la profunda crisis económica y sanitaria. Quebrar esta estructura particular de opresión es imposible sin enfrentar el desarrollo capitalista sobre el que se ha asentado el ascenso de Estados Unidos como potencia imperial.

El esclavismo como característica fundacional de Estados Unidos

“No hay país en la historia mundial en el que el racismo haya tenido un papel tan importante y durante tanto tiempo como en los Estados Unidos¹”. Le lleva siglos de ventaja como enclave colonizado basado en la explotación racial y el exterminio a países como Sudáfrica e Israel.

A diferencia de Colón y los conquistadores españoles, los colonos del estado origina de Virginia eran incapaces de obligar a trabajar para ellos a los pueblos originarios. Luego de una hambruna que casi mata a

1. Howard Zinn: *La otra historia de los Estados Unidos*, HIRU, p. 28.

todos los colonos en el invierno de 1609-1610, en 1617 lograron enviar una primera cosecha de tabaco a Inglaterra, para gran provecho económico. En 1619, Virginia se sumó como destino del tráfico de esclavos capturados en África, que se dirigían hasta el momento a las colonias españolas y portuguesas de América del Sur y el Caribe. Pasados los ochenta años del inicio del tráfico, los 170 mil esclavos africanos en Virginia componían la mitad de la población.

El esclavismo no tenía un carácter complementario, sino que fue una condición fundante de la economía de la colonia inglesa precursora de Estados Unidos. No fue un hecho pacífico la implementación de semejante sistema de explotación. Mientras se ejercía contra los esclavos una violencia cotidiana para disciplinarlos, estos protagonizaron por lo menos 250 revueltas mientras existió el régimen de esclavitud.

La declaración de la independencia de las trece colonias respecto de Inglaterra no fue un paso para la libertad de esclavos africanos y pueblos originarios. Todo lo contrario, los rebeldes norteamericanos denunciaban a los ingleses por incitar a ambos contra sus dueños en sus intentos de someter a las colonias. Un párrafo de la declaración propuesta por Thomas Jefferson, que condenaba el rol del rey de Inglaterra en la promoción del comercio esclavista, fue tachado de la versión aprobada, lo cual muestra el carácter limitado de su aseveración de que “todos los hombres son creados iguales”.

El carácter del Estado federal de la nueva república fue definido en su Constitución, escrita por los propios representantes de las nuevas clases dominantes: “la mayoría de los redactores de la Constitución tenían algún interés económico directo para el establecimiento de un gobierno federal pujante: los fabricantes querían tarifas protectoras; los prestamistas querían acabar con el uso de dinero en metálico para la devolución de las deudas; los especuladores inmobiliarios querían protección para invadir los territorios indios; los propietarios de esclavos necesitaban seguridad federal contra las revueltas de esclavos y los fugitivos; los acreedores querían un gobierno capaz de recaudar dinero en base a un sistema impositivo nacional, para así pagar los bonos²”.

El siglo XIX vio un vertiginoso proceso de expansión territorial en el continente de la nueva nación, a costa del exterminio sistemático de los pueblos originarios, violando tratado tras tratado y de una cruel guerra expansionista contra México, llegando en 1850 a asentarse sobre California en las costas del Océano Pacífico. La ideología que guió esta

2. Zinn, p. 83.

expansión fue un discurso racista de que Estados Unidos era un pueblo providencial que debía subordinar, o civilizar a pueblos salvajes, vagos e improductivos en cumplimiento de un “destino manifiesto” divino que preordinaba el ascenso de Estados Unidos. Esta doctrina está en el fondo de la política de Estado y la cultura dominante del país al día de hoy.

Fue también una etapa de expansión veloz de la esclavitud y de su importancia económica. Entre 1790 y 1860, el sur pasó de producir mil toneladas anuales de algodón a un millón. El sur esclavista fue el proveedor privilegiado de la industria textil de la famosa revolución industrial de Manchester en Inglaterra. En el mismo período, la población esclava pasó de 500 mil a 4 millones. La importación de esclavos fue ilegalizada en 1808, pero esto apenas fue una formalidad. Se calcula que luego de la ilegalización fueron importados un cuarto de millón más de esclavos africanos.

Liberación y compromiso: génesis de los Estados Unidos modernos

Hasta vísperas de la guerra civil norteamericana, la tensión entre el esclavismo para exportar materias primas al mercado mundial capitalista del sur y el capitalismo industrial que se desarrollaba en el norte buscaban un equilibrio en el diseño del Estado nacional. En 1845, Texas fue sumado como estado esclavista, pero no así California en 1850. Como compensación, en 1850 se votó la ley de Esclavo fugitivo, que daba un marco federal a la caza de los esclavos que huían en forma cada vez más organizada del sur esclavista.

La guerra estalló entre norte y sur por las incompatibilidades económicas y sociales de dos proyectos nacionales contrapuestos. Insertarse en el mercado mundial como proveedor de materias primas o como potencia industrial implicaba otra estructura de Estado federal y otra política en todos los aspectos. El programa de la burguesía norteaña requería un reparto masivo de tierras gratuitas a colonos, un mercado libre de trabajo, una tarifa proteccionista para la industria y un banco nacional. El estatus de los esclavos negros no era una reivindicación suya. La movilización social que requirió la guerra, sin embargo, puso en juego fuerzas que no fueron previstas por los jefes del norte.

Los cuatro años de guerra, entre 1861 y 1865, dejaron 600 mil muertos sobre una población de 30 millones. Los esclavos huían masivamente de las plantaciones hacia las filas del norte en cuanto tenían oportunidad. Sólo el carácter sanguinario y prolongado de la guerra civil obligó a Abraham Lincoln a avanzar con la emancipación de los

esclavos y su reclutamiento al ejército del norte como herramienta para socavar a la confederación secesionista y derrotarla. La ley de Confiscación de haciendas de 1862, dirigida exclusivamente contra los dueños de esclavos que se levantaran contra la Unión, se incumpliría sistemáticamente por años, hasta que el fragor de los combates fue precipitando los hechos. La rendición del sur estuvo precipitada por la conclusión de que para seguir peleando debían incorporar también ellos a los esclavos a sus cuerpos militares, como proponía el general confederado Robert E. Lee, asegurando una modificación en su status social.

Todos los revolucionarios de la época siguieron con inmensa atención el desarrollo de la Guerra de Secesión. La Primera Internacional se fundó en parte en las relaciones internacionales de quienes se movilizaron en Europa por el triunfo del norte republicano. Karl Marx dejó elaborada su posición en una serie de artículos en tiempo real para *The New York Tribune* y *Die Presse* de Viena.

“Marx veía la Guerra de Secesión como una segunda revolución americana (...) una revolución burguesa y democrática que podía ser precursora de una revolución comunista en Europa. Su pronóstico no era desacertado, como lo probó la Comuna de París, la insurrección obrera que estalló en Francia pocos años después del final de la guerra civil norteamericana.”

“Para Marx, ‘deshacer el poder esclavista y liberar a los esclavos no necesariamente destruirían el capitalismo, pero crearían condiciones mucho más favorables para organizar y concientizar a los obreros, sean blancos o negros’. De ese modo, la guerra crearía nuevas posibilidades para la clase obrera americana, negra y blanca.”

“La guerra civil tenía además importantes implicaciones económicas relativas a la tierra y a la propiedad. La emancipación de cuatro millones de esclavos, sin compensación para sus ‘propietarios’, significaría, en términos económicos, la mayor expropiación de propiedad privada en la historia hasta entonces. Marx participaba de la esperanza de los abolicionistas y de los republicanos liberales -y de manera general de los socialistas- de que en el Sur ocupado, las políticas de reconstrucción de la posguerra se encaminarían, más allá de la creación de nuevos derechos políticos para los antiguos esclavos, hacia una real revolución agraria que destruiría las antiguas plantaciones esclavistas y redistribuiría las tierras. El programa de los republicanos-radicales, que encabezaba el vicepresidente estadounidense Wade, prometía conceder 16 hectáreas (*forty acres*) y una mula a los esclavos liberados. Ese programa quedó

archivado cuando ascendió al gobierno, luego de la muerte de Lincoln, el ala más conservadora del partido republicano”³.

Sin tierra en sus manos, los negros no se volvieron hombres libres. La servidumbre seguía siendo un hecho, aunque formalmente se los hubiera liberado. El Congreso nacional, a instancias de Lincoln, devolvió la propiedad expropiada a los terratenientes esclavistas que pelearon con los rebeldes a sus propias familias y herederos, no a los esclavos emancipados.

La etapa inmediata luego de la guerra, llamada de reconstrucción, vio sin embargo un desarrollo de libertades civiles y políticas de los negros en el sur, que contaron con numerosos representantes electos y leyes que planteaban su acceso igual a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo proyectos novedosos de educación pública. Sin embargo, la estructura moderna de Estados Unidos no deriva de esta etapa progresiva, sino del acuerdo de supresión de estas libertades entre la burguesía del norte y la oligarquía del sur. La campaña terrorista del Ku Klux Klan y otros grupos similares había sido el arma principal para plantear sus términos en la negociación. Perpetuaron una campaña masiva de asesinatos, violaciones, quema de hogares, escuelas e iglesias de la comunidad negra.

En 1877, el candidato republicano Rutheford Hayes logró apoyo sureño en el colegio electoral a cambio de un nuevo compromiso histórico entre industriales del norte y terratenientes del sur. Se retiraría el ejército del sur, dejando tierra liberada a los linchadores. La burguesía industrial victoriosa en la guerra dirigía la política central del Estado federal, pero dejaba incólume la disciplina racial y lanzaba un programa económico de subsidios agrícolas para los productores del sur.

La ley de Derechos civiles de 1875 que ilegalizó la excusión de negros de hoteles, teatros, ferrocarriles y otros servicios públicos fue anulada en 1883 por el Tribunal Supremo. Para 1900, todos los estados del sur habían colocado en sus constituciones la eliminación legal de los derechos políticos de los negros y la segregación.

“El año 1877 marcó la pauta para el resto del siglo: pondrían a los negros en su sitio; no se tolerarían las huelgas de trabajadores blancos, las elites industriales y políticas del Norte y del Sur se harían con el control del país y organizarían el mayor ritmo de crecimiento económico de la historia de la humanidad. Y lo harían con la ayuda -y a expensas- de los trabajadores negros, blancos y chinos, de los inmigrantes europeos, y del trabajo de las mujeres. Les recompensarían de forma diferente se-

3. Pablo Heller: “Marx y la guerra de la secesión”, *Prensa Obrera* N° 1.370, 3/7/2015.

gún su raza, sexo, nacionalidad y clase social, de tal forma que crearían diferentes niveles de opresión -un hábil escalonamiento para estabilizar la pirámide de la riqueza⁴.” La fragmentación de la clase obrera ha sido y es una herramienta poderosa de la burguesía norteamericana. A pesar de la combativa actividad del movimiento obrero norteamericano naciente, que conmovieron el mundo entero (¡los mártires de Chicago!), los sindicatos nacentes no afiliarían a trabajadores negros o les impondrían que lo hagan en secciones separadas. La central AFL no aceptaría negros en sus filas. La IWW y la CIO, ya en el siglo XX, sí lo harían, pero sin organizar reclamo alguno por la opresión especial que sufrían, si no ignorando el problema.

Ascenso imperial

Las décadas finales del siglo XIX vieron, junto al desarrollo de una enorme revolución técnica, el proceso de concentración de la clase dominante, generando trusts y monopolios que controlaban los precios en toda una rama de la economía entre unas pocas manos. Esa concentración no sólo se hizo a costas de la superexplotación y de los precios inflados sino de desfalcos millonarios al Estado federal. Los escándalos de sobornos y sobrepagos en la instalación de los ferrocarriles transoceánicos dio el título de “barones ladrones” a los grandes magnates que hicieron su fortuna en la etapa, los John D. Rockefeller con Standard Oil, J.P. Morgan con la U.S. Steel y otro pequeño puñado de millonarios. El capital necesario para instalar una empresa se volvía inaccesible sin tener acceso al crédito bancario, fusionando el capital financiero con el industrial. Se había terminado la época del capitalismo de libre empresa y libre competencia.

Se fueron dando todos los rasgos que llevarían al revolucionario Vladimir Lenin a caracterizar en los primeros años del siglo XX al imperialismo como una etapa de declinación capitalista, marcada por el ascenso del monopolio, el capital financiero y la conquista del mundo por un puñado de grandes potencias. Esto tuvo también su correlato en la transformación de Estados Unidos en una potencia expansionista a escala global.

Con la masacre de los guerreros del pueblo lakota en 1890 en Wounded Knee se dio por consolidada la expansión interna definitivamente. Los ojos de la burguesía norteamericana se dirigieron entonces decididamente al exterior. Esto no era un hecho completamente nuevo. Entre 1798 y 1895, la armada de Estados Unidos había

4. Zinn, p. 224

protagonizado 103 intervenciones en el extranjero para imponer la defensa de sus intereses económicos. Pero en 1898 se dio un salto en calidad con la guerra contra España, despojando a esta de unas últimas posesiones coloniales que el retroceso imparable del atrasado país europeo no le permitía defender.

“La guerra hispano-norteamericana fue un elemento clave en la conformación y emergencia del imperialismo yanqui, que ocupó en el lapso de dos años la isla de Cuba, Puerto Rico (sometida hasta hoy), la isla de Guam [en el Pacífico], Hawaii y las Filipinas. A comienzos de siglo forzó la independencia de Panamá con respecto a Colombia para poder ocupar en forma permanente las inmediaciones del canal interoceánico. Entre 1900 y 1933, las tropas americanas fueron enviadas cuatro veces a Cuba, dos veces a Nicaragua, seis veces a Panamá, siete veces a Honduras y a la república negra de Haití desde 1915 hasta 1934. Tan grandiosa historia de pillaje y esclavización jugó un papel central en el reparto del mundo por parte de las potencias imperialistas y en la emergencia de una nueva etapa del capitalismo mundial.⁵”

Formalmente, Cuba se independizó de España, pero bajo una ocupación militar estadounidense que se mantuvo hasta que se incorporara una enmienda constitucional que hiciera explícita la tutela yanqui sobre su gobierno. La decisión de mantener la posesión de Puerto Rico pero sin darle status de estado ni plenos derechos políticos a sus habitantes colocó inexcusablemente a Estados Unidos en la posición de potencia colonial.⁶

Comunismo y autodeterminación

La fundación de la Tercera Internacional luego del triunfo de la revolución rusa y el fin de la Primera Guerra Mundial debió dar cuenta de la bancarrota de la vieja Segunda Internacional socialdemócrata, cuyas direcciones nacionales más importantes se encolumnaron detrás de las clases dominantes de sus propias potencias imperialistas beligerantes.

La nueva Internacional se nutría de los avances de Lenin y otros militantes bolcheviques para la comprensión del carácter imperialista de la nueva etapa del capitalismo y de cómo este había podido usar parte de las ganancias extraídas a los oprimidos de su país y del mundo para dar

5. Hernán Díaz: “La independencia de Cuba y el expansionismo norteamericano”, *En defensa del Marxismo* N° 20, mayo de 1998.

6. Rafael Bernabe: “Rebelión en las colonias: Puerto Rico 1898”, *En Defensa del Marxismo* N° 20, mayo de 1998.

privilegios parciales a un sector de la clase obrera de las metrópolis, una aristocracia obrera. Este sector privilegiado es la base social de la asimilación de un sector del movimiento socialista al Estado de las potencias imperiales.

Las tesis de la nueva Internacional comunista se apoyaban especialmente en la sublevación de las naciones y pueblos oprimidos contra las potencias imperialistas como prueba decisiva para separar a los revolucionarios de la vieja socialdemocracia reformista y como clave para avanzar en la toma del poder. La autodeterminación de los pueblos oprimidos por el imperio zarista había sido un elemento decisivo, junto al reclamo campesino por la tierra de la base de apoyo con la que el proletariado revolucionario ruso pudo derrotar a las viejas clases dominantes.

En línea con esta comprensión, los dirigentes comunistas rusos como Lenin y Trotsky eran profundamente críticos de los izquierdistas norteamericanos que, arrastrando la actitud de sus organizaciones de origen, como el viejo Partido Socialista o los anarcosindicalistas de IWW, no levantaban ningún trabajo especial ni consignas respecto de la opresión de los negros en Estados Unidos, limitándose a la idea de que las necesidades de los trabajadores de todas las razas se realizarán bajo el socialismo. Bajo el ideal altruista de estar por encima de la división en razas, los revolucionarios rusos olían la adaptación al *statu quo* racista, y lo hacían ver.

La insistencia en este sentido dio lugar en el cuarto congreso de la Internacional Comunista en 1922 a la votación de una resolución sobre el tema de los pueblos de raza negra. Las “Tesis sobre la cuestión negra” consideraban que por el lugar que ocupaban los negros de Estados Unidos, estos jugarían un papel importante en la rebelión de todos los pueblos africanos contra la opresión colonial e imperialista. Desde ya, ataba el resultado de la pelea de los pueblos negros por su liberación con el esfuerzo de la clase obrera y el conjunto de los pueblos coloniales oprimidos.

Avanzaba en considerar que “el problema negro se ha convertido en una cuestión vital para la revolución mundial. La Tercera Internacional, que ha reconocido la ayuda invalorable que podían aportar a la revolución proletaria las poblaciones asiáticas en los países semicapitalistas considera esencial la cooperación de nuestros camaradas negros oprimidos para la revolución proletaria que destruirá la potencia capitalista. Es por esto que el cuarto Congreso deben aplicar especialmente al problema negro las ‘tesis sobre la cuestión colonial’ (...) El cuarto

Congreso reconoce la necesidad de sostener toda forma de movimiento negro que tenga como fin socavar y debilitar el capitalismo o el imperialismo, o detener su penetración”⁷.

Aplicar las tesis sobre la cuestión nacional significaba identificar las demandas nacionales o democráticas cuya realización no podía venir de las direcciones burguesas de los pueblos oprimidos, sino del apoyo y la lucha en común con el proletariado. El apoyo en la lucha contra la opresión imperialista y colonial, como la vía de desarrollo de la revolución socialista, como parte de un movimiento continuo o permanente, en la expresión de Marx que León Trotsky retomó para desarrollar la estrategia revolucionaria desde 1905 en Rusia.

La asimilación de estas tesis hizo que el Partido Comunista de Estados Unidos se destacara efectivamente en toda una etapa por un esfuerzo para organizar una presencia militante entre la comunidad negra.

En 1928, la Internacional Comunista estalinizada votó una interpretación forzada del planteo de apoyar la autodeterminación del pueblo negro, reclamando la escisión de una nación negra separada en los estados sureños con mayoría de población negra de manera artificial, sin relación con los reclamos concretos del movimiento negro. Esta política se desarrolló durante el tercer período ultraizquierdista de la IC, aunque nunca logró un impacto popular. El PC-norteamericano sí jugó un rol importante en esta etapa en la defensa de un caso emblemático al que dieron el carácter de una verdadera campaña internacional, los chicos de Scottsboro, ocho negros adolescentes condenados por un caso de violación de jóvenes blancas completamente inventado. El PC, en un giro conciliador promovido por la burocracia de la URSS, presionó a parte de los acusados que se declararan culpables para lograr un acuerdo de absolución para otros de los acusados⁸.

La militancia negra que había ganado un lugar importante en el comunismo norteamericano rompió casi enteramente con el partido en su próximo giro, hacia el frente popular y al gobierno del New Deal de Franklin D. Roosevelt. La subordinación a una colaboración con el Partido Demócrata de la segregación racial en el sur era un camino muerto seguro.

En el movimiento trotskista norteamericano que se levantó contra la estalinización y fue pasando por distintas formas organizativas

7. Tesis sobre la cuestión negra, en *Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista*, Pasado y Presente.

8. Richard Fraser: *Tom Boot, Revolutionary Integration*, Red Letter Press, Seattle, 2004.

(Communist League of America, Workers Party, Socialist Workers Party) hubo una fuerte demora en encarar un trabajo especial en el movimiento negro. León Trotsky fue consultado en varias ocasiones por los dirigentes norteamericanos, y por CLR James, trotskista negro de las Indias Occidentales, quien será un importante organizador y teórico de la cuestión negra. Sus intervenciones en estas charlas son una fuente clave para rescatar la posición del comunismo revolucionario sobre la cuestión negra en Estados Unidos. A pesar de los casi noventa años pasados, que vieron grandes desarrollos en el movimiento de liberación negra, los planteos de Trotsky mantienen una extraordinaria vigencia y hasta se anticipa a características que ha tomado el movimiento negro en su desarrollo posterior.

En la entrevista sobre el tema en Prinkipo, Turquía, en 1933 Trotsky planteó respecto de la posición de los trotskistas norteamericanos de centrar sus demandas en “iguales derechos” para el pueblo negro: “El punto de vista de los camaradas norteamericanos me parece poco convincente. La ‘autodeterminación’ es una demanda democrática. Nuestros camaradas norteamericanos promueven frente a esta demanda democrática la demanda liberal. Esta demanda liberal es además complicada. Entiendo lo que significa ‘igualdad política’. ¿Pero cuál es el significado de igualdad económica y social dentro de la sociedad capitalista? ¿Significa una demanda a la opinión pública para que todos disfruten de la protección igualitaria de las leyes? Pero eso es igualdad política. La consigna ‘igualdad política, económica y social’ suena ambigua y por ende es equivocada⁹.”

Sobre la aplicación de la consigna de autodeterminación, Trotsky precisaba: “Nosotros, por supuesto, no obligamos a los negros a convertirse en una nación; si lo son, entonces esa es una cuestión de su conciencia, es decir, qué desean y por qué luchan. Nosotros decimos: si los negros quieren eso, entonces nosotros debemos combatir en contra del imperialismo hasta la última gota de sangre, para que ellos ganen ese derecho, dónde y cómo quieran, de tomar un pedazo de tierra para ellos. Que hoy no sean mayoría en ningún estado no importa. No se trata de la autoridad de los estados sino de los negros. (...) Para los trabajadores de los estados del Sur la demanda liberal de ‘igualdad social, política y económica’, indudablemente significaría sin duda un progreso, pero la demanda por ‘autodeterminación’ sería un progreso mayor. Sin em-

9. Esta cita y las subsiguientes de “The Negro Question in America”, en *Leon Trotsky on Black Nationalism & Self-Determination*, Pathfinder Press, New York, 1967.

bargo, con la consigna ‘derechos iguales’ pueden ser engañados mucho más fácilmente (‘según la ley, usted tiene esta igualdad’).”

“Cuando llegemos al punto en que los negros digan ‘queremos la autonomía’, ellos tomarán una posición hostil al imperialismo norteamericano. En esa etapa, los trabajadores estarán mucho más decididos que la pequeña burguesía. Los trabajadores verán entonces que la pequeña burguesía es incapaz de luchar y no llega a ninguna parte, pero también reconocerán que los trabajadores comunistas blancos luchan por sus demandas y eso los empujará, a los proletarios negros, hacia el comunismo.”

“La ‘autodeterminación’ de los negros es parte de la cuestión de la revolución permanente en Estados Unidos. Los negros, a través de su despertar, de su demanda por autonomía y mediante la movilización democrática de sus fuerzas serán empujados a pensar en términos de clases. La pequeña burguesía tomará la demanda por ‘derechos iguales’ y por ‘autodeterminación’, pero demostrará ser absolutamente incapaz en la lucha; el proletariado negro propagará a la pequeña burguesía en la dirección de la revolución proletaria. Ese es, quizá para ellos, el camino más importante. Por eso no veo ninguna razón por la que no debamos avanzar en la demanda de ‘autodeterminación’.”

“¿Qué podemos perder en este tema yendo más lejos en nuestras demandas que lo que los negros mismos van en este momento? No los intimamos a que se separen del Estado, pero tienen el pleno derecho de auto-determinación cuando así lo deseen, y los apoyaremos y defendemos con todos los medios a nuestro alcance para que ganen este derecho, como lo defendemos para todos los pueblos oprimidos.”

Cuando el movimiento negro se reconoció como una comunidad separada de los intereses que contiene el Estado yanqui y que debía lograr su liberación contra el aparato de dominación de este, efectivamente su hostilidad al imperialismo que lo oprime domésticamente llevó al movimiento a una concepción internacional de su lucha, de unidad de intereses con los explotados del mundo que luchan contra el imperialismo. El enfoque de pelea por “igualdad de derechos”, que Trotsky crítica como un enfoque de reformas formales ambiguas, ha sido el que desarrolló el ala de movimiento de derechos civiles que se integró al Estado yanqui de la mano del Partido Demócrata, y el de la izquierda que ha disuelto la lucha por la liberación en la concepción posmoderna de políticas “identitarias”.

Trotsky no se negaba, sin embargo, a apoyar los reclamos democráti-

cos elementales. “Yo también creo que la demanda por “iguales derechos” debe mantenerse y no estoy en contra de esta demanda. Es progresiva en la medida en que no se ha realizado. (...) Los negros todavía no se han despertado y aún no están unidos con los trabajadores blancos. El 99,9% de los trabajadores norteamericanos son chauvinistas, son verdugos con relación con los negros y también respecto de los chinos. Es necesario hacerles entender que el Estado norteamericano no es su Estado y que ellos no tienen que ser los guardianes de este Estado. Los trabajadores norteamericanos que dicen: ‘los negros deben separarse si lo desean y los defenderemos en contra de nuestra policía norteamericana’, esos son revolucionarios, tengo confianza en ellos. El argumento de que la consigna de ‘autodeterminación’ los aleja de la conciencia de clases es una adaptación a la ideología de los trabajadores blancos”.

“El trabajador norteamericano es indescriptiblemente reaccionario. (...) Creo que debido al inaudito retraso político y teórico, y al inaudito avance económico, el despertar de la clase obrera ocurrirá muy rápidamente. La vieja cobertura ideológica estallará, todas las preguntas surgirán de inmediato, y dado que el país es económicamente tan maduro, la adaptación de lo político y lo teórico al nivel económico se logrará muy rápidamente. Es posible entonces que los negros se conviertan en la sección más avanzada. (...) Entonces ellos serán la vanguardia. Estoy absolutamente seguro de que, en todo caso, lucharán mejor que los trabajadores blancos.”

Estos comentarios previeron el rol de vanguardia radicalizada que jugaría el movimiento negro, unos treinta años después, y analiza genialmente la base material del desprecio de generaciones de izquierdistas yanquis por el problema negro, incluso como lo vemos al día de hoy, con argumentos autoproclamados “marxistas”.

Trotsky rescató que el planteo de auto-determinación ya se había expresado, de manera distorsionada, en los planteos separatistas del movimiento de “regreso a África”, liderado por Marcus Garvey. “Lo que dijo sobre el movimiento Garvey es interesante, pero demuestra que debemos ser cautelosos y amplios y no basarnos en el *statu quo*. La mujer negra que le dijo a la mujer blanca: ‘Espera que Marcus llegue al poder y ustedes serán tratados como lo merecen’, simplemente expresaba su deseo de un Estado propio. Los negros estadounidenses se reunieron bajo la bandera del movimiento Regreso a África porque les parecía una realización posible de su deseo de un hogar propio. ¿En realidad, querían ir a África? Era la expresión de un deseo místico de un hogar en el

que estuvieran libres del dominio de los blancos, en el que ellos mismos pudieran controlar su propio destino. También era un deseo de autodeterminación. Alguna vez fue expresado por algunos en forma religiosa y ahora toma la forma de un sueño de un estado independiente¹⁰.”

En el debate con CLR James y los compañeros del SWP, Trotsky apoyó el proyecto, no concretado, de impulsar un movimiento negro autónomo, con participación de los militantes del SWP, para armar un movimiento de lucha de masas.

Potencial y límite de la igualdad formal

El ascenso del movimiento negro en los años '50 y '60 tuvo una primer etapa ligada a la lucha por los derechos civiles -o sea, lograr el fin de la segregación y los derechos políticos. El punto de partida del ascenso fue un fallo de la Corte Suprema contra la segregación escolar en el distrito de Topeka en 1954. Grupos moderados de reclamo por los derechos civiles, como el NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), habían estado trabajando décadas en este tipo de presentaciones y consiguiendo a veces fallos favorables, que de todas maneras requerían una enorme pulseada para hacer efectivos.

El verdadero movimiento se puso en marcha Montgomery, la capital de Alabama en 1955, luego del famoso arresto de la trabajadora negra Rosa Parks, por no cederle el asiento a un hombre blanco en el colectivo e irse a la parte de atrás reservada a los negros. El boicot de la comunidad negra de la ciudad que siguió a la empresa de transporte debió enfrentar arrestos, ataques violentos y bombas contra sus centros comunitarios. Al año siguiente, la Corte Suprema sacó un fallo declarando ilegal la segregación en la línea de transporte. En el curso del movimiento se destacó como líder el reverendo protestante Martin Luther King Jr., que junto a su organización, la Southern Christian Leadership Conference, le dio al movimiento una fuerte impronta de acciones no violentas, de reclamo por la integración a la vida ciudadana de Estados Unidos y de búsqueda de apoyo al ala progresista de los funcionarios del Estado en su choque con las autoridades racistas del sur. Los fallos y leyes más de una vez fueron impuestos por fuerzas federales sobre las autoridades locales, aunque siempre luego de dejar expuestos a quienes llevaban los reclamos a la represión estatal y paraestatal.

“El inicio de la guerra de Vietnam potenció al movimiento por los

10. “Self-determination of American Negroes”, en *Leon Trotsky on Black Nationalism...*

derechos civiles. Como había sucedido durante la Guerra Mundial, los negros debían soportar las cargas más pesadas de la aventura bélica imperialista. No solo eran proporcionalmente más los negros que eran reclutados en el ejército, sino que una vez allí eran asignados a las tareas más riesgosas y morían en gran número. En la metrópoli eran los que más sufrían los aumentos de precios y los recortes en los programas sociales generados por la guerra.¹¹

Cada protesta, cada “Freedom Ride”, excursiones multirraciales de activistas a los focos de conflicto del sur, estaba expuesta a nuevos hechos represivos, detenciones y violencia racial. Mientras tanto, el movimiento de lucha ganaba renombre mundial. En 1963 se realizó la masiva marcha por derechos civiles a Washington. La respuesta inmediata fue una bomba en una iglesia en Birmingham, Alabama, que mató a cuatro pequeñas niñas negras.

La respuesta de la opinión pública nacional e internacional llevó a que el Congreso vote la Civil Rights Act en 1964 y la Voting Rights Act de 1965, que hicieron ilegal cualquier forma de segregación o discriminación racial, y que dieron plenos derechos electorales a los negros. En 1964, en la apoteosis del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz.

Una cosa, claro, era tener el derecho a votar y ser votado, y otra ejercerlo. La campaña “verano de la libertad” para empadronar votantes en los estados sureños por parte de las organizaciones de derechos civiles fueron enfrentadas violentamente por el KKK, que asesinó a tres de los voluntarios que fueron a empadronar a Mississippi. El Partido Demócrata del presidente Johnson, que había aprobado las reformas civiles en el sur, seguía manejado por los herederos del esclavismo, que reivindicaban abiertamente el supremacismo blanco. La campaña del “verano de la libertad” conformó un partido político local, Mississippi Freedom Democratic Party, que pidió ser reconocido en la convención del Partido Demócrata y fue rechazado por instrucción del propio Johnson, quien privilegiaba preservar la relación con la tradicional estructura racista de su partido.

Pero sobre todo en los poblados ghettos de las grandes ciudades del norte y el oeste, la situación de los negros no estaba viviendo mejoras reales en función del fin de la segregación racial en el sur. El siglo XX había sido un largo éxodo de la población negra del sur y el campo, cuya explotación cada vez empleaba menos mano de obra. Entre 1916 y 1940,

11. “La lucha popular en los Estados Unidos en los años sesenta y la Ofensiva del Tet” en *1968, un año revolucionario*, Pablo Rieznik, et al, EFFL, Buenos Aires, 2015.

un millón y medio de negros habían ido al norte. En las sucesivas migraciones de 1940 a 1970 se irían 4 millones más. Para 1970, el 50% de la población negra estaba en el norte y el 80% en las ciudades. La “igualdad de derechos” legales fueron una bandera de lucha que cualquier revolucionario estaba obligado a apoyar. Y para quienes sufrían la segregación fue una conquista efectiva. Pero los límites de esta conquista quedarían de manifiesto de manera rápida, mostrando que la lucha de la comunidad negra por su autodeterminación efectivamente seguía planteada.

La furia desatada y sus voceros

Malcolm X -principal vocero mediático de la Nación de Islam (Nation of Islam, NOI), grupo fundado en 1930 y dirigido por Elijah Muhamad, que combinaba el separatismo del movimiento de Marcus Garvey, el impulso a formar un capitalismo negro y una versión libre de la religión musulmana- fue la principal voz que expresó la creciente insatisfacción con el eje en reformas para lograr la igualdad civil y las tácticas de resistencia pasiva que las organizaciones de derechos civiles le habían impreso al movimiento negro. La separación que promovían los musulmanes negros se extendía de tener empresas con dueños negros a la separación de varios estados para formar una nueva nación. Se trataba de una organización con rasgos autoritarios, oscurantistas, machistas y anti-científicos. Respondían al odio racial de las clases dominantes blancas con la versión de que todos los negros son santos y los blancos diablos. Su condena de la opresión racial y su carácter duro y disciplinado eran enormemente atractivos para los jóvenes negros de las grandes ciudades e incluso dentro de las cárceles, donde se adhirieron a la NOI el propio Malcolm, así como el futuro dirigente de las Panteras Negras, Eldridge Cleaver.

Malcolm X había estado haciendo él mismo una evolución ideológica, dejando de limitarse a ser un vocero del discurso religioso-racial de Muhamad y llevando su agitación política más lejos que lo que este autoproclamado profeta y su organización estaban dispuestos a sostener. Sus discursos y apariencias televisivas le habían dado una plataforma para una enorme agitación política que recorría desde el rol de la opresión racial en la historia de Estados Unidos al rol de opresión doméstica e internacional, así como un contrapunto sistemático con la política integracionista de los movimientos de derechos civiles¹².

12. Las posiciones reflejadas y las citas tomadas de *Malcolm X: as they knew him*, compilado por David Gallen, Ballantine Books, New York, 1992.

Luego de un escándalo por un comentario respecto del asesinato del presidente John F. Kennedy (Malcolm X dijo una frase equivalente a que cada uno cosecha lo que siembra, refiriendo a la violencia y odio que promueve el Estado yanqui) Elijah Muhamad lo suspendió como vocero de la Nación.

El giro político fue marcándose cada vez más. En 1963 planteaba que los blancos no están “condenados” por su raza, sino por la continuidad de la opresión negra. También redefinió su posición como la búsqueda de la auto-determinación de la comunidad negra, no la búsqueda de la conformación de un Estado separado. Con la ruptura formal con Muhamad y la NOI en 1964 abandonó completamente la idea de abstencionismo político que guiaba la prédica de estos. Planteó la necesidad de un frente único de las organizaciones negras, dejando de lado el estilo pendenciero que promovía Muhamad. Se sumó a campañas contra la segregación racial, trabajando junto a organizaciones de derechos civiles, aunque sin acordar con el programa integracionista. Planteaba la necesidad de que el nacionalismo negro se estructurara como una fuerza política.

En 1964 lanzó una organización sin eje religioso, la Organization of African-American Unity, para canalizar su nuevo planteo militante. Propone preparar la intervención electoral del pueblo negro independientemente, tanto del partido Demócrata como del Republicano, diciendo que la libertad debía conquistarse por cualquier medio que fuera necesario, los votos o las balas. Planteó la formación de unidades de autodefensa de la comunidad negra que pudieran responder y derrotar la violencia racista.

Planteó la posibilidad de colaborar con gente de cualquier raza: “No nos interesa si sos cristiano o judío o lo que sea. Si estás harto de las condiciones que sufre el pueblo negro en este país y querés jugar un rol activo, entonces nos interesa ayudarte a organizar”. En otra oportunidad, cuando le preguntaron si aceptaría un miembro blanco, respondió que a John Brown, un abolicionista blanco que lideró una insurgencia armada contra los esclavistas en años anteriores a la guerra de secesión, lo incorporaría. Fue orador en actos organizados por el SWP en Nueva York, que estaban organizando una gira nacional suya cuando fue asesinado.

Su diferencia con la política de Luther King y las organizaciones integracionistas era más profunda que nunca. Realizó un lapidario balance de la marcha sobre Washington convocada por King y sus aliados, en la que participó como observador. “Los negros estaban en las calles. Hablaban de cómo iban a marchar sobre Washington... Que iban a

marchar sobre Washington, desfilan ante el Senado, desfilan ante la Casa Blanca, desfilan frente al Congreso y paran, detenerse ahí, sin dejar proceder al gobierno. Era el pueblo llano en la calle. Eso aterraba a los blancos y también asustaba enormemente a la estructura del poder blanco en Washington. Eso es lo que consiguieron con la marcha de Washington. Se unieron a ella, se convirtieron en parte de ella, tomaron posesión de ella... Se convirtió en un picnic, en un circo. En nada más que un circo con payasos y todo. Dijeron a los negros a la hora que debían llegar a la ciudad, dónde detenerse, qué pancartas llevar, qué canciones cantar, qué discursos podían hacer y luego les dijeron que se marcharan de la ciudad antes del anochecer”. Denunció que las organizaciones reformistas conscientemente usaron la marcha como “válvula de escape para canalizar las frustraciones” de los negros, cuando era generalizada la discusión de potencial violencia y explosiones sociales.

En diciembre de 1964, un mes y medio antes de su asesinato, explicaba que había abandonado la idea de un Armagedón racial con fecha fija, pero que sí entendía que “finalmente habrá un choque entre los oprimidos y los que oprimen, entre los que quieren libertad, justicia, igualdad para todos y los que quieren continuar con los sistemas de explotación, pero no creo que la base de esto sea el color de piel”.

Louis Farrakhan, luego sucesor de Muhamad al frente de la NOI, había dicho que “un hombre como Malcolm merece la muerte”. Su asesinato, en un acto público el 21 de febrero de 1965, a manos de un pistolero de la Nación de Islam, tenía fuertes indicaciones de complicidad oficial. Han surgido luego evidencias de un seguimiento intensivo hacia el dirigente por la CIA, el FBI y la policía neoyorquina. Tuvo cuatro ataques previos contra su vida sin que se tomara medida alguna de protección. En el lugar de su muerte se encontraba un policía encubierto, Gene Roberts, que luego infiltró las Panteras Negras y fue identificado como agente en un juicio subsiguiente. Un documental lanzado en 2020 demostró tan contundentemente que dos de los tres detenidos que fueron inculpados por el FBI eran inocentes, que el caso fue reabierto este año¹³. La maquinaria del Estado que encarceló, infiltró, dividió y asesinó a toda una generación de luchadores estaba presente en el asesinato de Malcolm X.

La explosión que, según Malcolm X, se sentía en el aire no tardó en llegar. En 1965, Watts, un barrio negro de la ciudad de Los Angeles, esta-

13. <https://www.npr.org/2020/02/11/804933076/malcolm-x-doc-prompts-reexamination-of-iconic-leader-s-assassination-investigati>

lló en rebelión y fue el inicio de una seguidilla de rebeliones en los ghettos de todo el país, que expresaban el enorme descontento con la pobreza, la desocupación, la brutalidad policial cotidiana contra la comunidad y el envío creciente de conscriptos a pelear a la estancada guerra en Vietnam. En 1966 se alzaron Chicago, Nueva York, Baltimore, San Francisco y Cleveland. En 1967 hubo 164 rebeliones de distinta gravedad.

Estas rebeliones, que evidenciaban el profundo malestar de la comunidad negra a pesar de las reformas de igualdad formal implementadas, pusieron en una crisis política profunda al movimiento de derechos civiles. El Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC), organización juvenil que había sido parte de todo el proceso de reclamos contra la segregación, se encaminó de un proceso de radicalización hacia un nacionalismo negro, lanzando la consigna de Black Power. Las rebeliones incluso impactaron en las convicciones del veterano reverendo King, que en 1968 relacionó por primera vez la pobreza de los negros del ghetto con la opresión impuesta por Estados Unidos sobre otros países del mundo, denunciando la guerra en Vietnam. King planeaba instalar un acampe frente al gobierno en Washington, por las urgentes demandas de la comunidad negra. King, que venía siendo vigilado y hostigado por el FBI, fue asesinado en su hotel cuando fue a apoyar una huelga de trabajadores de recolección en Memphis, en 1968. El asesinato del premio Nobel de la paz, del dirigente negro que más esfuerzos había hecho por mostrarse amigable al establishment, fue la señal para que se generalicen los motines y los saqueos con más fuerza aún, simultáneamente en 120 ciudades, que vieron desplegada la Guardia Nacional para reprimir las protestas.

En 1968, la crisis económica, las enormes dificultades de la guerra en Vietnam, donde las cruentas batallas desatadas por la Ofensiva Tet, encarada a principios de año por el Vietcong, desmintieron las versiones exitistas del gobierno. El ascenso del movimiento estudiantil junto al movimiento negro, y el movimiento de mujeres, confluyendo en el reclamo contra la guerra, desataron una enorme crisis política, a pesar de que el movimiento obrero siguió en un reflujó y no tuvo una participación organizada en esta etapa de ascenso popular¹⁴.

Panteras Negras: la organización y el programa

El Partido de Panteras Negras por la Auto-Defensa, una de las muchas organizaciones de nacionalismo negro surgidas de la radicalización del movimiento, fue la que mejor expresó el quiebre profundo entre esa

14. "La lucha popular...".

generación de militantes negros y todo el régimen político yanqui. Su enfoque no se limitaba a enfrentar el racismo y la segregación, sino al capitalismo y al lugar de opresor imperial de Estados Unidos. La revolución cubana y la lucha contra el colonialismo francés en Argelia eran una enorme influencia en la formulación anti-imperialista que iba tomando el movimiento y las Panteras en particular¹⁵.

La organización, fundada a fines 1966 por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey Newton, se declaró parte de una revolución mundial contra el imperialismo yanqui. “A diferencia de los activistas de derechos civiles, que abogaba por plenos derechos de ciudadanía dentro de los Estados Unidos, su Black Panther Party (BPP) rechazaba la legitimidad del gobierno de Estados Unidos. Las Panteras veían a las comunidades negras dentro de Estados Unidos como una colonia y a la policía como un ejército de ocupación. En un ensayo fundacional, en 1967, Newton escribió: “porque los negros quieren determinar su propio destino, se les inflige constantemente la violencia del ejército ocupante, representado por el departamento de policía. Hay una gran similitud entre el ejército ocupante en el sudeste asiático y la ocupación de nuestras comunidades por la policía racista”. A principios de 1968, la BPP era una organización local de Oakland, la ciudad obrera de fuerte población negra que comparte la bahía con San Francisco, dedicada centralmente a organizar una vigilancia armada y uniformada (aprovechando la legislación que permitía tanto llevar armas registradas como observar la realización de procedimientos policiales) del accionar policial en la comunidad. Para fin de año habían abierto locales públicos en veinte ciudades en ambas costas. Para 1970 tenían organizaciones en 68 ciudades, ocupando en su breve pero intenso ascenso el lugar del centro del movimiento revolucionario en Estados Unidos¹⁶.

La organización tomaba algunos elementos marxistas y reivindicaba un amplio elenco de dirigentes y teóricos revolucionarios de Lenin, a Mao, el Che Guevara, Malcolm X y el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Es del teórico anti-imperialista Frantz Fanon, miembro del FLN, de quien más toman su política. No reivindican a la clase obrera como sujeto revolucionario y consideran que el lumpenaje tiene un alto potencial revolucionario.

Su programa central era una plataforma de diez puntos que partía

15. “La lucha popular...”.

16. Joshua Bloom, Waldo E. Martin: *Black against empire*, University of California Press, 2013, p. 2.

de la definición de libertad para su pueblo como la autodeterminación de la comunidad negra, votada en un plebiscito solo de la comunidad negra, el derecho al trabajo, a la vivienda, a una educación acorde con las necesidades del pueblo negro, el fin del servicio militar para los negros, el fin de la violencia y asesinatos policiales, la liberación de todos los presos negros y el juicio de todo negro acusado de un crimen a futuro por un jurado de miembros de su comunidad. Un punto que condenaba el robo de la comunidad por los blancos fue reemplazado luego por “el robo de los capitalistas” y detallaba la necesidad de cobrar las reparaciones prometidas en el siglo XIX a los esclavos liberados de cuarenta acres y dos mulas, con el cálculo de los intereses pendientes, para ser distribuido colectivamente en la comunidad. Argumentaban que si Alemania fue obligada a dar pagos a Israel por los 6 millones de judíos muertos, los racistas norteamericanos, que han asesinado a 50 millones de personas de color, deben pagar igualmente su parte.

Su práctica política, aunque ponía un fuerte eje en el armamento de la comunidad negra como base para su protección, cosa que en Estados Unidos tiene un amplio marco legal, no organizaba acciones ofensivas armadas contra el Estado ni las fuerzas de seguridad, al modo de los grupos foquistas o guerrilleros que actuaban en muchos países del mundo en esos años. El eje de su práctica política en los barrios se desarrolló alrededor de la defensa frente a la brutalidad policial. Sumado a eso, desde 1969 implementaron un variado y complejo conjunto de proyectos barriales, autofinanciado con donaciones y aportes recogidos en la comunidad y de simpatizantes políticos externos. El que logró más desarrollo fue programa de desayunos gratis, que en su máximo desarrollo funcionaba en 36 ciudades. Solo en la zona de Oakland y San Francisco alimentaban a 12 mil niños. Otros proyectos importantes eran distintas clínicas autogestionadas; laboratorios de investigación de problemas que afectaban particularmente a la comunidad negra, como la anemia por células falciformes; repartos gratuitos de alimentos, zapatos y ropa; grupos de apoyo para dejar las drogas; servicios de ambulancias barriales; micros comunitarios para organizar visitas de familiares a las cárceles, un sistema de escuelas “de liberación” propias con una currícula reformulada y brigadas para impedir desalojos de vecinos del barrio.

Más que internacionalistas, se definen como “intercomunalistas”, reivindicando la confluencia de organizaciones que representen las distintas comunidades organizadas. Promovieron la organización de grupos modelados en las Panteras Negras en las comunidades de in-

migrantes asiáticos, entre los puertorriqueños y los pueblos originarios. Reclamaban a los activistas blancos que se vayan a organizar a sus comunidades para la lucha, promoviendo frentes únicos, como el que realizaron con el Peace and Freedom Party que llevó al pantera Eldridge Cleaver como candidato a presidente, pero rechazando la pertenencia a una organización común.

El concepto de autodeterminación de las comunidades del BPP no planteaba la formación de un nuevo estado en América ni atarse al destino del movimiento de liberación panafricano, sino la confluencia en la derrota y desmantelamiento del imperio mundial de Estados Unidos. Huey Newton, afirmado como principal dirigente del BPP, escribió: “Consideremos a los negros americanos. Relacionados sólo históricamente con Africa, no tienen elementos reales para reclamar territorio ni en Estados Unidos ni en Africa. Los negros americanos solo tienen las costumbres sociales y culturales que han evolucionado de siglos de opresión. En otras palabras, los negros de Estados Unidos forman no una colonia dominada, sino una comunidad oprimida dentro de fronteras comunes. ¿Qué, entonces, quieren decir las palabras ‘nacionalismo negro’ concretamente para el negro de Estados Unidos? Sin constituir nada que se asemeje a una nación en la actualidad, ¿deben los negros de Estados Unidos de alguna manera tomar (o posiblemente que les sea ‘concedida’) tierras de Estados Unidos y esperar proclamar una nación soberana? De cara al poder actual que ejerce Estados Unidos sobre el mundo entero, tal nación solo puede ser una fantasía que puede llevar a la extinción de una raza”.

La concepción de Newton sacaba conclusiones críticas de la posición conservadora de la burocracia estalinista de la Unión Soviética, a la cual le asignaba una responsabilidad enorme por el fortalecimiento del imperialismo yanqui: “El primer error de Rusia vino en la forma de un análisis incorrecto: que el socialismo podía coexistir pacíficamente con las naciones capitalistas. Esto fue un golpe a las comunidades de todo el mundo, que llevó directamente a incapacitar la posibilidad de los pueblos a oponerse a la agresión capitalista/imperialista (...) Los rusos han permitido esto por inocencia o traición. Más allá de cómo sucedió esto, han dañado a capacidad del tercer mundo para resistir¹⁷”.

El rápido ascenso militante de las Panteras lo puso inmediatamente en la mira de la represión estatal. En el proceso de su rápida división y

17. Ambas citas en Mumia Abu-Jamal, *We want freedom: a life in the Black Panther Party*, South End Press, Cambridge, 2004.

disgregación jugó un rol enorme la infiltración, el asesinato y el encarcelamiento de sus filas. Su dirección estuvo dislocada desde un primer momento por el encarcelamiento, el asesinato y el exilio. Cuando luego del escándalo de Watergate, comisiones parlamentarias investigaron el desempeño de las fuerzas de inteligencia, desclasificando muchos archivos, se conoció la existencia de un masivo Programa de Contraespionaje (Cointelpro), operado por el FBI y dirigido contra opositores políticos internos. Entre 1956 y 1971, Cointelpro tomó 295 medidas contra grupos negros. Estas incluían cartas falsificadas para generar conflictos internos, robos y pruebas de que habían organizado el asesinato del dirigente de las Panteras en Chicago, Fred Hampton. Organizaciones de izquierda, como el SWP también fueron un blanco importante.

En esas investigaciones se dio a conocer un famoso comunicado interno del director del FBI, J. Edgar Hoover, de 1968, que coloca como primer objetivo de Cointelpro “prevenir la coalición de grupos negros nacionalistas combativos (...) una coalición efectiva de grupos negros nacionalistas sería el primer paso hacia una verdadera ‘Mau Mau’¹⁸ en Estados Unidos, el comienzo de una verdadera revolución negra”. Llama, en función de esos efectivos, a impedir el desarrollo de líderes de estos movimientos, a “localizar a potenciales generadores de problemas y neutralizarlos”, a desacreditar a las organizaciones frente al público y a golpear su arraigo en la juventud.

En julio de 1969, Hoover planteaba públicamente que “el Partido de Panteras Negras representa, sin duda, la mayor amenaza la seguridad interna del país”. Hoover se aseguró de que la tarea de disrupción del BPP hiciera especial hincapié en interrumpir el programa de desayunos infantiles, para golpear la inserción de las Panteras en la comunidad.

La victoria electoral del derechista Richard Nixon, que prometió imponer la ley y el orden contra la rebelión popular, fue la señal para que las fuerzas represivas organizaran, una tras otra, irrupciones armadas sobre las centrales del BPP. La orden vigente de Huey Newton fue la de defender con armas cada hogar o local en el que ingresaran las fuerzas de seguridad.

En el terreno de un choque militar con el Estado, llevado adelante por partes separadas, en las cuales las fuerzas de seguridad elegían el momento de golpear y lo preparaban sistemáticamente, se llevó adelante un *blitz* aplastante contra la organización. El planteo de encarar la ofensiva como un problema militar y no de generar una movilización democrática en su apoyo (como lo había sido la campaña por la libertad de

18. Por la guerrilla que combatió por la independencia de Kenia.

Huey Newton, que fue la consigna con la que se expandieron en todo el país) aparece a la distancia como un error político pagado muy caro.

Dividido y sometido a una presión inmensa, el BPP implosionó. Tuvo indudablemente un impacto político masivo y dejó un gran legado, en el momento no logró liderar una movilización que quebrara el operativo represivo lanzado.

Los logros de 50 años de “capitalismo negro”

Las clases dominantes se dieron una política decidida para que no se vuelva a repetir una irrupción de las masas negras de esas dimensiones. En una reunión de los movimientos moderados NAACP y Core (Congreso de la Igualdad Racial) en la Casa Blanca con el Chase Manhattan Bank y la familia Rockefeller se anunció un plan para desarrollar un “capitalismo negro”. Se cuidó de promover más caras negras en los medios de comunicación. En el curso de los años '70, algunos miles de negros fueron electos a cargos públicos, en general quienes habían militado en el ala integracionista de los derechos civiles o sus continuadores políticos, integrados como ala del Partido Demócrata. Esta inclusión homeopática ni modificó donde reside el verdadero poder económico, social y político en el país ni mejoró las condiciones sociales del resto de la comunidad.

Han pasado cincuenta años desde que el ala integracionista de la dirigencia negra se ha vuelto una presencia permanente en los cargos del Estado. Hoy existen más de 7 mil funcionarios electos negros. En los últimos 25 años, personas negras llegaron a los cargos máximos, empezando con los secretarios de Estado que sirvieron bajo George W. Bush, Condoleezza Rice y Colin Powell, y siguiendo con los dos términos presidenciales de Barack Obama.

¿Cómo se ha modificado la situación de la comunidad negra en estos 50 años de participación minoritaria de la dirección del Estado de funcionarios surgidos de su seno?

Los negros ganan en promedio salarios de un 60% menos de los de los blancos no hispánicos. Esto compone una mejora con relación a 1970, cuando el promedio era de la mitad. Pero la diferencia dejó de achicarse en 2000, cuando el indicador volvió a desmejorar. De todas maneras, la estadística tomada por el Censo solo mide a quienes tienen un ingreso fijo, no contabilizando a desocupados o subocupados. Un 35% de los jóvenes negros estaban desocupados previo a la pandemia. Durante junio, a pesar de que se pidieron casi un millón

y medio de nuevos seguros de desempleos, de conjunto, la desocupación bajó casi un punto y medio, según los últimos datos oficiales. En el mismo periodo, la desocupación negra no se recuperó sino que siguió creciendo.

Mirando la diferencia en los bienes declarados, tenemos una imagen más nítida. El capital promedio de un negro es un décimo del de un blanco no hispanico. Esta relación se mantiene fija desde 1990. En 2014, cuando la pobreza en la comunidad negra había descendido al 27%, seguía triplicando la de la comunidad blanca¹⁹.

Los ghettos, instalados en las ciudades del norte por un bloqueo informal a que los negros pudieran establecerse en otros barrios durante las migraciones masivas de la segunda posguerra, siguen existiendo. La medición de segregación racial urbana mejoró, pero solo parcialmente, del 93% en 1970 al 70% en 2010. Un nivel muy alto a 55 años del fin de la segregación legal.

Desde el año 2000 viene creciendo el indicador de estadounidenses que viven en barrios donde más de un 20% vive bajo el nivel de pobreza. Los niños negros viven en esos barrios en una proporción de siete a uno con los niños blancos. Son los barrios con menor acceso a la salud y a la educación, y los que tienen un hostigamiento mayor de las fuerzas policiales.

El impacto sanitario de esta diferenciación social es que un adulto negro tiene el doble de probabilidad de morir de un problema cardíaco, o de tener diabetes, y el 50% más de tener problemas de presión sanguínea. El mayor número de negros sin seguro médico (12,2 a 7,8%) en un país sin servicio de salud pública, combinado a su presencia concentrada en los trabajos considerados esenciales, dio lugar a su extrema vulnerabilidad a la pandemia²⁰. El resultado de toda esta segregación y opresión racial real es que las muertes por coronavirus son cinco veces más comunes entre negros y pueblos originarios que entre blancos (y cuatro veces más comunes entre aquellos de ascendencia hispanica). En el contexto de la pandemia yanqui, de ya 150 mil muertos, un cuarto de los de todo el planeta, es una verdadera masacre social.

Dos indicadores importantes se han agravado desde el fin de la segregación legal. El nivel de empleo entre hombres negros en 1972 era de un 80%, previo a la pandemia estaba en 63%. El nivel de encarcelamiento de hombres negros se ha triplicado entre 1960 y 2010. Las cár-

19. "Measuring deprivation", *The Economist*, 3/6/2020.

20. "Measuring racial progress", *The Economist*, 4/6/2020.

celes de Estados Unidos son hoy probablemente el punto de más seguro contagio de Covid-19 en el planeta.

La casta de funcionarios de Estado negros está reclutada de entre los sectores de la comunidad que han podido progresar de manera aislada, aprovechando la limitada movilidad social bajo la forma de ascensos profesionales, empresariales, académicos o militares que es posible, luego del fin de la segregación legal en los '60 y más tarde favorecida, en cuotas simbólicas, con legislación de discriminación positiva que favorece una integración de minorías en distintas esferas.

Este cuerpo de funcionarios ha dado apoyo en estas décadas al enorme desarrollo dado al complejo policial y carcelario con el argumento de la lucha contra el crimen y la guerra contra las drogas. Este reforzamiento ha reemplazado a la segregación legal como forma de opresión de la comunidad negra y también de la opresión de la juventud y los trabajadores en general. La ley de Crimen de 1994, que promovió que el encarcelamiento masivo diera un salto bajo la administración de Bill Clinton y el entonces senador Joe Biden, que estuvo entre sus principales impulsores. La mayoría de la bancada negra en el Congreso votó, en 2014, la prórroga del programa que da armamento militar de las fuerzas armadas a los departamentos policiales locales, y hace tan poco, como 2018, la Protect and Serve Act, que reforzó la inmunidad legal de los policías cuando ejercen la violencia contra civiles²¹.

Un promedio de mil civiles son asesinados cada año por la policía. Es tres veces más probable que un afroamericano sea muerto por la policía que un blanco, alcanzando a ser la causa de muerte de uno cada mil miembros de esa comunidad. El asesinato policial es la sexta causa de muerte más común de jóvenes negros. Casi la totalidad de los asesinados están bajo la línea de la pobreza.

La policía yanqui efectúa 10 millones de arrestos anuales. Su población carcelaria es un 25% de la del mundo entero. Es, por lejos, el país con una mayor parte de su población encarcelada. La cantidad de presos se ha quintuplicado desde los años '70, marcando una enorme militarización de la sociedad, dirigida casi exclusivamente a la clase trabajadora. Los negros son los más condenados por crímenes comunes y reciben condenas más largas, lo cual los lleva a componer un tercio de la población carcelaria, mientras son un 13% de la población general.

La impunidad también es enorme. Según datos de *mappingpolice-violence.org*, de 7.663 casos de civiles muertos por fuerzas policiales en

21. <https://www.blackagenda-report.com/black-caucus-sells-out-its-constituents-again-cops>

Estados Unidos entre 2013-2019, solo en 95 casos hubo juicios y en 48 casos, condenas. Los sindicatos policiales son un enorme entramado de influencia política y económica, que ha operado sistemáticamente para defender estas condiciones de impunidad.

Una víctima especial de este Estado carcelario son los militantes del movimiento negro que no tomaron el camino de integración al Estado. Diecinueve Panteras Negras, como el periodista Mumia Abu-Jamal, están cumpliendo condenas hace cuatro décadas por causas fabricadas. Otros presos provienen de movimientos similares de otras comunidades, como Leonard Peltier, preso político que pertenecía al American Indian Movement, preso desde 1976. Los cálculos de presos políticos en la actualidad en Estados Unidos oscilan entre 60 y 100, incluyendo activistas de etapas recientes²².

Junto al propio gobierno de Donald Trump, esta dirección de la comunidad negra, sostenida desde su lugar en el Estado y el apoyo del gran capital y de sus partidos, es la gran derrotada por la actual rebelión. Las comunidades negras han repudiado masivamente los resultados de su política de “reformas progresivas”.

Ya el surgimiento del primer movimiento de Black Lives Matter, bajo el gobierno de Barack Obama, ponía de manifiesto cómo su administración dejó intacto el aparato policial racista.

Ahora ha quedado desmentida definitivamente la versión sobre la moderación política de la comunidad negra, que todos los analistas electorales repetían hace tres o cuatro meses. Esa política no es la del pueblo negro sino la del aparato demócrata, ligado a la burguesía negra, las iglesias, sistemas de universidades y escuelas propias. Este aparato se movilizó de manera decisiva para darle la candidatura demócrata a Joe Biden, un representante innegable del establishment capitalista. En particular, fue clave el apoyo de Jim Clyburn, diputado por Carolina del Sur, miembro de la bancada de diputados negros y jefe de la bancada demócrata en la cámara. Clyburn es parte de la aceptada maquinaria del Estado imperial, llegando a oponerse a la existencia de la universidad gratuita, diciendo que la privatización permite a la comunidad negra desarrollar sus propias universidades, haciendo caso omiso de los enormes niveles de deserción académica por razones económicas que eso conlleva en su comunidad. Es verdad que Bernie Sanders, el precandi-

22. <https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/30/black-panther-radicals-still-in-jail>; <https://afgj.org/politicalprisonersusa>; <https://www.streetsheet.org/what-is-a-political-prisoner-and-does-the-u-s-have-them/>

dato autoproclamado revolucionario y socialista, así como las organizaciones que lo apoyan, han hecho muy poco para ganarse el apoyo de la comunidad negra. Pero la rebelión ha mostrado que la sumisión y adhesión al *statu quo* que la ingeniería electoral, los medios y las encuestas asignaban al “electorado negro” no tiene nada que ver con el estado de ánimo real en las comunidades de trabajadores del país, y en particular las negras.

Hay en marcha un operativo político para restablecer la contención. El operativo de alineamiento del activismo que está en la calle en la campaña de Biden pretende restablecer los lazos del Partido Demócrata con el activismo, para enterrar cualquier filo de transformación profunda que pueda emerger de este choque. Se han anotado en el tren de campaña de Biden todos los izquierdistas del campo: Sanders, del Partido Demócrata, incluidos sus apoyos intelectuales, como Naomi Klein y Noam Chomsky. En los últimos días se ha sumado también una figura de peso en la historia del movimiento negro como Angela Davis, ex militante de BPP y del PC, presa política en los años '60 y hoy una importante intelectual feminista. Davis fundamentó esto, no en aprobar la política de Biden sino en que debe elegirse el candidato “más fácil de presionar por el movimiento anti-racista”. Algo parecido había dicho Chomsky, “lo mejor que puede decirse de Biden es que políticamente es un envase vacío”. Lo oblicuo de los elogios muestra que no es tarea fácil ganar al activismo a este apoyo. Biden trata de colaborar con el operativo hablando lo menos posible en su campaña, haciendo perfil bajo mientras Trump se desgasta día a día. Sin embargo, cualquiera que mire su trayectoria política sabe que, lejos de ser un envase vacío, es un representante del gran capital imperialista, de su Estado policial, intervenciones militares imperialistas, privatismo y rescates al capital. El apoyo en nombre a su supuesto carácter presionable, lejos de condicionarlo, lo fortalece para defender estos intereses. Múltiples voces del movimiento negro radicalizado denuncian esta intención, entre ellos el preso político Mumia Abu-Jamal, que envió una carta desde su prisión, llamada “Los peligros de la reforma”, que alerta de todas las maniobras parlamentarias para desmovilizar y concluye con una frase de Huey Newton: “Queremos libertad, no otra reforma”.

Vidas negras

Los millones que han tomado las calles del país en el movimiento más grande y más extenso de la historia del país son parte de muchas

organizaciones. La mayoría no pertenece a organización alguna. Pero hay una bandera que se ha visto de punta a punta, hasta en la última acción, a nivel nacional e internacional, Black Lives Matter. Esta consigna es también el nombre de una organización, surgida del levantamiento de Ferguson en 2014, que es todavía relativamente pequeña y con presencia en 14 ciudades de las 550 donde hubo movilizaciones. En 2014 conformó también el Movement for Black Lives (MBL), una coalición de 150 organizaciones sociales y políticas locales de militantes negros, que tiene expresión en todo el país a través de sus componentes variados.

Existe en Black Lives Matter, fundada por tres mujeres negras, Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, dos de las cuales se identifican como LGBTI, un fuerte eje en que el liderazgo del movimiento tenga un protagonismo de mujeres, negras, LGBTI. El discurso tiene un ángulo con un eje cultural, basado en las experiencias y vivencias personales, y planteos de género. Al mismo tiempo, hay un planteo de reconstrucción del movimiento de liberación negro y de intervención política²³. Conviven en el MBL grupos que, como la mayoría del activismo en Estados Unidos, se organiza en grupos temáticos (“single issue”) que se nuclean por afinidad, y con funciones y demandas específicas, con organizaciones que tienen programas más acabados y una acción política más integral. Hay planteos anticapitalistas y hay también eje en que la plata quede en negocios de la comunidad, sea en variantes de cooperativismo o directamente de promoción del empresariado negro. Hay un fuerte eje en acciones directas, muchas veces con ángulos de impacto mediático y un uso muy ágil de las redes sociales.

En muchos casos reivindican la etapa no violenta del movimiento de derechos civiles como modelo político a seguir. Gran parte de su discurso estuvo centrado en toda una etapa en defender la consigna inicial de que las “Vidas Negras Importan”, no como un desprecio hacia los que no estén incluidos en esa reivindicación sino como el reclamo del fin de una opresión particular, incluso como parte de una lucha más general contra la opresión.

En la coalición conviven organizaciones de reciente fundación, con veteranos del movimiento de liberación negra o sus discípulos políticos. Algunos miembros son organizaciones no gubernamentales, a veces

23. Una selección de entrevistas representativas con integrantes de Black Lives Matter y el MBL del año 2014 en *Nuevo Activismo Negro*, compilado por Ezequiel Gatto, Tinta Limón, Buenos Aires, 2016.

condicionadas por límites legales o por sus fuentes de financiamiento. Han tenido reuniones para “articular” con las diputadas de izquierda del Partido Demócrata, y sobrevuela la idea de promover una participación electoral, aunque no haya definiciones concretas de apoyo a los demócratas. Han tomado un amplio programa de reivindicaciones sociales, comparable en varios puntos con la plataforma del Black Panther Party, incluso yendo más lejos en el planteo de abolición general de las fuerzas policiales y las cárceles. En el curso de la rebelión popular, desde el propio MBL la consigna que más se destacó no fue la abolición de la policía, sino su desfinanciamiento, ángulo en el que coincidió la izquierda del Partido Demócrata y que rápidamente fue tomado como posta por diversas administraciones municipales demócratas, como los gobiernos de Nueva York y Los Angeles, para hacer un reordenamiento contable de sus presupuestos y aparecer como aplicando el programa del movimiento.

Distintos componentes de la izquierda negra más radicalizada tienen vasos comunicantes con el MBL. Estos grupos están nucleados alrededor del sitio Black Agenda Report y la Black Alliance for Peace. Son completamente hostiles a la integración al Estado norteamericano y al Partido Demócrata. Plantean que la desfinanciación de la policía es un camino trunco y reivindican el control comunitario como única salida. Tienen un planteo de oposición profunda al Estado yanqui como opresor imperialista. Todos ellos buscan apoyo en distintos gobiernos que tengan choques con Estados Unidos, abriendo expectativas en denuncias en foros internacionales, incluso en Naciones Unidas, de parte de Venezuela, Irán, China o distintas naciones africanas.

La Black Alliance for Peace se define como una organización de base obrera, anticapitalista, anti-imperialista e internacionalista. YahNé Ndgo, vocera de la Black Alliance for Peace y miembro de Black Lives Matter en Philadelphia, planteó en el canal Press TV, el 2 de junio, que la lucha negra contra la opresión implica “ejercer el poder y el control sobre sus propias vidas. Somos una nación dentro de la nación. Queremos nuestro propio Estado-nación y el fin de la guerra de Estados Unidos contra la gente africana que se libra dentro del país y en el extranjero”. Ajamu Baraka, cabeza de la Black Alliance for Peace, fue candidato a vicepresidente por el Partido Verde en 2016.

La activista Monifa Bandele, del Movimiento de Base Malcolm X y miembro de la mesa política del MBL, reivindica que la dimensión y profundidad del movimiento de lucha no es espontánea, sino que tiene

un origen en seis años de trabajo organizativo. “Lo que estamos viendo en junio de 2020 es el resultado de seis años de trabajo para montar una infraestructura de dirección negra, a escala nacional, que nos dé la posibilidad de hacer escuchar nuestra voz frente a un hecho de repercusión nacional, como el asesinato de George Floyd²⁴”. En términos políticos, planteó la necesidad de ganar más influencia sobre el bloque demócrata, apoyando a candidatos que defiendan planteos vinculados con los reclamos del movimiento, defendiendo esta política porque “nuestro pueblo está en el Partido Demócrata” y dejando para futuro el debate de la creación de una organización independiente.

Aunque el discurso de BLM no tiene una elaboración del sentido de clase de la opresión capitalista, en el curso de la rebelión de 2020, el Movement for Black Lives ha promovido en distintas fechas acciones huelguísticas. La del 19 de junio, día emblemático como aniversario del fin de la esclavitud, tuvo como acción más significativo un paro de los 29 puentes de la costa oeste, impulsado por las seccionales combativas del gremio ILWU, que se reivindican explícitamente clasistas. La jornada de “paro por vidas negras” del 20 de julio tuvo un alcance más limitado por el carácter conservador y propagandístico que le dio la burocracia sindical del gremio de empleados de servicios SEIU, el principal convocante. Pero hasta la necesidad de la burocracia sindical de reacomodarse muestra el alcance del movimiento en los lugares de trabajo y en los propios sindicatos.

Entre el anti-imperialismo y el lobby parlamentario reformista, el futuro político de la coalición de organizaciones que están en el centro de la rebelión está abierto y será objeto de luchas políticas y un proceso de diferenciación que ya está en marcha.

Una brújula para la izquierda

La rebelión popular, con centro en los reclamos contra el racismo y la represión se suma a un ascenso huelguístico y un crecimiento organizativo y electoral de la izquierda (sobre todo dentro del Partido Demócrata, pero no únicamente; el grupo trotskista Socialist Alternative logró este año reelegir a la concejal de Seattle, Kshama Sawant). Sin embargo, no sólo esto no ha dado lugar a un salto en el protagonismo de la principal organización norteamericana de izquierda, los Demócratas Socialistas de América (DSA), sino los parece haber colocado en un lugar incómodo políticamente.

La organización, dedicada de lleno a la campaña electoral, no jugó

24. <https://www.blackagenda.com/george-floyd-protests-were-result-years-organizing>

rol alguno en la rebelión. Sus militantes claro, estuvieron presentes en las protestas. Y esto es importante, porque DSA, una organización “paraguas” a la que pertenecen distintos grupos, tiene más de 50 mil militantes. Pero DSA es laxo y descentralizado para cualquier tarea que no sea una campaña electoral. Lo suficientemente laxo para que nadie pueda responsabilizar a sus candidatos por los resultados de las luchas en curso, digamos. Lo cierto es que la organización no ha jugado un rol político independiente en la rebelión ni en la acción obrera frente a la pandemia.

Su candidato a presidente, derrotado en la primaria demócrata, Bernie Sanders, se ha colocado completamente a la derecha del movimiento, no solo oponiéndose a la abolición de la policía, sino reclamando que se le conceda a sus agentes un aumento salarial generalizado²⁵.

En este contexto, se ha vuelto de nuevo al debate interno en el DSA por la falta de una política para intervenir en el movimiento contra el racismo. Las críticas han aparecido recurrentemente en los años recientes, y propios y ajenos lo relacionan a una enorme dificultad para crecer entre las minorías raciales. El grupo dirigente de DSA, centrado alrededor de la revista *Jacobin* y la fracción Bread and Roses, se opone a la adopción de una lucha contra la opresión racial, aunque por razones formalmente izquierdistas.

En un artículo de *Jacobin* de 2018, que oficia de la posición oficial sobre el tema, Eric Blanc y Jeffrey Gong dicen que como el problema político central es la disolución del concepto de clase en la sociedad norteamericana y que la política identitaria, de hacer eje en el género, la raza y otras formas de opresión específica, es una herramienta usada por las clases dominantes para negar la opresión de clase, lo que corresponde es privilegiar las consignas capaces de movilizar a “toda la clase”.

Criticar a la concepción de poder negro, diciendo que “por más militante que fuera su discurso, seguía basada en la creencia liberal de que la desigualdad económica puede ser resuelta segregando a la clase obrera en unidades diferenciadas racialmente”²⁶.

“Frente a la posición de que los revolucionarios deben luchar tanto contra la opresión de clase como contra la racial, dicen que “‘hacer ambas cosas’ es leer equivocadamente el balance de poder en Estados Unidos hoy: institucionalmente, desde la izquierda, no tenemos más que una fracción del ya diminuto movimiento obrero para respaldar

25. <https://nypost.com/2020/06/10/sanders-doesnt-support-defunding-police-wants-to-pay-cops-more/>

26. Blanc, Eric; Gong, Jeffrey: “How class should be central”, *Jacobin*, 21/11/2018.

nuestra plataforma y nuestro análisis”, dicen desde *Jacobin*. Al ser tan fuerte el progresismo liberal, que tendría dominado los reclamos “identitarios”, mejor dedicarse a reclamar planteos universales, como el acceso al cuidado de salud, el New Deal verde o el salario mínimo. Todas campañas que DSA promueve como proyectos parlamentarios, como plataforma para hacer votar más funcionarios electos.

En la lucha de clases es imposible optar por qué forma de opresión desafiar. O se las enfrenta de conjunto o nos adaptamos a parte de ellas y, por ende, a todo el régimen. Están profundamente relacionadas. Y en la agitación de cada una de ellas puede desatarse el hilo que lleve al estallido.

Los escribas de *Jacobin* piensan que puede haber una política para resolver “la desigualdad económica” de los trabajadores que no esté asentada en la sublevación contra el imperio. La idea de reformas gradualistas, como camino para terminar con el capitalismo, es la más liberal y menos realista de las políticas que pueda tomar la izquierda, por más “marxistas” que sean los argumentos dados.

No habrá momento posterior para volver sobre la opresión racial que pueda ser elegido a conveniencia. Las oportunidades históricas, los estallidos sociales, son hechos irreproducibles, únicos. Los revolucionarios deben dejar todo para intervenir en ellos.

La “propiedad” sobre las demandas raciales que se le asigna a las corrientes burguesas están desmentidas por la rebelión en curso. Los que desearían que la rebelión pudiera suspenderse para retomar sus campañas electorales son los verdaderos liberales, los de *Jacobin*. Para el que tenga alguna duda, su sitio en julio promociona preparar un número de su revista impresa centrado en que “dejaron las campañas de Bernie”. Es inconcebible defender que eso sea el eje de la situación política en Estados Unidos, conmovida no sólo por la rebelión sino por un gravísimo rebrote del coronavirus y una crisis política al rojo vivo, que incluye el recurso del gobierno a formas de represión ilegal y en común con milicias paraestatales. Un electoralismo indisimulable.

El abstencionismo frente a los reclamos contra la opresión racial no es el terreno exclusivo del DSA. El ultraizquierdista Socialist Equality Party, que dirige el sitio World Socialist Web Site (WSWS), rechaza la importancia del movimiento, al que caracteriza como “protestas”. Considera que el eje en opresión racial es parte de una manipulación de política identitaria y está en una campaña para defender figuras de próceres, cuyas estatuas están siendo volteadas por las protestas y que

fueron dirigentes del proceso independentista, como George Washington o Thomas Jefferson²⁷. Un exponente del izquierdismo sectario que piensa que no intervenir en movimientos ambientales, por los reclamos de la mujer, de la comunidad LGBTI o contra la opresión racial sería una concesión a la ideología burguesa o pequeño burguesa, que se desenvuelve mayoritariamente en esos movimientos. Al revés, desarrollando un programa revolucionario podemos disputar la dirección de las masas con esas orientaciones. Nunca desde el abstencionismo estéril. No se puede, de todas maneras, negárseles coherencia a los seguidores de WSWS. Sus credenciales de sectarios extremos las tienen bien ganadas, oponiéndose a las huelgas de inquilinos²⁸ y a los abandonos de tarea en Amazon²⁹, en ambos casos con el argumento de la influencia de la izquierda del Partido Demócrata en los movimientos de lucha.

La conmoción de las masas en Estados Unidos demanda un programa revolucionario que pueda concentrar las enormes energías liberadas por las masas en lucha. No se trata de elegir entre los múltiples aspectos de la catástrofe generada por el capitalismo, sino de poder unificar a quienes las sufren en una conclusión y una acción común.

Poder negro o liberación negra ha significado y significa cosas distintas para distintos militantes y organizaciones a lo largo de años de lucha y hoy en día. Algunos se refieren a niveles de autodeterminación comunitaria en el marco de la derrota del Estado imperialista y el socialismo, otros refieren a un Estado-nación separado y otros se remiten a la pelea inmediata por reformas que aminoren la opresión sufrida. Los revolucionarios de todos los países tenemos la obligación de defender la autonomía y el derecho a la autodeterminación de la comunidad negra y pelear por ella en los términos que ésta resuelva pelear por ella.

El primer punto de cualquier programa revolucionario para el proceso que vive en Estados Unidos es generalizar las asambleas populares, las asambleas por barrio, lugar de trabajo y estudio y que la unificación de los criterios de la lucha y las salidas políticas sean debatidas allí. Una coordinación de delegados electos en asamblea le daría una coordinación al poderoso movimiento de lucha que se ha desarrollado hasta en la última esquina del país.

Desmantelamiento de las fuerzas de seguridad, todas responsables

27. "Democrat's denunciation of America's revolutionary heritage provides an opening for Trump", WSWS, 7/7/2020.

28. "Millions of Americans cannot pay their rent", WSWS, 4/5/2020.

29. "May 1 general strike at Amazon", WSWS, 2/5/2020.

de graves crímenes contra la población. Control comunitario de la seguridad. Libertad inmediata de todos los presos políticos.

Protocolos de seguridad en los lugares de trabajo bajo control de los trabajadores, garantizando que solo se realicen las tareas realmente esenciales y en condiciones seguras. Licencias pagas por enfermedad propia o de familiar.

Prohibición de despidos y suspensiones. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Reparto de las horas de trabajo entre toda la población laboral sin afectar el salario para terminar con la desocupación. Que se quiten los límites de tiempo al cobro del seguro de desocupado.

La reparación económica posible es la colectiva, para las víctimas de la esclavitud y la segregación, así como de los trabajadores, de los inmigrantes, de los pueblos originarios. Necesita la nacionalización de los bancos, cuyo rescate ha sido pagado reiteradamente por el pueblo, para poder financiar la constitución de sistemas de salud y educación públicos, gratuitos y universales, bajo control obrero y popular, así como un plan de vivienda para terminar con el hacinamiento de los ghettos.

Ningún desalojo. Moratoria para las deudas hipotecarias y estudiantiles. Congelamiento de alquileres.

Desmantelamiento del aparato militar, de espionaje y diplomático de Estados Unidos, responsable de enormes crímenes contra la humanidad. Devolución del territorio de la base de Guantánamo en Cuba y de todas las bases en el extranjero. Disolución del FMI y el Banco Mundial, y desconocimiento de las deudas contraídas con esos organismos. Que se termine inmediatamente el bloqueo a Cuba y Venezuela.

Por un gobierno de los trabajadores.

Trata de personas, el eufemismo de la esclavitud capitalista

Vanina Biasi

Trabajadoras y trabajadores de todo el mundo son sometidos forzosamente a la explotación laboral y sexual, esclavizados en campos, casas particulares o prostíbulos. Familias enteras superexplotadas en industrias legales, en el medio rural y en las ciudades. Niñas y niños sometidos a prostitución o a trabajo infantil. El abanico de escenarios y situaciones en las que se operan estas relaciones sociales es muy amplio y se presenta ante los ojos de quien quiera verlo.

El imperialismo, para referirse a esta realidad, recurrió a la expresión “trata de personas”, que refiere al instrumento o medio para esclavizar y no a la esclavización de personas en sí misma. Medios de comunicación y diferentes organismos hicieron lugar a la expresión “la esclavitud del siglo XXI” en el año 2000, épocas en la que la ONU promovió la firma de un nuevo acuerdo internacional como una forma de manifestar de forma clara a qué situación se refería la problemática nominada “Trata” y aunque en los subtítulos de los documentos el fenómeno de la esclavitud es señalado, la estrategia central no consiste en terminar con los negocios ilegales que motivan el delito de la trata.

La crisis del capitalismo que se desarrolló bajo la forma de choques comerciales, recesión a nivel mundial y caída de precios de las materias primas, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, está alcan-

zando características históricas de retroceso económico y abriendo paso al desarrollo aún más extendido de actividades improductivas que reducen la inversión capitalista y acrecientan su tasa de beneficio, en ese terreno se inscribe el negocio de la explotación sexual, que a pesar del declarado combate internacional proclamado por la ONU en 1949¹, no ha parado de crecer.

La brutal precarización a la que están sometidas las mujeres prostituidas legalmente en potencias mundiales, como Alemania, y el incremento de la esclavización de personas en diferentes rubros laborales es la regla del capitalismo. El caso alemán² revela las condiciones infrahumanas en las que se desenvuelve el negocio de forma legal en uno de los países de mayor desarrollo capitalista y da una pista de cómo se desenvuelve el negocio en el resto del mundo.

Los datos de la OIT señalan que 1.500 millones de personas se quedarán sin empleo en el mundo durante y después de la pandemia³. Esta franja de trabajadoras y trabajadores pasarán a incrementar el enorme universo de personas vulnerables que serán sometidas a todo tipo de vejámenes al servicio del lucro capitalista. La mayoría serán mujeres y niños. Para el momento de escribir esta nota, sólo en Argentina y basados en proyecciones conservadoras, Unicef calcula que en diciembre de 2020 la pobreza entre niños y niñas alcanzará el 62,9%.⁴

Los contingentes de seres humanos desprotegidos y hambrientos, que son plausibles de ser captados para la explotación en las cosechas estacionales, para la industria del sexo o como mano de obra esclava en granjas avícolas, en el campo o en el trabajo doméstico, tienden a incrementarse en un mundo en el que decrecen los ingresos de los sectores populares, se pierden conquistas laborales, cunde la desocupación e incrementan la precarización laboral los Estados y las patronales, con anuencia de las burocracias sindicales y conducciones de organizaciones sociales cooptadas por el Estado.

Que la economía tenga un componente cada vez más importante basado en estos negocios, inscribe al capitalismo en una dinámica general, totalmente dependiente de estos procesos de esclavización o de hiperprecarización de trabajadores y trabajadoras de forma cre-

1. [https://www.mpf.gov.ar/docs/repositorioW/documentosweb/enlacesufase/Convenio_trata_y_explotacion_sexual_ajena\(1949\).pdf](https://www.mpf.gov.ar/docs/repositorioW/documentosweb/enlacesufase/Convenio_trata_y_explotacion_sexual_ajena(1949).pdf)

2. <https://prensaobrera.com/mujer/trabajo-sexual-el-caso-aleman/>

3. <https://www.pagina12.com.ar/262894-oit-1500-millones-de-personas-podrian-quedarse-sin-trabajo-p>

4. <https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/segunda-encuesta-rapida-pobreza>

ciente. La dependencia de negocios, como la esclavitud sexual, hace que este se vuelva cada vez más necesario para la supervivencia del capital financiero.

La caída del sistema prostituyente provocaría el desfinanciamiento de bancos y su consiguiente ruptura de la cadena de créditos y de pagos, de igual forma ocurre con el negocio de armas y el narcotráfico. Para hacer crecer el negocio, el capital incentiva la demanda. Estas acciones están entrelazadas con el Estado, que les provee a las patronales de leyes acordes, protección en la ilegalidad y fomento de sus actividades.

La lucha por los derechos de las mujeres está enteramente inscrita en el terreno de la lucha de clases, luego de las experiencias atravesadas en la historia y de evaluar el estado de situación actual, la emergencia de unir esta lucha al objetivo de terminar con un régimen de deshumanización, miseria, sometimiento y discriminación se vuelve aún más necesaria.

El discurso feminista regulacionista, que plantea la formalización de la actividad prostibular como “un trabajo más”, es absolutamente funcional al desarrollo del negocio que describimos. Los planteos que le adjudican a la actividad prostibular atributos emancipatorios para la mujer, también. Más adelante, nos vamos a detener en estas cuestiones, pero corresponde aquí señalar que este proceso que describimos contó con el aval político de un feminismo institucionalizado e integrado al Estado, siguiendo la hoja de ruta marcada por el imperialismo en la Conferencia Internacional de Mujeres de Beijing de 1995.

Por su parte, el abolicionismo, que niega con justicia que la prostitución sea un trabajo y mucho menos “un trabajo más”, se inscribe mayoritariamente en la pretensión de reformar al Estado, contrariando la naturaleza proxeneta de este y, en muchas oportunidades, ofrece una fachada antiesclavista a un aparato institucional que la promueve y la ampara legal o ilegalmente.

El incremento mundial de agresiones sexuales contra los niños habla de una realidad silenciada que produce un efecto de un “ablande” social generalizado. Según Unicef, en Argentina entre 2018 y 2019 se produjo un incremento de un 60% de denuncias de abusos sexuales contra menores. La degradación humana que supone la violencia sexual de adultos sobre menores es un buen punto de partida para comprender la extensión de la barbarie social en curso.

La prepotencia de la ganancia capitalista es la que pone a su disposición los racismos, los machismos, las xenofobias, según sea el caso, para

preservar los negocios e incrementar las demandas. La cultura machista, racista, xenófoba y clasista es la que la clase propietaria impone para acompañar, defender ideológicamente y apuntalar su interés material. La abolición de la esclavitud sexual y laboral es una tarea indisoluble de la lucha contra el capital, sus objetivos y sus manifestaciones. La lucha por abolir la esclavitud prostibular y todas las formas de esclavitud requiere un combate contra el Estado capitalista.

Trata de personas: la estrategia imperialista

La “trata de personas”, concepto que describe el mecanismo de captación, traslado y comercialización de personas, es una temática que no hace mucho tiempo alcanzó un grado importante de repercusión pública en nuestro país y en el mundo. Más precisamente esto ocurrió a partir del año 2000, cuando el imperialismo mundial lo ubicó en la agenda de los organismos internacionales a partir de la convocatoria a firmar un “protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” en la ciudad de Palermo, Italia.⁵

La trata de personas con fines de esclavitud sexual y laboral está representada en cifras de dudosa exactitud, si se tiene en cuenta que hablamos de un fenómeno visiblemente amparado y promovido por los propios Estados. La propia ONU, en la presentación de su informe de 2017, refiere al conservadurismo de las siguientes cifras.⁶

- Se estima que en cualquier momento dado de 2016, *40,3 millones de personas* han estado sometidas a la esclavitud moderna. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y *15,4 millones en matrimonio forzoso*.
- Esto significa que en el mundo hay *5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas*.

5. https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf

6. <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/statistics/lang-es/index.htm> Las estimaciones mundiales de la esclavitud moderna de 2017 se centran en dos temas principales: trabajo forzoso y matrimonio forzoso. La estimación del trabajo forzoso comprende el trabajo forzoso en el sector privado, la explotación sexual forzada de adultos y la explotación sexual comercial de niños y el trabajo forzoso impuesto por el Estado. Las estimaciones son el resultado de una colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Walk Free, en asociación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y beneficiaron de las aportaciones de otras agencias de Naciones Unidas, en particular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR).

- *Una de cada cuatro* víctimas de la esclavitud moderna son niños.
- De los *24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso*, *16 millones son explotadas en el sector privado*, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura; *4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa*; y *4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado*.
- El trabajo forzoso *afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas*, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores.

El Protocolo de Palermo fue suscrito por 176 países del mundo y esto fue considerado por el secretario general de la ONU como una expresión de “la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia -expresó Kofi Annan en el prefacio al informe- atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley” (2004). Desde entonces, el flagelo de la esclavización de personas no dejó de crecer.

Las estrategias internacionales impulsadas por el imperialismo, en nombre de la defensa de la democracia y del “combate” a las drogas, resultaron en general un marco jurídico para la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de otras naciones e incluso para la instalación de bases militares en otros países. A pesar de que republicanos y demócratas agitan el patriotismo y la calidad democrática de su país, la rebelión contra la matanza de negros por parte de la policía volvió a poner en el centro la “calidad institucional” de la democracia norteamericana con sus leyes de impunidad para los policías, con su 25% de población carcelaria mundial concentrada en la detención de la comunidad latina y negra, con casi 50 millones de desocupados y con sus incursiones bélicas en el mundo. “Los traficantes siguen operando con impunidad y solamente una pequeña fracción de las víctimas recibe servicios de apoyo para víctimas de trauma o enfocados en la víctima”, dijo Richmond, embajador general del monitoreo y combate en contra de la trata de personas del departamento de Estado de Estados Unidos.⁷

Desde la firma del Protocolo de Palermo en el año 2000 se aprobaron legislaciones en todo el mundo de pretendido combate a la trata, mientras los gobiernos capitalistas del mundo desarrollaron las condi-

7. <https://www.bpnews.net/53225/reporte-del-2019-sobre-la-trata-de-personas--eeuu-tiene-mucho-trabajo-por-hacer>

ciones materiales y sociales para extender aún más el fenómeno que decían combatir.

Según la propia UNODC (Oficina de la ONU contra la droga y el delito), más del 70% de las víctimas de estos negocios ilegales son mujeres y niños. Entre el año 2000 y el presente no sólo creció la esclavitud sexual y laboral, también creció a nivel mundial un 50% la población carcelaria femenina. Digamos que el capitalismo nos iguala en la descomposición.

Este cuadro de situación reafirma que, frente al fenómeno de la esclavitud, la orientación internacional no es el combate a ella, a sus responsables, a las patronales que recurren a este mecanismo de explotación, en el campo o en las ciudades en el terreno de la explotación laboral o sexual, sino que tras la fachada del combate a la ‘trata de personas’ se ha permitido, como se ve en las cifras, un incremento importante del fenómeno de esclavización de personas.

Qué es la trata de personas

Es un medio o instrumento de captación, traslado y comercialización para vehicular la esclavización de personas. Desde hace más de cien años que las naciones, a través de diferentes declaraciones y firma de convenios internacionales, refieren al fenómeno. En 1949, la ONU estableció un “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, concentrando su política en la trata con fines de explotación sexual, a la que sin embargo lejos de combatir, vieron desarrollar y convertir en una poderosa industria.

“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (artículo 3, inc. a, Protocolo de Palermo).

La finalidad por la cual existe este comercio de personas, la existencia de la esclavitud laboral y sexual, requiere de la participación de los Estados, empresas y bancos. Sin embargo, leyes con las que se pretende

combatir la trata, no se proponen terminar con los negocios que la motivan, volviendo a las iniciativas jurídicas letra muerta en la mayoría de los casos y una ficción de abordaje de la problemática.

Una gran parte del dinero que rinden las actividades ilegales se transfiere a través de bancos, se invierten en negocios turísticos o de otro orden, buscando “lavar el dinero”. En general, el circuito turístico, el narco y el negocio de la explotación sexual van de la mano. Por su parte, tanto en el plano laboral como prostibular, no se realiza ninguna actividad ilegal sin que la policía que actúa en el territorio, desconozca la situación y reciba, al menos, un beneficio económico por protegerla.

El caso argentino es ilustrativo. “Entre 2016 y 2018 (bajo el gobierno macrista), hubieron 1.117 allanamientos relacionados con el delito de trata de personas, fueron detenidas 632 personas y 2.797 víctimas fueron rescatadas. La mayor parte de las personas recuperadas de ese tráfico humano respondían a delitos laborales (1.436), seguidos de delitos sexuales (586) y reducción a la servidumbre (13)”, informó en 2019 el Ministerio de Seguridad. En el fenómeno que aquí se describe hay involucrados bancos, funcionarios de diferentes dependencias, fuerzas policiales territoriales, jueces, fiscales; sin embargo, esas estructuras se mantienen intactas.

Las redes de tratantes requieren de la participación de proxenetas, administradores de lugares de explotación sexual o laboral, gerentes de bancos, jueces, fiscales, funcionarios políticos, fuerzas represivas locales y/o federales, funcionarios de fronteras y empresarios que pueden ser la pantalla legal de las actividades que aquí estamos describiendo. Detrás de cada prostíbulo o de cada lugar en el que se esclaviza a personas hay una red que integra alguno de estos componentes. La idea de que el Estado no ve este fenómeno tan expuesto o que necesita de complicados recursos para frenar esa actividad es simplemente una construcción política interesada, sin asidero sobre la realidad.

Difícilmente se encuentre en las crónicas periodísticas que la información refiera al desmantelamiento de este tipo de estructuras delictivas. Recientemente, doce mujeres fueron “liberadas” de prostíbulos de la zona de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Fueron detenidos un par de regentadores de los lugares donde eran forzadas las mujeres a tener sus “pases”. Nadie más.

En 2017 se conoció la primera noticia de un gobernante condenado por el delito de trata de personas. Se trató del intendente de Lonquimay, en La Pampa, Luis Rogers, quien fue condenado a 5 años de pri-

sión como partícipe necesario del traslado de mujeres del norte del país al prostíbulo para ser explotadas sexualmente. La misma pena y calificación recibieron, tanto el comisario Carlos Alanis como el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. Parece que el Poder Judicial no consideró “agravante” que Rogers fuera un gobernante. Esto fue lo más parecido que podemos encontrar en la jurisprudencia argentina al “desmantelamiento” de una red de trata. Faltan los reclutadores originales ubicados en las provincias del norte, falta saber qué hicieron con la plata que ganaron de la actividad ilegal mientras estuvo abierto el prostíbulo, quién lo habilitó, siendo que están prohibidos y varios datos más sobre los que el Poder Judicial suele no estar interesado.

Si la trata de personas refiere al mecanismo de captación de personas en la vulnerabilidad, entonces no hay posibilidad de frenar esa actividad de compra y venta de personas sin terminar con las condiciones materiales de miseria y hambre.

El caso argentino

En Argentina, a doce años de la aprobación de la primera versión de la ley contra la trata de personas (2008), los protagonistas políticos de aquel capítulo volvieron al poder, en algunos casos con muchas más atribuciones que en el pasado, como ocurre con Vilma Ibarra.

La actual secretaria Legal y Técnica de Alberto Fernández fue autora de la ley contra la Trata de Personas, en su condición de senadora nacional junto al entonces ministro del Interior de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández. Un año después, y habiendo sido electa como diputada, fue parte de la votación que le dio estatus de ley a su proyecto. Desde el primer momento fue la más firme defensora de la figura del “consentimiento de la víctima mayor de edad” que estaba presente en el artículo 2 de la ley. Esto habilitaba a que si una mayor de edad declaraba que se encontraba en el prostíbulo por *motu proprio*, no fuera considerada una mujer tratada, ya que era explotada por propia voluntad.

Las redes de tratantes y proxenetas amenazan a sus víctimas con descargar violencia sobre sus seres queridos, entre otras formas de coerción a las que recurren. Está claro que el llamado “consentimiento de la víctima” para ser esclavizada, necesariamente está viciado por los mecanismos que se utilizan para mantenerla atada a la actividad. Por otra parte, una decisión individual no puede anteponerse al principio general de rechazar la esclavización de personas. El desastre jurídico promovido

por la actual secretaria Legal y Técnica del presidente Alberto Fernández fue total y no por ignorancia jurídica, sino por el empeño puesto por entonces para no afectar grandes negocios.

Las críticas a la ley, que obtuvo media sanción con el voto unánime del Senado en noviembre de 2006, llegaron tempranamente. Desde el Plenario de Trabajadoras, junto a otros sectores fuimos parte de la actividad del 3 de abril de 2007, a cinco años de la desaparición de Marita Verón, que se realizó frente al Congreso y exigió la modificación por parte de Diputados del artículo 2, que planteaba la necesidad de acreditar los medios comisivos para demostrar la existencia del delito de trata de personas en el caso de las víctimas mayores de edad. Simultáneamente se reclamó por las penas que le cabían a los tratantes, en todos los casos excarcelables, y junto a estas modificaciones denunciábamos que no había ni políticas para incautar bienes ni para asistir a víctimas. Durante años pusimos en pie actividades los días 3 de cada mes, para denunciar la complicidad estatal con la desaparición de mujeres y niñas que se sucedían en todo el país y llevamos la problemática a medios masivos de comunicación.

Vilma Ibarra y el gobierno de CFK defendieron los prostíbulos como lugar de contención económica de mujeres pobres, como un lugar protegido por la policía y desde el ángulo del derecho de las mujeres a prostituirse. “Consultada por *Página/12*, Vilma Ibarra sostuvo que si se aceptan las reformas que plantean las ONG (sic), “tenés que meter presos a todos los dueños de los prostíbulos y se van a rentabilizar en manos de la policía (sic). Nadie cree, entre los fiscales y los jueces, que es el momento de ilegalizar todos los prostíbulos. Va a ser contraproducente. Las mujeres que no arreglen van a tener que ir a atender a los clientes a sus casas delante de sus hijos. La prostitución es un problema social gravísimo. Y hay que respetar que una persona adulta pueda decidir elegir ejercer la prostitución” (*Página/12*, 1/4/08). De espaldas a los reclamos del movimiento de mujeres, el gobierno mantuvo la formulación

El Departamento de Estado norteamericano, encabezado por entonces por Earl Wayne, puso especial énfasis en la aprobación de una ley federal contra la trata⁸ y el gobierno de entonces avanzó a paso firme en

8. <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/3-27885-2007-06-26.html> “La Argentina está haciendo los deberes en materia de lucha contra el narcotráfico y contra la trata de personas, al menos desde la óptica de los Estados Unidos, cuyo embajador, Earl Anthony Wayne, felicitó al gobierno local por la tarea realizada”.

la cuestión, intentando permanentemente que la letra de la legislación no afecte el negocio prostibular. Tiempo después de su aprobación, el entonces flamante ministro de Justicia, Aníbal Fernández, alcanzó su máximo grado de reconocimiento internacional como anfitrión de una reunión de la OEA en Argentina, que se centró en felicitar al país por la aprobación de la ley.⁹

En aquella ocasión, el ministro echó mano del planteo de responsabilizar por la realidad existente al consumidor de sexo pago y la única afirmación que hizo fue la de sostener que “sin clientes no hay prostitución”. El responsable de la Policía Federal y de todas las fuerzas federales, no encontró espacio frente a la OEA para explicar los vínculos de las fuerzas que dirigía con el fenómeno de la trata y de la explotación sexual. La operación política sirvió para encubrir el negocio y permitir su evolución.

Desenredar el nudo de la hipocresía y la manipulación política de los voceros políticos del régimen, puede no ser fácil, pero es necesario hacerlo para entender todo el proceso que lleva a estos niveles de esclavitud y violencia contra los sectores más vulnerables de las y los trabajadores. Más adelante vamos a detenernos en este punto, sin embargo, corresponde aquí recordar que la prostitución está impuesta en la vida social, no sólo a las niñas y mujeres sino también a los adolescentes y los hombres. Debutar con prostitutas o recurrir al prostíbulo, abiertos por el propio Estado, al que se le reclama la persecución a la demanda, como sustituto a tener relaciones sexuales consentidas, son “instituciones” impuestas por un estatuto social que no eligen las mayorías populares sino que éstas reproducen. Educarse sexualmente con la pornografía o considerar que una mujer que coge es puta, no son conceptualizaciones de tal o cual consumidor de prostitución, son arraigadas concepciones políticas en las que ha educado el Estado por variadas conveniencias, a generaciones de personas, mientras protegió cuidadosamente el desarrollo de un negocio que hoy tomó dimensiones nunca antes vistas. La sociedad debe ser cambiada, pero no puede ser el Estado proxeneta el que reeduce a la sociedad formada y formateada por ese Estado para discriminar a las mujeres, mercantilizarlas, tutelarlas y someterlas.

9. <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-122112-2009-03-26.html>. Once años después de proclamado, puede verse que el gobierno no combatió ni al proxenetismo ni al cliente. Sólo fue un discurso del momento para disimular la responsabilidad del Estado sobre este flagelo.

Movilización y lucha

En 2012, bajo el gobierno kirchnerista de José Alperovich en la provincia de Tucumán, se sustanció un juicio por la desaparición de Marita Verón (2002) con trece imputadas e imputados, todos eslabones intermedios de una red que nunca se desmanteló. Ante el sobreesimiento de los trece, la indignación popular no se hizo esperar¹⁰, el gobierno reprimió la movilización a la Casa de la provincia de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente la presidenta Cristina Fernández retrocedió y convocó al Congreso de forma extraordinaria para habilitar las modificaciones reclamadas durante más de cuatro años. Corresponde recordar, para poner en contexto, que el gobernador llevaba más de ocho años en el gobierno, que el Poder Judicial había sido enteramente colocado por él mismo en funciones y que su esposa era tercera en la línea sucesoria presidencial.

Para ese entonces, Vilma Ibarra se había colocado de forma crítica frente al gobierno de CFK y pasaría al ostracismo político hasta que Alberto Fernández la recuperó y la colocó como parte de su círculo más cercano. Ya habían pasado tres años desde la sanción de la ley de Violencia de Género, y el gobierno de CFK no había implementado aún ni un artículo de la misma. Solo cuando estalló el “Ni Una Menos” el gobierno presentó un “plan para la erradicación de la violencia de género”, que la ley ordenaba desde hacía seis años. Como el gobierno de CFK se terminaba en esos meses, el plan presentado a fines de 2015 refería al pasado (período 2014-2016) y no al futuro, una estafa política que el ministerio actual convalidó en su informe para presentar el Plan de erradicación de la violencia de género 2020-2022.¹¹

En nuestro país solo se hicieron detenciones de regentadores de prostíbulos, condenándolos por una cantidad menor de años. Los gobiernos afirman haber “rescatado” a 14.505 personas¹² desde la sanción de la ley en 2008, sin embargo, se sabe que esas víctimas siguen totalmente indefensas porque el Estado no impuso ningún mecanismo de seguimiento y contención. Las devolvió, sin más, a su lugar de origen, en las mismas o peores condiciones de vulnerabilidad y a merced de los reclutadores originales.

10. <https://prensaobrera.com/mujer/marita-veron-politica-e-impunidad/>

11. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf, pág. 11.

12. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estadisticas_trata_2008_31agosto2019.pdf

Aunque el vínculo de la esclavitud laboral y sexual con dirigentes políticos es objeto de denuncias de víctimas, los políticos gobernantes se encubren entre sí, sin que recaigan castigos sobre ellos. No aparecieron en escena ni los Olmedo y su trabajo esclavo en los olivares de La Rioja, ni los Uribarri y sus vínculos con la explotación de menores en Concordia, ni los Alperovich y sus fiestas de los hijos del poder en Tucumán, ni los Gruber de Misiones, responsables del asesinato de “Tati” Piñeiro, ni Antonio Tomasso, de Cambiemos de Santa Cruz, el intendente prostibular de Puerto San Julián, ni los Mauricio Macri y sus vínculos con el proxeneta denunciado por su hija, Raúl Martins, por nombrar sólo algunas de las familias de la política argentina ligadas a negocios rurales, sostenidos con trabajo esclavo y a la explotación sexual de niñas y mujeres adultas.

El gobierno de Alberto Fernández se encuentra discutiendo un blanqueo de capitales¹³ que servirá como mecanismo legal para registrar plata emanada del negocio ilegal de la esclavitud sexual y laboral. Con esta iniciativa, el Estado busca ampliar su base impositiva y de avanzar, lo hará, en parte, a costa de la esclavización de mujeres y trabajadores en general. Como lo hiciera Cristina Fernández en dos oportunidades, en 2009 y en 2012, Mauricio Macri en 2016, sin grietas, los gobiernos impulsan medidas administrativas que facilitan el negocio de la trata y la esclavitud.

Regulacionismo y abolicionismo

Es importante enmarcar los debates presentes sobre prostitución en el contexto general de la realidad política y económica mundial, para que podamos sacar conclusiones y progresar en nuestro abordaje de la problemática. La industria de la prostitución es un mecanismo capitalista aceitado y en crecimiento. Su importancia acompaña la decadencia capitalista, la actividad se nutre de ella. Y su crecimiento exponencial se produjo justamente entre los años en los que los gobiernos emitían leyes contra la trata y se juramentaban combatir a la “esclavitud del siglo XXI”. La realidad, el desarrollo del negocio capitalista sobre la base de la esclavización de personas, fue ocultada detrás del pretendido combate a la trata.

En 2014, la Unión Europea concretó la modificación del cálculo del PBI para todos los países miembros, en el que incorporaron plenen-

13. <https://www.iprofesional.com/impuestos/319383-el-gobierno-impulsara-un-nuevo-blanqueo-de-capitales>

te el cálculo del movimiento de dinero de actividades como la venta de armas, el narcotráfico y la prostitución, lo que permitió un crecimiento promedio del 4,5%. Esta decisión, lejos de enmarcarse en el pretendido combate al delito transnacional, apuntala a los mismos e incentiva su desarrollo.

La prostitución es una industria en la que la mujer es convertida en oferente de una fuerza de trabajo peculiar: si refiriéramos al “valor de uso” de la prostitución, el rasgo que habría que destacar es el de la completa anulación de la condición humana, la despersonalización y la sujeción al cliente. El empoderamiento sobre el que gusta hablar quienes defienden el régimen actual y que el Estado (proxeneta) regule positivamente su vida laboral, resulta al menos difícil de encontrar en estas relaciones sociales. Juan Carlos Volnovich, psicólogo e investigador del tema, señaló en una de sus investigaciones: “La relación sexual es sólo un medio para ejercer el poder que la degradación del objeto amoroso, como fin, testimonia. Cuando la dominación se ha erotizado, la explotación se ejerce para controlar y expropiar a las mujeres de su deseo”.¹⁴

Este estadio de la industria de la sexualidad consagra el triunfo del proxenetismo sostenido por los Estados en la ilegalidad durante años y lo catapulta a otro nivel, no sólo por sus dimensiones sino por la dependencia que de él genera en el conjunto del sistema capitalista. Ese triunfo se conquistó, como ocurrió con muchas cosas en la vida del capitalismo, acompañado de un discurso funcional de la mano de un feminismo estatizado e institucionalizado, que dio atributos de empoderamiento a una actividad y situación que representan material y simbólicamente, el sometimiento hacia las mujeres. El movimiento de mujeres y feminista, potencialmente revolucionario por sus postulados, está en la mira de los y las defensoras del régimen de explotación. Los discursos y lineamientos de este sector no están guiados por la defensa de las mujeres y la lucha por su emancipación, sino por la preservación del *statu quo* con “perspectiva de género”.

La estructura de dominación es el capitalismo, la defensa de la propiedad privada y de la ganancia capitalista se servirá del planteo puritano religioso sobre la sexualidad o del planteo de que “con mi cuerpo hago lo que quiero”, expropiando un postulado legítimo de reapropiación del cuerpo enajenado por el régimen, para reconvertirlo en un planteo liberal, funcional al impulso de iniciativas que conviene a un

14. http://www.colegiodepsicologos.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/la_prostitucion_desde_el_punto_de_vista_del_client.pdf

negocio prostibular que deja desprotegidas a las mujeres más vulnerables -o sea, a las mayorías populares.

La *Teoría King Kong*, de Despentes (2007), reeditado en 2018 en el marco del ascenso mundial del movimiento de mujeres, es un texto que alcanzó popularidad en los últimos años, en el que se desarrolla la idea de que la prostitución se puede ejercer con goce y disfrute. La posición de Despentes sobre la prostitución y sobre la actitud que deberíamos adoptar frente a las violaciones es divulgada incluso desde la página gubernamental del Ministerio de las Mujeres del gobierno nacional. La teoría King Kong representa la resignación frente a “lo dado”.¹⁵ El movimiento de mujeres representa el cambio, la indignación y la rebelión frente a la mercantilización del cuerpo y la opresión de la mujer en todas sus formas.

La prostitución es el medio de ingreso de decenas de miles de mujeres en el mundo, lo que les permite dar de comer a sus hijos y mantenerse. La evolución del prostíbulo a la industria de la prostitución dio a esta actividad un carácter de trabajo legalmente admitido por los Estados. El reconocimiento de la prostitución como si fuera un trabajo no es una demanda de las mujeres sino una imposición de los Estados. También para las prostitutas regulacionistas, el capital creó una “necesidad” y no a la inversa.

La prostitución es el medio de sostenimiento económico de millones de mujeres en el mundo, especialmente a través de estructuras empresariales legales, montadas en aquellos países donde la explotación de la prostitución ajena es legal. Que en estos casos ya sea un trabajo en el reconocimiento del Estado, es la consecuencia del avance de un fenómeno que no afecta sólo a las mujeres sino al conjunto de los trabajadores: la industria de la prostitución creció como consecuencia del desarrollo de la precariedad laboral, la ausencia de alternativas laborales con protección social, del fenómeno de las migraciones masivas, huyendo de situaciones sociales extremas en medio de guerras y de todas las condiciones sociales que llevaron a la pérdida de derechos de todo tipo. Los mismos sectores que son cómplices de este proceso de pauperización de las masas, luego acompañaron la conversión de la prostitución en fuente de trabajo para un número cada vez más creciente de mujeres. En Argentina, la CTA yaskita protagonizó un proceso de estas características.

15. <http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2015/05/despentes-teoria-king-kong.pdf> y <https://prensaobrera.com/cultura/feminismo-y-posmodernismo-que-hay-detras-del-libro-teoria-king-kong/>

Pero ocurre que la prostitución no es un trabajo, es una forma de sometimiento que por el significado social que tiene y por su materialidad no puede igualarse a otras formas de sometimiento, porque cada una de ellas tiene su especificidad, su impacto sobre la subjetividad de las personas que las sufren y su modalidad para enfrentarla.

Cuando dicen que las trabajadoras domésticas o textiles muchas veces son objeto de peores vejámenes de lo que se ve detrás de explotación laboral regular, nos referimos justamente a que “lo peor” en estas disciplinas ocurre cuando se produce el salto de la explotación laboral a la esclavización física y sexual de esas personas en el mismo ámbito, explotando la completa necesidad de esas mujeres. Este proceso es interesante, porque según las propagandistas del trabajo prostibular, el empoderamiento provendría de ser las mejores alumnas del sistema, ofreciendo el sometimiento sexual a escala de negocio internacional. De acuerdo con este postulado no deberíamos luchar para que no nos violen en los lugares de trabajo precario, sino que deberíamos cobrar horas extras.

La regulación de la prostitución y la teoría que emana de ella es necesariamente la teoría de la derrota, de la entrega y de la consagración del triunfo del régimen opresor por sobre las oprimidas. Se trata de una posición nociva para las mujeres. Es un postulado que debe ser rechazado porque es un llamado a la resignación general frente a “lo dado”, que es siempre aquello que imponen quienes detentan el poder económico sobre el conjunto de la población.

Si el servicio sexual se convierte en una mercancía que se ofrece en el mercado, el “valor de uso” del servicio sexual de la prostituta en absoluto representa ningún tipo de empoderamiento de esta por sobre el vínculo proxeneta ni por sobre el consumidor, sino lo opuesto. Estará determinado por la enajenación del cuerpo, un grado de deshumanización mayor del que se produce regularmente en el trabajo explotado y por la reafirmación triunfante de la dominación y el sometimiento, mayormente masculino, a través del dinero.

En el campo de la regulación aparecen planteos derrotistas ante el avance y la descomposición en las formas de explotación capitalista: “El trabajo sexual, la venta del cuerpo ha sido parte estructural de la posición de la mujer de la sociedad capitalista. Ha sido la forma en la que millones de mujeres, todas nuestras abuelas, tías, hermanas, han podido sobrevivir vendiendo su cuerpo porque no han tenido alternativa o porque la alternativa que tenían era peor. Entonces, si vamos a

ver la historia de las mujeres en nuestra sociedad hasta hoy, que siempre la dificultad de la sobrevivencia, la dependencia económica de los hombres ha significado que el trabajo sexual ha podido constituir una forma de sobrevivencia y de elegir. (...) Pensar que el trabajo sexual es la forma más degradante, la forma más violenta, no solamente es una distorsión sino es ser ciegas a lo que millones de mujeres están diciendo en el mundo: ‘a mí no me gusta pero prefiero hacer esto que trabajar en una maquila donde después de tres años pierdo los ojos, los riñones y también debo sujetarme a los acosos sexuales del supervisor’”, afirma la historiadora Silvia Federici.¹⁶

Antes, en una entrevista realizada en momentos en que la historiadora había colocado su firma contra la causa abierta por abolicionistas españolas para evitar que se conformara el sindicato de prostitutas Otras, señaló: “Creo que una postura así por parte del Estado y de los grupos feministas que son abolicionistas es muy hipócrita. Claro, yo también soy abolicionista: quiero abolir el capitalismo, quiero abolir el trabajo asalariado, quiero abolir la explotación. También quiero abolir el que las mujeres tengamos que vender nuestro cuerpo y nuestro cerebro para poder sobrevivir. Muchas veces vender tu cerebro es peor que vender tu cuerpo”. Esta última frase resulta recurrente entre sus respuestas al respecto de este punto, sin embargo, no encontramos en sus textos una explicación para entender en qué grado y medida afirma tal cosa. La lógica de su postulado sería que en el camino de querer “abolir el capitalismo”, habría que beneficiar un negocio que lo refuerza. No hay coherencia en lo que se plantea. La apelación a lo testimonial por parte de Federici la priva de explicar una posición. Alcanza con contraponer los testimonios de las víctimas de la explotación sexual para refutar la voz que selecciona la historiadora para justificar su posición derrotista.¹⁷

Defender la regulación en nombre de la liberación del yugo de la explotación sexual por parte de terceros no parece ser una propuesta

16. <https://www.intersecciones.com.ar/2019/10/07/un-encuentro-de-la-militancia-silvia-federici-en-la-previa-del-34-epmltt/>

17. <https://diariofemenino.com.ar/no-en-nuestro-nombre-2/> “Somos mujeres y travestis organizadas, hemos pasado años en situación de prostitución y muchas seguimos allí, en las calles, sobreviviendo. Pertenecemos a la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), conformada por personas en prostitución y sobrevivientes de prostitución, trata de personas y explotación sexual. Muchas venimos luchando desde los años noventa, somos algunas de las fundadoras de AMMAR, espacio del que nos fuimos por resistirnos la imposición del trabajo sexual, al vernos expulsadas por los aprietes sindicales. En veinte años, hemos encontrado en el abolicionismo feminista una posición integral para luchar contra la represión policial y la vulneración de derechos.”

coherente al fenómeno descrito: Federici, que sabe que la familia nuclear, por su objetivo de preservación de la propiedad privada y de los derechos hereditarios, es un centro de opresión de la mujer, no promovería su consolidación sino que lucha por su disolución. Si la subordinación sexual ha sido un estigma de las mujeres, ¿por qué militar por su consolidación?

La afirmación de que la prostitución es lo mismo que el matrimonio u otras relaciones sociales en las que la mujer quedó presa del tutelaje y de la subordinación, es una deformación del postulado de Frederic Engels, para quien esa forma familiar fomenta un sistema de vínculos que no son iguales sino complementarios: “la monogamia con sus complementos, el adulterio y la prostitución”¹⁸ plantea, para referir al sistema de relaciones sociales imperante que, como todo sistema, requiere de componentes que se complementan entre sí. La deformación operada está al servicio de acompañar una posición funcional al sistema actual y cuya consecuencia es el reforzamiento del sistema que se dice querer combatir.

Lo cierto es que las condiciones de materialización de la regulación resultan negativas para las que ejercen la prostitución y dejan en completa desprotección a las que son arrastradas a ella, ofreciendo al negocio la fachada de legalidad que requiere para encubrir la acción de los “fíolos” y sus vínculos con los funcionarios del Estado. No es algo reservado al prostíbulo, el mundo capitalista entero navega en la pérdida de derechos de los trabajadores, reconvirtiendo las relaciones laborales en relaciones temporarias, sin derechos sociales de ningún tipo, sin atención en salud y sin defensa gremial.

Pero es importante remarcar la completa insensibilidad que el planteo regulacionista delata ante un fenómeno que ya está en pleno desarrollo, el del incremento de la captación de niñas y mujeres para ser explotadas legal o ilegalmente en prostíbulos, hoteles, casas particulares, fiestas de poderosos y todo tipo de emprendimientos prostibulares. El punto de vista de regular para responder a la demanda de un reclamo prostibular de clase media, que tiene voz propia y la ejerce, es políticamente liberal.

18. <http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/84of/84OF2.htm> “Caminamos en estos momentos hacia una revolución social en que las actuales bases económicas de la monogamia desaparecerán tan seguramente como las de su complemento, la prostitución (...) Como hemos visto, hay tres formas principales de matrimonio, que corresponden aproximadamente a los tres estadios fundamentales de la evolución humana. Al salvajismo le corresponde el matrimonio por grupos; a la barbarie, el matrimonio sindiásmico; a la civilización, la monogamia con sus complementos, el adulterio y la prostitución.”

Es cierto, como dice Federici, que las trabajadoras de las maquilas padecen precariedad laboral y acoso sexual y aún abuso. Es la característica común a la gran mayoría de los empleos de mujeres, que son mayoritariamente precarizados. Allí donde hay una relación laboral precaria, podríamos decir que nunca o casi nunca la vulneración de la mujer se reduce al intercambio laboral. Agregar más violación y precarización a la vida de las mujeres no parece representar más que un acto de declaración de derrota frente al régimen, en este caso. En otros casos, es el lobby proxeneta el que habla.

En todo el trazado de las leyes emanadas de la firma del Protocolo de Palermo se puede ver la marca del salvoconducto que el capital le dio al proxenetismo y a las patronales esclavistas para no afectar sus negocios. Como en Argentina, Colombia, bajo el gobierno de Uribe, debió también modificar, en 2005, su ley original de 2003 para introducir que el pretendido consentimiento de la víctima para ser captada con fines de esclavitud laboral o sexual no sería motivo de exoneración del delito de esclavizar a personas.

Para quienes defienden la regulación, como para quienes sostienen un punto de vista abolicionista, el Estado capitalista es presentado como una institución capaz de ofrecer un mejoramiento de la condición de las mujeres prostituidas: ya sea porque las primeras consideran sin motivo alguno que la regulación las preservará y mejorará las condiciones de vida o, en el caso del abolicionismo, como una institución capaz de contradecir el imperio de la ganancia capitalista en nombre de los derechos y las condiciones de vida de las mujeres. En ambos casos, la visión reformista del Estado impide distinguir que le están pidiendo al lobo que cuide las gallinas.

El debate entre regulacionismo y abolicionismo atraviesa las dificultades propias de muchos debates en curso: su punto de partida y su objetivo final. En ambos casos estamos en presencia de dos tendencias políticas dentro del marco del régimen social capitalista, que juegan con el espejismo de que la voluntad de las personas pueda cambiar aquello que está regido por las leyes del mercado y por la prepotencia de la ganancia capitalista que el Estado capitalista está para proteger.

Regular “bien” para que se trabaje en condiciones adecuadas, alimentando incluso la figura de la/el proxeneta bueno y protector, o abolir pretendiendo eximir al capital de convertir a la sexualidad y sus derivados en mercancía intercambiable en el mercado. Las diferencias de uno y otro campo son claras también: mientras que el primer campo

se ve forzado a edulcorar los términos, razones y condiciones en los que se desarrolla la prostitución, para ejercer su defensa como trabajo, que debe ser regulado por el Estado e incluso las razones por las cuales el cuerpo se transforma en una mercancía intercambiable en el mercado, razones que muestran lo lejos que está el empoderamiento femenino del “valor de uso” que tiene el servicio sexual; el segundo campo pretenderá que todo pueda ser intercambiable en el mercado, menos el sexo, una ilusión sin anclaje en la realidad capitalista.

En el campo del abolicionismo se desarrolla una tendencia fuertemente punitivista, impulsando leyes de persecución a los consumidores de prostitución.¹⁹ Reforzar el poder del Estado por sobre los individuos plantea la disyuntiva de si es correcto otorgar más prerrogativas a un conjunto de instituciones que son las responsables directas de la existencia de la esclavitud sexual y del consumo de la misma. Que el Estado es el primer proxeneta no es un recurso literario sino una descripción de la realidad. La cultura del consumo de prostitución debe ser combatida en la sociedad en oposición al Estado proxeneta, que es el responsable de la creación de esa cultura. Lo demás son instrumentos reaccionarios que se le otorgan al proxeneta mayor, el Estado, para que eluda sus propias responsabilidades en la materia.

La consigna de “Sin clientes no hay prostitución” que de tan buen grado Aníbal Fernández hizo suya ante la visita de la OEA en 2009, presenta un planteo, en primer lugar, falaz al respecto de cómo se genera la oferta y la demanda bajo el régimen capitalista. El sistema crea la demanda y no a la inversa. En segundo lugar, es importante reiterar que la reeducación de la sociedad, particularmente de la clase obrera, es un recurso necesario e indispensable, que no puede ser delegado en el mismo Estado, que educa en principios clasistas, machistas, misóginos y racistas, y que abre prostíbulos y hasta utiliza sus rendimientos para incrementar los PBI de sus países, algo que, tal como ocurrió en la Unión Europea en 2014, redundó en un crecimiento de la industria prostibular legal e ilegal.

La reeducación social que fomentamos es la que tenemos que arrancar en la lucha común, estableciendo una moral diferente a la inmoralidad del Estado capitalista y sus apetencias. Una moral de solidaridad de clase, de lucha común y de fomento de la igualdad de condiciones

19. <https://www.cuartopoder.es/espana/2019/12/21/castigar-al-proxeneta-y-al-putero-asi-seria-una-ley-abolicionista-contra-la-prostitucion/>

entre las personas, liberadas de todo sometimiento y discriminación. Estos valores sólo se pueden establecer como principio social, sostenido consecuentemente, enfrentando a la usina de difusión de la moral del sometimiento, la discriminación y la opresión, que es justamente el Estado capitalista. Abolir la prostitución y toda forma de opresión sobre las mujeres es una tarea a desarrollar en oposición, siempre, al Estado proxeneta.

El combate a la trata de personas, entonces, es un eufemismo para ocultar el acompañamiento creciente a la obtención de ganancias capitalistas a través de la esclavización impúdica y a cielo abierto de personas. El Estado y sus gobiernos no ven los prostíbulos que ellos abren ni ven los talleres clandestinos o actividades en medios rurales que ellos deberían controlar. Tampoco ve el Estado las cocinas de paco en las villas ni las fronteras porosas para el negocio de tráfico de personas. Acompañar esta versión manipulada de la realidad brutal, que se extiende al compás de la crisis capitalista, es funcional a su reproducción. La experiencia después de veinte años de pretendido combate de parte del imperialismo a este flagelo ha sido su crecimiento sideral.

La necesidad de abolir la prostitución y toda forma de esclavización de las personas con diferentes fines, todos para incrementar ganancias capitalistas, nos plantea la urgencia de que los debates dentro del feminismo y del conjunto del movimiento de mujeres no estén reducidos a las variantes políticas que la propia burguesía crea e impone. Necesitamos abrir un debate que establezca el estatus que cada actor y actriz ocupan en este escenario y que se abra paso un punto de vista de combate al Estado capitalista, tarea que sólo puede afrontar la clase obrera, colocando una estrategia socialista y de clase para la defensa integral de los derechos y aspiraciones de las mujeres.

Doble opresión en el capitalismo, debates sobre la noción de patriarcado

Luciana Dentati

La lucha del movimiento de mujeres en los últimos años, en particular en Argentina a partir del NiUnaMenos y luego la Ola verde, puso en el centro de la escena política el lugar que ocupa la mujer en este régimen social. Las estadísticas y los testimonios sobre la violencia recibida por las mujeres, que se multiplicaron en las redes y en las calles, pusieron de relieve que su opresión tenía un origen social y no era, como falsamente se vivenciaba, algo ocasional y circunscripto al mundo de lo privado. Esto reabrió un debate al interior del movimiento sobre las causas de la opresión de la mujer. ¿Qué lugar ocupa en el sistema capitalista? ¿Cuál es la causa de su continuidad luego de un siglo de conquistas civiles?

Desde diferentes vertientes, el feminismo de izquierda sostiene que la opresión de la mujer sería producto del “patriarcado”, un sistema autónomo y preexistente al capitalismo del que éste podría emanciparse, si quisiera; cual si fuera una vieja mochila que arrastra irracionalmente y sostiene solo porque le es útil. Esta idea se popularizó en las filas del movimiento de mujeres y diversidades en los últimos años en la Argentina con la consigna de que el patriarcado se puede “caer” en el marco de una lucha meramente feminista, que puede “vencer” y emancipar a la mujer, sin necesidad de una lucha política contra el régimen social capitalista.

En este artículo veremos de dónde nacen estas ideas y discutiremos en particular con los argumentos teóricos desarrollados por el llamado feminismo materialista de los '70 en torno de la existencia de un sistema de opresión donde el hombre explotaría a la mujer, a nivel laboral, sexual y reproductivo, beneficiándose de la apropiación de su fuerza de trabajo. Para eso presentaremos un debate central: ¿cuál es la relación entre el desarrollo capitalista y la opresión de la mujer? ¿Es el patriarcado un régimen de dominación entre géneros que pueda ser superado en los marcos del capitalismo?

La opresión específica que padecen las trabajadoras por ser mujeres en el capitalismo no puede pensarse como algo que emana de un sistema independiente del capitalismo, pudiendo desaparecer uno y perdurar otro por canales de lucha diferentes. La doble opresión es la forma específica que adquiere la opresión de las mujeres trabajadoras en el capitalismo. La existencia de formas de opresión específicas dentro del capitalismo no supone la yuxtaposición de sistemas diferentes. Defendemos una tesis unitaria sobre la cuestión de la mujer. El capitalismo es un orden social complejo, que contiene en su seno diferentes relaciones de explotación, dominación y alienación, no sólo la asalariada. Pero es esta última relación, la asalariada, la fuente de producción de plusvalor para la acumulación capitalista, de la que todas las demás relaciones son subsidiarias. La burguesía se aprovecha del trabajo no remunerado de la esposa del obrero para no cubrir la totalidad de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo. Los obreros varones tienden culturalmente a no ocuparse de esas tareas, pero de ello se benefician los capitalistas, que buscan disponer libremente del obrero para explotarlo sin que tenga que ocuparse de su propia reproducción. La brecha salarial de las mujeres puede explicarse también en este sentido, producto de ser una mercancía, fuerza de trabajo menos ventajosa de comprar que el hombre. Si sucediera una socialización de las tareas domésticas, el hombre trabajador no perdería nada en términos económicos, porque él no es el que se apropia de un excedente. En términos estructurales no hay intereses antagónicos irreconciliables de género, como plantean las que proclaman la existencia de un patriarcado como sistema autónomo. Que no existan antagonismos irreconciliables, no quiere decir que no pueda haber en las filas de los trabajadores resistencias, incluso violentas, a la emancipación de la mujer, producto de su integración a una cultura dominante machista, que exalta la sumisión femenina al narcisismo masculino. El machismo y la misoginia funcio-

nan como recursos ideológicos de legitimación de la doble opresión, a la vez cumplen una función fundamental bajo el capitalismo de dividir a la clase obrera. La superación de la opresión de la mujer trabajadora está indisolublemente ligada a la lucha de clases y a la necesidad de una salida política de conjunto de la mano de la construcción de partidos obreros revolucionarios, que unan la lucha por la liberación de la mujer a la conquista del poder por la clase trabajadora.

Este debate, que se presenta como novedoso para muchas activistas jóvenes, tiene en realidad larga data de las filas del activismo de mujeres. Los límites de la forma en que predominantemente se presentó el debate se encuentran, como veremos, marcados por la misma crisis de dirección que atraviesa al movimiento obrero internacional.

Los orígenes del debate sobre el patriarcado

Los debates actuales reeditan aquellos que se abrieron durante la llamada Segunda Ola, un período de ascenso en la lucha del movimiento de mujeres que tuvo su epicentro en los países imperialistas, principalmente en Europa y Estados Unidos desde finales de la década del '60 y sobre todo durante los '70. Este ascenso se dio en un contexto revolucionario de alzamientos a nivel internacional que conmovieron a toda una nueva generación (en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y contra la Guerra de Vietnam; en Europa, el Mayo del '68 en Francia y la Primavera de Praga, y hasta el Cordobazo en Argentina, por poner algunos ejemplos emblemáticos) y de enormes transformaciones en las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras. Las protestas de la Segunda Ola ponían en jaque el esquema de vuelta al hogar que se había fomentado desde la posguerra. Los avances científicos en materia de anticoncepción hormonal permitían la separación efectiva del placer sexual y la reproducción familiar. Las transformaciones en las prácticas y perspectivas sobre la sexualidad devinieron en un asunto de debate público de la mano de la lucha por el derecho al aborto.

Las características que adquirieron muchos de los debates en la Segunda Ola pueden desprenderse de los propios límites políticos que había tenido Primera Ola. La igualdad civil de las mujeres, que pregonaban las sufragistas a comienzos del siglo XX, se había conquistado casi plenamente, pero eso no se había traducido en una superación real de la opresión de la mujer. La lucha contra los mandatos familiares, la igualdad salarial y el aborto legal en los '70 volvieron a poner en escena

lo que habían cuestionado ya las socialistas de principios del siglo XX, incluso quizá sin que muchas de las feministas de la Segunda Ola lo supieran: la necesidad de una transformación social mucho más profunda que emancipe a la mujer, liberándola del trabajo doméstico y de todas las tareas de reproducción de la fuerza de trabajo. Las direcciones del feminismo de la igualdad dentro del movimiento sufragista de la Primera Ola habían mostrado su carácter burgués, porque pretendieron reducir la lucha de las mujeres a la conquista de los mismos privilegios de los hombres de su clase. Las feministas de la Segunda Ola confirmaron en los hechos los límites de la pretendida “igualdad” capitalista que ya las socialistas de principios del siglo XX habían marcado e intentado superar con el programa revolucionario para las trabajadoras de la poderosa socialdemocracia alemana y, luego de la Tercera Internacional, a partir de la experiencia bolchevique como un faro de la revolución mundial.¹

Los principales debates que atravesó la izquierda de la Segunda Ola también se vieron condicionados por un distanciamiento de las expectativas que se habían colocado en los Estados obreros, para la década

1. Entre las medidas de carácter democrático destinadas a impulsar la liberación de la mujer se cuentan los decretos sobre el matrimonio civil y el divorcio en 1917, el Código de Leyes sobre el estado civil y las relaciones domésticas, el matrimonio, la familia y la tutela en 1918 que, entre otras cosas, vuelve legítimos a los hijos extramatrimoniales y generaliza pensiones a viudas y niños. El decreto sobre la legalización del aborto en 1920 consagra este derecho por primera vez en el mundo. A pesar de su carácter revolucionario, estas medidas eran vistas por los bolcheviques sólo como un primer paso transicional en la búsqueda de emancipar a las mujeres y de transformar las relaciones sexuales para que estuvieran basadas solo en el afecto mutuo y no en la propiedad privada y la supervivencia económica. Para esto se tomaron los lineamientos votados por las propias mujeres trabajadoras revolucionarias de la Internacional de Mujeres Socialistas en una Conferencia panrusa de obreras y campesinas en 1918. El cambio cultural debía venir de la mano de medidas políticas concretas de transformaciones materiales que lo permitieran: abolir la esclavitud doméstica mediante la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños. El gobierno obrero dictó medidas concretas para esto, como la creación de lavanderías y comedores públicos, escuelas desde los primeros meses de vida y otros. También se votó una comisión en particular para la lucha contra la prostitución, que votó la prohibición de cualquier tipo de criminalización de las mujeres que estuvieran en esa situación, muy generalizada en Rusia, junto con el hambre y la muerte por la guerra. Se impulsó también la organización de delegadas trabajadoras en las fábricas. Como la mayoría de las mujeres trabajadoras no eran parte del partido, las bolcheviques propusieron que fueran las organizaciones de mujeres las encargadas de vigilar que las medidas que se tomarán se aplicaran efectivamente en todos los ámbitos de trabajo. Se tendió a incluirlas en el gobierno obrero siendo partícipes de las transformaciones en materia de educación y alimentación social, la protección de la maternidad y todas las tareas soviéticas que contribuirían directamente a la emancipación económica de las trabajadoras. Sobre la homosexualidad no se votaron formalmente medidas, pero se conocen muchísimos ejemplos de casamientos entre personas del mismo género y las pocas denuncias realizadas sobre el tema fueron todas desestimadas, dándose la práctica de hecho en los primeros años de la revolución.

del '70 ya burocratizados. La potente experiencia de la Revolución de Octubre, con sus enormes iniciativas políticas en materia de la mujer, había sufrido los límites que le impuso el aislamiento de la revolución. Con el proceso de burocratización estalinista se habían reedificado la familia y la opresión hacia la mujer como instrumentos de disciplinamiento social. El estalinismo sostenía que liberarse de la explotación capitalista generaba automáticamente la liberación de las mujeres y el final de los roles sexuales. En nombre de un esquema mecanicista económico y del rechazo a la fragmentación de la clase, la burocracia de PC desconocía que existiera una opresión particular hacia las mujeres trabajadoras; que existieran relaciones opresivas que demandaran reivindicaciones y luchas específicas en las que fueran protagonistas y pudieran confluír como parte de un programa común de la clase obrera. Con esta política, los PC del mundo subordinaban la lucha de la mujer, así como la lucha de clases de conjunto, para garantizar una convivencia pacífica con el capitalismo mundial. Para la década del '70 era evidente que, en los Estados en los cuales se había expropiado al capital por métodos revolucionarios, no se había liberado ni a la mujer ni a la clase obrera. La Primavera de Praga mostró al mundo, y al movimiento de mujeres también, cómo la clase obrera del otro lado de la cortina de hierro se levantaba contra las burocracias totalitarias que dirigían esos Estados obreros en su propio beneficio.

En este contexto de ascenso de la lucha de las mujeres en los '70, el feminismo materialista francés, originado por sectores de izquierda que rompieron con el PC, se convirtió en una referencia teórica importante. Tempranamente se había destacado Simone de Beauvoir, quien se había convertido ya en un ícono y, con ella, la emergencia del Movimiento de Liberación Femenina en Francia y la creación de la Liga de los Derechos de la Mujer, presidida por ella. Ya desde los años '30, el PC francés había asumido posiciones declaradamente antiabortistas y de defensa de la familia. Cuando en 1949 aparece *El segundo sexo*, de Simone de Beauvoir -libro considerado fundacional para el feminismo de la Segunda Ola por desarrollar la idea de la mujer como construcción social-, el PC francés reaccionó declarando que se trataba de un escándalo y Jean Kanapa, uno de los intelectuales más destacados del partido, tildó la obra "de inmundicia".

El surgimiento de los movimientos de liberación de la mujer puso el acento en particular en que, de uno y otro lado del muro, la opresión se perpetuaba. Sostenían que las causas estaban en la persistencia de

un sistema de opresión del hombre sobre la mujer, que era previo al capitalismo y que continuaba existiendo en lo que se conocía como el “socialismo real”, por razones asociadas a la forma de construcción de lo que llamaban la “izquierda tradicional”. Estas ideas fueron sostenidas por la “Nueva Izquierda”, integrada por sectores intelectuales de Estados Unidos y Europa, que fueron la principal referencia del feminismo de izquierda durante la Segunda Ola. Asumieron un compromiso con el “cambio social”, pero reduciéndolo a luchas parciales: la lucha de las mujeres era como la lucha antirracial, la lucha contra la guerra nuclear, contra el colonialismo; todas luchas parciales que eran fundamentalmente dirigidas por la pequeña burguesía democratizante.

Es importante polemizar con esa crítica a la “izquierda tradicional”, porque muchos de estos supuestos perduran en el sentido común del movimiento de mujeres hasta el presente. Aunque es verdad que las revoluciones dan saltos contradictorios e intentan gestar un futuro con personas del pasado, con las conciencias y bagajes culturales que llevan a cuestas, el problema de la experiencia soviética no había residido meramente en el machismo de los revolucionarios y su falta de voluntad, como pretendieron esgrimir algunas feministas de los ’70. El problema principal fue que las condiciones materiales que perpetuaban la opresión de la mujer no estaban en condiciones de ser superadas. La experiencia revolucionaria de Octubre quedó aislada con el fracaso de la Revolución Alemana y enfrentando una guerra civil. La emancipación de la mujer, así como la del conjunto de la clase obrera, se volvió imposible cuando lo que primó no fue la abundancia, mediante desarrollo de las fuerzas productivas del mundo al servicio de la libertad, sino que lo que se perpetuó fue el reino de la necesidad y la miseria. Esto se encuentra detallado en el capítulo de “El termidor en el hogar”, de *La Revolución Traicionada*, donde Trotsky advierte que “la verdadera emancipación de la mujer es imposible en el terreno de la miseria socializada”.² Pero él también advierte, en 1936, mucho antes de que fuese evidente para el mundo, que aunque las causas del retroceso están en las imposibilidades materiales a las que fue condenada la revolución en el aislamiento, el desarrollo de una burocracia en el poder dio un giro en la orientación inicial de los bolcheviques en materia de la mujer y profundizó esta tendencia con claros intereses disciplinadores:

“Los poetas, académicos y otros “amigos” de la URSS tienen ojos para no ver nada. La legislación del matrimonio y la familia instituidas por la

2. Trotsky, L. [1936]: *La revolución traicionada y otros escritos*, Ediciones IPS, Buenos Aires, 2014, pp. 136.

Revolución de Octubre, que en su tiempo fue el objeto de legítimo orgullo para ellos, está siendo transformada y desfigurada por amplios préstamos tomados del tesoro legislativo de los países burgueses. Y, como si se tratara de estampar la burla a la traición, los mismos argumentos que antes sirvieron para defender la libertad incondicional del divorcio y del aborto -“la emancipación de la mujer”, “la defensa de los derechos de la persona”, “la protección de la maternidad”-, se repiten ahora a favor de su limitación y completa prohibición. El retroceso no solo reviste formas de una hipocresía repugnante, sino que también está yendo mucho más lejos de lo que exige la férrea necesidad económica. A las causas objetivas del regreso a las normas burguesas, tales como el pago de pensiones alimenticias, se agrega el interés social de los estratos dirigentes en enraizar el derecho burgués. El motivo más imperioso del culto actual de la familia es, sin duda alguna, la necesidad que tiene la burguesía de una jerarquía estable de las relaciones sociales, y de una juventud disciplinada por medio de 4.000.000 hogares que sirven de apoyo a la autoridad y el poder.”³

Trotsky se ocupó detalladamente en ese libro de refutar la tesis de que en la URSS existía un socialismo y luchó hasta sus últimos días por la revolución permanente mundial, denunciando que circunscribir la revolución a las fronteras soviéticas estaba llevando a su degeneración con una dirección burocrática que se enfrentaba a las tareas de administrar la miseria. En ese proceso histórico se pasó del liderazgo bolchevique de Octubre, planteando la necesidad de abolir la familia como unidad económica, a la política de Stalin enfocada en reestablecer la familia como órgano de disciplinamiento de la clase obrera. La red de guarderías y jardines de infantes estaba menos desarrollada que los campos de concentración. La burocracia estalinista, para perpetuarse, sostenía como uno de sus ejes fundamentales la negación progresiva pero sostenida de todos los derechos de las mujeres, de la socialización de las tareas domésticas y de las libertades sexuales conquistadas durante los primeros años de la revolución.⁴

3. *Ibidem*, pp. 140-141.

4. Una breve cronología permite medir el alcance de la regresión para el conjunto de la sociedad soviética que el ascenso de la casta burocrática representó. En 1926 se vuelve a instituir el matrimonio civil como única unión legal y para 1934 no respetar a la familia es catalogado como conducta burguesa o izquierdista. En 1933 se vuelve a instaurar el delito de homosexualidad. En 1935 suprime la sección femenina del Comité Central del PCUS. En 1936 se suprime el derecho a abortar durante el primer embarazo. En 1941 se introduce una tasa sobre el celibato y se aumentan los gastos del divorcio. En 1944, el aborto legal queda totalmente abolido. En ese mismo año aumentan las asignaciones familiares en busca de reforzar la crianza parental, se crea la orden de la “Gloria Maternal” para la mujer que tuviera entre siete y nueve hijos y el título de “Madre Heroica” para la que tuviera más de

Esta deriva de la Revolución de Octubre tuvo consecuencias muy graves en el seno de los PC de todo el mundo, formados en la disciplina de la III Internacional. Por eso es positiva la respuesta mayoritaria del sector de izquierda dentro del movimiento de mujeres de romper con el PC cuando se hizo evidente que la dirección burocrática no sólo le daba la espalda al problema de la opresión de la mujer, sino que incluso llevaba adelante, como vimos, una política de retroceso de las conquistas revolucionarias en materia de socialización de las tareas domésticas. Pero el proceso fue contradictorio. El contexto de ascenso de luchas revolucionarias en todo el mundo y de alzamientos en los Estados obreros burocratizados acercó como nunca antes a estos nuevos feminismos con las ideas de izquierda. Pero, paradójicamente, esto vino acompañado de una orientación de la “Nueva Izquierda”, que tendió a escindir el movimiento de mujeres del movimiento obrero y, en mayor medida, a abandonar la construcción de partidos obreros revolucionarios. Esta orientación llevó a que los sectores de izquierda que intervenían al interior del movimiento de mujeres se identificaran con el feminismo, como nunca antes. Con el abandono del principal método de lucha revolucionaria de la clase obrera, en general en nombre de una lucha específica contra el patriarcado, la izquierda del movimiento de mujeres abandonó la posibilidad de una lucha unitaria y política por la conquista del poder y el gobierno de los trabajadores, confluyendo las mujeres de la clase en un programa común.

Fue este el contexto histórico propicio para que se populariza en las filas de izquierda dentro del movimiento de mujeres la noción de patriarcado, como un sistema de valores que funda la opresión del hombre sobre la mujer; que se debatieran las características de su existencia, así como su relación relativamente independiente o no con el capitalismo y la lucha de clases. El uso del concepto de patriarcado para el período capitalista no era original de la izquierda, sino que había sido incorporado por la influencia más general de los desarrollos de teóricas, como Kate Millet, quien en 1970 había presentado su famoso libro *Po-*

diez. Los hijos ilegítimos vuelven a perder todos los derechos adquiridos en la revolución y el divorcio es bloqueado a través de diferentes impuestos costosos y trabas burocráticas. Para 1953, finalmente, la legislación sobre derechos de la madre y el niño proclama que “los intereses de la mujer como madre -bien sea con hijos o futura madre- están tanto mejor asegurados cuanto más sólidas y constantes sean las relaciones entre los esposos. Garantiza, ante todo, tal solidez en las relaciones la existencia de la familia. Precisamente, la familia asegura las condiciones normales para el nacimiento y la educación de los hijos, crea las premisas más favorables para que la mujer cumpla con su noble y alto deber social de madre”.

lítica sexual. Para esta referente del feminismo radical, la raíz de todas las desigualdades sociales en la historia de la humanidad, incluso las de clase, eran producto del patriarcado, un sistema fundado en la opresión del hombre sobre la mujer por su papel reproductivo en la sociedad. Fue ella quien introdujo la célebre expresión de “lo personal es político”, con el interés de defender la idea de que era el hombre el que dominaba políticamente a la mujer en todas las esferas de la vida, no solo las privadas, y que sería ese sistema de dominación sexual básico sobre el que luego se levantarían otras formas de dominación secundarias, como la clase o la raza.⁵ También es esta orientación la que dio inicio a un enfoque que, hasta el día de hoy en los Encuentros Nacionales, reduce la intervención política de las mujeres a participar de “grupos de autoconciencia”, donde se espera que el cambio cultural se produzca a través del relato de experiencias personales.

El llamado feminismo materialista de la Segunda Ola, con posiciones diferentes y matices, se encontró evidentemente influenciado por estas ideas y se volcó en mayor medida a apoyar la existencia del patriarcado como sistema de relaciones, tanto materiales como culturales, de dominación y explotación de las mujeres por los hombres; un sistema con su propia lógica, pero permeable al cambio histórico y en relación continua con el capitalismo. La filósofa italiana Cynzia Arruzza, referente activista del movimiento Internacional Women’s Strike, desarrolla una crítica a algunas de las principales líneas teóricas que atravesaron los debates de izquierda de la Segunda Ola en torno de los problemas de la mujer. Sostiene que la respuesta que mayoritariamente tuvo el feminismo de izquierda frente a política del estalinismo de “reducir el género a la clase” fue otro gran error político, el de “reducir la clase al género”. Principalmente consistió en pensar que la opresión de género era la variable determinante en los problemas que sufrían las mujeres trabajadoras y que la causa principal debía localizarse en el patriarcado, como sistema autónomo al capitalismo. Es así cómo este concepto calzó perfecto con una orientación que buscaba separar la lucha de las mujeres como un movimiento de liberación específico y escindido de la construcción de partido obreros revolucionarios. Usando como puntapié las críticas realizadas por Arruzza, desarrollaremos a continuación

5. A lo largo de todos estos años, el feminismo radical ha desarrollado diferentes posiciones a su interior, pero es importante marcar que la ya errónea esencialización de una cultura femenina en oposición a una cultura dominante masculina ha derivado -incluso, en algunos casos, aunque por suerte no mayoritarios- en un planteo de esencialización biologicista del género con connotaciones violentas, incluso para con la población trans y travesti.

una delimitación con dos de las principales ideas del feminismo materialista que han perdurado hasta el presente, con el fin de defender una mirada marxista sobre el problema de la opresión de la mujer en el capitalismo, que supere los dos reduccionismos enunciados por ella.⁶

Primera teoría: La ilusión de las múltiples opresiones particulares

Los orígenes del feminismo materialista se dan fundamentalmente a comienzos de los '70 en Francia con Christine Delphy, quien elabora la teoría del modo de producción patriarcal, colocando a las amas de casa como una clase explotada por el hombre, el “enemigo principal”. La autora más reconocida de esa época fue Heidi Hartmann, con su famosa “Teoría de los sistemas duales”, que presentaba dos sistemas autónomos, el de clase y el de género, que se combinaban en un proceso de interacción recíproca. Las relaciones de género conformaban, para Hartmann, un sistema de relaciones culturales e ideológicas patriarcales originadas en modos de producción precapitalistas, que intervendrían condicionando las relaciones capitalistas, dándoles una dimensión de género, por ejemplo, con las jerárquicas en la división del trabajo. En 1990, Sylvia Walby, en “*Teorizando el patriarcado*”, reformuló la teoría de los sistemas, añadiendo un tercero, el racial,

6. Tomamos como referencia de Cinzia Arruzza en particular el artículo “Reflexiones degeneradas: patriarcado y capitalismo”, en *Marxismo crítico* (2016), pero para profundizar en sus ideas véase también su libro *Las amistades peligrosas. Los matrimonios y divorcios del marxismo y el feminismo*, Merlin Press (2013). La autora es afín al actual Secretariado Unificado, publicando numerosos artículos en sus periódicos, y se ha hecho conocida por el libro *Feminismo para el 99%. Un manifiesto*, escrito junto a Nancy Fraser y Tithi Bhattacharya, las tres figuras intelectuales destacadas del llamado feminismo marxista. Ese libro, editado en Argentina en 2019, es el resultado de un documento inicial escrito junto a otras activistas y publicado en 2017 en el *Viewpoint Magazine* (véase Biasi V.: “Feminismo anticapitalista, ¡Que así sea!”, *Prensa Obrera* N° 1.446, 9/2/17). El manifiesto tiene el valor de desarrollar una posición de izquierda sobre la opresión de la mujer sin ser cooptadas por los partidos del régimen, haciendo una crítica aguda, incluso a la izquierda del Partido Demócrata. Arruzza busca, en su intervención dentro del movimiento International Women's Strike, imprimirle al Paro Internacional de las Mujeres una orientación anticapitalista e independiente. Para esto se delimitó de cualquier conciliación con el “feminismo corporativo”, tanto de las ex funcionarias del Partido Demócrata, que buscaban dirigir la movilización, como del “feminismo estatal”, que buscaba cooptar y contener la irrupción callejera. Para esto sostienen haberse inspirado en el NiUnaMenos de Argentina, para reivindicar la defensa de los intereses de las trabajadoras, el método de la huelga y la responsabilidad del Estado y del régimen capitalista, consignas que han sido particularmente batalladas por el Plenario de Trabajadoras al interior del movimiento de mujeres en Argentina. Pero es importante advertir que el postulado anticapitalista de las feministas del 99% no va acompañado por el postulado de la lucha revolucionaria. No le dedican una sola línea a la lucha contra el Estado ni al socialismo, por lo que caen en un planteo académico reformista. Esto va en línea con el discurso abiertamente redistribucionista de la falsamente autoproclamada marxista, Nancy Fraser.

y con esto abrió todo un desarrollo que será conocido luego como interseccionalidad.

Veamos cuáles son los principales problemas de considerar la existencia de un patriarcado como sistema autónomo, dual al capitalismo. En primer lugar, la sola existencia de relaciones opresivas para con la mujer no supone necesariamente un sistema autónomo del capitalismo y menos aún considerar esas relaciones como relaciones de explotación entre clases sexuales, como suponía Delphy. Desde el punto de vista de las relaciones de clase, la explotación se define como un proceso de expropiación de un excedente producido por una clase en beneficio de otra, y en el capitalismo en particular por la conformación de relaciones asalariadas de explotación en las que se busca una apropiación de un plustrabajo. Si se intenta aplicar la noción de explotación capitalista para sostener que las tareas domésticas son trabajo no pago, el único expropiador de trabajo sería el capital, que abarataría parte de la reproducción de la fuerza de trabajo que no estaría pagando plenamente. Si es el capital el que organizaría esa explotación, entonces el patriarcado no podría ser nunca un sistema de explotación autónomo al capitalismo sino, por el contrario, la opresión de la mujer, una arista más de la dominación burguesa. Aunque es verdad que no suele usarse ya la idea de las “clases sexuales”, perduran en el presente los planteos de que el hombre usufructúa y se beneficia del trabajo gratuito de la mujer en el hogar. La consecuencia negativa de este planteo, que uniría los intereses de todas las mujeres en sororidad contra los hombres como enemigos comunes, es una política de conciliación de clase y una división al interior de la clase obrera.

El problema de fondo reside en pensar que la opresión de la mujer es un hecho transhistórico y que se originaría en una pulsión natural masculina por poseer a la mujer. La idea que la opresión es inherente a la humanidad ya había sido refutada por Engels a mediados del siglo XIX, con los límites de la escasa evidencia científica para la época, y luego reafirmado y profundizado por muchas investigaciones arqueológicas y antropológicas. En la historia de la humanidad se vivió en sociedades donde la división sexual del trabajo no supuso relaciones opresivas para la mujer; no por las cualidades bondadosas ancestrales de míticos matriarcados, sino meramente porque no estaban dadas las condiciones materiales para esa opresión. Más allá de la existencia de variadas divisiones sexuales del trabajo en el paleolítico, la opresión de la mujer como tal sólo aparece en sociedades donde el desarrollo de las

fuerzas productivas, mediante la domesticación de animales y plantas, generó las condiciones materiales para la apropiación privada de un excedente y de los medios para producirlo. Con ellas se desarrollaron las posibilidades de que un sector de la población, que se fue conformando como clase dominante sobre la base de explotar trabajo ajeno, buscara controlar el cuerpo de la mujer para garantizar de forma estable la reproducción y explotación de la fuerza de trabajo, organizando las relaciones de producción a través de las relaciones de parentesco. De esta manera se produjo una correspondencia entre la apropiación de la fuerza de trabajo y el acceso privilegiado y controlado de la función reproductiva de la mujer. Poseer mujeres equivalía a apropiarse de mayor cantidad de fuerza de trabajo y, por lo tanto, mayor excedente. El pasaje de la matrilocidad a la patrilocalidad vino acompañado de la tendencia a formas de vínculos heterosexuales estables y exclusivos, en función de los intereses de clase. El Estado, con el monopolio de la violencia y el andamiaje jurídico y religioso, fortaleció todos los recursos represivos e ideológicos para el disciplinamiento social de las mayorías desposeídas. Es importante aclarar que esto de ninguna manera puede suponer un modelo de sistema único y común patriarcal a todas las sociedades precapitalistas de clase. El derecho paterno, entendido como un andamiaje superestructural jurídico y cultural, se expresó de variadas maneras en función de los diferentes modos en que se organizó la producción y reproducción de la vida social en las diferentes sociedades precapitalistas de clase.

La vigencia de *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, de Engels, reside sobre todo en la vigencia del método de análisis del materialismo histórico, incluso con los límites que le impuso disciplinas, como la paleoantropología, que no se había conformado como ciencia aún para realizar un análisis riguroso de la datación de fósiles. A diferencia de este método, la tesis de la existencia de un sistema patriarcal de opresión autónomo supone que no hay condiciones materiales concretas que motiven su existencia, su perdurabilidad en el tiempo y la formas diferentes que adquiere esa opresión, de forma independiente a los intereses de clase. Un sistema de valores dominantes de una sociedad -es decir un sistema ideológico- no puede explicar su existencia por ser un motor de producción de sentidos, es una tautología. Tiene que existir una relación entre esa ideología dominante y las condiciones sociales de existencia que le dan sentido para garantizar su reproducción; no mecánica ni automática, pero alguna relación que la explique y que la

condicione. Si no se convierte en una concepción fetichista y ahistórica de la ideología, o incluso de la psicología humana. Claramente es más difícil de ver esto cuando las relaciones patriarcales no juegan un papel directo en la organización de las relaciones productivas, como sí sucede en una sociedad agraria precapitalista. En el capitalismo, la familia es por primera vez relegada a una esfera totalmente privada de la reproducción, separada de las relaciones mercantiles. Arruzza identifica muy bien que para tratar de explicar la existencia de las relaciones opresivas de género o raciales, las teóricas del sistema dual se quedan intuitivamente con lo que aparece, con la apariencia de los fenómenos.

La concepción del patriarcado como un sistema independiente dentro de la sociedad capitalista es la más extendida, no sólo entre las teóricas feministas sino también entre las activistas, porque se trata, al fin y al cabo, de la interpretación más intuitiva e inmediata de los fenómenos de opresión basados en el género por la experiencia cotidiana. En otras palabras, se trata de una interpretación que registra la realidad tal y como esta se manifiesta: las relaciones opresivas se perciben en la experiencia con una lógica parcializada e independiente, separada del capital. Es decir que se nos presentan de forma fragmentaria, lo que hace suponer la existencia de múltiples sujetos opresivos que se enfrentan cada uno de forma particular a sus propias luchas parciales, algo comúnmente desarrollado por la teoría de la interseccionalidad hoy. Si existieran múltiples opresiones que corren por canales paralelos, la lucha de las mujeres, entonces, debería reducirse a una lucha contra el patriarcado, en la que algunos sectores feministas llegan a sostener que los hombres no sólo están excluidos, sino que se convierten en el principal enemigo. En ese sentido, la propia lucha obrera sería reducida también a una lucha meramente sindical, limitando las potencialidades de la clase obrera como productora y reproductora de manera integral del mundo. Cada lucha parcial correría por canales paralelos y relativamente autónomos, un fenómeno del movimientismo, que se reedita hoy en algunos sectores del movimiento de mujeres.

Segunda teoría: La ilusión de un capitalismo sin opresión de género

Esta teoría presenta un matiz respecto de la anterior, ya que saca la conclusión de que si el patriarcado es un sistema independiente, porque su existencia es previa al capitalismo, entonces el capitalismo podría funcionar sin necesidad de su existencia. Según esta idea, habría perdurado como un remanente de los anteriores modos de producción y

formaciones sociales, donde el patriarcado organizaba directamente la producción, por razones meramente oportunistas pero no estructurales. La perpetuación o disolución de estas relaciones sería una decisión instrumental: el capital reforzaría el patriarcado allí donde suponga que podría serle útil (sobre todo, en las colonias y semicolonias) y tendería a desaparecer allí donde constituiría un obstáculo para las relaciones capitalistas (metrópolis). De esta tesis se desprende, como conclusión, que el capitalismo no sería un obstáculo estructural para la liberación de la mujer y que, por lo tanto, esa lucha no sería revolucionaria necesariamente, ya que el desarrollo pleno del capitalismo permitiría la superación de toda opresión de la mujer. Esto es lo que sustenta las expectativas populares de que el patriarcado “se va a caer” por la sola transformación cultural del feminismo, sin necesidad de una revolución que tire abajo a todo el régimen social capitalista. En este caso también, la conclusión es que la lucha tendría características de un frente policlasista en contra de arcaicos privilegios masculinos.⁷

Arruzza cita el ejemplo de Ellen Meiksins Wood, en su artículo “El capitalismo y la Emancipación Humana: Raza, Género y Democracia” (1995). Allí sostiene que el capitalismo, en su búsqueda de extracción de plusvalía mediante relaciones entre individuos formalmente libres e iguales, sería contrario a la perpetuación de identidades particulares y desiguales extraeconómicas, políticas o jurídicas. El capitalismo no tendría una disposición estructural a crear desigualdades de género, por el contrario, tendría incluso una tendencia natural a poner en tela de juicio tales diferencias y diluir las identidades raciales y de género. Arruzza ensaya una respuesta a Wood colocando el peso de la lucha de las mujeres en las conquistas civiles obtenidas:

“Decir que las mujeres obtienen las libertades formales y los derechos políticos, hecho hasta entonces inimaginable, sólo bajo el capitalismo, ya que este sistema había creado las condiciones sociales que permiten este proceso de emancipación, es un argumento de validez cuestionable. Se

7. Es importante aclarar que no fue solo la izquierda la que desarrolló la noción de patriarcado como resabio del pasado al interior del movimiento de mujeres. En este período, al igual que hoy, intervendrá con fuerza dentro del movimiento de mujeres un sector de claro contenido burgués, que Arruzza llama “feminismo corporativo liberal”. Consideraban y consideran que el sistema de valores opresivos hacia la mujer se mantiene como el último estandarte que queda de un patriarcado preexistente, que impide una posible igualdad de oportunidades en el presente. De esta manera, desconocen la profunda explotación de clase que atraviesa este régimen social, que produce y reproduce una cantidad enorme de diferentes opresiones en función de esos intereses de clase. Este sector tomará fuerza particularmente a partir de los '80, de la mano del imperialismo, con el objetivo de integrar y cooptar un movimiento que tiende a declinar e institucionalizarlo a partir de ese período.

podría, de hecho, decir exactamente lo mismo para el conjunto de la clase obrera: es un hecho único dentro del capitalismo las condiciones conquistadas por los estratos subalternos en términos de emancipación política y el hecho de que esta clase se convirtiera en un sujeto capaz de alcanzar importantes victorias democráticas. ¿Entonces, qué? ¿Sería esto una demostración de que el capitalismo podría funcionar fácilmente sin la explotación de la clase obrera? No lo creo. Es mejor abandonar la referencia a lo que las mujeres tienen o no han obtenido: si las mujeres han obtenido algo, es a la vez porque han luchado por ello, y porque con el capitalismo, las condiciones sociales han sido favorables para el nacimiento de los movimientos sociales de masas y la política moderna. Pero esto también es aplicable y cierto para la clase obrera.”⁸

Otra vez aquí el principal problema de Wood está también en que- darse en cómo las cosas se presentan y no como realmente son. El capitalismo se presenta como un régimen social en el que todo tiende a organizarse mediante relaciones de intercambio en el mercado entre individuos libres e iguales. Pero, en realidad, en su experiencia histórica concreta, tiende a perpetuar relaciones de opresión de género, incluso aquellas que no se originaron en el capitalismo. Esto sucede porque, en su funcionamiento concreto, se vuelven una consecuencia necesaria y para nada prescindible para el régimen social; sobre todo en esta etapa histórica de decadencia y descomposición, donde tiende a apoyarse en estos instrumentos como garantes de su perpetuidad. La clave está en que la forma en que se mantiene la opresión hacia la mujer no es meramente mediante características precapitalistas sino a partir una naturaleza nueva, específicamente determinada por el régimen social capitalista en bancarota. La familia obrera no es la misma que la familia campesina de las sociedades agrarias precapitalistas, pero tampoco es la misma familia obrera de mediados del siglo XIX.

En el pasaje del feudalismo al capitalismo se vivieron profundas transformaciones y tendieron a desintegrarse las relaciones de parentesco como relaciones productivas. Esto se dio como consecuencia de un proceso, diferente en cada lugar, de expropiación de los medios de producción y el éxodo de las masas de trabajadores desposeídas hacia las grandes ciudades, abriéndose un proceso de proletarización. Las relaciones de parentesco patriarcales existentes en algunas (aunque no en todas) las sociedades precapitalistas fueron subsumidas al capi-

8. Arruzza, C.: “Reflexiones degeneradas: Patriarcado y capitalismo”, en *Marxismo crítico* (2016), pp. 14.

tal, dejando de organizar la vida productiva y pasando a ocuparse de la reproducción en un ámbito privado, separado del mundo político y productivo. El vínculo mismo entre la producción y la reproducción en un sentido amplio, no solo biológico sino profundamente social, sufrió un cambio al subsumirse la satisfacción de todas nuestras necesidades a la posibilidad de la realización de la ganancia en el mercado. En ese sentido, las relaciones de parentesco patriarcales dejaron de jugar un rol ordenador -como el que jugaban en la vida campesina, por ejemplo-, dejaron de ser un sistema independiente de organización de la producción y reproducción de la vida social. Pero este proceso tendió a darse más plenamente en los países industrializados, mientras que en los países oprimidos por el imperialismo se perpetuaron algunas formas de subsunción informal al capital, propias de un proceso de proletarianización relativamente limitado en función de la obtención de ganancias extraordinarias. Las formas de producción domésticas -de alimentos, por ejemplo, que tendieron a cubrirse en los marcos comunitarios de relaciones de parentesco- se integraron y perpetúan hasta la actualidad, en el marco de la opresión imperialista, por la propia ventaja de reducir parte de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Las formas que adquirieron esas relaciones de parentesco al perpetuarse ya no eran las mismas que en su etapa precapitalista, pero tampoco estrictamente las mismas que en las metrópolis capitalistas.⁹ De nuevo, el principio determinante ordenador de todas ellas es, en última instancia, la lógica de acumulación capitalista y los intentos de compensar la caída de la tasa de ganancia como tendencia histórica de este régimen social.

Pero, quizá, la principal crítica a hacer a esta teoría es la excesiva vitalidad y fortaleza que deposita en un capitalismo en descomposición. Se hace evidente que, a pesar de todos los derechos civiles y políticas conquistados, la opresión de la mujer se expresa actualmente de forma agudizada. Solo hace falta, por ejemplo, mirar los datos alarmantes de femicidios y la trata de personas, en la que las mujeres representan cerca del 70% de las víctimas, para constatar que este régimen social en descomposición no tiene más que ofrecer que miseria y violencia en escalas inéditas a las mujeres. Si para Wood, el capitalismo utiliza de forma oportunista la opresión de género para sus propios fines pero podría

9. Un antropólogo que ha analizado en detalle cómo se expresó esto en ejemplos históricos fue Claude Meillassoux en sus libros *Mujeres, graneros y capitales*, Siglo XXI (1975) y *Doncellas, comida y dinero: el capitalismo y la comunidad doméstica*, Cambridge University Press (1981).

prescindir de ella, es difícil imaginar cómo el capitalismo sería capaz de sobrevivir bien hoy bajo alguna circunstancia siquiera. Incluso sobre la base de una expoliación inédita de las masas, y en particular de las mujeres trabajadoras, no deja de enfrentarse una y otra vez a crisis cada vez más agudas en este período histórico de decadencia, acompañado de crisis, choques y revoluciones.

El capitalismo como totalidad

Como vimos, todas estas teorías han abrevado en que hoy las llamadas feministas marxistas suelen presentar la “doble opresión” de la mujer trabajadora en términos duales de una opresión patriarcal y a otra capitalista. Pero si, como popularmente se considera, el patriarcado se utiliza para describir una sociedad que es estructuralmente machista, violenta y opresiva para con las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, ese machismo se estructura dentro de los marcos del capitalismo. Veremos a continuación que el principal error que comparten todas estas teorías que se referencian en el feminismo materialista es que, al compartimentar patriarcado (género) y capitalismo (clase) como sistemas paralelos autónomos, comparten una mirada reduccionista de la teoría marxista sobre el capitalismo. Suponen, en primer lugar, que el capitalismo simplemente contempla procesos estrictamente económicos del ámbito productivo, asociado a la extracción de plusvalía.

Rechazar la existencia de un sistema autónomo que rija las relaciones de poder entre los géneros, independientemente de las clases, no tiene necesariamente un correlato en suponer que estas relaciones serían meros reflejos mecánicos y automáticos de esos procesos económicos. Esto no solo es contrario a cómo los procesos se dan en el capitalismo, sino que es contrario a los propios desarrollos teóricos de Marx. El capitalismo es una totalidad contradictoria y dinámica que, junto con las relaciones de explotación, posee un abanico de relaciones de opresión y de alineación sometidas a constantes transformaciones. Las leyes que rigen su funcionamiento, la acumulación capitalista, no se traducen en respuestas automáticas y mecánicas, incluso en el ámbito productivo. Marx explica en el Tomo III de *El capital* cómo la propia ley del valor se expresa de forma contradictoria en el mercado a través de los precios, sin por eso decir que el mercado se desprendería como un sistema autónomo y dejaría en última instancia de encontrarse determinado como tendencia por la ley del valor. Siguiendo a Arruzza:

“El capitalismo no es un Moloch, un dios oculto, un titiritero o una máquina: es una totalidad viviente de las relaciones sociales, en el que las

líneas que trazan las relaciones de clase demarcan e imponen restricciones que afectan a todas las demás formas de relaciones. Entre ellas, encontramos también las relaciones de poder relacionadas con el género, la orientación sexual, la raza, la nacionalidad y la religión, y todas ellas se ponen al servicio de la acumulación de capital y su reproducción, pero a menudo en modalidades variables, impredecibles, y bajo formas contradictorias.”¹⁰

Los *Grundrisse* pueden servirnos para comprender cómo abordar metodológicamente la comprensión del lugar que ocupa la opresión de la mujer en el capitalismo. En estas notas preliminares, que Marx elabora para luego escribir *El capital*, sostiene que es importante no quedarse con lo que se nos presenta en la experiencia mediante representaciones caóticas. Describe que hay que desarrollar un movimiento que parta desde allí para, primero, elevarse a lo abstracto, hacia las determinaciones más simples y, luego, reemprenda el viaje de vuelta a lo concreto, “pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones”.¹¹ En ese sentido, categorías como familia o trabajo, que tienen un origen históricamente previo al capitalismo, se nos aparecen como categorías simples, previas dentro de una organización más desarrollada y posterior. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Estado, la monarquía, la Iglesia católica o hasta con la propiedad privada (rentística) del suelo. Sin embargo, en su forma concreta más desarrollada en el capitalismo, estas categorías se conservan en realidad como “relaciones subordinadas”. Las relaciones patriarcales no podrían entenderse como independientes del capitalismo, sino que incluso solo pudieron perdurar convirtiéndose en una categoría nueva, como parte de esa totalidad. Poniendo el ejemplo de la familia en el capitalismo, Marx sostiene que, aunque haya tenido una existencia precapitalista, “en su pleno desarrollo intensivo y extensivo, ella puede pertenecer sólo a la forma social compleja”¹². Las relaciones patriarcales en el presente, independientemente de sus manifestaciones previas, son eminentemente capitalistas y no pueden ser pensadas ni explicadas como transhistóricas:

“La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permite al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de socie-

10. *Ibidem*, pp. 12.

11. Marx, K. (1971): *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse)*, 1857-1858, Tomo I, Siglo XXI, México, pp. 21.

12. *Ibidem*, pp. 24.

dad pasadas, sobre sus ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, aún no superados, continúa arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena.”¹³

Como dijimos, el capitalismo tiende a utilizar opresiones preexistentes, heredadas de las sociedades anteriores, pero no simplemente de ellas sino que las reconfigura en sus propios términos. La opresión hacia la mujer en el capitalismo no es lo mismo que las formas precapitalistas que pudieron existir en otros regímenes de clase. De la misma forma que el trabajo asalariado no es igual a otras formas de remuneración laboral que pudieron existir en el pasado. La opresión de la mujer es previa, así como también lo es la de la clase. El régimen social capitalista subordina todas las relaciones sociales a los intereses de la clase dominante, configurando un modo de producción y reproducción de la vida específica, por lo tanto, las relaciones opresivas de género son imposibles de categorizarse como transhistóricas, autónomas o independientes de él, y de la necesidad de su superación mediante un proceso revolucionario emancipatorio general.

Arruzza desarrolla numerosos ejemplos al respecto, describe, por ejemplo, cómo el capitalismo ha introducido relaciones de género opresivas, incluso en lugares donde antes no existían, a través de sus conquistas imperialistas y las ha modificado enormemente allí donde ya existían:

“El proceso de acumulación capitalista fue acompañado por la expropiación ingente de diferentes formas de propiedad a las que las mujeres tenían acceso, y la expulsión de profesiones que habían sido capaces de mantener a lo largo de la Alta Edad Media; la alternancia de procesos de la feminización y desfeminización del trabajo contribuyó a la reconfiguración continua de las relaciones familiares y a la creación de nuevas formas de opresión por razón de género. El advenimiento de la reificación de la identidad de género a partir de finales del siglo XIX ha contribuido al fortalecimiento de una matriz heteronormativa que tuvo consecuencias opresivas para las mujeres, pero no sólo para ellas.”¹⁴

Si como sostiene ella, el capitalismo ha edificado de la mano de la familia moderna una relación directa, que tiende a presentarse indisoluble, entre género, identidad y orientación sexual, la rebeldía ante los roles sociales de género dominantes ha presentado choques, aunque no

13. *Ibidem*, pp. 26.

14. Arruzza, C., *ibidem*, pp. 14.

necesariamente una ruptura con el régimen social que los impone. El capitalismo ha sabido adaptarse y deglutir en sus propios términos estos cambios, no como un plan consciente sino en el propio devenir de las crisis capitalistas, como sucede, por ejemplo, con el llamado matrimonio igualitario o el turismo queer.

A diferencia de las corrientes que Arruzza llama del “giro lingüístico en la teoría feminista”, las relaciones de dominación y alienación no se encuentran entonces tampoco independientes de unas supuestas “leyes económicas puras”. La autora retoma a Marx para sostener que el trabajador, en la experiencia misma de producir y reproducirse como cuerpo vivo y pensante, produce y reproduce también las relaciones de dominación que garantizan la explotación capitalista:

“el proceso productivo ‘produce’ el trabajador en la misma medida que se reproduce la relación trabajo-capitalista. Dado que cada proceso de producción es siempre concreto -es decir, que se caracteriza por aspectos que lo determinan histórica y geográficamente-, es posible concebir cada proceso productivo vinculado a un proceso disciplinario, que construye parcialmente el tipo de sujeto, el trabajador se convierte.”¹⁵

En este sentido, producción y reproducción, aunque se nos presenten como ámbitos compartimentados, son necesariamente combinados en el marco de una totalidad articulada. Esto no supone ninguna relación mecánica de reflejo automático entre producción y reproducción, propio de un materialismo vulgar o economicista que reduce el género a la clase. Nada más vital que la lucha de clases como ejemplo de cómo pueden condicionarse políticamente y atenuarse las formas de explotación. El ámbito de la reproducción social cumple un factor condicionante fundamental en la formación de la subjetividad y, por lo tanto, también en las relaciones de explotación, dominación y alienación. Cualquier intento de comprender los desafíos de la clase obrera para conformarse como clase para sí, atravesada y condicionada por derrotas y triunfos, no pueden perder de vista también el retraso político y cultural al que tiende a estar condenada la mitad de la clase obrera doblemente oprimida, perdiendo capacidad de organización y participación activa en la sociedad por tener que cubrir una cantidad de tareas no pagas solo por el hecho de ser mujer. El problema de la emancipación de la mujer está atado a la superación del capitalismo, tanto como la emancipación de la clase obrera depende de abrazar la lucha por la

15. *Ibíd.*, pp. 17.

liberación de la mujer. El estadio más alto de la conciencia de la clase trabajadora, en su lucha por reorganizar la sociedad sobre otras bases, es cuando incorpora a esa lucha a la mujer trabajadora, derribando las barreras que la distancian de la lucha política y la colocan bajo el tutelaje de la familia, las iglesias y el Estado.

Un canto se ha popularizado en las grandes movilizaciones de mujeres, sobre todo en España: “Patriarcado y capital: alianza criminal”. Es positivo que tome masividad una consigna que denuncia al capital, pero no queremos dejar de advertir que no se debe reducir el rol del capitalismo al de un aliado cómplice del patriarcado en la opresión de la mujer. Una interpretación en ese sentido solo generaría falsas expectativas en este régimen social, cual si fuera posible que éste rompiera esa alianza y se separara de esas opresiones de género producidas por el propio capitalismo, independientemente de sus expresiones previas. Quienes nos acusan de reduccionismo por sostener que el problema de la opresión de la mujer es el capitalismo son, en verdad, las que reducen el problema de género a una abstracción, negando su carácter concreto, la forma que asume como expresión de un régimen social de clase determinado. La doble opresión de mujer trabajadora, como veremos a continuación, es uno de los factores directos a través de los cuales el capitalismo no solo refuerza su dominación ideológica, sino que también organiza la explotación y reproducción del trabajo. La crítica marxista a las relaciones de opresión tiene que ser considerada como una crítica a su expresión concreta histórica, el capitalismo como totalidad articulada y contradictoria de esas relaciones.

La doble opresión de la mujer trabajadora

La forma característica que ha adquirido en el capitalismo la opresión de la mujer trabajadora, con sus matices circunstanciales, es la llamada doble opresión, pero no en términos de patriarcado/capitalismo como sistemas autónomos duales. El Estado burgués y el capital oprimen a las masas trabajadoras en todos los terrenos, no solamente dentro del ámbito productivo donde se produce valor y extrae la plusvalía. Para las mujeres trabajadoras esto adquiere características particulares: las mujeres de la clase obrera, venda o no su fuerza de trabajo en el mercado, tienden a realizar además un trabajo no pago de sostén de la familia. Este es trabajo que explota el capital en su beneficio porque es una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo que no está contemplada en el salario, pero si justificada con diferentes instrumentos

ideológicos que asocian esas tareas al amor romántico y al amor maternal. La construcción de la feminidad es orientada al culto a la belleza como objeto de deseo, junto con el mandato de la maternidad y el sacrificio incondicional por las tareas del cuidado a familiares. En línea con esto, la mujer que se incorpora al mercado laboral tiende a hacerlo mediante salarios menores y trabajos precarizados, que solo son vistos como complementos de las tareas domésticas, lo que beneficia al capitalista con una reducción de los costos laborales.¹⁶ Las tareas de la mujer en su hogar familiar, para ciertos sectores sociales, pueden ser reemplazadas, aunque parcialmente, por empleadas domésticas. Pero decimos que solo parcialmente, porque el rol de la maternidad y la crianza se encuentra en el capitalismo indisolublemente asociado a la rol maternal individual de cada mujer en el ámbito privado. Esto explica el rechazo enorme a la legalización del aborto, que no solamente perpetúa un negocio clandestino, sino también un disciplinamiento social mediante el tutelaje sobre el cuerpo de la mujer, negándole el derecho a decidir si continuar o no un embarazo de forma independiente del mandato de la maternidad y de las condiciones materiales que la constriñen en las posibilidades de decidir.

En el capitalismo, la familia obrera como unidad económica se circunscribe al ámbito doméstico y cumple dos funciones primordiales, como complemento de la explotación económica de clase. Por un lado, cumple la función de reproducción de la fuerza de trabajo, estableciendo una neta separación entre la esfera de la reproducción y el de la producción, y en simultáneo cumple la función de la reproducción del capitalismo en tanto órgano de disciplinamiento social del conjunto de la clase obrera, por ser una de las instituciones fundamentales de socialización primaria. El machismo y la misoginia funcionan como recursos ideológicos de división al interior de la clase obrera. El Estado, a través de la policía, la Justicia y la escuela, refuerza esta doble opresión y utiliza a las iglesias también como garantes ideológicos. El capital utilizó la introducción de la mujer en el mercado de trabajo como un ariete contra los salarios. Como resultado de todo esto, la doble opresión le permite al capital aumentar la tasa de explotación: en forma directa, porque devalúa el trabajo asalariado de la mujer y del conjunto de la clase obrera,

16. Aunque idealmente, en los orígenes del capitalismo, las mujeres fueron consideradas infantes de por vida y en ese sentido se las pretendía excluidas del mundo productivo y social, en la práctica rápidamente fueron introducidas al mercado laboral con salarios menores con el argumento de su "debilidad" (Marx, *El capital*, tomo I, Cap. XIII).

y en forma indirecta, al cargar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo sobre la clase obrera y en particular sobre la mujer.

El beneficio capitalista en la continuidad del trabajo doméstico de forma familiar se observa incluso cuando se ha desarrollado parcialmente la tecnología para superarlo: producción industrial de alimentos, lavaderos automáticos, robots programados para limpiar pisos y otros. La opresión de la mujer trabajadora tiene particular importancia porque, en una sociedad capitalista, la ausencia de una socialización plena de las tareas de reproducción de la fuerza de trabajo (biológica, generacional y social) determina la carga de trabajo que debe mantenerse fuera del mercado, al interior de la esfera privada de la familia obrera. Las relaciones de opresión y dominación de género tienden a condicionar el modo y la escala en la que esta carga de trabajo se distribuye al interior de la familia, dando paso a una división desigual en las tareas de reproducción y producción, es decir, dentro y fuera del hogar; tendiendo las mujeres a trabajar más y más precarizada que los hombres. Esto no se da simplemente por una cultura machista, que puede estar naturalizada al interior de cada familia, sucede también porque el capital y el Estado tienden a forzar una distribución en este sentido. Por ejemplo, las licencias para tareas de cuidado de hijos tienden estar mayormente destinadas a mujeres. En el capitalismo, la doble opresión se encuentra indisolublemente ligada a la reproducción de una fuerza de trabajo obrera que, por definición, debe ser “libre” de encontrarse disponible para venderse, en los términos que le impone el capital.

Las relaciones de clase determinan cómo impacta la doble opresión en las familias ya que algunas podrán cubrir esas tareas contratando fuerza de trabajo, mientras que otras familias deberán distribuir la carga al interior del hogar. Pero incluso allí se observa la feminización de la tarea, cuando la inmensa mayoría, sino la totalidad, de las empleadas domésticas son mujeres. La mujer y su estatus social permiten al régimen avanzar en un uso determinado de su fuerza social, precarizarla como fuerza de trabajo, imponerle remuneraciones asistenciales e incluso fundar negocios sobre la base del sometimiento sexual. La brecha salarial es un indicador no solamente de los obstáculos que encuentra la mujer para ascender en los escalafones sino que, fundamentalmente, es una diferencia construida sobre la base del acceso discriminatorio a trabajos precarizados fundados en la vulnerabilidad social de la mujer. La “debilidad” femenina es un atributo cultural del cual el capital se vale para explotar a las trabajadoras de forma más efectiva para sus intereses.

El machismo y la misoginia son estructuras ideológicas al servicio de ese sistema de explotación.

La opresión de género en el capitalismo se ha valido de formas pre-capitalistas para reproducir una jerarquización en la división del trabajo. Al igual que otras clasificaciones sociales que reproducen relaciones de opresión, el género se ha construido socialmente sobre la base de una exaltación de ciertas características biológicas que pueden tener algunos seres humanos (por ejemplo, la capacidad potencial de gestar y lactar) sobre un abanico rico y diverso de otras características que se desvalorizan o incluso invisibilizan al jerarquizar solo esas; al igual que sucede con los rasgos fenotípicos de color de piel, en el caso de las clasificaciones raciales. Esas cualidades biológicas potenciales que se exaltan son asociadas de forma arbitraria a ciertos roles sociales (prácticas, emociones, gustos, etc.) que deben cumplirse en función de lo que este régimen social espera de cada género. La identidad de la mujer en el capitalismo se construye de forma social e indisolublemente asociada a ciertas actividades sociales, como son las tareas domésticas de reproducción de la fuerza de trabajo. La opresión hacia la mujer, a diferencia de otras opresiones, tiene la capacidad de asociar esas cualidades biológicas potenciales a relaciones y valores afectivos socialmente construidos, como el amor romántico y el maternal lo que, según Arruzza, las hace efectivas y por eso han tendido a universalizarse en el capitalismo.¹⁷

Como vimos, la familia obrera, como institución basada en relaciones de opresión hacia la mujer, es en última instancia un engranaje para la extracción de plusvalía y el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Sin embargo, esto no puede suponer una concepción que reduzca de forma lineal las relaciones de opresión en el plano de la reproducción a meros reflejos automáticos directo de las condiciones de explotación y extracción de plusvalía. Esta concepción, considerada por Arruzza como “tradicción operaria u obrerista”, no permite comprender cómo la dinámica de acumulación capitalista produce, reproduce, transforma, renueva y mantiene las relaciones opresivas de dominación. Esto supone un análisis histórico concreto de un proceso que no se expresa en términos económicos de forma mecánica y automáticas, y en donde la reproducción social cumple un papel destacado. Entendiendo la reproducción social

17. Arruzza sostiene provocadoramente que si todas las tareas asociadas a las mujeres, incluso la gestación, pudieran ser mecanizadas y automatizadas, no vería fácilmente probable su reemplazo como mecanismo de disciplinamiento social, porque ninguna otra relación de opresión se presenta tan natural y arraigada en nuestra psiquis al gestarse desde que nacemos por lazos de parentesco.

como la forma particular en que se organiza socialmente el trabajo físico, emocional y mental necesario para la producción de la población. Esta concepción incluye al trabajo doméstico, dentro de un conjunto de actividades sociales que pueden estar, dependiendo del momento histórico particular, más o menos cubiertas por el mercado, el Estado o las relaciones de parentesco o familiares. Las formas particulares que adquiere la reproducción social responden a una relación intrínseca con la forma en que la sociedad organiza su producción y reproducción en su totalidad, determinada fundamentalmente por las relaciones de clase -es decir, por los límites objetivos que le impone la acumulación capitalista en el marco de la lucha de clases. Estado y capital han tendido, presionados por la crisis mundial, a reducir sus costos, retrocediendo en conquistas de socialización de las tareas de cuidados (hogares adecuados para mayores, centros vecinales, atención en salud adecuada, jardines desde los 45 días en barrios y lugares de trabajo, centros deportivos, clubes de barrio para los chicos y jóvenes, centros artísticos, etc.), reforzando las tareas de la reproducción de forma gratuita sobre la familia obrera. Esto ha impactado inevitablemente en un empobrecimiento de las familias obreras, así como en una tendencia al confinamiento de las mujeres trabajadoras en el ámbito doméstico.

El Estado es responsable

La conformación histórica del Estado moderno burgués, en todo el mundo capitalista, implicó, donde existía, la disolución de relaciones patriarcales que regulaban la vida económica y política. Sin embargo, eso no supuso, en un comienzo, que las mujeres se incorporaran a la vida política activa. El capitalismo fue restrictivo políticamente, no solo con las mujeres sino con el conjunto de las masas. Los derechos políticos para la clase obrera, así como para la mujer, fueron conquistados sólo a través de enormes luchas. El marxismo ha sido desde sus orígenes crítico del falso universalismo de la “igualdad” y la “libertad”, proclamada por el pensamiento burgués en torno de la idea del “contrato social”. Pero esta crítica no supone lo que Carole Pateman llamó el “Contrato sexual” (1988), es decir la existencia de una subordinación y dominación política del género masculino sobre el femenino. Desenmascarar la falsa igualdad en el capitalismo y desentrañar las múltiples formas de opresión que se desarrollan en función de los intereses de clase debe venir acompañada de una denuncia profunda al rol del Estado burgués, el aparato de dominación

más complejamente desarrollado para la perpetuación de un régimen social de explotación.

La función primaria del Estado es ser guardián de la acumulación capitalista, perpetuando desigualdades y opresiones. Su núcleo fundamental son las fuerzas armadas, recurso último contra las masas en momentos de crisis y rebeliones populares. A diferencia de la falsa dicotomía entre Estado “presente” o “ausente”, el capitalismo es un régimen de despojo y violencia sistemática de las masas por el capital y su Estado. Para imponer el beneficio de una clase minoritaria sobre una población laboriosa mayoritaria, el capital cuenta con enormes recursos para reproducir pautas de sometimiento. La sociedad capitalista, fundada en la explotación de clase, traslada esa violencia dominante y primaria a todas las relaciones sociales. Una sociedad dividida en clases de forma opresiva tiende a vincularse con esa misma violencia de forma dominante en todos sus niveles, incluso en las relaciones interpersonales. Por eso, a la llamada violencia machista la llamamos cultura burguesa de la violencia. El principal agente de violencia machista en el capitalismo es el Estado y, sin embargo, es la violencia más invisibilizada y legalizada.

Decimos que el Estado es responsable porque es el eslabón fundamental de actividades enteras que contribuyen a perpetuar la opresión de la mujer. Esto se observa en múltiples ejemplos. El Estado mantiene una legislación que tutela el cuerpo de la mujer cuando la criminaliza por la interrupción de un embarazo. Es el que aporta la infraestructura indispensable para el funcionamiento de las redes de trata para explotación sexual y laboral. También legaliza y perpetúa la precarización y el cobro de salarios en un 27% inferiores, así como monopoliza la crianza en las madres, al tender a otorgar licencias insignificantes a los padres. El Estado es responsable también por brindar no sólo las condiciones materiales sino también culturales para la opresión hacia la mujer, cuando le cede la educación pública a la Iglesia, como sucede en la mayor parte de América Latina. La Iglesia católica en particular es financiada por el Estado para promover como un deber moral un modelo familiar opresivo y violento, pero “ordenado”, y cualquier cosa que rompa ese esquema es algo que debe ser considerado desviado, vergonzante y repudiable. Esta es la forma en que se expresa la violencia en el capitalismo, como mecanismo de disciplinamiento permanente. El capital y el Estado, con ayuda de sus instituciones y recursos ideológicos, son los responsables de educar y promover la permanente opresión y menosprecio hacia la mujer, que cimenta las condiciones culturales

para la violencia doméstica. Para el capitalismo es funcional que un obrero descargue las múltiples frustraciones de una vida de opresión y penurias sobre su compañera y no organizándose contra la patronal y el poder que lo llevan a esa situación. Este régimen social, que nos impide relacionarnos sobre la base de principios de libertad, igualdad y solidaridad, fue forjado sobre principios de sometimiento y explotación, que se nos imponen muchas veces de formas silenciosas y hasta internalizadas. Es el Estado quien sostiene las condiciones para perpetuar la doble opresión y no ofrece una salida real para las mujeres trabajadoras, que tienen que enfrentar el peligro de la violencia en sus casas, en sus trabajos o en las calles, atravesadas por la pobreza y la precarización.

“El Estado es responsable” es nuestro planteo estratégico porque, en medio de la creciente descomposición social, coloca la responsabilidad política en aquellos que nos gobiernan, porque tienen todos los resortes políticos para transformar esta situación. El problema es, entonces, la burguesía, la clase social que dirige el Estado y que lo hace en función de sus intereses. Los partidos patronales pretenden decirnos que tenemos que tener paciencia y comprender que la sociedad no está preparada para cambiar pero, en realidad, la descomposición es cada día mayor. Luchando, las mujeres hemos conquistado muchos derechos que en los orígenes del capitalismo no existían pero, sin embargo, la violencia y la precarización hacia la mujer se incrementa en las estadísticas año tras año.

En una de las escasas líneas dedicadas al Estado, Arruzza reivindica a Marx en *El capital*: “la coerción, la intervención activa del Estado, y la lucha de clases son de hecho los componentes constitutivos de una relación de explotación que no está determinada por leyes puramente económicas o mecánicas”.¹⁸ Sin embargo, la referente del movimiento “International Women’s Strike” en Estados Unidos no vuelve sobre el tema y deja ausente en su análisis el problema del Estado, porque no saca la conclusión política más importante: que la lucha por la emancipación de las mujeres trabajadoras es una lucha eminentemente política, es decir es una lucha por el poder político y que, por lo tanto, es fundamental poner en pie un partido que introduzca la agitación política obrera y socialista de un programa de salida de conjunto, que reagrupe a todas las luchas contra el Estado. Al igual que el resto de las corrientes que critica en términos teóricos, Arruzza misma termina en la práctica con los mismos límites políticos. Su aporte no permite sacar conclusiones concretas que superen las luchas particulares y la mera reivindicación me-

18. Arruzza, *ibidem*, pp. 17.

todológica de la huelga como instrumento de lucha. Para las socialistas, las movilizaciones de masas son un terreno de agitación y organización en función de un planteo de lucha por el poder. Por eso es importante desarrollar una delimitación con la pequeña burguesía democratizante, que con un discurso movimientista antipartido y de particularismo del patriarcado, deja en el campo de la burguesía las expectativas políticas de un movimiento de masas.

La lucha por terminar con el tutelaje del Estado sobre el conjunto de la clase obrera, y en particular sobre la mujer, implica necesariamente una lucha contra el Estado. La conquista del poder político por la clase obrera y su partido es la condición necesaria para destruir los mecanismos de dominación de la burguesía y su Estado. Para luchar por un gobierno de la clase obrera, que permita reeducar a generaciones enteras bajo nuevos principios sociales y reorganizar sobre otras bases esta sociedad. La lucha contra la opresión de la mujer no debe ser leída como un beneficio para una parte de la sociedad. La socialización de las tareas domésticas y la plena inclusión de la mujer en la vida política, social y cultural, le abrirá un nuevo horizonte de desarrollo al conjunto de la humanidad.

Conclusión

En este artículo hemos desarrollado la defensa de una “teoría unitaria” del problema de la doble opresión en particular y de la producción y la reproducción social en el capitalismo. Con sus límites, retomamos los aportes de Arruzza en torno de una crítica hacia todo un abanico de teorías feministas, muchas veces llamadas “anticapitalistas” que, en nombre de una especificidad, compartimentan a la clase obrera en diferentes movimientos de lucha que pretenden desenvolver por canales diferentes y autónomos (género, sindicales, ambientales, raciales, etc.). En la práctica, las mujeres se enfrentan a relaciones opresivas específicas, que la fuerzan a organizarse y salir a las calles para protagonizar choques contra el Estado en busca de superar esas opresiones. Pero esas experiencias son limitadas sino confluyen en una organización mayor, que nuclea todas esas luchas en una lucha más general contra el Estado, responsable de garantizar esas múltiples opresiones en función, en última instancia, de la acumulación de capital.

El feminismo de izquierda sigue, sesenta años después de la Segunda Ola, tendiendo a reducir su intervención a una lucha escindida de la construcción de una salida política revolucionaria que supere las con-

diciones materiales que determinan la continuidad de las opresiones de género. Reconocemos que este retroceso político se debe, fundamentalmente, al rol contrarrevolucionario que ha jugado, primero, la burocratización y, luego, la restauración capitalista de los Estados obreros, junto con la enorme institucionalización y cooptación del feminismo por el imperialismo, sobre todo a partir de los años '80. A 25 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing en 1995, donde el feminismo volvió a discutir una plataforma común de “progreso, desarrollo e igualdad de oportunidades para las mujeres” y la doble opresión se convirtió en “planes para el desarrollo con perspectiva de género”, el balance es profundamente negativo, y las mujeres volvieron a volcarse masivamente en las calles. Pero se hace cada día más urgente superar esta crisis de dirección de la clase obrera internacional y poner en pie una salida política revolucionaria y socialista de la mano de la construcción de partidos obreros. Las tendencias al colapso del capitalismo generan crisis cada vez más agudas y estas eclosionan en todas las esferas de la vida social, también en la familia. De forma contradictoria se vive una tendencia a la disolución y descomposición de la vida familiar, de la institución que es el ADN de la reproducción capitalista. Esto se expresa en la violencia hacia la mujer (con un aumento de los femicidios) y niños (incluso por las propias madres), en la postergación de la maternidad deseada, etc.

Frente a esto, el movimiento de mujeres, y en particular las socialistas, hemos colocado una crítica profunda a las iglesias y todos los recursos ideológicos con los que cuenta el capital para colocar la culpa y la responsabilidad de esa descomposición de forma individual en las y los trabajadores; denunciamos el carácter distraccionista que tiene el punitivismo, que coloca el enemigo en el hombre; levantamos la consigna de “el Estado es responsable” al marcar la impotencia política que este régimen social tiene para superar esta descomposición capitalista y, finalmente, colocamos la necesidad cada vez más urgente de una salida política obrera y socialista, que reorganice la vida sobre otras bases, que liberen las ataduras para superar todas las formas de opresión. Las mujeres trabajadoras no necesitan diluirse en un movimiento policlasista para luchar por los derechos de todas las mujeres. La agitación de un programa socialista lleva inherentemente a la defensa de la superación de todas las formas de opresión que atraviesan al conjunto de la humanidad. La lucha contra la opresión de la mujer es una lucha contra el régimen social capitalista y, por eso, es una pelea también al interior de

las filas de la clase obrera, para que se distancien de todas las ideologías del régimen, entre ellas el machismo, y avancen en un frente único de clase contra el capital y su Estado.

Solo un gobierno de trabajadores puede ponerle freno, con la expropiación de los expropiadores y la socialización plena de la producción y la reproducción al servicio de las necesidades sociales. Solo un gobierno de trabajadores puede, superando estas relaciones sociales, liberar a la humanidad de todas las formas de opresión, desarrollando las fuerzas productivas a niveles inéditos para abrir paso al reino de la libertad y ya no de la necesidad. Solo la refundación de la IV Internacional puede poner en pie las organizaciones políticas obreras que marquen la perspectiva urgente de una revolución mundial, para poner fin a la descomposición capitalista, que no solo se lleva la vida de las mujeres trabajadoras -en el creciente flagelo de la trata, los femicidios, la precarización laboral y la miseria generalizada- sino que, en su afán de perpetuarse frente a los crecientes límites de valorización del capital, pone en riesgo la continuidad del planeta mismo, en el que la humanidad toda puede proyectar la vida.